

Mujeres piqueteras: la repolitización de los espacios de resistencia en la Argentina (1996-2001).

Informe Final

Andrea Andújar

Índice:

Sección 1: Género, política e historia: los movimientos piqueteros.

Introducción.....	pág. 4
Algunos Problemas de Interpretación.....	pág. 8
Metodología de investigación.....	pág. 17

Sección 2: Mujeres desafiantes, historias en conflicto: los cortes de ruta en Neuquén (1996-1997).

Introducción.....	pág. 29
De la casa al piquete: las mujeres en el corte de rutas de 1996.....	pág. 33
Reavivando resistencias: el segundo corte de rutas en Neuquén (1997).....	pág. 48

Sección 3: Las mujeres en los cortes de ruta de Salta (1997-2001)

Introducción.....	pág. 70
El corte de mayo de 1997.....	pág. 72
Preparando los fuegos de año nuevo: el corte de rutas de diciembre de 1999.....	pág. 92
Atravesando límites: las mujeres en la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD).....	pág. 94
Madres, cortes y resistencias: las huellas del pasado.....	pág. 112

Sección 4: Las mujeres y los cortes de ruta en Jujuy (1997-2001)

Introducción.....pág. 120
Cortando las rutas del azúcar: Libertador General San Martín (mayo
de 1997).....pág. 131
De mujeres y organizaciones: la Corriente Clasista y Combativa.....pág. 148

Reflexiones finales.....pág. 157

Bibliografía.....pág.160

Sección 1

Género, política e historia: los movimientos piqueteros.

Introducción:

En este trabajo me propongo abordar el estudio de las formas de organización y resistencia sociales y políticas que emergieron en la Argentina ante la implementación del modelo neoliberal y el ejercicio de la democracia articulada bajo sus preceptos. En particular, me detendré en el surgimiento y posterior desarrollo de los movimientos piqueteros durante el período comprendido entre los años 1996 y 2001, en las provincias de Neuquén, Salta y Jujuy.

Las mujeres ocupan un lugar protagónico en mi análisis. Ello se debe a que su abrumadora presencia y activa participación han sido cruciales tanto en los orígenes de los movimientos piqueteros y en el impulso que éstos cobraron luego, como en las identidades y las prácticas políticas que, durante el período mencionado, amalgamaron su construcción en cuanto actor social.

Consecuentemente, la localización territorial y temporal escogida en este trabajo no es anodina. La concatenación de formas particulares de protesta y confrontación con el neoliberalismo adquirieron una particular contundencia a partir de los primeros cortes de rutas ocurridos en Neuquén durante 1996 y 1997, y continuados posteriormente en Salta y en Jujuy. A su vez, desde esas experiencias el movimiento piquetero comenzó a sentar las bases de su propia identidad, canalizando múltiples protestas, trazando alianzas con diversos sectores sociales, gestando alternativas formas de participación y acción. Todo ello confluyó en la profundización de las movilizaciones sociales y la violenta crisis institucional desatada en el 2001, momento histórico signado también por la elevada presencia femenina en la organización y participación de las protestas que enmarcaron la renuncia de Fernando de La Rúa a la presidencia de la Argentina.

Es preciso aclarar, sin embargo, que cuando remito a las mujeres no propongo la existencia de un sujeto colectivo homogéneo, con identidades prefijadas, o intereses, objetivos y experiencias igualadas en el terreno de su condición sexual. Muy por el contrario, el universo femenino que conforma el centro de este trabajo se encuentra atravesado tanto por las relaciones de opresión devenidas de la construcción socio cultural de la diferencia sexual y las normativas asignadas histórica y socialmente al comportamiento femenino y masculino, como por las pertenencias de clase y étnicas que, en profundo vínculo con lo anterior, determinan y condicionan ese universo. De tal suerte, estas mujeres, pertenecientes a los sectores subalternos y en algunos casos de origen indígena, han sido o lo son aún hoy trabajadoras de reparticiones estatales, docentes, ex empleadas de empresas estatales privatizadas, cuentapropistas o desocupadas.

Aunque invisibilizadas u opacadas por la literatura académica y política que ha focalizado su interés en el devenir de los movimientos piqueteros y su impacto en la historia argentina reciente, habrían sido ellas quienes mayoritariamente ‘pusieron el cuerpo’ y prorrumpieron en la palestra pública, reubicando el hacer política como elemento *central y definitorio de su actividad* e impugnando el modelo económico, político y social neoliberal impuesto por los grupos dominantes en la Argentina.

Desplazando bordes: algunas hipótesis.

Fetichizada tras el discurso de la “interdependencia equilibrada y voluntaria” de las sociedades contemporáneas (Amín: 2001), la doctrina neoliberal que sustentó el proceso de globalización, encontró su principal asidero en nuestro país durante la década de los gobiernos menemistas (1989-1999).

La aplicación de este modelo tuvo sus ejes en la desregulación y liberalización de la economía acompañada por una amplia apertura comercial y financiera, la precarización laboral -signada por la ley de Flexibilización Laboral-, el proceso de privatización de las empresas públicas, y la reforma del Estado que, entre otras cosas, trajo aparejado su retiro de las funciones de protección social paralelamente a la descentralización de las mismas. Todo ello fue delineado en planes anteriores pero articulado acabadamente en el Plan de Convertibilidad¹, que condujo al colapso del ya crítico aparato productivo industrial y al desmantelamiento de los escasos resabios existentes del Estado de Bienestar. Por otro lado, los niveles de desempleo, pauperización y vulnerabilidad social se elevaron a dimensiones históricamente desconocidas en nuestro país.

Esto fue sustentado políticamente por los grupos sociales dominantes en un marco democrático que formuló un discurso legitimador, ciñendo la actividad política y con ello la ciudadanía y la participación democrática, en dos direcciones. Por un lado, se circunscribió la participación política de la sociedad a la elección regular de representantes para el gobierno, reforzando el universalismo abstracto de la idea de ciudadanía que, al margen de leyes y derechos, se condensa en un sujeto ideal que posee cargas genéricas, raciales y de clase: un varón blanco, burgués, consumidor. Paralelamente, se desplazó la pertenencia de lo político a un sector de “élite”, que se presentó a sí mismo en tanto gerenciador de los recursos y asuntos públicos, desvinculado y consecuentemente no controlable por el resto de la sociedad². En síntesis, se construyó la política desde la negación de lo político³, mercantilizando vastas áreas de la vida social, dispersando y atomizando las potenciales y/o concretas formas de protesta y resistencia de los sectores subalternos ante la avasalladora destrucción del Estado Benefactor.

Frente a este proceso, las mujeres que participaron en la aparición de los movimientos piqueteros expresaron una tendencia explícitamente crítica y transformadora, dispuesta a desarticular los pilares de la exclusión social y a socavar la “irremediabilidad” de los

¹ Aplicado por Domingo Cavallo cuando éste asume la jefatura de la cartera de economía en 1991. Rapoport, Mario (2003): *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*. Buenos Aires, Ediciones Machi.

² Para un análisis sobre las características del proceso democrático y la construcción de la política y la ciudadanía durante este período ver: AAVV (1995): *Peronismo y Menemismo. Avatares del Populismo en la Argentina*. Buenos Aires, Ediciones El Cielo Por Asalto; Novaro, Marcos (1994): *Piloto de Tormentas. Crisis de Representación y Personalización de la Política en Argentina*. Buenos Aires, Letra Buena; Gambina, Julio y Campione, Daniel (2003): *Los años de Menem. Cirugía Mayor*. Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación; Maffia, Diana: *Ciudadanía y nuevos sujetos*. Ponencia presentada en la Jornada “20 años de democracia”. Buenos Aires, 19 de junio de 2003.

³ Asigno aquí a lo político la definición que establece Eduardo Gruner. Ver Eduardo Gruner (2002): “La tragedia, o el fundamento perdido de lo político”. En: Borón, Atilio; de Vita, Alvaro, (comps.): *Teoría y Filosofía política. La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano*. Buenos Aires. CLACSO.

destinos colectivos, proclamada, acorde el discurso hegemónico, con el irreparable fin de todas las cosas: la historia, las utopías, el Estado nacional, la actividad política, la lucha de clases.

Considero que ellas, por una parte, desarrollaron y ejercieron un concepto de democracia antagónico al propuesto tanto por la clase política como por los grupos dominantes, constituyéndose no sólo en un óbice a la mercantilización de las relaciones sociales y la condición de ciudadanía, sino también en un dispensario de formas de organización y participación igualitarias. Por otra, esas presencias femeninas permitieron la recomposición del tejido social y la repolitización de las relaciones sociales en los sectores sociales subalternos, coadyuvando a un proceso de visibilidad y consecuente empoderamiento para los movimientos piqueteros en tanto sujeto político. De tal manera, el debate sobre el ejercicio, la construcción y acumulación de poder, fue reubicado como centro de la acción política legítima y deseable por parte de estos sectores, a la par que se desnudó la doble naturaleza social de la opresión, definida como factor intrínseco de las relaciones de producción en tanto capitalistas y patriarcales.

Estas hipótesis parten de tener en cuenta algunas cuestiones relacionadas entre sí. En primer lugar, los escenarios históricos en los que las crisis sociales se agudizan, ponen al descubierto grietas en el sistema de dominación⁴, grietas que propician la emergencia de los sectores oprimidos y fundamentalmente, de las mujeres que conforman esos sectores. La forma en que la exclusión social o su amenaza impactan en la organización de la vida cotidiana es genéricamente diferencial, sometiendo a las mujeres a un plus de frustración y violencia social eludible para los varones. Por tanto cuando las demandas y reivindicaciones realizadas por las mujeres irrumpen, pueden hacerlo con una fortaleza innovadora, tanto en los recursos sociales que movilizan como en el discurso que enarbolan.

Ello se vincula, asimismo, con la segunda sugerencia que pretendo poner de relieve: en tanto integrantes de los sectores sociales subalternos, estas mujeres se constituyen en garantes de la recolección y distribución de los recursos de la comunidad de la que forman parte, garantía que deviene en mecanismo fundamental para preservar la vida y supervivencia de su comunidad (Kaplan: 1990). Es la realización de esta tarea la que enmarca, en la historia personal y colectiva de muchas de ellas, la trascendencia de su actuación desde el espacio doméstico hacia el público⁵. Y fue en esta trascendencia en la

⁴ Es sugestivo el análisis de Alejandra Ciriza para el caso de la Revolución Francesa. Sin embargo, concibo que el análisis de estos intersticios y sus consecuencias puede ser ampliado para el tipo de procesos como el que aquí se estudian. Ver: Ciriza, Alejandra: **“Pasado y presente. El dilema Wollstonecraft como herencia teórica y política”**. En: Borón, Atilio; de Vita, Alvaro (comps.) (2002): Teoría y Filosofía política. La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano. Buenos Aires: CLACSO.

⁵ En la historiografía feminista, el debate en torno a la vinculación del espacio doméstico y público tiene una larga trayectoria, al igual que el significado y caracterización de ambas esferas. No ingresaremos aquí en esta discusión pero consideramos que esta distinción teórica es útil para esta investigación en tanto se tenga en cuenta el entrecruzamiento de los conceptos de clase y género en la conformación e interrelación de ambos espacios. Ver: Lipszyc, Cecilia (1996): “Desprivatizando lo privado. Sobre las relaciones entre el trabajo doméstico y la acumulación capitalista”. En: Lipszyc, Cecilia; et al.: *Desprivatizando lo privado. Mujeres y trabajos*. Buenos Aires, Catálogos. También: Pateman, Carol (1996): “Críticas feministas a la dicotomía

que ellas activaron formas de organización y participación colectivas; fue allí donde comenzaron a desplazar los límites impuestos a su “feminidad” y lograron autolegitimarse politizando, publicitando, en un principio, las (sin)razones de una domesticidad cuyas certezas desmoronaban.

En tercer lugar, la emergencia de las mujeres como sujetos políticos dinamizadores de este proceso de confrontación, se habría relacionado estrechamente con la incapacidad de las organizaciones políticas y sindicales tradicionales, articuladas sobre paradigmas androcéntricos, para poner coto a la violenta pérdida de derechos, precarización de las formas de vida y exclusión socio-económica y política a las que han sido arrojadas miles de personas.

Por último, la forma en que las mujeres intervinieron allí, albergó una extensa trama de antecedentes que les permitieron cruzar la brecha existente entre la posibilidad de estar y la de ser vistas. Las experiencias de participación femenina de los 90 han estado profundamente impregnadas por la existencia previa de diversas organizaciones de mujeres. Estas fueron un punto de inflexión tanto para las prácticas sociales y políticas de las mujeres, como para la mayor permeabilidad social ante sus demandas y reivindicaciones. De tal modo, el surgimiento y trascendencia de una serie de organizaciones, tales como la Madres de Plaza de Mayo, las agrupaciones feministas, o los Encuentros Nacionales de Mujeres, han impulsado innovadoras experiencias de participación, desenmascarando en ocasiones el entramado de género constitutivo del orden social vigente y obligando a tornar la mirada analítica hacia ellas. Otro tanto hicieron los primeros trabajos de corte académico de la década de 1980 que, centrando su análisis en los movimientos sociales, corrieron el velo que ocultaba la presencia de las mujeres en la construcción de los mismos.⁶

El análisis de estos factores permitirá comprender, entonces, no sólo el entramado social en el cual los movimientos piqueteros fundaron sus cimientos. También y por sobre todo, posibilitará delinear las motivaciones que impulsaron la actuación de las mujeres, así como los alcances y límites de su participación, y la manera en que ésta repercutió en sus propias vidas y en los colectivos sociales de los que formaron parte.

público/privado”. En: Castells, Carme (comp.): *Perspectivas feministas en teoría política*. Buenos Aires, Editorial Paidós.

⁶ Me refiero específicamente, a los de Jelin. Véase Jelin, Elizabeth (comp.) (1985): *Los nuevos movimientos sociales*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Tomos 1 y 2

Algunos problemas de interpretación:

Pese al reconocimiento de que forman más del 60% de los movimientos piqueteros, las mujeres permanecen ausentes en la mayoría de la literatura académica y política de la Argentina abocada a la exploración de esta temática. Analizaré aquí, entonces, los estudios comprendidos por la producción académica general y aquellos que pertenecen a la producción estrictamente política.

Las investigaciones y aportes de corte académico:

Hasta la actualidad, los estudios sobre los movimientos piqueteros producidos mayoritariamente desde la Sociología o la Antropología y, en último término, la Historia, no han dado cuenta de la presencia femenina más que en términos numéricos o testimoniales, concibiendo la identidad de los mismos como masculina.

Svampa y Pereyra (Svampa et al.: 2003) sostienen la existencia de dos afluentes dentro del movimiento piquetero: el afluente de origen fabril y el de origen territorial-barrial. En el primero se encuentran comprendidos aquellos piquetes que se originaron como consecuencia del proceso de privatizaciones, cierres y despidos de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en la década del '90. Así, el epicentro de este afluente está ubicado en las provincias de Neuquén y Salta.

Respecto del segundo, localizado en el conurbano bonaerense, sus orígenes datan de las transformaciones operadas en el “mundo popular” por el proceso de desindustrialización comenzado a mediados de la década del '70. Su desarrollo se produce en el espacio territorial-barrial a partir de reivindicaciones relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas.

A su vez estos autores sostienen que en la conformación del movimiento piquetero y la adopción del corte de ruta como herramienta de confrontación, confluyeron experiencias históricas provenientes de los elevados niveles de organización de la clase obrera argentina, de la reutilización de formas de lucha encaradas contra la patronal en etapas anteriores (el piquete, justamente), de la desafección a la identidad peronista por parte de los sectores populares y la clase obrera a partir de las alianzas realizadas por la facción peronista encabezada por Carlos Saúl Menem, de la intervención de partidos políticos (básicamente de izquierda) y, finalmente, del resquebrajamiento de las tradicionales formas de lucha (como las huelgas), a partir de la destrucción del aparato productivo industrial, el crecimiento de la tasa de desempleo y la desestructuración del Estado de Bienestar.

En cuanto a la participación femenina, la misma es asumida como una parcialidad, aunque ineludible. Para los autores, la presencia de las mujeres en el movimiento piquetero es precedida por la existencia del movimiento en sí mismo y consideran que es allí donde mayoritariamente, ellas realizan sus primeras experiencias de participación pública en la vida comunitaria. Esa participación se encuentra signada por una ambivalencia permanente, sustentada en una suerte de movimiento pendular entre acciones femeninas de carácter asistencialista (ilustrada por la experiencia de las “manzaneras”, en el caso del conurbano

bonaerense, y la naturalización del rol femenino de “cuidar de los otros”) y acciones orientadas a politizar su rol de madres y la problemática del hambre. Ello entonces habría permitido a las mujeres interpelar al Estado bajo esa dirección.

Svampa y Pereyra también consignan la desproporcionalidad existente entre la amplia participación femenina y el acceso al ejercicio del liderazgo de las mujeres al interior del movimiento piquetero. Pero esto es tomado solamente como registro testimonial. De hecho, no suscita una mayor reflexión que exceda la asignación de esta desproporción a la visión conservadora de los roles de género portada por los “sectores populares”, o a la tradicional negativa de los partidos de izquierda (que inciden en el movimiento piquetero) a incorporar el análisis de género al de clase social. Estas afirmaciones, por otro lado, carecen de una sólida argumentación por parte de los autores.

Todo ello concluye que la experiencia femenina sea remitida exclusivamente a las propias mujeres, soslayando la incidencia que las relaciones genéricas poseen en el entramado total de la construcción de la subjetividad, las formas de organización y de enfrentamiento que el movimiento piquetero ha llevado adelante.

El trabajo de Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo (Iñigo Carrera et al: 1998), orientado a analizar las formas asumidas por la protesta social dentro del capitalismo desarrollado, es una investigación cuantitativa sobre los cortes de ruta producidos entre el “Santiagazo” -ocurrido en diciembre de 1993-, y agosto de 1997. Allí se advierte la distribución temporal, geográfica y la inserción ocupacional de los participantes. Sosteniendo que básicamente son asalariados, ya sean ocupados o desocupados, concluyen que el objetivo de los cortes de ruta es, en principio, la obtención de reivindicaciones inmediatas, apareciendo en segundo lugar el intento de modificar la política económica nacional y provincial y, en tercer lugar, el impacto de las huelgas generales. Enmarcado en un paradigma materialista histórico clásico, este trabajo no toma en consideración otras diferencias entre los participantes de los cortes de ruta que no devengan de su condición de clase o de fracción de clase.

Otro tanto puede observarse en los trabajos de Federico Kindgard y Elizabeth Gómez (Kindgard et al.: 1998), por un lado, y en los de Paula Klachko (Klachko, 1999 y 2002), por el otro. En un exhaustivo recuento de los sucesos que conformaron los cortes de ruta en la provincia de Jujuy durante mayo y junio de 1997, Kindgard y Gómez sostienen la existencia de tres fases en el desarrollo de estos hechos, deteniéndose en la forma en que se originaron los cortes en General Libertador San Martín y su ampliación a la totalidad del territorio juejño, la condición social y sindical de quienes participaron, sus objetivos, las respuestas gubernamentales y los logros obtenidos. La aparición de las mujeres, aquí, tiene un neto corte tradicional: o son registradas como parte de los gremios docente o de empleados/as públicos/as involucrados en los cortes, y englobadas bajo la categoría de “trabajadores”, o se las consigna como acompañantes, junto con sus hijos, de los varones que realizan los cortes de ruta.

Klachko describe, por su parte, los cortes de ruta ocurridos en Cutral-Co y Plaza Huincul en junio de 1996. Para ello, toma como fuente fundamentalmente la información periodística publicada por uno de los diarios neuquinos, ‘La Mañana del Sur’. A partir de

ello la autora confecciona el desarrollo fáctico de los acontecimientos. Sus hipótesis de trabajo giran en torno a dos ejes principales: en primer lugar, la periodización del conflicto; en segundo lugar, la “[...] acumulación de experiencia de lucha y organización, en el proceso de formación de una fuerza social [...]” (Klachko, 1999: 153). Consigna así que la importancia de los sucesos de Neuquén radica en la inauguración de una metodología de lucha –los cortes de rutas-, en las formas de participación y decisión popular –las asambleas-, y en la personificación del piquetero como protagonista de las mismas.

En un trabajo posterior (Klachko: 2002), la autora profundiza su análisis de lo sucedido en Neuquén en 1996 a la par que lo amplía tomando también el corte de rutas acaecido en la misma provincia al año siguiente. Para ella ambas confrontaciones, aunque defensivas, profundizaron las contradicciones capitalistas, obstaculizando la gobernabilidad necesaria para la acumulación de capital. Debían ser vistas, por tanto, como un proceso de avance hacia formas de lucha más sistemáticas que expresaban mayores destellos de conciencia aunque la espontaneidad continuara siendo un factor preponderante del movimiento.

Favaro, Arias Bucciarelli, e Iuorno (Favaro et al: 1997) también focalizan su análisis en las jornadas de Cutral Co y Plaza Huincul en los años 1996 y 1997. Para ellos, lo sucedido allí fue expresión de un movimiento de protesta policlasista, no interpretable en clave política, que canalizaba, de forma no institucionalizada, la impugnación de las consecuencias del ajuste neoliberal. En ese sentido, la lucha de cutralquenses y huinculenses más que una acción de ofensiva contra el sistema social vigente, constituía la búsqueda de la inclusión en él. Sin embargo este trabajo, de corte histórico, deja algunas cuestiones sin resolver. Una de ellas, por ejemplo, refiere a qué entienden por política los autores y, consecuentemente, por qué la acción beligerante llevada a cabo por las comunidades petroleras no puede ser desentrañada en esta clave. Más aún si, como ellos sostienen, estos movimientos deben ser interpretados “[...] como prácticas sociales centradas sobre la construcción de nuevas identidades colectivas y de reconocimiento de espacios de relaciones sociales [...]” (Favaro et al, 1997: 27). Por otro lado, si esta acción se desarrolló por fuera de estructuras sindicales y/o político-partidarias, expresando las fragmentaciones sociales que la globalización impuso, sería importante preguntarse por qué los liderazgos de ambas acciones recayeron en mujeres y en jóvenes de ambos sexos, tal como estos autores puntualizan.

Por último, estas protestas fueron concebidas por Javier Auyero también como un caso paradigmático de beligerancia popular que, junto con el “santiagoueño” de 1993, habrían sido la antesala de las movilizaciones que determinaron la caída del ex presidente Fernando de La Rúa (Auyero: mimeo). En un trabajo posterior, este investigador recorre la trama de las luchas populares en Neuquén y en Santiago del Estero a través de la vida de dos mujeres: Laura, para el caso de Cutral Co y Plaza Huincul, y Nana, para el de Santiago del Estero. Así Auyero realiza un interesante esfuerzo por analizar ambos hechos entrecruzando las biografías de sus protagonistas con el desarrollo de las protestas, sosteniendo que uno de los elementos que las dinamizaron consistió en la búsqueda de reconocimiento, orgullo y dignidad por parte la población manifestante (Auyero: 2004). Sin embargo, concluye que “[...] ni el Santiagueño ni la pueblada [de Cutral Co y Plaza Huincul] fueron protestas en las que las mujeres como actor colectivo hayan tenido una participación importante, del tipo de las que hemos visto en los movimientos por los

derechos humanos en la Argentina o en Chile. Tampoco el género fue un factor decisivo como fuente o catalisis de la beligerancia [...]” (Auyero, 2004: 277-278). Estas afirmaciones pasan por alto algunas cuestiones. En primer lugar, las organizaciones y movimientos de derechos humanos en América Latina constituyen una de las variadas instancias en las que las mujeres han participado colectivamente, pero no la única. Por tanto, no pueden constituirse como modelo histórico desde el cual medir la participación femenina en general o convertirlas en el paradigma que permita determinar cuándo la participación de las mujeres las torna actores colectivos importantes. En segundo lugar, el género no constituye ni la fuente ni la catalisis de ninguna acción colectiva. Más bien es una categoría analítica que permite complejizar la comprensión de las relaciones entre los seres humanos, las asimetrías en las relaciones de poder, así como desentrañar algunas motivaciones posibles presentes en las acciones sociales beligerantes. En ese sentido, de lo que se trata es de develar cuáles fueron los intereses que impulsaron a las mujeres a salir a la ruta, en qué medida esto y las acciones que allí desarrollaron cuestionaron –o no– sus roles de género y de qué manera incidieron estas confrontaciones en sus propias vidas como mujeres que, asimismo, pertenecen a los sectores subalternos. De hecho, Auyero consigna claramente las contradicciones que Laura Padilla debió salvar para mantenerse en la ruta durante la pueblada neuquina de 1996. Incluso afirma que “[...] el hecho que precipita en ella su conversión en piquetera, esto es, la afrenta de género [...]” (Auyero, 2004: 102). Asimismo, el autor obvia en este punto la información que él mismo ha recolectado y subraya en varios pasajes de su libro: fue justamente Laura Padilla la persona que firmó el pacto con Felipe Sapag que puso término a la pueblada. Por tanto, valdría la pena preguntarse cómo una mujer que en apariencias carecía de militancia política previa, divorciada, madre de tres hijos, maestra particular, llegó a obtener tal reconocimiento por parte de su propia comunidad. En definitiva, tanto la participación de Laura o de Nana como de las miles de mujeres presentes en ambos acontecimientos, no puede comprenderse cabalmente si no se toma en cuenta al género como categoría de análisis.

Finalmente y a modo de conclusión, la literatura académica evidencia que la presencia y protagonismo de las mujeres dentro del movimiento piquetero se mantiene generalmente en un registro testimonial o estadístico. Así se silencian u obvian las tensiones internas de este colectivo social, tensiones que poseen una profunda impronta genérica. Es esta impronta la que denota y nombra parte de las incomodidades y contradicciones al interior del movimiento⁷. En la construcción del “sujeto” piquetero continúa primando un paradigma que sustenta la unicidad del sujeto político en tanto varón, cuyas experiencias diferenciadoras son remitidas básicamente a su pertenencia de clase social (aunque esta última sea definida desde diversos e incluso opuestos marcos teóricos).

De esta manera, el universalismo abstracto del análisis académico subsume la experiencia femenina a la masculina. El porqué histórico de la participación femenina en la construcción de las realidades sociales vuelve a quedar negado como pregunta.

⁷ Para ello, un interesante acercamiento a esta problemática lo realiza la revista **Travesías** a partir de testimonios recogidos entre mujeres piqueteras, mujeres que participan en las fábricas recuperadas autogestionarias y mujeres de inmigración reciente. Ver: *Globalización y resistencias de viva voz*. Revista Travesías, Nro. 11, noviembre del 2002.

Consecuentemente, las mujeres “ingresan” en la “Historia” cada tanto y a los saltos: sin pasado, sin continuidades, sin proceso..., en definitiva, sin historia.

Aportes desde la literatura política:

Uno de los trabajos de tinte político pertenece a Raúl Zibechi (Zibechi: 2003). En él se intenta reconstruir el itinerario del movimiento de protesta y de organización de la sociedad argentina que desembocó en la revuelta social del 19 y 20 de diciembre de 2001. Así el autor traza una genealogía que entrecruza las experiencias de participación y empoderamiento de la sociedad civil a través de los organismos de derechos humanos (particularmente los casos de Madres de Plaza de Mayo e HIJOS), diversas corrientes sindicales y especialmente, la Central de Trabajadores Argentinos (surgida en 1992 como polo opositor sindical al gobierno menemista), las experiencias provenientes del ámbito estudiantil/universitario, y el movimiento de desocupados y piqueteros. Específicamente en cuanto a la problemática que abordo en este trabajo, el autor sostiene que el piquete, como forma de lucha, se origina en un movimiento social en formación y con identidad abierta: el movimiento de desocupados. En ese sentido, además de consignar como inusitado el nivel organizativo desplegado por los desocupados, el autor afirma que el piquete pasa a incorporarse al repertorio de la lucha de la clase obrera, argumentando que los cortes de ruta crecen vertiginosamente mientras descienden las huelgas, formas tradicionales en que se planteaba el conflicto sindical.

Para efectuar este análisis, Zibechi se focaliza en la historia del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) en el Gran Buenos Aires. Aquí subraya el cambio en las “[...] relaciones entre los géneros [...]” como uno de los nuevos patrones diferenciales de la organización del movimiento piquetero respecto de movimientos sociales y sindicales que lo precedieron (Zibechi, 2003: 166). Este cambio se expresaría en que la organización del movimiento piquetero es mayoritariamente femenina, así como también es mayoritaria la presencia de las mujeres en los cortes de ruta. Entre otras causas que permiten explicar dicha mutación, Zibechi remite a la desestructuración del hogar nuclear obrero tradicional (basado en una fuerte presencia de relaciones jerárquicas masculinas), el desempleo como factor que afecta más a los varones que a las mujeres, y la horizontalidad presente en la organización y la toma de decisiones dentro del movimiento piquetero. Pese a que estos elementos no están solidamente argumentados o probados, el análisis de Zibechi pareciera ser alentador respecto de la incorporación de la perspectiva de género. Sin embargo, cuando intenta definir la identidad del movimiento piquetero, el autor sostiene: “[...] Puede decirse que son movimientos con características “femeninas”, en el sentido de que no están dirigidos a la “conquista” del poder, ni dedican el grueso de sus esfuerzos a la esfera pública, ni en las organizaciones predominan las relaciones de competencia y de poder, rasgos que están asociados con lo “masculino”. Por el contrario, en los grupos piqueteros las relaciones afectivas entre sus integrantes juegan un papel muy importante [...], buscan el consenso, son horizontales y brindan un espacio de protección mutua, rasgos más identificados con lo “femenino” [...]” (Zibechi, op. cit.: 169). Esta afirmación contiene varios equívocos. Comenzaré por dos instancias interrelacionadas: esfera pública/esfera doméstica, por un lado, y poder, por el otro. En primer lugar, si bien no queda claro qué es lo que el autor entiende por ambas esferas, sostiene que el movimiento piquetero no dedica sus esfuerzos a lo público. Pero si lo público es aquel espacio de acción común,

desligado de los ámbitos y relaciones de parentesco, donde el debate y la acción tienden a satisfacer necesidades colectivas⁸, tanto las causas que originan al movimiento como los espacios de organización y confrontación (la calle, la ruta) y el sujeto al que interpelan en sus acciones (el Estado), contradicen esta afirmación. A su vez, considerar que el movimiento piquetero no está interesado en conquistar el poder porque está constituido mayoritariamente por mujeres, es un prejuicio de género del autor, quien parte de la suposición de que las mujeres se desinteresan por las cuestiones atinentes al poder y que su búsqueda es una característica inmanente del comportamiento masculino. En ese sentido no se le ocurre pensar que quizá no sea la normativa tradicional femenina la que les impide pensar en “conquistar” el poder sino la consecuencia de una evaluación política realizada por las propias mujeres piqueteras en torno a la etapa histórica por la que atraviesa la sociedad argentina. Por otro parte, las definiciones de poder que algunos movimientos piqueteros poseen, distan mucho de la asignación unívoca del poder en la expresión concreta del aparato de Estado⁹. Esto en lo que respecta a la confrontación con el Estado y el orden social vigente.

En cuanto a lo que sucede en el interior del movimiento piquetero, considero que si las relaciones de poder no están en juego, es inexplicable entonces que, pese a una constitución mayoritariamente femenina, el liderazgo recaiga casi en forma exclusiva en los varones del movimiento. Muchas son las causas que podrían iluminar esta situación. Entre otras, se hallan las que provienen de la “esfera doméstica”, aparente centro de atención del movimiento piquetero. En efecto, numerosos testimonios de mujeres dan cuenta de la violencia marital, tanto simbólica como física, que enfrentan por asistir a las reuniones y asambleas piqueteras y los cortes de ruta¹⁰. Por tanto, es una ingenuidad suponer que las relaciones de poder no existen dentro del movimiento piquetero o que no es propio de las mujeres (esto es: legítimo para ellas) su conquista. El punto es someter esas relaciones de poder a un análisis de género, no ignorarlas. Un cambio en las relaciones de género exige un cuestionamiento de las patriarcales formas que asume el poder y su ejercicio, una necesidad de empoderamiento por parte de las mujeres y, asimismo, una crítica de la tajante división entre lo público y lo doméstico; lo político y lo personal. De hecho, el cambio en las relaciones de género está íntimamente ligado al cuestionamiento de la existencia de ambas esferas y los lugares de pertenencia que se asigna a las mujeres y a los varones en ellas.

Por otro lado, también Zibechi incurre en una afirmación apriorística al sostener la inexistencia de la competencia dentro del movimiento piquetero. Esto no se condice con la realidad. Los movimientos piqueteros compiten entre sí por el liderazgo del colectivo social que componen, los lineamientos políticos a seguir, las demandas al Estado, entre otras

⁸ En esta definición seguimos a Vasallo, Alejandra (2000): “Entre el conflicto y la negociación. Los feminismos argentinos en los inicios del Consejo Nacional de Mujeres. 1900-1910”. En: Gil Lozano, Fernanda; Pita, Valeria e Ini, María Gabriela, compiladoras (2000): *Historia de las Mujeres en Argentina*. Buenos Aires, Editorial Taurus, Tomo II.

⁹ Ver: López Echagüe, Hernán (2002): *La política está en otra parte. Viaje al interior de los nuevos movimientos sociales*. Buenos Aires, Grupo Editorial Norma

¹⁰ Ver *Globalización y resistencias de viva voz*. Revista Travesías, Nro. 11, noviembre del 2002.

cosas¹¹. Pero esto no es excluyente de otras prácticas sociales ya que también desarrollan amplias redes solidarias. De allí es dable preguntarse cómo la presencia de las mujeres se vincula con competencias y solidaridades, en lugar de negar las primeras. En cuanto a las relaciones afectivas, nuevamente el autor abunda en lugares comunes sin someterlos a un análisis crítico: las mujeres son emotivas, los varones racionales, fríos y calculadores. En realidad, si las relaciones genéricas dentro del movimiento piquetero asumen las formas que Zibechi sostiene, no hay ningún tipo de cambio de patrón en cuanto a la organización de este movimiento. Pero consideramos que esto se debe más bien a la incorrecta comprensión y aplicación de la categoría de género por parte del autor que a lo que sucede en la realidad histórico-social.

Un interesante trabajo de reflexión política es el aparecido en el libro de autoría colectiva representada por el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano (en adelante MTD-Solano) y el Colectivo de Situaciones (MTD-Solano y Colectivo de Situaciones: 2000). El mismo es el producto de una elaboración conjunta que vuelca conversaciones, síntesis de análisis comunitarios y político-partidarios realizados en talleres de debate, apreciaciones sobre los encuentros nacionales piqueteros, y conferencias brindadas por intelectuales en encuentros del MTD-Solano. Constituido por tres partes, este libro abarca un amplio abanico de temas tales como el surgimiento y desarrollo de las formas de organización/participación del MTD-Solano, la coyuntura histórica argentina contemporánea, el funcionamiento del sistema capitalista en situación, la violencia y el ejercicio del poder, los conceptos de exclusión/inclusión, entre otros. También somete a debate la relación entre el intelectual (como investigador formado en el ámbito académico) y los movimientos sociales y políticos. En ese sentido, este libro explicita en sus objetivos la pretensión de aportar más preguntas que respuestas en torno a la experiencia del MTD-Solano, negándose a asumir esa experiencia como un “modelo organizativo” (y por tanto ideal), y dando un central espacio a la voz de los propios protagonistas del movimiento piquetero. Pero pese a esta interesante búsqueda, la experiencia femenina vuelve a quedar negada y subsumida. No hay pregunta ni referencia a ella más que para citar un ejemplo de reflexión por parte de una mujer respecto de su definición de la desocupación (MTD-Colectivo de situaciones, op. cit.: 70). De esta manera, las tensiones internas del movimiento piquetero de las que da cuenta este libro, se remiten exclusivamente a la adscripción política de sus miembros, su condición de clase, las dificultades para sostener la horizontalidad de la organización, las respuestas diversas del Estado y su impacto al interior del movimiento, los múltiples horizontes del desarrollo de los movimientos sociales piqueteros, el enfrentamiento y la lucha. Pero nada hace suponer que los portavoces de esta experiencia y de los intelectuales vinculados a ella no sean exclusivamente varones o que aquello que involucra la dispar experiencia de mujeres y varones dentro de los movimientos sociales, sea digno de ser analizado políticamente con la misma rigurosidad utilizada para lo anteriormente enumerado (más allá del desacuerdo o acuerdo con las posiciones políticas que aparecen en este libro).

¹¹ Esta situación no es ajena a Zibechi que conoce la realidad del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, al menos por haber leído y realizado sugerencias para los borradores del libro editado por El Colectivo de Situaciones y el MTD de Solano (donde el tema del poder y la competencia son centrales). Ver: Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano y Colectivo Situaciones (2000): *Hipótesis 891. Más allá de los piquetes*. Buenos Aires. Ediciones De Mano en Mano. Pág. 8

Desde una perspectiva distinta y con una narrativa sumamente dinámica, se sitúa el trabajo de Hernán López Echagüe (López Echagüe: 2002). Este trabajo se inspiró en la crisis política argentina de diciembre de 2001. El autor da cuenta de múltiples experiencias presentes en los nuevos movimientos sociales, intercalando sus vivencias y pensamientos personales con las reflexiones que obtiene de los protagonistas de esos movimientos. Así, en su concreto viaje al interior de los nuevos movimientos sociales, contempla para su análisis un nutrido abanico de organizaciones y sucesos: El Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, los obreros de la fábrica autogestionada Zanón, en la provincia de Neuquén, el movimiento piquetero en General Mosconi y los cortes de ruta en Salta, los asesinatos de los militantes piqueteros en el Puente Pueyrredón, en la Capital Federal, el 26 de junio de 2002.

A partir de testimonios individuales y grupales, debates e intervenciones en asambleas, noticias periodísticas, recuentos históricos, intercambios misivos por correo electrónico, observaciones situacionales y anécdotas personales, el autor va construyendo la trama compleja de un colectivo social atravesado por variadas circunstancias cuya conexión no es siempre evidente. En esa reconstrucción, la voz masculina sigue siendo dominante si bien existe el intento de rescatar las opiniones y percepciones de las mujeres en algunas de estas organizaciones. Pero la riqueza principal de este trabajo y de allí su especificidad, es que no fija estas experiencias en un marco conceptual político preconfigurado a partir de un “deber ser” de los movimientos sociales, sus niveles de organización y sus objetivos políticos. En ese sentido, la flexibilidad con la que el autor se involucra en este “viaje”, permite aprehender la mutabilidad de estos movimientos sociales, las diversas relaciones que los constituyen y la pluralidad de situaciones socio-históricas que los atraviesan y sostienen.

Uno de los escasos trabajos políticos que invitan a una clara reflexión respecto del rol de las mujeres en las construcciones de organizaciones alternativas es el de Juan Carlos Volnovich (Volnovich: 2002). A partir de describir los efectos de la globalización y la aplicación de las políticas neoliberales en la Argentina, el autor sostiene la existencia de tres tipos de discursos frente a esa realidad: el discurso del sufrimiento, que describe las innumerables penurias económicas y la pobreza cultural que el capitalismo impone; el discurso de la resistencia, que se centra en resaltar la construcción de novedosas formas de enfrentamiento con las políticas delineadas por los países capitalistas centrales; y, por último, el discurso de la lucha. Este es el que más le interesa y para analizarlo aludirá a “[...] los esfuerzos que realizan varones y mujeres para incorporarse de manera novedosa a la producción [...]” (Volnovich, op. cit.: 89). Partiendo de una aceptación de las categorías y caracterizaciones realizadas por el feminismo socialista, Volnovich sostiene que la lucha de las mujeres contra el patriarcado es indisoluble de la lucha contra el capitalismo y el consecuente intento de la creación de un orden social asentado en relaciones no capitalistas. Y que asimismo, esa lucha ha trasvasado los bordes de los movimientos feministas en tanto las metodologías adoptadas por el movimiento piquetero, las asambleas autoconvocadas, las cooperativas obreras en las fábricas “recuperadas”, las diferentes organizaciones que aglutinan a personas desocupadas, remiten a la experiencia y la práctica política del Movimiento de Mujeres y el Feminismo. Ello lo justifica a partir de observar la persistencia de criterios de horizontalidad, heterogeneidad, posición crítica a la teoría de la

representación y la autonomía con autogestión, presentes en los nuevos movimientos sociales. Es este discurso del feminismo el que permite superar los discursos del sufrimiento y de la resistencia, que no necesariamente conducen a una resolución de la crisis actual. Y es por ello que el autor afirma que no hay práctica social de lucha anticapitalista que pueda descontar o poner en segundo término al feminismo. En ello centra su apelación política al retomar las consignas de las mujeres en los primeros escraches realizados frente a la Corte Suprema de Justicia: “feministas en todas partes”, y concluye: “[...] En todas partes: también en las fábricas [...]” (Volnovich, op. cit.: 96).

Metodología de investigación:

El trabajo de campo que sustenta esta investigación fue llevado a cabo entre noviembre de 2003 y octubre de 2004. El mismo incluyó la revisión crítica de dos tipos de fuentes. En primer lugar, la consulta de fuentes escritas, lo cual comprendió, por un lado, diarios de tirada nacional -*Clarín, Página 12* y *La Nación*-, y provincial -*La Mañana del Sur* y *Río Negro*, en el caso de Neuquén, *El Tribuno*, para Salta, y *El Tribuno* y el *Pregón*, para Jujuy-. A su vez, también he tenido en cuenta publicaciones político partidarias y/o sindicales abocadas al análisis de la problemática planteada. A ello se sumó el acceso a documentación de las organizaciones sociales que emergieron como consecuencia de los conflictos -como por ejemplo, los documentos de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi, Salta-, y a documentos y archivos personales de las y los protagonistas.

En segundo lugar, observando los criterios de representatividad y saturación¹², he hecho más de 60 entrevistas orales con quienes estuvieron vinculadas/os o protagonizaron los cortes de ruta en los lugares mencionados. Así, para el caso de *Neuquén*, realicé entrevistas a mujeres y varones que participaron en las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul durante los años 1996 y 1997, a integrantes de los sindicatos docentes, a miembros de la pastoral de migraciones perteneciente al obispado de Neuquén, a integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados del barrio San Lorenzo y de la Corriente Clasista y Combativa del barrio Centenario -ambos barrios localizados en la ciudad de Neuquén-, a integrantes de organizaciones feministas de Neuquén, a militantes de diversas organizaciones político-partidarias, a ex funcionarios y funcionarias del gobierno de Neuquén durante la gestión de Felipe Sapag entre 1995 y 1999, a ex trabajadores de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales y a personal jerárquico de Repsol-YPF.

Para el caso de *Salta*, entrevisté a mujeres y varones pertenecientes a la UTD, habitantes de General Mosconi, de Coronel Cornejo, de Vespucio y Tartagal -localidades comprendidas en el Departamento de General San Martín-; a ex trabajadoras y trabajadores de YPF; a miembros y dirigentes de la Coordinadora de Ex Trabajadores Ypefeanos del Departamento de General San Martín, conformado principalmente por ex ypefeanos/as que residen en las localidades de General Mosconi, Tartagal y Aguaray.

Para los cortes producidos en la provincia de *Jujuy*, hice entrevistas con mujeres y varones que participaron en conflictos acaecidos en San Salvador de Jujuy -la capital provincial-, en Libertador General San Martín, departamento de Ledesma -donde se encuentra el

¹² Respecto del primero de estos criterios, es preciso señalar que la representatividad no refiere a la cantidad de testimonios sino a su diversidad. En cuanto al segundo, el de saturación de las entrevistas, refiere a la constatación y entrecruzamiento de las distintas percepciones y representaciones mentales de los diversos actores respecto a lo sucedido en la elaboración y concreción del proyecto. Para realizarlo, se han construido parámetros de repeticiones en la medida en que se avanzaba con las entrevistas. Es materialmente imposible tomar testimonios a todas las personas que directa o indirectamente se han involucrado en este proceso social. Por tanto, las repeticiones en la descripción de un fenómeno, de una anécdota significativa, de una caracterización conceptual de los niveles de participación e intervención, de una actitud determinada frente a un problema, permiten establecer que el proceso descrito por el testimoniante se desprende de lo social y colectivo y no de lo psicológico o individual (tanto de los entrevistados como de quien realiza las entrevistas).

ingenio azucarero del mismo nombre-, y en San Pedro, localidad en la que se halla el ingenio *La Esperanza*. También entrevisté a trabajadores y trabajadoras de *Altos Hornos Zapla* –empresa localizada en la localidad de Palpalá-, a diversos miembros de la coordinadora de desocupados de Palpalá, así como a integrantes de distinta jerarquía de la Corriente Clasista y Combativa¹³.

Dada la importancia que reviste en este trabajo la utilización de las entrevistas orales, considero pertinente realizar algunas precisiones teóricas respecto de la historia oral.

Oyendo historias: la historia oral

La reconstrucción histórica de las experiencias de confrontación social que se produjeron en Neuquén, Salta y Jujuy durante los años 1996 y 2001 y, en particular, de las prácticas desarrolladas por las mujeres que participaron, organizaron y lideraron allí los cortes de ruta, trasciende la narrativa basada en exposiciones secuenciales de hechos o en cuantificaciones de datos. También escapa a explicaciones unívocas y monocausales construidas en torno a binomios tales como condiciones estructurales de ajuste/reacciones sociales opuestas. Si bien es necesario averiguar tanto el qué ocurrió y cuándo, como el contexto en el que se suscitaron los conflictos, ello no permite por sí solo una comprensión cabal de tales enfrentamientos.

Entender por qué y cómo las personas deciden en un determinado momento aunar sus voluntades, deseos o desdichas; actuar colectivamente desafiando el orden instituido; subvertir resignaciones y sumisiones ante el estado de cosas imperante –más allá de lo mucho o poco que dure esa insubordinación o los puertos a los que arribe- requiere de otro tipo de aventuras cognitivas. Exige incursionar en sus historias personales para conocer e interpretar sus sentimientos, las percepciones de la realidad que los y las impulsaron a actuar de esa forma y no de otra, sus vivencias cotidianas, los sentidos y valoraciones que asignaron a sus actos y a sus relaciones con los otros/as. De allí, entonces, la importancia de la realización de entrevistas.

Otra de las razones para el uso de la oralidad es que ésta facilita el abordaje de la historia de los grupos subalternos ya que sus experiencias vitales suelen carecer del registro testimonial que los sectores dominantes poseen o, en el mejor de los casos, ese registro se halla permanentemente sesgado por interpretaciones clasistas que subsumen las experiencias de confrontación o tensión social a una lógica sustentadora del orden social dominante.

¹³ La realización de estas entrevistas sólo pudo ser posible mediante la valiosa colaboración que prestaron varias personas. En primer lugar, Christian Castillo, quien me contactó con activistas en Neuquén y en Jujuy. Otro tanto hizo Gabriela Gressores. En Neuquén, la Negra Estela, Nano, Mario Cambio y Luis Tiscornia. En Salta, Mario Reartes, Rodolfo Pereyra y Heike Schaumberg. En Jujuy, Marcela Dip, Pablo Dietrich, Demian, Liliana Louys, Jorge Manso, Marcelo Constant, Marcelo Lagos y J. C. Galli. Todos fueron fundamentales para allanar el camino y ayudarme a comprender las realidades de estas provincias. Por último agradezco fundamentalmente a todas las mujeres y varones de Neuquén, Salta y Jujuy que, pese al esfuerzo emocional que el recuerdo de lo sucedido les provocaba, han compartido conmigo generosamente sus historias y reflexiones.

Precisamente y dentro de los grupos subalternos, las experiencias femeninas y la construcción de las subjetividades de las mujeres, se encuentran doblemente silenciadas, atendiendo a la condición de clase y de género que trasvasa dichas subjetividades. Por ello, reconstruir la participación de las mujeres desde su propia voz es una condición indispensable para desacralizar la narrativa unívocamente masculina de la Historia.

Sin embargo, creo que es necesario realizar ciertas apreciaciones preliminares orientadas a develar el concepto de memoria, puesto que es su definición y el tratamiento analítico que de ella se haga aquello que condiciona la validez heurística de la historia oral. Imbricado con esto, comenzaré por el intento de descifrar algunas cuestiones que remiten al no siempre transparente vínculo entre memoria e historia, más aún cuando de lo que se trata es de hacer historia desde una perspectiva de género.

Historia y memoria. Algunas consideraciones

La relación entre historia y memoria desde la irrupción de la historia oral ha sido bastante conflictiva, y en buena parte por ello mucho se ha escrito sobre este tópico¹⁴. Aquí sólo me remitiré a mencionar algunos aspectos de esta controversia, puesto que ponen al descubierto las dudas presentes en un abordaje analítico sustentado en el uso de la memoria; a saber: ¿qué valor tiene la memoria como fuente para la historia?, ¿cuál es su fiabilidad teniendo en cuenta que el olvido y el silenciamiento constituyen elementos de tanto peso como el recuerdo y lo relatado?, ¿cómo tratar la memoria bajo métodos de comprobación científica propios de la disciplina?, ¿para qué campo de la historia es útil?, ¿qué espacio ocupa en la narración histórica el relato testimonial y/o la voz de quien investiga académicamente?.

Bajo este abanico de inquietudes, en las últimas décadas, las posiciones de los y las historiadoras que han hecho de la memoria objeto e instrumento de la historia han oscilado entre concebirla como fuente insoslayable para la investigación, ligada a la historia social y con métodos comprobatorios propios¹⁵, o asumirla como una entre varias clases de fuentes, restringiendo su uso a aquellos casos en los que la existencia de fuentes escritas permitiere contrastar el relato testimonial. Esto último se relaciona, básicamente, con el temor al abuso de la fuente oral, inscripto en lo que se ha dado en llamar la invasión de la memoria (Norá, 1984-1002); o al reemplazo de la voz del historiador por la del testigo como instancia de legitimación exclusiva de las hipótesis analíticas del primero/a. Por ello, quienes recelan de este abuso plantean, en ocasiones, una oposición irreductible entre historia y memoria histórica, cuestión que conduce a proponer al saber histórico como única albacea del pasado en su pretensión de verdad interpretativa y a la memoria histórica como una versión simplificada cuando no maniquea de ese pasado.

¹⁴ Para una discusión acerca de la relación entre historia y memoria se puede consultar Cuesta Bustillo, Josefina (1998): "Memoria e Historia. Un estado de la cuestión", en: Cuesta Bustillo, Josefina editora. *Memoria e Historia*. Madrid, Revista Ayer, Editorial Marcial Pons.

¹⁵ Me refiero específicamente a los métodos de saturación y heterogeneidad de testimonios, delineados expresamente por Daniel Bertaux, entre otros. Ver: Bertaux, Daniel, "De la perspectiva de la historia de vida a la práctica de la transformación sociológica.", en: Marinas, José Miguel; Santamarina, Cristina (comp) *La Historia Oral: métodos y experiencias*. Madrid, Editorial Debate, 1993.

En la palestra opuesta, los que acuden a la historia oral lo hacen proponiendo que ésta posibilita el ingreso de “la voz” de aquellos sectores sociales escasamente representados en la narrativa histórica, por un lado, e incorporar asimismo, los saberes históricos de quienes protagonizaron los hechos, a la par que sus subjetividades y su cotidianeidad vital. Todo ello, explican, trae como consecuencia la emergencia de una escritura histórica contrahegemónica o alternativa¹⁶. En tal perspectiva, las mujeres y por tanto el rescate de su memoria, son propuestas como uno de tantos otros colectivos sociales cuyos recuerdos y voces silenciadas deben ser introducidos en un relato.

Frente a ambas posiciones es preciso tomar ciertos recaudos. El alerta ante los “excesos” de memoria adquiere sentido particularmente en lo que respecta a la peligrosidad de subsumir la voz del historiador/a ante quien relata sus vivencias. Pero ese cuidado debe estar presente también frente a la construcción de la Historia como disciplina, puesto que quienes la escriben no lo hacen sino desde un lugar ideológico. Historiadores e historiadoras están atravesados/as por intereses, posiciones políticas e ideológicas y paradigmas teóricos vinculados con ello. La construcción del saber histórico es, en consecuencia, una arena de conflictos que no está desligada de los intereses antagónicos presentes en la sociedad y de la lucha entre los actores sociales que los encarnan y conforman. Esta disciplina no sólo ha dependido de la resolución de tales conflictos sino que también ha contribuido a inclinar la balanza de las interpretaciones sobre el pasado hacia un interés y el grupo social que lo sostiene, así como hacia algún otro. Esto ha dado paso a silenciamientos, simplificaciones o negaciones de ciertas problemáticas. En tal caso, la persistencia de la memoria o, mejor dicho, de ciertos grupos sociales y políticos que hicieron de tal persistencia parte de su sentido de existencia, es lo que ha permitido la irrupción de otros pasados, de otros acontecimientos y de otras explicaciones sobre los mismos hechos. Merced a esa obstinación fue factible poner en entredichos el discurso “monocorde” de la historiografía dominante, por ejemplo en lo que respecta al ocultamiento de genocidios de distinto tipo. Y ello no ha sido así solamente en el terreno de la historia de las clases dominantes que han hecho del estado un instrumento del ejercicio del terror. En cuanto a la historia de las mujeres, concretamente, si la memoria no hubiera excedido a la historia, no habríamos tenido nada que contar sobre ese pasado. Fue más bien el relato histórico dominante y no el memorial el que simplificó el pasado ausentando a las mujeres de la acción. Empero, esa memoria que permite configurar un saber histórico más complejo, es la fuente de otras voces en la Historia y no la Historia en sí misma.

Respecto de la segunda posición, la pretendida construcción de una historia alternativa se frustra en tanto lo que no se pone en cuestión son ciertos constructos que atraviesan los conceptos de historia y de memoria. Ciertamente incorporar las voces de obreros/as, campesinos/as, indígenas, desocupados/as, niños/as, mujeres, homosexuales, fue un intento de abrir grietas en el relato unívocamente representativo de los sectores política, económicamente y sexualmente dominantes. Pero estimar que el solo hecho de recolectar testimonios y dar voz a los/las silenciados/as baste para construir una historia políticamente alternativa es cuando menos ingenuo, ya que esto se asienta en el supuesto de que la

¹⁶ Esta posición ha generado a veces una especie de “enamoramamiento” del testimonio a punto tal que la voz de quien testimonia reemplaza la del historiador. Ver: Wieviorka, Annette (1998). *L'ère du témoin*. París, Plon.

memoria de los sectores oprimidos se construye y fluye en forma “pura”, sin contacto o “contaminación” con valores de otros sectores sociales¹⁷.

Por otro lado, el juicio de que la memoria de las mujeres constituye una más dentro de las múltiples clases de memorias de las que se puede dar cuenta y que su mera incorporación es suficiente para arreglar cuentas con la historia dominante, supone no colocar bajo consideración que el vínculo entre género y memoria y género e historia no es calificativo sino estructurante. Esto último equivale a sostener a la vez, que el género es constitutivo de todos los tipos de memoria y que por tanto excede la memoria de las mujeres; con lo cual, cualquier narrativa histórica y crítica no puede eximirse en su propia construcción de la categoría de género.

Haciendo memorias:

A fin de explicar el vínculo que postulo entre género y memoria, es preciso comenzar definiendo algunas nociones usuales que configuran el concepto de memoria.

Todas las personas poseemos la habilidad de recordar u olvidar, y aquello que queda registrado en nuestra memoria es un producto tanto individual como social en la medida en que una persona interactúa permanentemente y se construye como sujeto en relación con otros/as. Es entonces el entramado social en el cual surge y se desarrolla determinada subjetividad aquella que imprimirá su sello en los recuerdos. Sin embargo, esos recuerdos no son un repositorio o archivo fiel de los hechos pasados. Lejos de constituirse como una reproducción exacta y fija de la realidad social tal y como sucedió, la memoria es un proceso activo de construcción social de identidades colectivas e individuales (Lummis: 1991), proceso que implica una mediación simbólica y una elaboración de sentido sobre las acciones y acontecimientos vividos en el pasado (Joutard: 1986). La memoria es un

¹⁷ En lo que hace al uso de la oralidad dentro de la tradición historiográfica argentina, su incorporación ha sido reciente. Sus orígenes pueden datarse en la década de 1970, cuando el Instituto Torcuato Di Tella comenzó la formación de un archivo de historia oral que, siguiendo los lineamientos disciplinares norteamericanos, se centró en la recolección de historias de vida de grandes personajes políticos de nuestro país. Interrumpido con el golpe militar de 1976, el uso de la historia oral se reinstaló hacia mediados de la década de 1980, pero con un perfil distinto al que le diera nacimiento. En tal sentido, dentro del ámbito universitario, docentes de la carrera de Historia dedicados a la investigación de los acontecimientos recientes de nuestro país, centraron el abordaje oral tanto en la recolección de testimonios de personas pertenecientes a la clase obrera y otros sectores subalternos como en los y las sobrevivientes de las experiencias de lucha armada y de organizaciones de izquierda durante la década de 1970. Pese a que para algunos/as historiadores/as esta experiencia cognitiva resultó en populista y empirista, en realidad fue el grupo de estudiantes de Historia que habían ingresado a la carrera en 1983, a fines de la dictadura, y los profesores ligados a los talleres de historia oral realizados por el profesor Pablo Pozzi hacia fines de 1980, quienes reintrodujeron no sólo el uso de la historia oral como metodología histórica sino la problemática del movimiento obrero, la militancia juvenil y lo sucedido durante la dictadura militar de 1976-1983 como temáticas insoslayables del análisis de la Historia académica. A la vez, sometieron a discusión el rol del historiador dentro de la sociedad y los objetivos de de la producción del conocimiento histórico. Ver: Schwarzstein, Dora, “La Historia Oral en América Latina”, en: Historia y Fuente Oral. Por una historia sin adjetivos. Año 1995, Nro. 14. Barcelona; Pozzi, Pablo: Oposición obrera a la dictadura (1976-1982). Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1988; Pozzi, Pablo y Salas, Ernesto, “Taller de historia Oral: ¿Historia para qué?”. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1989. Mimeo

“agente” creador de significados, es una forma de generar sentido y de armar la trama de la experiencia vital que hemos desarrollado individual y colectivamente.

De tal suerte, la memoria sobre el pasado nunca es el pasado, sino la traza construida del pasado en el presente. Es preciso remarcar que esa traza involucra tanto el “marco social” en el cual todo sujeto se encuentra inserto (Halbwachs: 1994) como el presente de quien recuerda. El cómo y el qué se recuerda de una época no depende solamente de la época recordada o del impacto que la misma tuvo en la vida de una persona. No es la impresión “pura” de las cosas tal y como sucedieron la que permanece impresa en la memoria. Por un lado, los recuerdos de la realidad pasada se encuentran mediados por los espacios de pertenencia política, social, etc., en los que las personas viven, espacios que se encuentran sujetos a contradicciones, disputas, cambios. Por el otro, la legitimación de la vida presente es esencial a la memoria, ya que el individuo o grupo social reconstruye al mismo tiempo su pasado como justificación y explicación de su agencia en la actualidad. De tal suerte, la memoria es la resultante de un proceso intersubjetivo anclado en relaciones sociales conflictivas determinadas por un contexto histórico y social. Así, pasado y presente se restituyen mutuamente asignando significados a las experiencias vividas, significados atravesados por el entramado social en el cual surgen, se alimentan y desenvuelven las subjetividades en juego. En síntesis esos significados, aquello que se evoca o se silencia, lo que se recuerda y se olvida, se halla limitado por un marco social presente, por las posiciones diferenciadas que los sujetos ocupan en la organización social de que se trate, y por los conceptos, nociones y juicios de valor que, no sin pugna, se imponen en cada época histórica.

Esto último introduce otro aspecto que debe ser tenido en cuenta sobre la memoria y que conforma su anverso. Es el referido al olvido. La memoria es siempre selectiva y limitada. Conciente o inconscientemente, la evocación del pasado contiene un proceso de selección en tanto es imposible recordar todo en todo momento. Aquí se inscribe el olvido, el cual consiste en la destrucción de ciertos elementos pretéritos que puede originarse en la carencia de interés o significación para el grupo social de pertenencia o la persona que recuerda sobre determinados hechos pasados, la ausencia de la transmisión de la generación poseedora del pasado, la negativa de la historia profesional a elaborar interrogantes sobre algunos temas o problemáticas, o, como sostiene Luisa Passerini, la autocensura colectiva generada por las cicatrices dejadas por la experiencia pretérita. Por ello, y haciendo referencia al período fascista en Italia, esta autora introduce el concepto de “silencio” colectivo, el cual es provocado por los efectos que ejercen los cambios de la cultura social y política sobre las personas (Passerini: 1991).

De tal manera, el olvido no puede ser interpretado como una falla de la memoria y prueba de la falibilidad de la evidencia oral. Al igual que la memoria, es un proceso activo que puede nutrirse de varias fuentes y debe ser sometido al análisis histórico. No es fijo, estático o inmutable: los alcances o límites de qué es lo que se olvida son difíciles de establecer puesto que, por ejemplo, la inducción al recuerdo de un testimoniante realizada por quien investiga un proceso histórico, puede provocar la irrupción de rememoraciones de hechos que se creían perdidos o que no habían sido evocados hasta ese momento. Asimismo, la necesidad sentida socialmente de volcar la experiencia vivida frente a una situación dada, también puede actuar como instigador de recuerdos cuya existencia se

“desconocía”. En alusión a ello es interesante incorporar aquí la noción de Paul Ricoeur sobre el olvido de conservación en reserva, que es más bien un recuerdo latente, para distinguirlo de aquel en el que se borra todo rastro de lo vivido (Ricoeur: 2000)¹⁸.

Como puede observarse, los elementos presentes en la construcción de la memoria así como las variables que deben considerarse para su utilidad como fuente histórica, distan de ser simples. Esta complejidad se pone de manifiesto también en las formulaciones en torno a los diversos tipos de memoria.

En cuanto a este tema, tanto sociólogas/os como historiadoras/es han tipificado la memoria según quién recordara y qué fuera inscripto como práctica del recuerdo en distintos registros. Así, se puede hablar de memorias individuales, comunes, colectivas, institucionales, históricas, de clase, entre otras¹⁹.

Sin embargo, estos esfuerzos clasificatorios subsumen ciertos supuestos al silenciamiento o al olvido teórico. De ello me ocuparé, entonces, en el apartado siguiente a fin de demostrar la importancia de los mismos en lo que atañe a la construcción de la memoria.

El género de la memoria:

Todos los elementos que hacen a la memoria y a sus distintas clasificaciones son contruidos a partir de una enunciación apriorística que no se explicita y menos aún se pone en cuestión. Ese supuesto tácito resulta en que el sujeto portador de la memoria es universalmente masculino. En ese sentido, no importa a qué tipo de memorias se haga referencia. Sean de clase, histórica, étnica, institucional, individual o colectiva, todas ellas son formuladas ocluyendo el anclaje genérico del registro memorial. Por ello se configura un universo de memorias dentro del cual se halla una con especificidad propia: la de las mujeres, sosteniendo asimismo que la inclusión de este grupo coadyuva a la democratización del saber histórico (Joutard: op. cit). Si bien esto es un avance ya que se abren las puertas a la consideración de que las mujeres son actoras en la Historia, el alcance de tal apertura –y por tanto de la democratización del saber- es limitado en la medida en que tal especificidad postula la memoria de las mujeres en paralelo con el resto de las memorias. Este grupo se torna en un agregado que, cual aditamento, viene a enriquecer la multiplicidad de las memorias, pero deja intactas las formulaciones sobre la construcción de las mismas.

¹⁸ Finalmente, es necesario diferenciar el olvido del ocultamiento puesto que en este último existe la voluntad de esconder la comunicación de una experiencia que no ha sido olvidada.

¹⁹ Estos temas han sido tratados por diversos/as historiadores/as y sociólogos/as, desde distintas perspectivas. Ver, entre otros, Moss, D. y Portelli, A.: (1991). *La historia oral*. Buenos Aires, CEAL; Namer, Gerard : “Antifacismo político y la memoria de los músicos”. En: Cuesta Bustillo, Josefina editora (1998): *Memoria e Historia*. Revista Ayer, Madrid, Editorial Marcial Pons; Rioux, Jean Pierre: “La memoria colectiva”. En: AAVV (1995): *Para una historia cultural*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina; Andújar, Andrea; D’Antonio Débora: “El dilema de la exclusión y los anclajes de la memoria”, en. Revista *Periferias* Buenos Aires, año 9, Nro. 12, primer semestre 2005.

Considero en este sentido que la especificidad asignada a la memoria de las mujeres debiera conducir a preguntarse por la particularidad de la memoria de los varones. Ello permitiría no sólo deconstruir las bases sexistas en las que se asientan las definiciones académicas de las distintas memorias, sino descubrir que en realidad, toda memoria está atravesada por el género. Es por ello y a tal fin que sugiero que el vínculo entre género y memoria resulta estructurante, razón por la cual trabajo con la idea de *género de la memoria*.

La definición de este concepto comprende las siguientes proposiciones. La primera es que toda memoria se construye a partir y en torno a la organización sociocultural de la diferencia sexual biológica. Ello así en tanto varones y mujeres experimentan su vida a partir de una matriz simbólica, normativa, institucional e identitaria, que prescribe ámbitos sociales de pertenencia, actuación e incumbencia diferenciales, legitimados en las apariencias de cada sexo. Esas experiencias distintivas se imprimen tanto en la construcción de la memoria como en la organización del relato de lo registrado. Así, por ejemplo, cuando las mujeres rememoraban cómo se habían involucrado en la lucha política que se conocería posteriormente como el *Cutralcazo*, en la provincia de Neuquén durante junio de 1996, la datación de ese acontecimiento se vinculaba con otros estrictamente situados en su vida familiar. Una de ellas, Sara –ex obrera ypefeana–, recordaba la fecha en que la gendarmería había llegado a las comarcas petroleras en 1996 para desalojar las rutas, porque ese día había nacido su nieto. Arcelia –esposa de un ex ypefeano– comenzaba su relato sobre la represión que provocó la muerte de Teresa Rodríguez, en el corte acaecido en la misma zona un año más tarde, con la enfermedad de su esposo. Inés, una salteña que participó en la formación de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) en General Mosconi, anclaba los inicios de su participación en el corte de rutas en Tartagal y General Mosconi durante mayo de 1997 en las múltiples discusiones que tuvo con su marido porque éste se oponía a que ella fuera a la ruta. En cambio, para Rodolfo “Chiqui” Peralta, quien coordina la administración de los proyectos que implementa la UTD a partir de los planes de desempleo, los orígenes de su participación en el mismo hecho se asientan mucho más en una secuencia fáctica ligada al devenir público/político: el recuerdo de la movilización social de Cutral Co y Plaza Huincul como una forma de enfrentamiento exitosa en el pasado inmediato, su participación personal en una asamblea en Tartagal pocos días antes de que se iniciara el corte de la ruta Nro. 34, su experiencia como delegado del sector de “Patrimonio” de YPF-Yacimiento Vespucio antes de la privatización de la petrolera estatal, entre otros factores.

Es preciso remarcar la importancia que esa organización del relato adquiere puesto que el acceso a la memoria de todo sujeto está siempre tamizada por la comunicación de la experiencia²⁰. En esa dirección, la forma en que mujeres y varones configuran la narrativa del pasado está también genéricamente mediada (Jelin: 2001). Por ejemplo, Stella Maris, empleada doméstica cutralquense que participó en la pueblada de 1996, sostenía: “Yo fui a ver... Yo siempre digo que me daba cuenta de que la situación ya no daba para más. La gente estaba desesperada por estar implorando un remedio o estar pidiendo fiado y que nadie te fíe nada. Entonces digo, bueno voy a ir a ver que pasó, qué pasa, a ver quiénes son los que están. Y así empecé [...] Y allí no hubo ni religión, ni nada, porque estaban todos

²⁰ Para evitar equívocos, cuando hablo del relato me refiero tanto a la transmisión verbal como a la expresión gestual que mujeres y varones utilizan al narrar sus recuerdos.

juntos, estábamos todos iguales [...]”. Su exposición fáctica se enmarca en ese nudo crítico entre la lucha de su clase y de su género, y en cómo específicamente, estos sucesos marcaron su propia biografía, logrando enlazar su historia personal con la de la comunidad (Mills: 1970). Por lo tanto, es tarea de quien realiza la investigación histórica develar cuáles son los dispositivos o anclajes del registro del recuerdo para hombres y mujeres, a qué espacios remiten las experiencias vitales trazadas en el relato de cada uno, en qué factores fundan las razones de su agenciamiento, cómo disponen la narración de tales experiencias y cómo se estructuran los tiempos del relato.

La segunda proposición se vincula con que el género de la memoria es relacional puesto que se construye a partir de la interacción de los sujetos cotidianamente. Por tanto, las memorias de mujeres y varones se encuentran mutuamente influidas. Sin embargo, esa relación e influencia encierra asimetría puesto que se asienta en un desigual acceso al poder en sus distintas manifestaciones. Esta cuestión deviene tanto en la existencia de formas de opresión concreta de los varones sobre las mujeres como en la asignación de jerarquías valorativas sobre lo que unos y otras realizan, los espacios sociales en los que desarrollan las acciones cotidianas, y la importancia concedida a la incidencia de sus actos en el devenir histórico, entre otras cuestiones. Ejemplo de ello puede encontrarse en cómo visualizaron las mujeres su participación en los piquetes y cómo los varones las percibieron a ellas. Arcelia sostenía, en alusión al protagonismo de unas y otros en el origen de la primera pueblada en Cutral Co, lo siguiente: “Cuando se levantó el pueblo [en alusión al estallido del conflicto del 20 de junio de 1996], nosotras estuvimos ahí. Fuimos las primeras porque estábamos viendo lo que estaba pasando con nuestros hijos. Entonces nos levantamos primero y arrastramos a los hombres”. Empero para Pedro, ex ypefeano de la zona: “Las mujeres estaban en el piquete y gracias a ellas comíamos. Se encargaban de cocinar, de hacer algo calentito porque el frío que hacía no te puedo explicar y muchas se quedaban a la noche”. Como puede observarse, el protagonismo que se asignan unas y otros es sumamente diferencial. Para Pedro, las mujeres hacían en la ruta lo que usualmente hacían en sus casas, lo cual es cierto. Muchas de ellas comentaban que parte de sus actividades en el piquete remitían a la amplificación colectiva de sus tareas dentro de las paredes del hogar. Pero las actividades de las mujeres excedieron en mucho ese marco. Pedro no recordaba, por ejemplo, que fue justamente una mujer, Laura Padilla, quien firmó el acta acuerdo en representación de las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul con Felipe Sapag, poniendo fin al primer conflicto. Por otra parte, las mujeres pusieron en escena durante el conflicto las experiencias fundadas en la asignación de roles de cuidadoras de la comunidad, provocando, por un lado, un desplazamiento de los lazos afectivos hacia la política y por el otro, desnudando también lo político existente en los lazos afectivos. Justamente Laura Padilla recordando lo que ella hacía en el piquete, no se avergonzaba de sus propios sentimientos y comentaba: “Porque eso de enfrentarse a la gendarmería y esperarlos paraditos ahí, yo le tenía miedo a la fuerza que ellos tenían. Ustedes dense cuenta que yo era mamá sola con tres chicos [...] Si ustedes me dicen ¿cuál fue mi función más allá de ser la vocera?, cuando la gente se ponía violenta, era esto de ir a abrazarlos, a acariciarlos, a darles un beso, a tranquilizarlos, eso era lo que yo hacía”.

Otra vez, es tarea de quien analiza la memoria desentrañar, por ejemplo, cómo mujeres y varones se perciben a sí mismos y entre sí, de qué manera valoran su participación en la sociedad y en el momento socio histórico particular de que se trate, de qué forma y hasta

qué punto la visión que cada género tiene sobre el otro media la auto percepción sobre lo actuado, qué tipo de acontecimientos adquieren relevancia para dar cuenta de los sucesos pasados y presentes y de qué manera se construye el protagonismo de los varones y de las mujeres en el acontecer histórico.

La tercera formulación es que el género de la memoria se encuentra histórica y socialmente determinado, lo cual conduce a tener en cuenta dos elementos. En primer lugar, la construcción de la memoria siempre está situada en relación a cómo varones y mujeres vivencian la relación genérica y las normativas que se formulan respecto a lo masculino y lo femenino. Estas normativas nunca son estáticas o fijas, aunque se pretendan inmutables. Son históricamente cambiantes y ello depende, en buena medida, de la aceptación y/o el rechazo que los sujetos tengan de la asignación simbólica de los atributos correspondientes a varones y mujeres, por ejemplo, y de las relaciones de poder existentes entre ambos. Un ejemplo de esto puede hallarse en el significado que para las mujeres y los varones de General Mosconi adquirió la llegada de las Madres de Plaza de Mayo a esa localidad en ocasión de la feroz represión que se desató sobre ellos/as durante el 17 de junio de 2001, cuando luego del desalojo de un corte de ruta, la gendarmería nacional y la policía local ocuparon la ciudad y comenzaron una “caza de brujas” contra los y las principales referentes de la UTD. Para las personas entrevistadas, varones y mujeres, la presencia de las Madres “delante de las vías del tren, agarrándose entre ellas y con nosotros del brazo”, significó el retiro automático de la gendarmería: “cuando las vieron, no se les animaron y ahí, en cuanto supimos que ellas estaban, salimos de abajo de la cama de una vecina que nos tenía escondidos y nos fuimos otra vez a la ruta”, relataba Víctor, un joven desocupado integrante de la UTD. Así, la presencia de las Madres de Plaza de Mayo en ese acontecimiento, las instituyó en la memoria de quienes lo vivenciaron. De hecho, fue desde ese presente desde donde muchas de las personas que allí estaban recuperaron un conocimiento sobre la última dictadura militar argentina y sobre el rol que las Madres jugaron durante esa etapa. Pero esa presencia y ese rol, además, generaron un debate respecto de las propias prácticas políticas de las mujeres de General Mosconi. A partir de ese momento ellas comenzaron a pensar en organizarse como grupo de mujeres autónomo de la UTD para tratar por ejemplo, los problemas de la violencia familiar a la que mayoritariamente están expuestas.

En segundo lugar, se debe considerar que mujeres y varones no constituyen sujetos homogéneos. De tal manera, las diferencias de clase, étnicas, nacionales, entre otras, deben ser puestas en escena al momento de analizar las fuentes de las rememoraciones y su relato al interior de cada género. Así, la tarea analítica se orienta a estudiar tanto los cambios y continuidades que se producen en las autopercepciones e interpretaciones que mujeres y varones poseen de sus prácticas pasadas y presentes, y de los vínculos establecidos entre uno y otro género, como de las grietas que posibilitan que las voces de las mujeres emerjan distintivamente. Laura Padilla concluía lo siguiente: “La pueblada en mi vida de mujer es como un reconocimiento (...) es un reconocimiento a una vida de mucho sufrimiento que se animó a hacer algo (...) porque si vos me decís, ¿cuáles son tus grandes orgullos?, uno es esto de ser piquetera y el otro es lo que me he animado a hacer en la pueblada”. En esa dirección, Laura sintetizaba en “esto de ser una piquetera” su situación en cuanto desocupada, madre de tres hijos, y jefa de hogar, asignando también a ello una valoración

positiva en tanto pudo trocar allí la aceptación/resignación ante las desigualdades y opresiones existentes en enfrentamiento y rebeldía.

En las secciones siguientes me abocaré a analizar la incidencia de la participación de las mujeres en los cortes de ruta de las provincias de Neuquén, Salta y Jujuy, y de las organizaciones que emergieron a partir de esas confrontaciones.

Sección 2:

Mujeres desafiantes, historias en conflicto: los cortes de ruta en Neuquén (1996-1997).

Introducción:

Durante los años 1996 y 1997, la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, fue escenario de una serie de conflictos sociales en los cuales el corte de rutas devino en herramienta preponderante de confrontación. Estos conflictos tuvieron como epicentro las ciudades de Plaza Huinul y Cutral Co, comarcas petroleras lindantes entre sí y distantes 100 km de la capital provincial.

El primero de ellos sucedió entre el 20 y el 26 de junio de 1996, cuando las y los pobladores de ambas localidades levantaron barricadas sobre las rutas nacional Nro. 22 y provincial Nro. 17 y una veintena de picadas²¹, protagonizando una pueblada cuya envergadura carecía de precedentes en la región. Si bien el origen de esta protesta estuvo enmarcado en la situación de desocupación y miseria causada por la reestructuración y posterior privatización de la empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) entre 1991 y 1993, el acontecimiento que la provocó fue el anuncio del cese de las negociaciones entre el gobierno provincial y una empresa canadiense que iba a instalar en la zona una fábrica de fertilizantes. Con la exigencia de que Felipe Sapag, el gobernador neuquino, se presentara ante ellos a rendir cuentas de esta decisión, huinculenses y cutralquenses sitiaron las dos ciudades impidiendo que todo vehículo, persona o mercancía pudiera atravesar la región.

Durante seis noches y siete días la población logró sortear una amplia gama de obstáculos que conspiraban contra la persistencia de tal medida. Ni los fuertes vientos y el frío que azotaban la zona en esa época del año, ni los intentos de manipulación del conflicto por miembros de partidos políticos vinculados a distintas facciones del elenco gubernamental, ni las amenazas de represión con la presencia de efectivos de la gendarmería nacional, fueron suficientes para menguar la tenacidad y capacidad de enfrentamiento de las y los pobladores.

Frente a esta situación, Sapag se presentó en el lugar el 26 de junio y, luego de arduas negociaciones, debió firmar con ellos/as un acuerdo que estipulaba, entre otros, los siguientes puntos: la reconexión de los servicios de gas y electricidad a todas aquellas familias que tenían cortado el suministro, la entrega de cajas de alimentos, la habilitación del hospital de Plaza Huinul y la instalación de un nuevo hospital en Cutral Co, la declaración de la emergencia ocupacional y social en Cutral Co y Plaza Huinul, la instalación de las empresas *La Oxígeno* y *Ferrostal*; el desarrollo del yacimiento gasífero *El Mangrullo*; la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos y la puesta en marcha del control de medioambiente y regalías petroleras mediante la Policía de Hidrocarburos; la creación de escuelas y jardines de infantes en ambas localidades, obras de asfalto; otorgamiento de créditos por parte del Banco Provincia para comercios e industrias; y la no toma de represalias contra los habitantes de Cutral Co y Plaza Huinul.

El 9 de abril de 1997, apenas 10 meses después de la conclusión de este conflicto, las comarcas petroleras volvieron a ganar protagonismo en el mapa político nacional. Ese día una autoconformada comisión de padres, maestros y estudiantes, decidió cortar las rutas,

²¹ Las picadas son caminos no asfaltados, alternativos a las rutas, realizados varios años atrás por YPF.

esta vez en defensa de la escuela pública. Sin embargo, este corte, al menos en sus orígenes, no fue el resultado de una acción colectiva que congregara a la población de ambas localidades en igual magnitud a la expresada en el año anterior. Constituyó, en realidad, una medida inserta dentro del plan de lucha de las y los docentes neuquinos/as agremiados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) que, semanas atrás, había iniciado una huelga provincial impugnando la aplicación de la Ley Federal de Educación.²²

Pasadas algunas horas, el sindicato docente restó su aval institucional a la realización del corte. Si bien la medida continuó, lo hizo sostenida por jóvenes que se autodenominaban fogoneros para diferenciarse de los piqueteros del conflicto anterior, a quienes sindicaban como traidores. Pero fue la represión feroz que la gendarmería nacional y la policía provincial desataron sobre estos jóvenes y que se extendió por el interior de los barrios de Cutral Co y Plaza Huincul provocando la muerte de una joven mujer, Teresa Rodríguez, la que suscitó la masificación de la protesta. Ese día, el 12 de abril, nuevamente la comunidad de ambas localidades ganó las rutas, levantando a su paso numerosas barricadas. Allí permanecieron hasta el 18 de abril, momento en el cual un nuevo acuerdo realizado con los gobiernos provincial y nacional condujo a la conclusión de la protesta. El pacto, constituido por 16 puntos, establecía el compromiso de investigar la muerte de Teresa Rodríguez, la aprobación de la ley de traspaso del yacimiento gasífero *El Mangrullo* a los municipios locales, la creación de 500 puestos de trabajo en Repsol-YPF –a los que accederían primeramente los fogoneros-, créditos para pequeños emprendimientos rurales, cobertura social a familias de personas desocupadas, ayuda gubernamental para el pago de las facturas de luz y de gas, jubilación anticipada para los ex trabajadores de YPF, la no toma de represalias contra los y las manifestantes, entre otros puntos.

A ocho años de lo sucedido, la literatura histórica y sociológica ha pensado esta experiencia desde diversas perspectivas. Así, para algunos analistas las jornadas de Cutral Co y Plaza Huincul fueron expresión de un movimiento de protesta policlasista, no interpretable en clave política, que canalizaba, de forma no institucionalizada, la impugnación de las consecuencias del ajuste neoliberal. En ese sentido, la lucha de cutralquenses y huinculenses más que una acción de ofensiva contra el sistema social vigente, constituía la búsqueda de la inclusión en él (Favaro et al.: 1997). Para otros esta confrontación, si bien defensiva, profundizaba las contradicciones capitalistas, obstaculizando la gobernabilidad necesaria para la acumulación de capital. Debía ser vista, por tanto, como un proceso de avance hacia formas de lucha más sistemáticas que expresaban mayores destellos de conciencia aunque la espontaneidad continuara siendo un factor preponderante del movimiento (Klachko, op. cit: 2002). Por último, también se lo concibió como un caso paradigmático de beligerancia popular que junto con el “santiagueñazo”²³, habría sido la antesala de las movilizaciones que determinaron la caída del ex presidente Fernando de La Rúa (Auyero, op. cit.: mimeo).

²² La aplicación de esta ley, sancionada en 1993 por el Congreso Nacional, implicaba en el caso neuquino, el despido de 1000 docentes aproximadamente, entre otras consecuencias.

²³ Se conoce con este nombre la masiva protesta desatada por empleados/as públicos/as, estudiantes, maestras/os, jubilados/as, desempleados/as en la provincia de Santiago del Estero el 16 de diciembre de 1993, en reclamo de los salarios, jubilaciones y pensiones adeudados por el gobierno provincial desde hacía tres meses. A ello se sumaba el descontento por la generalizada corrupción gubernamental, descontento puesto de

Si bien los y las autoras de estos análisis discrepan tanto en cuanto al impacto que estas confrontaciones tuvieron para la reproducción ordenada del capitalismo neoliberal argentino como en lo referido a niveles de conciencia, organización y objetivos de sus protagonistas, existen similitudes en algunas de sus conclusiones. La primera de ellas es la caracterización de los conflictos de junio de 1996 y abril de 1997 como un punto de inflexión en la resistencia social contra las consecuencias del modelo neoliberal. En tal sentido, Cutral Co y Plaza Huincul marcaron la apertura de una etapa de ascenso de la conflictividad social donde las modalidades y herramientas de enfrentamiento popular retomaron aquellas utilizadas en el caso neuquino, como sucedió en Salta, Jujuy y el Gran Buenos Aires posteriormente.

Asimismo, también coinciden en el señalamiento de que desde esas experiencias emergieron los movimientos piqueteros como novel actor social, gestando formas de participación y acción alternativa, y dando cauce a conflictos sociales de diversa envergadura.

Pero ni la originalidad ni la identidad de los movimientos piqueteros pueden comprenderse cabalmente si se exime del análisis el papel preponderante que jugaron las mujeres, devenidas en actores políticos fundamentales de ambos cortes de ruta. Ellas intervinieron con voces autónomas y con notable firmeza, poniendo en práctica formas de participación y de organización que signaron la traza socio-política de estas protestas. De hecho fue una mujer, Laura Padilla, maestra que residía en Cutral Co, quien firmó el acta con Felipe Sapag que puso fin al corte de rutas de 1996. Y fue otra, Betty León, esposa de un ex obrero de YPF, la sindicada por los diarios locales como una de las líderes más importantes de esa pueblada, junto con la misma Padilla y Ernesto “Jote” Figueroa, dirigente sindical de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Ahora: si bien en ambos cortes la presencia femenina fue nodal, no necesariamente fueron las mismas mujeres las que tomaron parte en uno y otro. En el primer caso éstas eran mayoritariamente trabajadoras por cuenta propia, ex ypefeanas, desocupadas y propietarias de pequeños comercios, aunque se contaban maestras entre ellas. En el segundo, el protagonismo inicial lo tuvieron maestras primarias y docentes del ciclo secundario, agremiadas en ATEN. Esto último incidiría, como luego se verá, en los alcances y los límites que la participación de estas mujeres alcanzó durante el desarrollo del corte de rutas de 1997.

Por lo tanto, a fin de descifrar las claves en las que las mujeres urdieron con mano propia la trama de estos enfrentamientos, me abocaré a analizar primero los acontecimientos comprendidos en el corte de rutas de junio de 1996, para pasar luego a lo acontecido durante abril de 1997. A tal fin me propongo dar cuenta de la forma en que el entrecruzamiento de las identidades de género y de clase condujo a un complejo proceso de organización, movilización y liderazgo femenino, indagando cómo las mujeres han dotado

manifiesto con el incendio y saqueo de tres edificios públicos provinciales, y residencias privadas de políticos y funcionarios locales.

de significados a sus propias vivencias pasadas a partir de la memoria que ellas construyeron sobre las acciones emprendidas.

De la casa al piquete: las mujeres en el corte de rutas de 1996:

El mundo ypefeano:

Sara es una mujer de mediana edad, tímida, de hablar pausado y de pocas palabras. Habita en Cutral Co “desde hace mucho”. Actualmente trabaja en una forrajería y completa los ingresos con los que sostiene a su familia produciendo, junto con Magdalena –vecina que vive a pocas cuadras de su casa-, chinelas para mujeres de todas las edades. Pero Sara no siempre hizo eso para vivir. Hasta 1993, año en que se acogió al retiro voluntario, trabajó en YPF. Ella ingresó a la empresa en 1971, cuando tenía apenas 17 años. Durante 23 años se desempeñó como empleada de la sección contaduría. Su vida y la de su familia, al igual que la de la mayoría de quienes habitan la zona, transcurría estrechamente ligada al destino de la empresa petrolera.

Desde su descubrimiento, el usufructo del oro negro vertebró la historia de las comunidades de Plaza Huincul y Cutral Co. La primera nació en 1918, debido al inicio oficial de la explotación petrolera. Una década y media más tarde, la radicación de población expulsada del octógono fiscal constituido por aquella, dio lugar a la creación de un nuevo asentamiento colindante con el anterior, Cutral Co. La flamante actividad transformó la zona en polo de atracción de varones y mujeres, quienes se dirigieron allí en busca de nuevas y mejores oportunidades de trabajo (Palacios et al.: 1993). Así, la expansión productiva de YPF provocó un elevado crecimiento demográfico en ambas localidades que, por ejemplo, pasaron de contar con una población de 6.452 habitantes en 1947, a 44.711 habitantes en 1990 (Auyero: mimeo). A su vez, YPF fue responsable en buena medida, del trazado de la trama urbanística y habitacional ya que en muchos de los barrios, la empresa se encargó de la construcción de viviendas, el tendido de calles, redes cloacales, luz eléctrica, escuelas y hospitales. De esta manera, la existencia de YPF garantizó la socialización territorial, a la par que dio lugar a la expansión de la actividad del sector comercial, de la construcción y de los servicios (Favaro, op. cit.: 1994).

Por otra parte, la petrolera gestó en los y las trabajadoras un hondo sentido de pertenencia y de identificación con ella. Según recordara Arcelia, esposa de un trabajador de YPF con quien se había radicado en Plaza Huincul durante los inicios de 1960, “YPF era un gran padre [...], y acá se ganaba indudablemente bien [...]. ¡Teníamos un hospital de primera! [...] Y mi marido en el lugar del corazón tenía un sello de YPF [...]”.

Esta profunda identificación con la empresa se debió a varias cuestiones. En primer lugar, los y las trabajadoras obtenían salarios más elevados respecto del promedio nacional. A esto se sumaban los beneficios de una muy buena obra social, vacaciones pagas y acceso a pasajes de avión en la línea Aerolíneas Argentinas una vez al año, entre otras cosas.

Además, contaban con buenas condiciones de trabajo: jornadas laborales de ocho horas, provisión de elementos de seguridad laboral, y de alimentos y vivienda por parte de la empresa cuando los trabajadores iban a trabajar al “campo” (esto es, a los pozos de exploración y perforación). A tal punto YPF “selló el corazón” de quienes trabajaban para ella que ser “ypefeano” era motivo de profundo orgullo e incluso, sentimiento de

superioridad frente a quienes se desempeñaban en la administración pública, la rama comercial o de la construcción.

Por otra parte, este sentido de pertenencia y distinción de los trabajadores ypefeanos²⁴ se reforzaba con los vínculos de camaradería gestados a partir del propio proceso laboral. Por ejemplo, el trabajo de exploración y perforación exigía que los trabajadores permanecieran en el campo entre 15 y 20 días seguidos por mes. Luego de ello, tomaban un descanso por el lapso de tres días, período en el cual volvían a sus hogares. Mientras duraba su estancia en el campo, compartían viviendas, comidas y el tiempo libre existente entre turno y turno de trabajo. Según Alejandro Lillo, ex ypefeano y delegado gremial del Sindicato Unido de Trabajadores Petroleros (SUPE), estas condiciones provocaban que entre los trabajadores existiera “[...] mucha solidaridad, éramos muy solidarios. Nadie quedaba aislado de nada. El que se aislaba tratábamos de meterlo porque nos dábamos cuenta que en esa forma de trabajo, no era una cosa como para alegrarse. [...] Muchos añoraban la familia, si andaba un hijo enfermo o la mujer medio descompuesta [...]”.

A su vez, esta forma de trabajo generaba una relación particular con sus propias familias e incidía también en la manera en que las mujeres desempeñaban su tarea de “cuidadoras” del hogar. Bety León es una rionegrina de hablar alegre y firme. Todo lo explica a gran velocidad pero detalladamente. Ella se había instalado en Plaza Huincul con su familia en 1984. Poco tiempo después se casó con un ypefeano. Según su experiencia: “[...] Yo hacía el rol de mamá y papá, mantenía mi casa. Mi marido cuando cobraba al otro día se venía, porque él sabía estar veinte o veintidos días, y a lo mejor traía cuatro días de descanso [...]. A veces mi marido se lamenta porque él no disfrutó a sus hijos cuando eran chiquitos. Perdió lo mejor de la infancia de sus hijos, porque la nena a medida que iba creciendo, ocho meses, un añito, cuando papá venía, el primer día lo miraban como un extraño. Cuando se estaban adaptando a papá, ya él se tenía que ir. No sólo yo hacía ese papel, éramos todas las mujeres, la mayoría, de la comunidad, de hacer ese rol, porque nuestros maridos gracias a Dios estaban trabajando afuera, y era todo así, yo pagaba mis cuentas, si tenía que comprar algo compraba, yo tenía que ir a la proveeduría, el negocio de todos los ypefeanos, que teníamos una libreta, abonos. Y ellos el 30, el 1ero. ya cobraban, y era muy buena guita [...]”. Los varones y las mujeres entrevistadas acentuaban la dificultad que para sus vidas en común implicaba el compartir tan escaso tiempo debido al ritmo impuesto por el trabajo de perforación en YPF. Sin embargo, las prolongadas ausencias masculinas contenían otras consecuencias en la vida de las mujeres. En primer lugar, las convertían en administradoras únicas de los recursos económicos con los que contaba la familia. Además, facilitaba una mayor independencia en las decisiones referidas a todas aquellas cuestiones que afectaran la vida doméstica y el cuidado de sus hijos/as. Todo ello redundaba en una mayor autonomía para las mujeres del control masculino respecto del manejo de la vida cotidiana.

Asimismo, para ellas, y en especial para las que tenían hijos e hijas, la presencia de la empresa petrolera estatal también dejaba un “sello” particular en sus vidas, al asegurar la provisión de aquellos servicios que resultaban fundamentales a sus intereses, constituidos a partir de sus atributos de género (Molyneux: 1985). YPF patrocinaba centros deportivos,

²⁴ Este sentimiento queda claramente puesto de manifiesto en una forma en que los propios trabajadores se denominan. Ellos son “ypefeanos” y no sencillamente petroleros.

escuelas y jardines maternas, a la par que pagaba un plus para guarderías para los hijos/as de las trabajadoras/es. Con ello, las tareas de cuidado y educación familiar se encontraban ampliamente allanadas.

Por otro lado, los habitantes de Plaza Huincul y Cutral Co profesaban una idea de propiedad sobre el recurso cuya explotación daba vida a ambas comunidades. Magdalena, que divide su tiempo diario entre cuidar a sus nietas y nietos, armar chinelas y cocinar con otras mujeres panes y tortas que luego solidariamente reparten en barriadas más humildes, sostenía: “[...] nosotros tenemos el petróleo y el gas y todo se lo llevan [...]”. Esta idea de propiedad sobre los recursos fue abonada por la retórica y práctica política del Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido neojusticialista creado por la familia Sapag a comienzos de la década de 1960 y que, desde 1963, mantuvo casi ininterrumpidamente el control del poder político local.

A partir de su provincialización en 1955, Neuquén se integró a la economía nacional como proveedora de hidrocarburos y recursos energéticos en general. Las regalías obtenidas con su explotación, y en menor medida los ingresos provistos por la recaudación impositiva, constituyeron la piedra angular en la que se asentó el acceso hegemónico del MPN al gobierno de la provincia. Hasta mediados de la década de 1970, éste desarrolló desde el estado provincial una política interventora redistribucionista, basada en la inversión prioritaria en obras públicas, gasto social e infraestructura básica, por un lado, y la expansión del empleo público, por el otro. Por todo ello, los dividendos del petróleo y del gas, fundamentalmente, cobraron un rol central en la relación con el Estado Nacional quien, desde el discurso del MPN, fue ubicado como potencial adversario de los intereses de la provincia. De tal manera, el MPN basó su estrategia de legitimación y permanencia en el poder en una retórica en la que se proponía como el representante de los intereses colectivos de la comunidad neuquina y el garante de su desarrollo económico, frente a la potencial “rapiña” del centralismo porteño. Incluso, parte de ese constructo siguió vigente durante el conflicto de junio de 1996. Cuando el gobernador Sapag rompió las negociaciones con la empresa canadiense *Agrium-Cominco* —que se encargaría de abrir la planta de fertilizantes—, sostuvo “haber actuado en defensa de los intereses de los pobladores de esa zona”²⁵. Lo mismo sucedió cuando asignó la responsabilidad exclusiva del envío de gendarmería para la represión del conflicto piquetero, al gobierno nacional²⁶.

Entre tanto, la esfera económica de la retórica nacionalista encarnada por el MPN fue abandonada conforme se fortalecían los vientos privatizadores en la Argentina. Concretamente, cuando Jorge Sobisch, perteneciente a la línea interna del MPN opuesta a Sapag, ganó la nominación a gobernador dentro del partido y finalmente las elecciones provinciales en 1991, la adhesión del gobierno provincial a la privatización de YPF no se hizo esperar. Cuando esta última se produjo, el “mundo ypefeano” se hizo trizas.

El desmembramiento de la empresa estatal tuvo consecuencias devastadoras para la zona. Más de 5.000 personas quedaron sin trabajo y sin alternativas de reinsertarse en el mercado laboral. Los intentos de invertir las indemnizaciones en microemprendimientos, fueron

²⁵ Diario Río Negro, 22 de junio de 1996.

²⁶ Diario Río Negro, 28 de junio de 1996.

absolutamente infructuosos. Ya sea por inexperiencia, saturación del mercado o incumplidas promesas del gobierno local, del Sindicato Unido de Petroleros Estatales (SUPE) o de Repsol-YPF, esas pequeñas empresas fracasaron (Favaro, op cit.: 1994). Nada evitó entonces que, entre 1991 y 1997, la tasa de desempleo ascendiera exponencialmente hasta afectar al 30% de la población económicamente activa en ambas ciudades²⁷ en tanto que, durante el mismo período, la mitad de la población de Cutral Co y Plaza Huinca pasó a vivir por debajo de la línea oficial de pobreza (Favaro et al: op. cit., 1997). De tal modo, “nosotros tenemos el gas y el petróleo” expresaba también la frustración y recelo ante decisiones políticas que, en pos del modelo de acumulación vigente, habían condenado a los habitantes de las dos comarcas petroleras a vivir en la miseria.

Sin embargo, la manera en que este derrumbe impactó en la vida cotidiana de mujeres y varones guardó ciertas diferencias. Estela es empleada pública y cuenta con una enorme experiencia en el área de salud del municipio de Cutral Co. Hace años que, además, es afiliada y militante activa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En sus reflexiones sobre lo que había comenzado a ocurrir desde la privatización, Estela sorteaba cómodamente los límites demarcatorios de la vida pública y la doméstica, colocando un especial énfasis en la manera en que la desaparición de la empresa petrolera estatal conmovió la vida de los varones y los lazos familiares. Según ella comentó: “[...] Veníamos de un estado de bienestar y nos encontramos con la desocupación, el hambre, la miseria. Yo como empleada de salud, veía cómo se suicidaron alrededor de 100 petroleros; otros ciento y monedas, [...] en situaciones graves de alcohol. ¿Por qué? Porque estaba el abismo. Por que en el estado teníamos todo [...] Se destruyeron los hogares, los que pudieron quedarse se quedaron. Otros emigraron [...]. Se rompió el núcleo familiar. El tejido social se desmembró de esta manera”.

Muchas de las mujeres entrevistadas coincidieron con ella al sostener que sus maridos se deprimieron, murieron, abandonaron a sus familias o se volvieron un estorbo dentro del hogar. Mientras ellas, según Arcelia, “[...] se tuvieron que volver más fuertes. [...] Debieron salir a ganarse el pan para ellas y para sus hijos, porque quedaron ellas como jefas de hogar, mientras los maridos estaban en la casa. [...]”. En ese sentido, el final abrupto de la “época dorada” y pefeana afectó tanto las condiciones materiales de existencia como las subjetividades. Y ambas instancias fueron vivenciadas de manera dispar por varones y mujeres.

En efecto, las formas en que mujeres y varones experimentan sus condiciones materiales de existencia están relacionadas no sólo con su posición respecto de los medios de producción sino también con los roles de género que les son asignados. Para los ex obreros y pefeanos, la expulsión del aparato productivo alteró rotundamente no sólo su situación económica sino también su posición de género en tanto “proveedores” de la subsistencia y reproducción familiar. Por otro lado, cuando se puso en jaque la supervivencia y el cuidado de los hijos e hijas –y con ellos, de la comunidad-, las mujeres tuvieron que salir a resolver el abastecimiento de la vida familiar. En tanto el género ha naturalizado el rol de garantes

²⁷ Estadística oficial arrojada por el censo de la Encuesta Permanente de Hogares. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mayo de 1997.

de la reproducción de la comunidad como interés unívoco de la existencia femenina, las demandas y capacidades de confrontación femenina, en este contexto de desarticulación social, adquirieron un protagonismo disruptivo y conmovedor del orden social vigente.

Ahora bien: el desempleo y sus consecuencias fueron factores determinantes en el estallido del conflicto de junio de 1996, por un lado, y del protagonismo que las mujeres tuvieron en él, por el otro. Empero, no explican por sí mismos por qué esta protesta surgió precisamente en junio de 1996. Considero que parte de la respuesta a este interrogante está en clave política. En las secciones subsiguientes, entonces, me abocaré a dar cuenta de los elementos que conforman esta clave.

“De la ruta no nos vamos”: el origen de las piqueteras

“Cuando se levantó el pueblo, nosotras estuvimos ahí. Fuimos las primeras porque nosotras estábamos viendo lo que estaba pasando con nuestros hijos. Entonces nos levantamos primero las mujeres y arrastramos a los hombres”.

Arcelia, pobladora de Plaza Huincul.

El 20 de junio de 1996 las mujeres de Plaza Huincul y Cutral Co dejaron sus casas y sus lugares de trabajo en dirección a la ruta nacional 22, que atravesaba ambas localidades y las conectaba con la ciudad de Neuquén. Respondían espontáneamente a la convocatoria de la radio local FM Victoria, que desde sus micrófonos instaba a la población a movilizarse y protestar contra el gobernador Felipe Sapag. El origen de la convocatoria estaba en la ruptura de las negociaciones iniciadas tres años antes por el entonces gobernador Jorge Sobisch, con la empresa canadiense *Agrium-Cominco* para abrir en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul una planta de fertilizantes derivados del petróleo. Para ello, la provincia se encargaría de subsidiar el proyecto con el desembolso de 100 millones de dólares. Poco tiempo después de haber asumido nuevamente como gobernador, en diciembre de 1995, Sapag comenzó a cuestionar estas transacciones. Finalmente, en junio de 1996 terminó con ellas aduciendo que la provincia no estaba en condiciones de aportar el dinero requerido por los canadienses²⁸.

Entre las mujeres que acudieron a la ruta, había ex trabajadoras de YPF, maestras, empleadas domésticas, propietarias de pequeños comercios. Muchas eran mujeres cuyos maridos habían sido despedidos de la empresa petrolera. Algunas se conocían desde antes. Otras no. Lo hicieron allí, cuando hartas de un nuevo incumplimiento del gobierno, decidieron dar batalla.

Poco les importó, entonces, el crudo invierno o los fuertes vientos que azotaban la zona en esa época del año. Menos aún, si la convocatoria era fruto de una puja interna del MPN. Todos sabían en la región que las dos líneas internas del MPN, la de los “blancos”, que respondían al ex gobernador provincial Jorge Sobisch, y la de los “amarillos”, seguidores del gobernador Felipe Sapag, no escatimaban recursos a la hora de medir fuerzas en la disputa por el control del partido.

²⁸ Si bien la oferta de puestos de trabajo a partir de la puesta en funcionamiento de la nueva planta iba a ser escasa (no más de 150 empleos), la futura fábrica constituía una esperanza importante para los y las pobladoras de estas localidades ya que reabría la posibilidad de volver a obtener un trabajo estable.

Mientras transcurría la tarde del 20 de junio, la presencia de la gente en la ruta se fue incrementando. Como resultado de ello, en la noche se organizaron varios piquetes, concentrándose la mayoría de los y las pobladoras frente a la torre abandonada de YPF. Esta torre, que marcaba el ingreso a la refinería de Plaza Huincul, fue el escenario donde se constituyó el epicentro de la pueblada, esto es, el lugar donde mediante asambleas multitudinarias, se tomaban las decisiones. La más importante de ellas fue que nadie entraría o saldría de Cutral Co y Plaza Huincul hasta que Sapag no se hiciera presente y ofreciera soluciones concretas a la situación de desempleo y pobreza que imperaba en la zona.

Según relató Stella Maris, quien trabaja como empleada doméstica y vive en Cutral Co: “[...] Yo fui a ver. Yo me daba cuenta que la situación ya no daba para más. Estaba desesperada la gente por estar implorando un remedio o pidiendo fiado y que nadie te fíe nada. Entonces fui a ver qué pasó. Cuando llegué a la ruta había mucha gente. Me subí con mi hijo a una camioneta y nos fuimos a la [ruta] 17. Nos quedamos en un piquete ahí. Eramos poquitos [...] pero teníamos que seguir adelante para conseguir por lo menos que Sapag viniera y viera lo que estaba sucediendo [...]”.

Sapag no demoró su respuesta: de ninguna manera viajaría a la zona. Tampoco recibiría a ningún dirigente de la protesta a menos que se levantaran los cortes de ruta.

Rápidamente comenzó el fuego cruzado entre las dos facciones del MPN. Los blancos - representados por Adolfo Grittini, ex intendente de Cutral Co y ex candidato a vicegobernador de Jorge Sobisch en las elecciones internas- , sostenían que el estallido del conflicto era el resultado de la miopía política del gobierno de Felipe Sapag. La interrupción unilateral de las negociaciones con la empresa canadiense demostraba, según Grittini, que “no hay capacidad de negociación para llevar adelante el desarrollo y crecimiento de esta provincia”²⁹. Entre tanto, los amarillos, a través de los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul, Daniel Martinasso y Alberto César Pérez respectivamente, si bien reconocían que la pueblada carecía de “cabezas visibles”, afirmaban que había sido organizada por los blancos a través de “su” emisora radial local, FM Victoria, con el objetivo de desestabilizar al actual gobierno³⁰.

Para las pobladoras y los pobladores de Plaza Huincul y Cutral Co, la posibilidad de ser objeto de manipulación política en una disputa facciosa, era un horizonte real y conciente. Nadie ignoraba que Cutral Co, cuna del MPN, podía convertirse en uno de los bastiones dilectos para esa lucha. Según afirmó Laura Padilla, maestra que vivió en Cutral Co hasta diciembre de 1996 y que firmó en nombre de la comunidad el acuerdo con Felipe Sapag que puso fin a los cortes de ruta, “[Los blancos] llevaron comida, leche, pañales, leña, llevaron todo a la ruta, porque querían que el viejo [en alusión a Sapag] renunciara [...]”. De hecho, para las protagonistas del conflicto ese intento de manipulación constituía la esencia de la política, en tanto concepto y acción. Esto es: quien hacía política era aquel

²⁹ Diario *Río Negro*, 21 de junio de 1996

³⁰ Diario *Río Negro*, 22 de junio de 1996

que buscaba, según una ex empleada de YPF, “llenarse los bolsillos. Nunca luchan por el pueblo. Usan la voluntad y las necesidades nuestras para conseguir poder para ellos”.

Este análisis de la política que hicieron las mujeres, permite comprender algunas de las características de su masiva participación en la pueblada. Generalmente se presume que cuando las mujeres actúan en el espacio público –en el marco de esta clase de conflictos-, lo hacen desinteresadamente, sin ambiciones particulares, en favor exclusivamente de los demás. Como parte de tales observaciones se da por supuesto, entonces, que su acción carece de una entidad distinta a la expresión de su rol doméstico, expresión amplificada a escala colectiva. Así, la presencia de las mujeres como actor diferenciado suele engrosar el casillero correspondiente a “amas de casa”, invisibilizándose otras experiencias y otras lecturas de la realidad que no provengan de las tareas de supervivencia familiar. De tal modo, incluso en los movimientos sociales que son caracterizados como horizontales en la participación y como faltos de una “racionalidad política” tradicional, la acción femenina suele aparecer como apéndice de una voluntad política colectiva (masculina) mucho más “esclarecida” y exenta de las limitadas perspectivas analíticas de la “vida hogareña”. Ahora: si bien es cierto que la amenaza de esa “vida hogareña” gestada y afianzada durante la existencia de YPF como empresa estatal impulsó la actuación de las mujeres fuera de las puertas de su casa, no lo es menos que en la base de sus actos operó una lectura política totalizadora y contrahegemónica de la realidad, en la que alteraron las reglas de juego e impugnaron, con su propia práctica, el ejercicio de la política moldeado por los grupos dominantes.

En ese sentido, una de las primeras acciones que ellas dinamizaron en la ruta fue la de hallar la forma de contrarrestar el peligro de la manipulación. Para ello se decidió, en primer lugar, impedir la intervención de toda persona que lo hiciera en carácter de pertenencia a una organización político-partidaria o ejerciera algún cargo público. Así por ejemplo, cuando el 21 de junio el senador justicialista Daniel Baum se acercó a la zona e intentó subirse en las improvisadas gradas para arengar a la población congregada alrededor de la destilería, “una mujer lo agarró del fundillo del traste, lo bajó y lo pateó”, tal como recordó divertida Arcelia. Si se aceptaba algún funcionario, era bajo explícita condición de que estuviera como “simple ciudadano” o que su cargo fuera puesto al servicio de las decisiones tomadas colectivamente por la comunidad. Fue así como los intendentes Martinasso y Pérez, en medio de una catarata de insultos y amenazas lanzadas por los y las pobladoras reunidos/as en las cercanías de la sede municipal de Cutral Co, se vieron obligados a “adherir” a la protesta, enviando víveres, gomas para avivar el fuego en las barricadas y vehículos municipales para trasladar a la gente de piquete en piquete³¹.

Otra de las medidas asumidas para garantizar que el conflicto y su conducción quedaran en sus propias manos, radicó en las formas de organización y participación puestas en práctica. Las decisiones sobre aquello que debía hacerse para mantener y fortalecer la protesta fueron producto del ejercicio de la democracia directa, a través de la participación en las asambleas realizadas en cada uno de los piquetes. Luego de un debate colectivo donde las posiciones eran consensuadas por aplauso, las mismas eran llevadas por quien había sido electo “vocero” de cada barricada a la asamblea general que funcionaba en la torre de YPF.

³¹ idem ant., y entrevistas realizadas por la autora.

Sin embargo, hacer efectiva esta forma de funcionamiento fue todo un aprendizaje. Más aún para las mujeres que participaron del conflicto.

En el relato sobre su transformación en piquetera, Laura Padilla rememoraba que cuando ella llegó al piquete localizado sobre la ruta provincial 17, en dirección a Añelo, le propusieron ser vocera de su piquete y asistir a una asamblea en la destilería. Como había sido maestra, consideraban que ella era quien mejor podía hablar y representarlos. Debía llevar la consigna de que ellos estaban mal pero igualmente impedirían que por su piquete alguien entrara o saliera. Cuando Laura llegó a la asamblea, se encontró con que “[...] había 5000 personas [...] Y cuando yo fui y vi tipos adinerados ahí, dije esto está bravo. Aparte yo había ido a decir “estamos mal” y estos tenían discursos así escritos, estaba Grittini [...]. La cosa es que cuando yo veo semejante historia [...] me volví a mi piquete”. A su regreso, un muchacho cuestionó su silencio y el incumplimiento de lo encomendado aduciendo que “las mujeres sólo gritan en la cocina y que había sido una equivocación enviar a una mina a que los represente [...]”. Ante esas recriminaciones y bastante ofuscada, Laura salió a recorrer cada uno de los piquetes junto con quien le había hecho tal reproche, para demostrarle que todos los voceros habían vivido la misma experiencia que ella. En la recorrida, armó una reunión con todos ellos para el día siguiente, a fin de elaborar un listado de exigencias para el gobierno provincial y entrevistarse con el obispo de Neuquén, Agustín Radrizzani, para solicitar su mediación en el conflicto en cuanto arribara a Cutral Co. La acusación de inutilidad lanzada contra una mujer, entonces, disparó una acción inesperada que permitió a la comunidad “adueñarse” de su protesta o, como en ciertas oportunidades lo definieron, *armar la contrapueblada de la pueblada*. Laura, como muchas otras que participaron en el conflicto, debió animarse a abandonar la mudez y a poner en práctica sus propias ideas organizativas. Así, por ejemplo, en su piquete ella dinamizó la formación de subpiquetes entre los que se contaban el de los jóvenes y el de los borrachos. A uno y otro les acercaba comida o bebida, según las necesidades, a cambio de la garantía del cuidado y permanencia de esa barricada. Estas acciones no solamente evitaron conflictos internos y cohesionaron al grupo. También permitieron que Laura se tornara visible y fuera depositaria de la confianza y el respeto que la convirtieron en una de las líderes de la pueblada. De este modo, las mujeres pusieron en práctica cuestiones relativas a la acción política y a las que además, imprimieron un sello distintivo.

Asimismo, la desinstitucionalización del conflicto generada por este conjunto de medidas impidió, por un lado, que cualquier sector político pudiera comandar o capitalizar la protesta. Por el otro, dejó al gobierno sin interlocutor con quien negociar.

Cuando los cortes de ruta comenzaron a afectar la provisión de combustible en toda la provincia y buena parte de la región patagónica, dificultando incluso el tráfico aéreo, Sapag se avino a recibir a una comisión de representantes de las localidades en su despacho de la gobernación³². Esa comisión, constituida por 50 personas aproximadamente, había sido promocionada por los intendentes Martinasso y Pérez. Pero jamás llegó a destino porque bajo la consigna de que “aquí no entra ni sale nadie, que venga Sapag”, los y las pobladoras frustraron su salida. De esta manera, toda posibilidad de negociación a espaldas de la comunidad o de cualquier intento de presión gubernamental quedaba clausurada. La

³² Diario *Río Negro*, 22 de junio de 1996

firmeza de estas decisiones dejó al ejecutivo provincial con escasas opciones: o Sapag accedía a la exigencia de los pobladores y viajaba a la zona, o los/as obligaba a levantar los cortes mediante el uso de la represión.

Ante el rumbo que tomaba el enfrentamiento, el Obispo Radrizzani se hizo presente en la poblada el 23 de junio, oficiando una misa en el acceso de Plaza Huincul. Si bien respaldó el reclamo de la comunidad, puso en duda la honestidad de la clase política, y abrió la posibilidad de actuar como mediador instando “a las partes a confraternizar”³³, su posterior desempeño fue de escasa trascendencia, y no logró obstaculizar la decisión gubernamental de reprimir el conflicto.

Asimismo, el bloqueo de las rutas ya amenazaba con obligar a Repsol-YPF a poner fuera de funcionamiento la destilería en vistas de que la producción almacenada no podía salir de allí, lo cual provocaría importantes pérdidas económicas para la empresa.

Con la intención de despejar las rutas, el 25 de junio, cinco días después de iniciado el conflicto, la jueza subrogante Margarita Gudiño de Argüelles llegó a las comarcas petroleras, secundada por trescientos efectivos de gendarmería enviados por el gobierno nacional el día anterior. Frente a la perspectiva que abría la presencia de los gendarmes, la población se reunió en una multitudinaria asamblea en la torre de YPF. Se plantearon entonces dos posiciones: la primera era reeditar el intento de enviar una comisión a dialogar con Sapag y la segunda, mantener el corte de rutas y hablar con la jueza a su llegada. Esta última fue la que se impuso. A medida que avanzaba la mañana y pese al temor a la represión, la gente se fue congregando en los piquetes. Cuando la jueza llegó al lugar, encontró que más de 20.000 personas la estaban esperando con la decisión de no acatar la orden judicial de levantar el corte de rutas e, incluso, enfrentarse con las fuerzas represivas llegado el momento. Según contó Stella Maris “[...] Estábamos todos ahí a punto de agarrarnos. Los gendarmes se salvaron de milagro, tuvieron un dios aparte. [...] El que disparaba, iba a quedar por ahí nomás. [...]”. Ante la magnitud de la escena, la jueza decidió declararse incompetente y retirarse del lugar.

Finalmente, Sapag accedió a ir Cutral Co y Plaza Huincul, trasladando su gabinete a la sede municipal. Pero la reacción de la comunidad ante su llegada dejó una huella imborrable en el recuerdo del gobernador. En una entrevista que le realicé en su casa en mayo de 2004, Sapag, consternado aunque conservando la firmeza de su tono de voz, sostuvo: “Usted no sabe lo que es llegar al pueblo de uno y que veinte mil personas lo insulten. Incluso me tiraron piedras y una me pegó acá [señalando con una mano su pecho].” Generalmente, el acto del insulto hecho públicamente hacia quien detenta el poder no es más que una de las herramientas de humillación y repudio con las que cuentan quienes lo padecen. Bety recuerda bien ese momento quizá porque en su memoria también quedó como marca indeleble que fuera la gendarmería la que precediera la llegada del gobernador a “su” pueblo: “Ese día, después de lo de gendarmería, nos llevaron un trailer, un camión y nos subíamos ahí con un megáfono, y hablábamos. Venía la prensa de Buenos Aires y varios canales, las emisoras de acá. Estábamos arriba del camión, [...] y al rato vino un tipo y mandó decir que el señor gobernador a partir de las once de la mañana iba a estar con

³³ Diario *Río Negro*, 24 de junio de 1996

nosotros.” Entonces, ella y otras personas más avisaron a los voceros de los piquetes la noticia proponiendo que “[...] cuando llegue el gobernador vamos a empezar a cantar el himno nacional. Ni le aplaudan, lo vamos a discriminar como él nos abandonó a nosotros. Te puedo asegurar que al viejo también le temblaban las piernas cuando se subió arriba del camión, como a la jueza. Se sacó la gorra y empezó a cantar el himno nacional como nosotros. Cuando se terminó de cantar el himno, nadie aplaudió, la bandera bien en alto y empezó a decir que no era bueno la planta de fertilizantes ... y ahí empezó todo el revuelo porque se empezó a insultar al gobernador. Y en ese momento me dio asco y le grité: A usted le parece que siendo usted el gobernador de la provincia que nos tenga muertos de hambre, que hay chiquitos que no tienen un vaso de leche para tomar. Má sí, lo mandé a la puta madre que lo parió. [...]”.

Entre tanto, en los últimos días del conflicto se había formado una comisión de piqueteros que congregaba a los voceros de cada piquete. Entre ellos estaba Laura Padilla, quien ya era conocida por redactar el petitorio de demandas que le hicieron llegar al Obispo Radrizzani, y porque había impulsado las medidas para evitar la manipulación del conflicto. Luego de arduas negociaciones y de la consulta con todas las asambleas de los piquetes, el 26 de junio Laura Padilla firmó, en representación de la comunidad, el pacto con Felipe Sapag que puso fin al conflicto.

Durante las jornadas de movilización y protesta, las mujeres de Cutral Co y Plaza Huincul realizaron múltiples actividades que permitieron la subsistencia de la misma: juntaron alimentos y cocinaron para todas las personas que estaban en cada una de las barricadas; recolectaron abrigos y los distribuyeron en cada piquete para que el frío de la noche se sintiera menos; participaron en las asambleas, logrando incluso “contener a jóvenes y borrachos” para evitar que los piquetes se desarticularan; algunas se convirtieron en voceras de sus propios piquetes; otras, mantuvieron a raya a cualquier “político” que pretendiera agenciarse la dirección de la protesta o, siquiera, sugerir cómo encausarla. Analizaré ahora, los factores que condujeron a las mujeres a desplegar tan elevado nivel de participación y movilización, en donde se entremezclaron acciones vinculadas con la extensión de sus “naturales” roles de cuidadoras en el espacio doméstico con otras vinculadas a su práctica política/pública

Mujeres en movimiento: las tramas de la historia.

Cuando Magdalena relataba su intervención en el conflicto, su tono cambiaba al evocar la llegada de la gendarmería. Profundamente entusiasmada, con una voz que se volvía más clara y vehemente, narraba cómo ella, pese al temor, estaba dispuesta a enfrentarlos “[...] envuelta en una bandera argentina tiznada de negro por el humo de las gomas [...]”. Allí, su memoria abría las puertas a otras historias y a otras mujeres de su familia que la habían precedido y que también habían sentido el miedo inspirado por los uniformes. Su relato iba y venía del presente al pasado, a las épocas de Roca y su “campana al desierto” cuando su bisabuela, “que fue de [el cacique] Cafulcurá”, huyó de Azul –en la provincia de Buenos Aires-, escapándose a caballo. Uniendo los retazos de su historia, Magdalena volvía a Cutral Co en 1944 cuando su madre, aterrorizada porque un militar tocaba a la puerta de la pequeña casa en que vivían, se había escondido en un rincón abrazándose a ella y a su hermana. Así, en su relato las imágenes de su vida se sucedían rápidamente y recordaba a

su padre ingresando a trabajar en YPF hacia mediados de la década de 1940. Sapag, el futuro gobernador, también se daba cita en su memoria cuando como carnicero de Cutral Co, le compró a la familia de Magdalena una jardinera, pagándoles con carne por tres o cuatro meses. Más tarde y ya convertido en “don Felipe”, Sapag la contrató como niñera de uno de sus hijos, visitó a su padre enfermo, y le dio el dinero para arreglar la casa de adobe que el tendido del asfalto había resquebrajado. Fue así como Magdalena se hizo del MPN, aunque sus lealtades hacia Sapag no le impidieron salir a la ruta el 20 de junio, reprochando el abandono de ese nacionalismo del que tantas veces don Felipe había hecho gala y que había cristalizado en la convicción de que “nosotros tenemos el gas y el petróleo”.

Esta afirmación había trascendido el proceso de la privatización de la empresa petrolera, permaneciendo en la conciencia de los y las integrantes de las comunidades neuquinas más allá de sus adscripciones político-partidarias individuales. Arcelia, cuyas simpatías políticas nunca se dirigieron hacia el MPN, sostenía: “todo eso, el gas, las naftas, la electricidad, todo, vos fijate en el mapa. ¿Cómo es el mapa argentino? Y vas a ver todo el ferrocarril, todas las rutas. ¿Dónde van a parar? Mantenemos, disculpame si sos de Buenos Aires, a unos cuantos millones de vagos que viven en Buenos Aires”. Este antagonismo, expresado de distintas maneras, fue puesto de manifiesto por varias de las mujeres entrevistadas. Es posible que el proceso de pauperización creciente de la zona iniciado con la privatización de YPF fuera un estímulo más que suficiente para motivar la nostalgia por la etapa de existencia del Estado de bienestar y “reflotar”, asimismo, ciertos aspectos de la ideología nacionalista –en su expresión regional–, que le proporcionaban sustento y cohesión. No obstante, y en post de comprender las singularidades presentes en la participación de las mujeres en los cortes de ruta, es preciso interrogarse en torno a las causas de la adscripción femenina a la ideología nacionalista.

En la Argentina, este ideario encarnó y revistió una forma específica a partir de la experiencia peronista. Lejos de conformarse como un pasado remoto, ciertos constructos de esa experiencia han persistido hasta la actualidad en la memoria y cultura políticas de los sectores subalternos. Además del aludido “nosotros tenemos el petróleo y el gas”, entre ellos resulta relevante el referido a la forma en que el Estado, bajo el gobierno peronista de la década de 1940, emplazó en su rol ciudadano a las mujeres integrantes de dichos sectores sociales.

Acorde se ampliaba el concepto de ciudadanía masculina al ejercicio de derechos sociales y económicos, la justificación de la extensión de la ciudadanía política a las mujeres se basó en situarlas como madres al servicio de la patria y transmisoras de los “buenos y verdaderos” valores nacionales.³⁴ Empero, el reservorio de estas virtudes no residía en todas las mujeres por igual. Muy por el contrario, era sólo entre las mujeres del “pueblo” donde estaba inscripta la savia creadora de aquellos que podían enfrentar a “cipayos” y “vendepatrias” y convertir a la Argentina en una nación “libre, justa y soberana”. Así, la noción de ciudadanía femenina exaltaba, por una parte, la diferencia entre varones y

³⁴ Esta es una argumentación común a las distintas experiencias de las etapas clásicas de los llamados populismos. Ver: Luna, Lola G.: *Los movimientos de Mujeres en América Latina y la renovación de la historia política*. Editorial La Manzana de la Discordia, Universidad del Valle, 2003; Palermo, Silvana: *El sufragio femenino en el Congreso Nacional: ideologías de género y ciudadanía en la Argentina*. s/f

mujeres, proponiendo incorporar a las mujeres a la vida política nacional a partir de una dignificación y politización de su identidad de género tradicional (Molyneux: 2003). Pero por otra, fue sumamente exitosa entre las mujeres de los sectores subalternos porque por vez primera, el Estado las interpelaba como salvaguarda de los destinos de la nación vindicando su condición de clase y convirtiendo el ejercicio de la maternidad en asunto público, esto es, político. Esto habilitó la legitimidad de la presencia masiva de las mujeres en lo público, otorgando un referente de movilización femenina perdurable y generalizado. De hecho, en Cutral Co y Plaza Huincul, el ver a los hijos e hijas sin futuro o en la miseria aunque “nosotros tenemos el gas y el petróleo”, fue un motivo esgrimido por todas las mujeres para levantar las barricadas.

A esta particular politización de la maternidad, debe adjuntarse otro factor que concierne a la experiencia de las mujeres de los sectores subalternos como garantes de la supervivencia y reproducción de la comunidad. En la década de los 90, el desmantelamiento final de las funciones de protección social del Estado de bienestar, provocó un vacío que intentó ser cubierto a partir de la potenciación de las redes comunitarias. Bajo la forma de programas para la reducción de la pobreza, la dirigencia política nacional y las agencias internacionales entronizaron las virtudes de la autoayuda, autosuficiencia y autonomía populares respecto del estado. Echaron a rodar, así, mecanismos paliativos de las consecuencias post ajuste que consistieron en delegar la responsabilidad social estatal en la actividad y el “voluntariado” comunitarios, orientados mediante la acción de organizaciones no gubernamentales, barriales y/o grupos de profesionales³⁵. De tal modo, tras discursos de ciudadanía activa y “empoderamiento”, se instaló desde el poder una nefasta retórica: los sectores sociales victimizados por el disciplinamiento del “marco regulador del mercado” eran, a partir de ese momento, libres para convertirse en los dueños de sus propios destinos. Se siguió entonces, que quienes cargaron sobre sus espaldas con los efectos de la desregulación económica, la apertura para la libre circulación de capitales, la flexibilización laboral, el aumento del desempleo a niveles inauditos en la historia argentina contemporánea, debieron también responsabilizarse de la gestión de los comedores infantiles, las guarderías maternas, la organización de talleres de capacitación y de trabajo para la supervivencia cotidiana, la prestación de servicios de salud, el cuidado de ancianos/as.

Sin embargo, esta carga entrañó un profundo sesgo genérico. En la medida en que muchas de estas tareas de supervivencia fueron consideradas como una extensión de las “naturales” actividades femeninas en la esfera familiar, las mujeres fueron convocadas diligentemente a participar en ellas. Todo ello habría redundado en un reforzamiento del carácter doble de la subordinación de las mujeres de los sectores subalternos³⁶, aliviando además la presión social sobre el Estado. A pesar de ello, ocupar el lugar de cuidadoras de la comunidad abrió para las mujeres neuquinas el punto de fuga que permitió la emergencia de lo imprevisto, de lo excedido o no contemplado por el sistema dominante vigente. A su vez

³⁵ Ver: Banco Mundial: *La lucha contra la pobreza: oportunidad, empoderamiento y seguridad*. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000-2001, Washington DC, Estados Unidos. Por otro lado, estas estrategias se asentaron sobre prácticas preexistentes de autoorganización comunitaria afines a la satisfacción de necesidades básicas (tales como, por ejemplo, la resolución de deficiencias habitacionales mediante proyectos de autoconstrucción durante las décadas de 1960 y 1970)

³⁶ en términos de género y de clase.

vigorizó el protagonismo femenino en el entretrejo de las redes de solidaridad social, en la gestión de los recursos de la comunidad, en la experiencia organizativa de base y en la capacidad de movilización. Fue justamente allí, “compartiendo las tareas de su clase y de su comunidad” (Kaplan, 1990: 266-269), y exigiendo los derechos emanados de la asignada responsabilidad de conservar la vida, donde las mujeres mutaron sus acciones en actos fundacionales de confrontación con el poder.

Por último, muchas de las mujeres que participaron de la pueblada contaban con experiencias previas de activismo político, sindical o territorial. Así, algunas de ellas tuvieron militancia sindical en SUPE o habían sido activistas, y aún lo son, de ATE. Muchas adquirieron experiencia política a partir de su participación en los Encuentros Nacionales de Mujeres en los años anteriores a la pueblada neuquina. Otras, en cambio, lideraron organizaciones comunitarias para la ocupación de viviendas deshabitadas o la conexión de los servicios públicos. Laura Padilla relataba, por ejemplo, cómo ella junto con otras mujeres y varones, habían organizado una reunión vecinal para reclamar a la municipalidad de Cutral Co ciertas mejoras en las condiciones de vida del barrio. En 1994, luego de una separación difícil, Laura se había mudado con sus tres hijos al barrio de las “176 viviendas”. Transcurridos unos meses desde su instalación, convocó a sus vecinos y vecinas para reunirse en la casa de uno de ellos, Miguel, a quien había conocido recientemente. El objetivo era conseguir que la municipalidad plantara árboles en la zona. Pero una vez reunidos, comenzaron a surgir otras reivindicaciones tales como la necesidad de la conexión de servicios públicos o la legalización de la ocupación de viviendas construidas por la municipalidad y que hasta ese momento estaban deshabitadas. En poco tiempo conformaron una comisión vecinal de la cual Laura fue elegida presidenta. Y luego de varias gestiones realizadas ante Adolfo Grittini, que para ese entonces ocupaba la intendencia de Cutral Co, pudieron obtener tanto los títulos de propiedad para los ocupantes de las viviendas, como la conexión de luz, agua y gas para la casi totalidad del vecindario.

Fueron estas experiencias previas las que atravesaron las acciones de las mujeres neuquinas durante el desarrollo de la pueblada y las que incidieron en la reacción social que le dio origen. De tal modo, la pueblada constituyó una respuesta política singular, resultado no sólo de las condiciones estructurales abiertas con la privatización de YPF, sino de la contrastación de la irrevocable pérdida de un pasado pujante. Y esa contrastación tomó forma y se tornó ineludible a partir de los anuncios de Sapag sobre la interrupción de las negociaciones con la empresa canadiense. Según comentó Bety León “[...] Lo que rebasó el vaso fue cuando nos enteramos que la planta de fertilizantes, que era la esperanza nuestra, no se hacía acá [...] Queríamos que el gobernador viniera para dar la cara, ¿por qué nos llevó la fuente de trabajo?, porque en la planta iba a entrar un montón de gente a trabajar. Era un eslabón porque a partir de eso, iban a surgir otros trabajos. Al llevarnos eso nos mataron el sueño. [...] Y así me fui con un montón de mujeres, porque tenemos agallas, a las tres de la tarde a cortar la ruta [...]”. Fue allí donde las mujeres volcaron los saberes aprendidos con anterioridad, coadyuvando a aceitar los mecanismos de organización colectiva.

Del piquete a casa: permanencias y rupturas.

Cuando el acuerdo firmado por Laura Padilla y Felipe Sapag fue refrendado en las asambleas de cada uno de los piquetes y la comunidad decidió levantar los cortes de ruta, la sensación de victoria embargó a todos los y las habitantes de Cutral Co y Plaza Huinul. Según narra Padilla, la alegría se manifestó en improvisadas fiestas en las que se compartía la comida y la bebida que aún quedaban de lo recolectado durante la pueblada. Los motivos de tanta euforia no eran menores. Durante la pueblada, se habían enfrentado e impuesto al gobierno provincial, a las fuerzas represivas, al gobierno nacional. Y lo que es más importante aún: a partir de los lazos solidarios reconstruidos y los niveles de confianza alcanzados durante la jornada de protesta, habían logrado dejar de ser individuos librados a su suerte para tornarse en un colectivo social dispuesto a luchar unido para cambiar su destino.

Pero el final del conflicto abría otra etapa. De acuerdo a Bety León: “[...] Cuando termina la pueblada habíamos formado una comisión de veedores para seguir los pasos del gobernador [...]. Pero todo eso duró poco [...]”. Durante una semana, Sapag se instaló con parte de su gabinete en la sede del municipio de Plaza Huinul con el objetivo de profundizar las negociaciones con los habitantes de ambas localidades a fin de implementar los puntos acordados³⁷. Entre tanto, los pobladores de ambas localidades constituyeron diversas comisiones que tenían ante sí variadas tareas. Algunas debían encargarse del control de la reconexión de los servicios de luz y electricidad e intermediar con las empresas redistribuidoras de los mismos a tal fin. Otras tenían a su cargo estructurar proyectos productivos, controlar la entrega de bolsas de alimentos o las asignaciones y cobros de subsidios de desempleo.

Pese al entusiasmo y el compromiso inicial, las comisiones tuvieron una vida efímera. La inexperiencia comunitaria en el manejo de este tipo de asuntos, por un lado, y la cooptación por parte del poder político provincial y municipal de algunas de las personas que habían emergido como referentes sociales y políticos durante la pueblada, impidieron, en parte, que surgiera una organización que potenciara y encausara la movilización social puesta de manifiesto entre el 20 y el 26 de junio. Así, para Arcelia: “[Los líderes] fueron comprados todos. Era más fácil comprar a 20 que a todo un pueblo. No les interesaba perder un millón de dólares. Digamos: los que mas se destacaron fueron los primeros que compraron y los que no compraron desaparecieron [...]”. Con ella coincidieron todas las mujeres entrevistadas. Asimismo, a ello se sumaron las amenazas y atentados con bombas molotov que sufrieron varias de las personas involucradas en la protesta. Para las mujeres, todo esto habría redundado en que el gobierno provincial pudiera evadir el cumplimiento del acuerdo y que por tanto el saldo de la pueblada fuera negativo: “[...] Desarticularon todo, nos descabezaron y no cumplieron nada [...]”, sentenciaba Arcelia entre triste y furiosa, sin que para ella cobrara valor, por ejemplo, la obtención de las reconexiones de los servicios eléctricos exigidas o el aumento de subsidios de desempleo.

De tal suerte, una vez calmadas las turbulencias desatadas con la movilización popular, el saldo distaba mucho de satisfacer las expectativas y los esfuerzos de quienes habían dado

³⁷ Diario *Río Negro*, 30 de junio de 1996 y 2 de julio de 1996.

vida al conflicto. En la memoria de las mujeres, era la traición de los y las improvisadas líderes de la protesta, incluyendo a la propia Laura Padilla, lo que sellaba la victoria final del gobierno de Sapag. Por otro lado, también evaluaban que una de las marcas fundamentales de ese triunfo era la ampliación de la cobertura de los subsidios por desempleo, puesto que los reclamos comunitarios apuntaban a la reapertura de fuentes de trabajo “genuino” y no a “planes Trabajar”. Además, como muchas de ellas expresaron, eran conscientes de que la distribución de estos planes era un recurso al que el gobierno echaba mano no sólo para atemperar los “ánimos” de huinculenses y cutralquenses, sino también para intentar “manipular” futuras acciones colectivas en su contra.

Sin embargo, esta evaluación negativa del resultado de la pueblada, varió sustancialmente cuando las mujeres se adentraron en las reflexiones sobre el significado que este conflicto tuvo en sus vidas cotidianas y en los vínculos establecidos dentro y fuera de las puertas de su hogar. La propia Arcelia sostuvo que: “[...] ahora las mujeres están más fuertes [...]”, afirmación retomada por Sara, para quien “[...] hay una fortaleza increíble. Vos fijate: yo estoy sola y tengo que seguir luchando para mantener a mis hijos, y sigo haciendo un montón de cosas [...]”. De hecho, en el caso concreto de Sara, ella profundizó su participación en los Encuentros Nacionales de Mujeres, vinculándose a los talleres sobre cooperativismo abiertos en dichos encuentros.

Para Bety existió un antes y un después de la pueblada: “[...]. Yo descubrí varias cosas. Aprendí a conocer a los políticos, el rol del gobernador, los diputados, los senadores, a nivel nacional, nuestros concejales. [...] Porque la pueblada a vos te cambió la mentalidad. Ahora tengo mas armas porque ahora me se la constitución, los artículos, el derecho como ciudadana”. Finalmente, Estela reflexionó que “[...] pasamos a ser la columna vertebral de cada hogar y de cada lugar de trabajo [...], con [mujeres] líderes de barrios que están haciendo unos 200 pan dulces para los de menos recursos. Antes estábamos a tres pasos del hombre para atrás, ahora estamos a la par [...]”.

En ese sentido las mujeres reivindicaron lo que ellas hicieron y cómo lo hicieron. Tanto el corte de rutas como la denominación de piqueteras han constituido para ellas una experiencia legítima de lucha y una identificación positiva.

De todas maneras, las disparidades existentes en sus evaluaciones condicionarían la forma en la que ellas actuarían colectivamente menos de un año después, cuando un nuevo enfrentamiento con el gobierno volviera a estremecer los destinos de las comarcas petroleras

Reavivando resistencias: el segundo corte de rutas en Neuquén (1997).

Introducción:

Teresa Rodríguez tenía 24 años. Vivía con su familia en el barrio Otaño, en Plaza Huinul. Creció junto a tres hermanas y un hermano, y ella, la menor de las mujeres, había logrado estudiar hasta séptimo grado. Con su trabajo de empleada doméstica sostenía a Alejandra, su hija mayor, y a Oscar y Jonathan, sus dos hijos menores. El 12 de abril, a mitad de la mañana, salió de su casa acompañada por Juan Poblete, su segundo compañero. Cuando caminaba por la ruta 17, a 50 metros de la intersección con la ruta 22, cayó al piso, herida en el cuello por un disparo. Allí fue atendida por una médica que intentó salvarla. Pero Teresa murió camino al hospital. La bala que la mató fue una de las muchas que la policía provincial disparó durante toda esa mañana cuando, asistiendo en la represión a la gendarmería nacional, intentaba acabar con la protesta iniciada casi 72 horas antes en Cutral Co y Plaza Huinul.

El 9 de abril de 1997, las comarcas petroleras fueron otra vez escenario de un corte de rutas que pocos días más tarde ocuparía los principales encabezados de la prensa escrita, televisiva y radial de los medios de comunicación nacionales y locales.

Por segunda ocasión la torre de YPF, en el ingreso a Plaza Huinul, se convirtió en el epicentro del conflicto en Neuquén, cuando las maestras y los maestros, junto a padres, madres y estudiantes, iniciaron la interrupción del tránsito sobre la ruta nacional 22.

Decidido en una asamblea realizada en las puertas del museo “Carmen Funes”, en Plaza Huinul, este corte formaba parte del plan de lucha dispuesto por ATEN, el gremio docente neuquino, que había iniciado una huelga semanas atrás. Sin embargo, en un principio, el mismo no contó con la concurrencia masiva de la población de Cutral Co y Plaza Huinul, tal como sí había sucedido en junio de 1996. Y aunque nuevamente sus protagonistas iniciales fueron mujeres, su pertenencia mayoritaria al gremio docente marcaría los límites de su participación en el corte.

En consecuencia, la comprensión de ese acontecimiento histórico requiere el análisis, por un lado, de los orígenes y el desarrollo de la confrontación entre ATEN y el gobierno de Felipe Sapag. Por el otro, implica el estudio de las diferencias y similitudes presentes entre las mujeres que protagonizaron ambas protestas y la forma en que las identidades de género y de clase atravesaron el proceso de organización, movilización y liderazgo femenino.

Las maestras piqueteras: del pizarrón al puente.

“La huelga del 97. Creo que somos las primeras maestras piqueteras. No creo que exista en el país ninguna huelga que haya cortado puentes, con gente con salario estable”

Liliana Obregón, ex secretaria general de la seccional capital de ATEN.

El 10 de marzo de 1997, cuando debían comenzar las clases en los ciclos primarios y secundarios, ATEN emprendió un paro por 14 días impugnando la aplicación provincial de la Ley Federal de Educación. Esta ley albergaba, entre otras consecuencias, el recorte de los salarios docentes, el cese de cursos destinados a la enseñanza de adultos, cierres de cursos de los ciclos primario y secundario, cierres de salas de jardines de infantes, y la eliminación de talleres de informática y jefaturas de departamentos. Esto último conllevaba el despido de 1.000 personas, aproximadamente.

La medida de fuerza, planteada como parte de un esquema de confrontación cuyo desarrollo contemplaba asambleas con padres y madres, movilizaciones y cortes de ruta o puentes, obtuvo un elevado nivel de adhesión. Así, durante los primeros días del conflicto, el ausentismo en los establecimientos escolares alcanzó entre el 80% y el 90% de la población docente. Por otro lado, las numerosas marchas que entre el 10 y el 24 de marzo fueron convocadas por el sindicato, lograron aunar a más de 10.000 manifestantes.

Sin embargo, desde el principio, tanto el gobernador Sapag como el resto de los funcionarios del ejecutivo neuquino se negaron a entrar en negociaciones con el gremio. En varias oportunidades Sapag expresó que la huelga era una “especie de extorsión” de los docentes sobre “los padres y el gobierno” y que la única propuesta gubernamental para que los docentes la levantaran era “que vayan a trabajar”.³⁸ De tal modo, el gobierno aspiraba a revertir el apoyo que la sociedad brindaba a la huelga docente, a la par que quebrantar en poco tiempo la decisión de los maestros y maestras, amenazando con descontar los días de huelga. Pero los acontecimientos no transcurrieron acorde estos deseos. La lucha de maestras y maestros se extendió por 36 días y en su devenir se abrieron imprevistos frentes de contienda que pusieron en jaque la gobernabilidad de la provincia patagónica.

La explicación de la trama de este conflicto obliga a dar cuenta, entonces, de algunos factores que dotaron de ciertas singularidades tanto a sus protagonistas como al escenario en el que el mismo se desarrollaba.

Tizas y barricadas: el gremio docente.

La primera de las peculiaridades que debe ser tenida en cuenta refiere a las especificidades y diferencias que presenta ATEN respecto de otras organizaciones gremiales.

Al igual que la mayoría de los sindicatos que agrupan a los docentes, ésta es una organización eminentemente femenina. Si bien son muchas las razones que permiten develar la presencia dominante de las mujeres en la labor educativa, una de las más importantes es aquella que remite a la concepción de la tarea de “educar al ciudadano” como una extensión “natural” de las responsabilidades maternas en la crianza de niños y niñas, y a las nociones compartidas socialmente sobre las ventajas portadas por las mujeres para asumir la realización de este trabajo.³⁹

³⁸ Diario *Río Negro*, 13 de marzo de 1997.

³⁹ Un interesante análisis de este tópico puede verse en Graciela Morgade (comp.) (1997): *Mujeres en la educación. Género y docencia en la Argentina. 1870-1930*. Buenos Aires. Miño y Dávila Editores.

Aunque en la Argentina la construcción de estos arquetipos hunde sus raíces en los cimientos de la nación y el estado modernos, su persistencia en la actualidad queda puesta de manifiesto en la tenaz equiparación entre el hogar y la escuela como lugares de similar significado para la estancia de niños y niñas, por un lado, y la similitud de cualidades y significados contenidos en los conceptos de madre y maestra, por el otro.

Fue en esa asociación entre mujer-madre-maestra donde Sapag ancló su calificación de la huelga como un hecho extorsivo, proponiendo una alianza entre *padres y gobierno* cuales víctimas de una acción femenina cuyo propósito era “antinatural”. De tal manera, entonces, el chantaje existía en la medida en que las maestras exigían derechos para el ejercicio de una tarea que de por sí no debiera ser pensada como trabajo, en tanto agencia de las innatas cualidades y obligaciones de las mujeres. Ellas, a su vez, cometían otro acto “herético” al perjudicar, con la medida de fuerza, a aquellos que naturalmente debían estar bajo su confiable tutela, los y las estudiantes, convertidos ahora en “rehenes”.

Sin embargo, este discurso no tuvo los efectos esperados. Prueba de ello era la asistencia masiva a las marchas convocadas por ATEN y la fuerte presencia de las mujeres en ellas⁴⁰. Esto indicaba, por otra parte, un fluido contacto entre las mujeres-madres y las mujeres-maestras, nacido en la convivencia de unas con otras a partir de la distribución genérica de roles. Una vez más, el compartir las tareas de su género era la plataforma sobre la cual las mujeres intercambiaban experiencias y fortalecían sus acciones. Si bien, entonces, el “ser mujer” no convertía a madres y maestras en un sujeto homogéneo, en ciertos momentos esa condición era la que se imponía sobre otras diferencias, permitiendo la convergencia de intereses y acciones públicas/políticas. En otras ocasiones, como luego se verá, no fue así.

Pero a todo esto hay que agregar otra cuestión que hace a la particularidad del escenario del conflicto. Tanto el gremio a nivel provincial como la seccional capital, que era la de mayor peso dentro del sindicato, se hallaban dirigidos por dos mujeres. María Eugenia Figueroa estaba al frente de la conducción provincial, mientras Liliana Obregón ejercía la dirección de ATEN-Capital. Así y en menos de un año, Sapag volvía a ser increpado por maestras. La primera vez fue en junio de 1996, cuando obligado por la pueblada, debió firmar un acuerdo con Laura Padilla, maestra de Cutral Co, para levantar el corte de rutas. Ahora, Figueroa y Obregón corporizaban un nuevo embate contra el gobernador, embate que prometía ser de largo alcance.

El devenir del conflicto docente

Entre fines de marzo y comienzos de abril, la relación entre el gremio docente y el gobierno de Felipe Sapag fue tensándose cada vez más. Ante la intransigencia del gobernador, el 21 de marzo un plenario sindical realizado en la ciudad capital decidió extender la huelga por tiempo indeterminado.

Pocos días más tarde, docentes, padres, madres y estudiantes iniciaron un corte en la ciudad capital, ocupando por un lado el puente que une Cipolletti con Neuquén, sobre la ruta nacional Nro. 22, y por el otro la ruta provincial Nro. 7. Para desalojarlos, el

⁴⁰ Archivo fotográfico de la autora y filmaciones de diversos noticieros televisivos.

gobernador dispuso la intervención de gendarmería, que actuó bajo las órdenes de la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles.

Liliana Obregón estaba ese 27 de marzo cortando el puente y enfrentando la represión del gobierno. Ella es una mujer bajita, de hablar confiado y sin rodeos. Nacida en Rosario, hija de una mujer galesa, vivió buena parte de su infancia y su adolescencia cambiando de residencia y de provincia debido a que su padre, militar, era asignado a distintos lugares. Finalmente, instalada en Neuquén con su familia, Liliana se recibió de maestra normal nacional. A causa de su militancia política y sindical en la Asociación Neuquina de Docentes⁴¹, fue declarada prescindible por el gobierno militar en 1976, condición en la que permaneció durante 5 años. En la década del ochenta participó de la refundación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), de las huelgas y las movilizaciones docentes bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, y de las su propio sindicato, ATEN capital. En 1995 logró ganar la conducción de este último encabezando la lista Granate, resultado de una alianza constituida por el Partido Comunista, el Movimiento de los Trabajadores por el Socialismo, y el Partido Obrero, entre otras organizaciones de izquierda. Durante seis años Liliana Obregón retuvo la conducción de su seccional. Es interesante rescatar de qué manera ella recordó los acontecimientos que habían tenido lugar durante el corte del puente de la ciudad de Neuquén, en el que además estuvo su hija Luciana, que era estudiante. Según narró: “[En] la huelga del 97 creo que somos las primeras maestras piqueteras. No creo que exista en el país ninguna huelga que haya cortado puentes, con gente con salario estable, [...] sobre todo mujeres, en un 80 % mujeres, algunas con un ingreso medio que no eran los maestros más pobres del país. Es más: [...] haber aguantado tres días en el puente, ser reprimidos y enfrentar a Menem y recibir amenazas de punteros, amenazas de Corach y de otros sectores, realmente fue importantísimo [...]”.

En efecto, lograr sostener un corte de rutas durante tres días, entre el 24 y el 27 de marzo, luego de 14 días de huelga, demostraba tanto el nivel de cohesión interna de los docentes como el apoyo que la huelga había recibido de la sociedad neuquina. Más aún teniendo en cuenta que, tal como expresara la testimoniante, el salario de los docentes neuquinos, al igual que los del resto de la región austral de la Argentina, era más elevado comparativamente que el salario promedio de los docentes en las restantes regiones del país. En ese sentido este conflicto señalaba, como en muchas otras oportunidades en la historia argentina contemporánea, que la relación entre salario y capacidad de confrontación ha encerrado una lógica dispar en la cual no necesariamente sueldos magros se condicen con mejores posibilidades de lucha. De hecho, y según informaran los diarios, ningún gremio en Neuquén había declarado una huelga de tal magnitud al menos desde 1994⁴².

Sin embargo, una de las cuestiones más interesantes que contiene este testimonio refiere a la autonominación de “*maestras piqueteras*”. Teniendo presente que esta entrevista fue tomada 7 años después de los acontecimientos que aquí se estudian y que quien lo dice ha

⁴¹ Este gremio, por ese entonces, era uno de los dos sindicatos que nucleaban a las y los maestros de la provincia.

⁴² Diario *Río Negro*, 26 de marzo de 1997.

tenido una militancia no sólo sindical sino también política vinculada a sectores de izquierda, la adopción de calificativo piquetera reviste varias aristas para su análisis. En primer lugar, frente al “piquetero” como constructo social y político de una figura predominantemente masculina, Obregón contrapone la piquetera que, a diferencia de su par varón en este caso, no sólo es maestra sino que percibe también un elevado salario. De tal suerte, la “maestra piquetera” es una mujer cuya condición no es la de la desocupación y el motivo de su lucha tampoco lo constituye la obtención de un subsidio, tal como los medios de comunicación enfatizan al “mostrar” las motivaciones que impulsan la práctica de movilización piquetera. En ese sentido, entre uno y otra existe tanto un sustrato diferencial de clase como de género.

En segundo lugar, otro elemento que prima en la autonominación de “maestra piquetera” es el tipo de herramienta de lucha escogida por el gremio docente. El corte de rutas también suele ser adosado como una de las características principales que definen al “ser piquetero”, ocluyendo otros elementos que conforman la identidad de quienes forman parte de los movimientos piqueteros. Entre las cuestiones que quedan fuera de esa identidad socialmente configurada se halla la relativa a la presencia de las mujeres. Pero en el caso de Obregón quienes se produce una inversión porque en su relato los varones ni siquiera aparecen como “maestros piqueteros”, subsumiendo ella entonces la presencia de ellos a la de las mujeres.

En tercer lugar, que la elección del adjetivo “*piquetera*” sea realizada en el momento en el cual los medios de comunicación masivos se abocan a desprestigiar a los movimientos piqueteros y su modalidad de confrontación, da cuenta al menos de dos cuestiones que hacen a la construcción subjetiva de Obregón en torno al rol del gremio docente en momentos de singular beligerancia. Por un lado, al proclamarse como maestra piquetera, establece una diferencia dentro del universo docente tanto en lo que hace al ejercicio de la labor específica como en lo referido a la actividad sindical docente. Si la condición de piquetera adquiere sentido y consistencia como definitoria de los sectores sociales subalternos, portarla determina una clara intencionalidad de vínculo con esos sectores y sus formas de lucha.

Pero por otro, tal asignación cobra una dimensión distintiva y referencial cuando se la relaciona con la resistencia a la política menemista. De tal modo, el ser piquetero/a se torna el paraguas bajo el cual hallaron cobijo aquellos sectores, desocupados o no, que concientemente aspiraban a enfrentar exitosamente las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal. Desde ese espacio subjetivo, el “haber aguantado tres días en el puente” cambiaba cualitativamente el “territorio” y los significados del enfrentamiento entre ATEN y el gobierno.

En cuanto al corte de rutas en sí mismo, Obregón expresaba que: “Nosotros estuvimos muy bien organizados [...] En la noche de la represión nosotros teníamos las columnas formadas, teníamos cómo salir, teníamos seguridad, no te podías salir de la columna. [...] Nunca se pensó que iba a reprimir la gendarmería [...]. Es más: los queríamos hacer cantar [en alusión a las/los maestras/os que estaban sentados sobre la ruta] y no querían cantar. Estaban muy asustados. Era su primera experiencia de enfrentamiento con la policía y con la gendarmería.”

En esta parte del relato comienzan a vislumbrarse las diferencias entre las mujeres que protagonizaban este corte con aquellas que habían cortado las rutas en Plaza Huincul y Cutral Co el año anterior y que, más adelante, participarían en el corte en las mismas localidades. Mientras que en el caso de las mujeres piqueteras de junio del 96 la amenaza de la represión no condujo al levantamiento de los cortes de ruta ni a la resistencia pasiva, sí sucedió esto con las maestras/os ante la inminencia de la acción de la gendarmería en marzo de 1997. Así, en su explicación sobre la forma en que se actuaría ante la llegada de las fuerzas represivas, Obregón comentaba: “Una de las cuestiones que hay que ver también es que en las asambleas se discutió si íbamos a hacer resistencia activa o resistencia pasiva. Yo saqué el tema porque me habían agredido algunos compañeros, no físicamente. Me habían dicho que teníamos que enfrentar a la gendarmería, que era una actitud cobarde. [...] Entonces fuimos a una asamblea de 600 personas y yo saqué el tema. [...] Porque la gente no la quería enfrentar y mucho menos a piedras. Los docentes no querían. Se discutió y se votó una resistencia pasiva que significaba que se llegaba hasta ahí pero que si había ataque de la gendarmería con balas y gases y demás, se abrían dos columnas: una que salía para la escuela Santa Teresa que está hacia el lado oeste del puente y otra columna salía para el otro lado [...]”.

Considero que la divergencia de estas reacciones se arraiga en la desigual experiencia de clase de las mujeres que estuvieron en el corte de 1996 y las que impulsaron este último. Si bien ambos tipos de mujeres pertenecen objetivamente a la clase trabajadora, las formas en que esta pertenencia de clase es vivenciada por cada una de ellas reenvían a una diferencial conciencia de sí mismas y de su lugar en la sociedad. No está demás aquí recordar que una clase social no es una estructura sino un actor histórico complejo que construye identidades en el marco de relaciones sociales contradictorias (de clase y de género), y cuya conciencia, por tanto, deviene de su experiencia en ese marco⁴³. En ese sentido, la construcción de una identidad ligada a la clase trabajadora por parte de las maestras y maestros, salvo en casos particulares⁴⁴, no tiene larga data en la Argentina. La misma comenzó a aceptarse en una historia de extensas y multitudinarias huelgas protagonizadas por los gremios docentes y cuyos antecedentes originales pueden rastrearse durante el conflicto docente y la marcha blanca a comienzos de 1988, bajo la administración presidencial de Raúl Alfonsín. Fue a lo largo de todos esos conflictos, donde las y los docentes acrecentaron su conciencia en tanto trabajadoras/es y consecuentemente, cristalizaron una identidad en la cual los derechos exigibles a partir de su labor equilibraban el peso, hasta esos momentos casi exclusivo, de las obligaciones devenidas de la exigencia de “educar al ciudadano”. Pero también fue esa identidad de trabajadoras/es la que lentamente cobró relevancia en el resto de la sociedad.

El éxito de esta construcción fue causal y determinante, en parte, de la adhesión social que la huelga docente obtuvo en ese momento. Sin embargo, el contexto de un posible enfrentamiento físico con la gendarmería y la policía provincial, situación en la que los docentes carecían de experiencia previa, trastocaba sustancialmente el marco del conflicto.

⁴³ Thompson, E. P.: *La Formación de la clase obrera en Inglaterra*. 1977

⁴⁴ Tales como aquellos que formaban parte de la “Asociación de Maestros Unidos” de Mendoza y que llevaron adelante una importante huelga en 1919, pidiendo su incorporación a la Federación Obrera Regional Argentina (FORA)

Ahora bien: aún cuando en la asamblea gremial se decidiera la resistencia pasiva, el gobierno no dudó en ordenar a la gendarmería el desalojo del puente a base de gases lacrimógenos, golpes y balas de goma.

Pese a ello, la envergadura del paro aumentaba. La violenta respuesta gubernamental no sólo no había obligado a ATEN a desistir de la huelga, sino que la misma amenazaba traspasar las fronteras provinciales. El 29 de marzo, dos días después de la represión, el gremio convocó una nueva marcha de las antorchas, que reunió a más de 10.000 personas en el centro de la ciudad de Neuquén. Además, el 31 de marzo y en solidaridad con ATEN, CTERA convocó una huelga nacional que obtuvo una adhesión del 90%, según la central sindical⁴⁵. En la Capital Federal, cinco mil personas se congregaron en señal de protesta contra las medidas del gobierno neuquino, movilizándose hacia las representaciones provinciales de Neuquén, Buenos Aires y Río Negro y dando inicio a un ayuno de docentes que se alojaron en la carpa blanca ubicada en la Plaza de los Dos Congresos. En San Juan comenzó una huelga por cuatro días; en tanto, los docentes jujeños, también en huelga, denunciaban la grave situación en la que se hallaban a causa de la no percepción de sus haberes desde febrero de ese año. Adhirieron, asimismo, los gremios docentes de las provincias de Formosa y La Rioja. En Río Negro, las negociaciones entre el gobierno provincial y los docentes agremiados en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), que también se hallaban en huelga desde el 10 de marzo, auguraban terminar en el naufragio.

A su vez, diversas condiciones complicaban la posición de intransigencia asumida por el gobernador Sapag. Por un lado, dentro de su provincia, el frente gubernamental local mostraba signos de resquebrajamiento ya que el bloque opositor a Sapag en la legislatura provincial⁴⁶ proponía la aprobación de un proyecto de ley que restituía a todos los empleados estatales el plus salarial del 40% cobrado por zona desfavorable⁴⁷. A ello se sumaba la oposición a la política sapagista por parte de las iglesias católica, bautista y metodista de Neuquén cuyos miembros, “en respuesta al clima de miedo y violencia”, habían iniciado un ayuno de dos días en la Catedral de la ciudad de Neuquén⁴⁸. Cabe señalar aquí que la relación entre el obispado neuquino, en particular, y el gobierno de Sapag distaba de ser condescendiente. De hecho y aunque fuera desestimado por la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles días después, el diario *Río Negro* publicó el 1ero. de abril que el obispo Agustín Radrizzani podría ser indagado por la justicia federal acusado por el gobierno de “estar al lado de la barricada” cuando la gendarmería procedió a desalojar el puente a las 7 de la mañana del 27 de marzo. Esta acusación se centraba tanto en la supuesta violación del artículo 194 del Código Penal -que reprime la interrupción del tránsito terrestre-, como en la desobediencia de una orden judicial y el ejercicio de “coacción agravada”⁴⁹.

⁴⁵ Diario *Río Negro*, 1ero. de abril de 1997

⁴⁶ Es decir, el sector blanco del MPN, los integrantes del FREPASO y de la UCR.

⁴⁷ Diario *Río Negro*, 4 de abril de 1997.

⁴⁸ Diario *Río Negro*, 4 de abril de 1997.

⁴⁹ Diario *Río Negro*, 1ero. de abril de 1997. Si bien el 3 de abril la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles sostuvo que sería muy difícil que la fiscalía solicitara el procesamiento del obispo, esto dejaba a las claras la tensión entre el obispado neuquino y el gobernador Sapag. Ver diario *Río Negro*, 4 de abril de 1997.

En tercer lugar, el gobierno central, preocupado por las dimensiones nacionales que el conflicto estaba adquiriendo, presionaba al jefe del ejecutivo neuquino para la obtención de una solución definitiva y rápida, a la par que se esforzaba por presentar la huelga docente como una situación exclusivamente provincial⁵⁰. Esto no carecía de importancia puesto que la resistencia del gremio a acatar la Ley Federal de Educación, que databa desde el año 1993 y cuya implementación en la provincia de Neuquén se retrasaba aún más con el conflicto, podía resultar un ejemplo para los gremios docentes del resto del país y desatar así nuevas medidas de protesta contra la política educativa del gobierno nacional.

Como efecto de esta presión, Sapag aceptó reunirse con las dirigentes del gremio docente. Sin embargo, en estas reuniones no se llegó a ningún acuerdo. Finalmente, luego de amenazar con el veto de cualquier proyecto de ley de la legislatura provincial sobre la restitución del 40% del plus salarial, el gobierno neuquino, a través de la subsecretaría de Gobierno y Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles. Empero el sindicato, aduciendo que dicho dictamen no era facultad de esa subsecretaría debido a su parcialidad, rechazó tal medida mientras anunciaba que continuaría con el paro por tiempo indeterminado y “el cronograma de movilizaciones”⁵¹.

El 9 de abril, el gremio convocó nuevas movilizaciones en toda la provincia. Fue así como en Cutral Co y Plaza Huincul, cuyas delegaciones docentes ya habían viajado varias veces a la ciudad de Neuquén para participar de los actos y las deliberaciones sindicales, se realizó una asamblea local organizada por la seccional correspondiente de ATEN. En ella se decidió hacer una movilización que partiría del museo “Carmen Funes” hacia la ruta nacional Nro. 22. Una vez allí, cuando la noche comenzaba a despuntar, la ya mencionada “coordinadora de padres maestros y alumnos”, determinó cortar la ruta por tiempo indeterminado, en defensa de la escuela pública.

Historias de combates o combates por la historia: el segundo corte de rutas en Cutral Co y Plaza Huincul.

Pocas horas después de que esta decisión fuera tomada en las comarcas petroleras, el ministro del Interior de la Nación Carlos Corach se apresuró a advertir públicamente que “si (las autoridades provinciales) nos requieren por razones de seguridad, vamos a prestarles toda la colaboración” remarcando que “la ocupación de rutas provinciales y nacionales perjudica las economías regionales, el comercio y el trabajo” e insistiendo en que el gobierno nacional no permitiría la nacionalización del conflicto docente⁵².

Por su parte, los medios de prensa escrita locales, que calificaron como “extrema” la medida del corte de ruta, consignaban que en Cutral Co y Plaza Huincul y acorde a los

⁵⁰ De tal modo y según informara el 6 de abril Héctor Mauriño, periodista del diario *Río Negro*, la ministra de Educación Susana Decibe había aparecido en todos los medios de comunicación nacionales sosteniendo que “éste es un conflicto provincial y no guarda relación con la Reforma Educativa”.

⁵¹ Diario *Río Negro*, 8 de abril de 1997.

⁵² Diario *Río Negro*, 10 de abril de 1997.

dichos de padres y docentes, no había piqueteros de la pueblada del año anterior, ya que quienes participaban del corte afirmaron que “no queremos que se metan en esto”⁵³.

Más allá de que la afirmación hecha por padres y docentes contuviera la intención de diferenciar este corte de aquél de 1996, fuera por sus objetivos o por el sector social que estaba involucrado y/o conducía este conflicto, lo cierto es que la preocupación tanto del gobierno nacional como la reflejada en los medios de comunicación locales iba en la misma dirección: el conflicto docente neuquino presentaba una variada gama de problemáticas, algunas de las cuales excedían la situación que le había dado origen.

En un principio, la potencial nacionalización y unificación de los reclamos docentes era sólo una de las cuestiones a las que debía hacer frente el gobierno provincial y nacional. Más preocupante era el hecho de que a la tradicional estrategia del no dictado de clases y la realización de movilizaciones, las y los docentes sumaran el corte de rutas. Esto daba un nuevo giro al “itinerario” del conflicto. Así, éste escapaba de los confines de la “comunidad educativa” para salir de las aulas y los ministerios e instalarse en las plazas, calles y rutas, poniendo en riesgo la estructura económica de la región al afectar directamente la esfera de la producción y circulación de mercancías, tal como diagnosticaba el ministro Corach. Así, la acción de un gremio de servicios mayoritariamente conformado por mujeres y desconectado absolutamente del proceso productivo, podía incidir en los ritmos de este último⁵⁴.

Pero además, que todo ello tuviera lugar particularmente en Cutral Co y Plaza Huincul, donde la pueblada del año anterior permanecía en la epidermis de la historia local, hacía del conflicto la punta de un iceberg cuya real extensión podía desbordar todo intento gubernamental de mantener la huelga en un marco institucionalizado.

En ese sentido, el periódico local *Río Negro* realizó notables esfuerzos por tratar de diferenciar el significado e implicancias del corte del puente de la capital neuquina producido el 24 de marzo, por ejemplo, con lo que había sucedido en el año 1996 en las comarcas petroleras. Incluso llegó a realizar una entrevista a Margarita Gudiño de Argüelles, jueza federal que había actuado en ambos cortes, con el objetivo de que ella planteara las divergencias entre ellos. Allí la jueza sostuvo que: “Cuando fui a Cutral Co me encontré con una situación diferente; allí había todo un pueblo en la calle y en Neuquén [en referencia al 27 de marzo de 1997] me encontré con parte de un gremio y algunas personas más. [Así] en Neuquén había un delito diferente [al del año anterior donde] los piqueteros no reconocían ni la autoridad del gobernador y por eso había un delito mayor, que es el de sedición”⁵⁵.

Si bien estas diferencias no dejaban de ser ciertas -al menos hasta ese momento-, no lo era menos que el contenido de la protesta docente podía rápidamente modificarse y orientarse hacia una situación mucho más explosiva si otros actores sociales se incorporaban,

⁵³ Idem ant.

⁵⁴ Esto marca una notoria diferencia con otros gremios de servicios tales como los ligados a medios de transporte, electricidad y gas que sí pueden, por su lugar objetivo, influir en la esfera de la producción. .

⁵⁵ Diario *Río Negro*, 1ero. de abril de 1997.

anexando demandas propias. Y justamente un corte de rutas en Cutral Co y Plaza Huincul podía reavivar exigencias sociales comunitarias difícilmente encausables por el gremio docente, o eludibles para los gobiernos provincial y nacional respectivamente. De hecho, diversos sucesos acaecidos en Plaza Huincul y Cutral Co en enero y febrero de ese año, ponían en evidencia que el panorama social y político de las comarcas petroleras podía tornarse sumamente convulsionado.

Las antesalas del conflicto:

En Cutral Co la situación política era bastante espinosa. La disputa interna entre las facciones blanca y amarilla del MPN -representadas por el ex intendente de Cutral Co Adolfo Grittini y el en ese momento intendente Daniel Martinasso, respectivamente-, se había encarnado en amenazas, una serie de atentados con bombas molotov arrojadas contra las casas de diversos funcionarios municipales, e incluso la colocación de cartuchos de dinamita en las viviendas de reconocidos dirigentes políticos. Blancos y amarillos se acusaban mutuamente de cada uno de estos hechos y si bien la investigación judicial resultó en la incriminación y detención de algunas personas, nunca se determinó ni la autoría intelectual de los mismos ni la existencia de vínculos entre quienes fueron detenidos y dirigentes políticos locales⁵⁶. Lo cierto es que esta situación tornaba aún más frágil la continuidad de Martinasso al frente del municipio cutralquense, sobre quien, además, pesaban aún las recriminaciones internas de su partido a causa de la pueblada de 1996. Así, el 26 de febrero el Concejo Deliberante en pleno de esta localidad pidió a Martinasso su renuncia. Si bien en ese momento este último pudo negarse y conservar su lugar en el Ejecutivo Municipal, la situación de gobernabilidad en Cutral Co estaba tan vulnerada que se hablaba de “un virtual vacío de poder existente”⁵⁷.

A ello se sumaba el descontento social provocado por el atraso en el envío de los fondos prometidos por el gobierno provincial a la zona, correspondientes a los subsidios por desempleo. Esto ocasionaba que más de dos mil personas beneficiarias de este subsidio no lo pudieran cobrar. Entre quienes eran perjudicados por esto, había una gran cantidad de mujeres jefas de hogar y piqueteras del año anterior cuya situación se tornaba sumamente crítica debido a su rol de distribuidoras, garantes y, cada vez en mayor medida, proveedoras de los recursos para el sostén familiar⁵⁸.

Entre tanto, las posibilidades de instalar la planta de fertilizantes en las comarcas petroleras para dar solución a parte de los reclamos expresados en la pueblada anterior, eran cada vez

⁵⁶ Todo había comenzado el 3 de enero de ese año, cuando una bomba molotov fue lanzada al domicilio particular de Mario Vilo, cuñado de Martinasso y secretario de gobierno de la comuna. Ante la proliferación de este tipo de hechos Martinasso, que también había recibido una bomba molotov en su casa, acusaba al sector blanco del MPN y en particular a Grittini, de orquestar estas acciones. La situación llegó a su máxima expresión cuando el domingo 16 de febrero tres cartuchos de TNT fueron encontrados en la puerta de la vivienda de Grittini, con un mensaje escrito en donde se conminaba al ex intendente a abandonar su campaña para juntar firmas con el objetivo de exigir la renuncia de Martinasso. El hallazgo de esta dinamita se repitió en la vivienda de un concejal radical, aliado al sector blanco del MPN. Sin embargo las investigaciones que se realizaban a cargo del fiscal Santiago Terán apuntalaban la hipótesis de que en realidad Grittini había fraguado el atentado en su casa, en un intento de desestabilizar el gobierno de Martinasso.

⁵⁷ Diario *Río Negro*, 2 de marzo de 1997.

⁵⁸ Idem ant.

más remotas. Mientras la compañía *Agrium Cominco* había cerrado un acuerdo con el gobernador santafecino Jorge Obeid para instalarse en las localidades de Timbúes y General San Martín, disponiendo una inversión de U\$S 580 millones⁵⁹, la firma Pérez Companc, con quien Sapag había tomado contactos luego de la pueblada de 1996, había rechazado la propuesta de instalar una fábrica similar en Neuquén debido a los costos que acarrearía el traslado de producción por la distancia del mercado de Buenos Aires. De tal modo, la zona escogida para abrir la planta de fertilizantes fue Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires⁶⁰.

En consecuencia, tanto la acuciante situación económica que seguían atravesando los y las pobladoras de Plaza Huincul y Cutral Co como la inestabilidad política de la zona, abonaban el terreno para la emergencia de una nueva confrontación.

El segundo día del corte de rutas en Cutral Co y Plaza Huincul, la medida de protesta se extendió a cortes en varias de las picadas aledañas. Pero diversas circunstancias fueron profundizando la complejidad del conflicto a la vez que emergían nuevos encuadres y puntos de fricción, entre los que se encontraba el debate interno del gremio docente.

Debido al significado histórico de esta región y la inmediata repercusión que en los medios de comunicación y en el gobierno nacional tuvo el corte de las rutas Nro. 22 y 17, el plenario de secretarios/as generales de las seccionales de ATEN se trasladó a Plaza Huincul y Cutral Co para discutir los futuros pasos del conflicto. Según explicó Obregón: “[...] Nosotros hicimos el plenario en Cutral Co [...]. Era una forma de demostrar que el plenario estaba en estado de alerta en la propia localidad donde estaba la pueblada, que todavía no era pueblada. Era una manifestación importante [...]”. Desplazarse hacia esa zona constituía, entonces, tanto un mensaje desafiante al gobernador Sapag como un intento de mantener el conflicto dentro del marco del reclamo docente. Prueba de ello la ofrecen las decisiones tomadas por el plenario respecto a dos temas: el acatamiento a la conciliación obligatoria lanzada días atrás por el gobierno provincial, y el apoyo institucional al corte de rutas.

En cuanto a la primera cuestión, existían dos posiciones. Mientras María Eugenia Figueroa, secretaria general de ATEN provincial, sostenía que debía aceptarse la conciliación, Liliana Obregón, secretaria de la seccional capital de ATEN, se oponía a esa postura. Esta última posición fue la que se impuso, decidiéndose rechazar lo dictaminado por el gobierno⁶¹.

En lo concerniente al apoyo institucional al corte de rutas, Pablo Ferrer, secretario de prensa del gremio a nivel provincial, comunicó la resolución declarando que “si bien ATEN apoya el corte de rutas y sus representantes acompañarán la protesta, no irán a los piquetes como gremio sino en forma particular”⁶². Las palabras de Obregón en la entrevista a la que hice mención anteriormente, iluminan parcialmente las razones del viraje en la posición gremial. Según ella: “Cutral Co se lanza a una pueblada y nos dicen que se lanzan a una

⁵⁹ Diario *Río Negro*, 14 de diciembre de 1996.

⁶⁰ Diario *Río Negro*, 21 de diciembre de 1996.

⁶¹ Diario *Río Negro*, 11 de abril de 1997.

⁶² Idem ant.

pueblada porque los maestros de Cutral Co salen por el tema de la educación. Pero cuando se produce la pueblada real de Cutral Co, no fue por el tema de la educación. Fue por temas concretos que tenían que ver con ellos, específicamente los subsidios y la desocupación [...]. O sea, no había una relación entre los docentes y la pueblada [...].”

Ahora: en el momento en que el gremio decidió negar su apoyo como sindicato al corte de rutas, la pueblada no era tal. Pero eran las condiciones políticas, económicas y sociales de la zona lo que hacía que tras la huelga docente pudieran encolumnarse otros reclamos y otros actores sociales que no necesariamente subsumirían sus propias voces a la dirigencia docente o acatarían las estructuras y modalidades organizativas desplegadas por el gremio. Y esta diferencia se corporizaba, específicamente, a partir de la extracción de clase de esos otros y otras que estaban por fuera del ámbito de docentes y maestros/as aunados en el sindicato: “[...] Inclusive los métodos de lucha.... Porque si bien los métodos eran idénticos, que eran los cortes de ruta, la composición social era muy distinta. Y la forma y la dureza si bien la nuestra para nosotros fue bien dura, [...] era mucho mas duro lo de ellos, en tanto que tenían mucho para perder [...]”, señaló Obregón. Que el sindicato tuviera menos para perder que “los otros” era cuestionable ya que, por ejemplo, la negativa a aceptar la conciliación obligatoria podía traer como consecuencia la declaración de ilegalidad del paro e, incluso, la pérdida de la personería gremial de ATEN, entre otras cosas. Pero evidentemente, ese era un riesgo aceptable si se tiene en cuenta que, aún abriendo una puerta hacia la ilegalidad, el conflicto podía seguir transitando por carriles controlables por el sindicato. Este también estaba en condiciones, llegado el caso, de impugnar en los tribunales judiciales los alcances de su rebeldía ante la conciliación. La pregunta es, entonces, hasta qué punto esa dureza que Obregón atribuía a las y los pobladores porque “tenían mucho para perder”, no le quitaría a ATEN margen de maniobra en el enfrentamiento con el gobierno, amén de verse obligado a asumir reclamos que excedían en mucho el cuestionamiento a la Ley Federal de Educación, sobre todo cuando lo que se avecinaba era la violencia estatal nuevamente.

Plumas y fusiles: armando represiones.

En la madrugada del 11 de abril más de 300 gendarmes arribaron a Neuquén, transportados en tres aviones Hércules. Casi simultáneamente, padres, madres docentes y estudiantes cortaron la ruta 22 a la altura de la avenida Olascoaga, en la capital neuquina, para evitar que los gendarmes pudieran llegar a Cutral Co y Plaza Huincul⁶³. Al mismo tiempo, el juez Oscar Temis –que actuaba en reemplazo de Margarita Gudiño de Argüelles, de sorpresivas vacaciones a partir de ese mismo día-, intimó al desalojo de las rutas en las comarcas petroleras para las 23 horas.

Mientras tanto, en Cutral Co y Plaza Huincul un grupo de jóvenes calificados por los diarios como el grupo “duro”, liderado ahora sí, según los periódicos, por “piqueteros”, y dispuesto a enfrentarse con la gendarmería, se había instalado en algunos piquetes cercanos a la entrada del Campamento Uno de YPF, en Plaza Huincul.

⁶³ Idem ant.

A partir de ello, la prensa escrita comenzó un proceso de estigmatización de este grupo y con ello del rumbo que estaba tomando la protesta. Este constructo no quedó a salvo, de todas maneras, de la incursión en curiosas contradicciones. Por ejemplo, en una breve nota titulada “El núcleo más duro está dispuesto a resistir el desalojo como sea”, el diario *Río Negro* transcribía textualmente las palabras de un joven que sostenía “vamos a hacer el aguante para que le paguen a los maestros”, para decir, renglones más abajo, que esos mismos jóvenes “no saben por dónde pasan los reclamos de padres, docentes y estudiantes”⁶⁴. En la misma nota, el diario consignaba los dichos de uno de los comandantes de Gendarmería que acompañó a la secretaria del juzgado para la notificación de la orden de desalojo, cuando en referencia a la situación opinó: “Yo creo que esto se les fue de las manos (en alusión a la coordinadora de padres, madres, docentes y estudiantes de Cutral Co y Plaza Huincul). Si mañana tenemos que venir, hay pibes a los que no van a poder controlar”. Haciéndose eco de ello, el diario titulaba el mismo día en la noticia de la página anterior “Huincul: la protesta perdió racionalidad”⁶⁵. Como si con esto no bastara, el titular del día siguiente afirmaba: “Fogoneros armados esperaban a los gendarmes”, para luego aclarar que un grupo de 60 jóvenes cuya edad oscilaba entre los 14 y 20 años, quienes se autoidentificaban como fogoneros para diferenciarse de los piqueteros de la pueblada del año 1996 en tanto los consideraban traidores, había tomado el control de los piquetes. Curiosamente, el periodista que escribió la nota sostuvo que este grupo estaba fuertemente armado con “palos, fierros, gomeras y ondas gallegas”. Es difícil imaginar que esta afirmación pueda atribuirse a la ignorancia del autor de la nota sobre el significado de estar “fuertemente armado”.

Asimismo, el diario declaraba que la única pretensión de estos jóvenes era enfrentarse con los gendarmes y “metían miedo” con sus caras tapadas, haciendo gala de la “anarquía” (sic) en la que acostumbraban vivir⁶⁶. A su vez informaba que carecían de estudios, de trabajo, de “límites”, en síntesis, de una vida que los identificara como “respetables ciudadanos/as” de la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul. Ante esto, continuaba el diario, la coordinadora de padres, madres, docentes y estudiantes, iniciadora del corte, había restado su apoyo y se había retirado de los piquetes.

De tal modo y a través de una sustantiva operación ideológica, se construyó una ecuación que dividía al conflicto en dos, a partir de cuestiones de género, edad y clase social. De un lado estaban los marginados del sistema, varones jóvenes a quienes se debía temer, amantes de la violencia en sí misma, y cuyas acciones, desprovistas de toda racionalidad, eran incontrolables. Del otro, mujeres docentes, estudiantes, padres y madres, con objetivos de lucha racionales y aceptables –la defensa de la escuela pública-, respetuosos de las jerarquías uniformadas pero incapaces de mantener el control sobre aquello que habían echado a rodar.

La estigmatización de los primeros permitía, por tanto, excluirlos y consecuentemente aislarlos, intentando con ello acrecentar el consenso social para el ejercicio de la represión en puertas o atemperar reacciones comunitarias masivas ante el uso de la coacción física

⁶⁴ Idem ant., página 11

⁶⁵ Diario *Río Negro*, 11 de abril de 1997, página 10.

⁶⁶ Diario *Río Negro*, 12 de abril de 1997, portada y página 6.

por parte del Estado. Justamente, en días anteriores y en alusión a las reacciones sociales que habían provocado las acciones de la gendarmería el 27 de marzo en la capital neuquina, este mismo diario publicó una síntesis de los conceptos vertidos por una persona no identificada del Ministerio del Interior. Vale la pena transcribir *in extenso* el texto aludido: “Llama la atención la renovada expresión de fuerza concretada por los sindicatos a pocas horas de haber sido desbloqueados puentes y rutas. En general, tras un desenlace de esta naturaleza, sobreviene un compás de espera que puede o no retroalimentar el enfrentamiento. Pero acá no hubo compás de espera: a 48 horas de los hechos, había el triple de gente marchando por las calles de Neuquén. Todo esto merece una lectura que, sin ser definitiva, arroja ciertos resultados. Por un lado toda la política de disuasión implementada por el gobierno provincial como por la justicia fracasó. Hubo que apelar a la fuerza. Y cuando el poder institucional apela a la fuerza para resolver coyunturalmente este tipo de hechos, hay una doble vía en materia de beneficios. Así, se logra poner orden, pero suele cohesionarse a quienes se tiene enfrente [...]. También llamó la atención que la respuesta que recibió la represión en la mañana del jueves, fundamentalmente piedrazos, no tuvo en *grupos marginados a sus componentes más activos*⁶⁷. Ahí había clase media venida a menos y sectores bajos pero con trabajo, cascoteando a los gendarmes. [...] En general en este tipo de hechos, en las primeras escaramuzas, suelen estar todos, pero luego la resistencia o los que dan más trabajo son adolescentes de condición marginal”⁶⁸.

En esa dirección, entonces, la apelación al ejercicio de la represión en Cutral Co y Plaza Huincul exigía, para ser exitosa, acreditar el vínculo entre condición social marginal/irracionalidad/peligrosidad/violencia/varón frente a condición social de clase media/racionalidad/negociación/maestra, con las implicaciones de género que tal profesión conlleva. De hecho, cuando se desató la represión sobre la ruta, la gendarmería comenzó a perseguir a la gente dentro de las localidades, territorio que le está vedado ya que básicamente puede actuar en zonas de seguridad de fronteras terrestres, ríos fronterizos no navegables, túneles y puentes internacionales⁶⁹. Y si bien atacó a la población en general, los barrios más castigados fueron aquellos donde residían los sectores más empobrecidos, tal como el caso del barrio de las “500 viviendas” en Cutral Co u Otaño en Plaza Huincul. Fue allí donde Teresa Rodríguez perdió la vida como efecto de la represión.

Pero también fue a partir de ese momento cuando el conflicto se extendió a toda la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul. Es importante preguntarse por qué la mayoría de las y los pobladores se habían mantenido, hasta ese entonces, al margen del corte.

Marchas y contramarchas: tras la huellas de las mujeres.

Cecilia es una mujer joven, desocupada, que cobra un subsidio de \$150 por mes y sostiene a 5 hijos, con la ayuda de su actual compañero. Vive en Cutral Co, en el barrio de las “176 viviendas” construido por la municipalidad cutralquense entre comienzos y mediados de la década de 1990. Es una mujer afable, dispuesta siempre a compartir un mate y a convidar

⁶⁷ El subrayado es mío

⁶⁸ Diario *Río Negro*, 1ero. De abril de 1997.

⁶⁹ Centro de Estudios Legales y Sociales: *El Estado Frente a la protesta social. 1996-2002*. Buenos Aires, Ediciones CELS-Siglo XXI. 2003. Página 109.

con fideos caseros que amasa junto con sus hijos más pequeños. Ella había participado de la pueblada de 1996 pero no formó parte de quienes cortaron la ruta durante 1997. Según narrara: “Yo no participé porque sentí mucha impotencia. La gente se conformó con dos pesos e hicieron de cuenta que nunca pasó nada [en referencia a 1996]. Y ¿para qué iba a ir yo a seguir luchando si un político les iba a decir: mañana tienen tal cosa, y se van contentos a la casa y después sigue lo mismo. Impotencia. Bronca. Por eso dejé.”

Cecilia evaluaba que la primera pueblada había terminado en un fracaso en tanto para ella la situación de desempleo por la que atravesaban las y los pobladores de la zona no había sido modificada estructuralmente. En ese sentido, su preocupación no radicaba en quién conducía el conflicto. No importaba si eran docentes o jóvenes sin trabajo o al menos su temor no iba dirigido hacia estos últimos sino, nuevamente, a la manipulación política de la protesta a través de la promesa de nuevos subsidios.

La politización de esta confrontación en esos términos y la traición en la anterior, fueron razones recurrentemente esgrimidas por varias de las entrevistadas como causa de su negativa a involucrarse en la misma, al menos en el comienzo. Concretamente Magdalena sostenía: “No fuimos allá porque no era el pueblo, eran los políticos, se manejó políticamente y los de antes traicionaron al pueblo”. Similar análisis realizaba Stella Maris, que habitaba en Cutral Co y trabajaba como empleada doméstica y para quien luego de la primera pueblada “los primeros piqueteros son políticos. Ellos sacaron su tajada y ahora están en el gobierno, es como que usaban a la gente”. Incluso Bety León, que durante la pueblada de 1996 había protagonizado varios enfrentamientos verbales con los intendentes de Cutral Co y Plaza Huinca, resistido el intento de represión de la gendarmería y, finalmente, increpado a Sapag, insistió varias veces con que “en la segunda pueblada todo se politizó mucho”.

En estos argumentos se entrecruzan varias cuestiones. La primera de ellas era que el escaso nivel de participación de mujeres y varones que habían realizado los piquetes del 96, fue propiciado tanto por la frustración sentida ante el incumplimiento de los puntos del acta acuerdo firmada en ese entonces, como por la acusación de traición dirigida hacia quienes habían sido los y las voceros/as de la pueblada anterior, esto es, los y las piqueteras/os. Dicha traición consistió, según las testimoniantes, en que éstos/as habían abandonado la consecución de la lucha iniciada a cambio de prebendas personales (fueran estas referidas a la ocupación de cargos públicos o a la obtención de beneficios materiales). Con esa afirmación coincidían las personas jóvenes que esa mañana estaban en la ruta dispuestas a resistir la llegada de la gendarmería.

En segundo lugar, y estrechamente vinculado con lo anterior, la caracterización del conflicto como una acción politizada no remitía al concepto vertido tantas veces por el gobierno nacional o el mismo Sapag en torno a la acción de ideólogos de izquierda que pretendían desestabilizar su gobierno o la reproducción del orden social. Más bien estas mujeres profesaban una idea de la acción política como aquella tendiente a procurar la ocupación de funciones en la administración pública para el enriquecimiento personal. De allí toda acción política era aquella cuyos objetivos no comulgaban con reclamos legítimos de la comunidad o con el beneficio colectivo.

Por otra parte, esa conceptualización del ejercicio de la política podía aplicarse tanto a “los políticos” como a aquellas organizaciones sectoriales que representaran intereses particulares, tales como los sindicatos. En ese sentido, el gremio docente despertaba desconfianzas y/o críticas que emergían tanto a causa del descrédito que entre buena parte de la sociedad argentina cualquier organización sindical tenía (y aún conserva), como de comportamientos particulares que asumió el gremio docente durante la pueblada de 1996. Así analizaba Bety León lo sucedido: “Como el río estaba bastante revuelto, el gobernador fue más perro, [...] y le sacaron el 20% a los maestros, y eso fue lo que rebalsó el vaso a los maestros”. Pero rápidamente aclaraba: “Porque en la primera pueblada, los que siempre tuvieron un roce, una pedantería con nosotros, fueron los docentes. Por ese motivo, cuando en el 97 Sapag les quitó el 20%, ellos nos pidieron colaboración a la comunidad y la comunidad tiene memoria. Ellos no nos apoyaron. Pero un grupo de gente se lo dio y murió una vecina mía [en referencia al asesinato de Teresa Rodríguez]”.

El gremio docente, en tanto tal, no había secundado expresamente la primera pueblada, si bien los y las docentes acercaron su solidaridad en términos personales, actitud que volvía a repetirse en este conflicto y con un agravante. El corte de rutas iniciado el 9 de abril de 1997 fue además avalado por el gremio, quien luego rectificó su posición restando su presencia institucional.

Asimismo existía también una cierta desconfianza de las mujeres ex ypefeanas, desocupadas y/o cuentapropistas, basada en actitudes que se condecían con la pertenencia de clase y las experiencias colectivas condicionadas por esta pertenencia. De esta diferencia daba cuenta Bety León cuando afirmaba que los docentes habían sido pedantes con ellas durante la primera pueblada o cuando en el segundo corte de rutas “ellos tiraron la piedra y luego escondieron la mano”. Con eso León hacía alusión a la negativa institucional del gremio a resistir en el corte de rutas en Cutral Co y Plaza Huincul cuando fue de conocimiento público la inminencia de la llegada de la Gendarmería a las comarcas petroleras.

Fue por ello, entonces, que en un primer momento el corte de las rutas 22 y 17 no suscitó apoyo mayoritario en la población de ambas localidades. Sin embargo, la situación cambió radicalmente el 12 de abril. Y este cambio estuvo estrictamente imbricado con el inicio de la represión para desalojar las rutas.

La segunda pueblada:

Ese día, a las 5:30 horas de la mañana, casi 400 efectivos de la gendarmería nacional habían llegado a la entrada de Plaza Huincul con la intención de hacer cumplir la orden de desalojo dictada por el juez federal subrogante de Margarita Gudiño de Argüelles, Oscar Temis⁷⁰. El juez, que se encontraba presente en la zona, estaba fuertemente custodiado por un grupo de gendarmes, negándose a abrir cualquier tipo de negociación con los autodenominados fogoneros.

⁷⁰ Los gendarmes venían comandados por Eduardo Jorge, represor vinculado a Domingo Bussi, responsable de las desapariciones, torturas y asesinatos de militantes políticos/as, sociales y sindicales en la provincia de Tucumán durante la dictadura militar de 1976-1983.

En ese momento menos de cien personas, según informaran los diarios, se encontraban en las barricadas. En pocos minutos la gendarmería, fuertemente pertrechada, logró despejar la ruta 22, haciendo uso de una topadora, un camión hidrante, perros, balas de plomo y gases lacrimógenos en desmedida cantidad frente a los fogoneros que intentaban resistir su avance con piedras, ondas y bombas molotov.

Luego, los gendarmes invadieron los barrios de ambas localidades, mientras la jueza penal de Cutral Co, Beatriz Martínez, ordenó a la policía provincial sumarse a la represión, actuando asimismo sobre la ruta provincial 17 que, al menos en lo formal, estaba vedada a la intervención de gendarmería. Cuando los gendarmes entraron en los barrios se encontraron con las mujeres, esas mismas que un año antes los habían enfrentado en la ruta. Fue precisamente la ferocidad de la represión lo que selló una participación que hasta allí se había mostrado reacia.

Arcelia, que como se recordará fue una activa participante de la pueblada de 1996, no se involucró en lo que acontecía hasta que las acciones de la gendarmería la condujeron a entrar de lleno en el conflicto: “Yo estuve, yo fui. Cuando ingresa gendarmería, ellos ingresaron en Plaza Huincul haciendo una pinza. Ingresaron una parte por la ruta, otros tomaron por la orilla del zanjón y otros por el Ferrocarril [...]” Lo que había llamado la atención de Arcelia esa mañana era el ruido de los disparos: “Yo estaba parada en la esquina de mi casa, mi casa es justo una cuadra de allí. Y le digo a mi marido “no se te ocurra salir”. Era una batahola”.

Desde hacía años el esposo de Arcelia, un ex ypefeano, sufría una enfermedad cardíaca y la forma en que él pudiera reaccionar ante lo que estaba sucediendo la preocupaba aún más. Sin embargo, ni la preocupación por la afección de su marido ni el temor a la represión le impidieron abrir las puertas de su casa para ayudar a la gente que venía escapando de las balas y los bastonazos: “¡¡¡No te imaginas lo que fue!!! Senté a mi esposo en un sillón y entraron 35 personas dentro de mi casa, que hasta el día de hoy no sé quiénes son y tampoco me interesa, porque yo abrí mi casa para que ingresaran.” Violando todo principio legal, la gendarmería no sólo avanzaba por las calles de los barrios sino que tiraba gases lacrimógenos dentro de las casas, golpeando a cuanta persona se pusiera enfrente. Como continuó narrando Arcelia: “Yo tuve que tener 15 días mi casa ventilándose. Todo, todo, porque tiraron gases lacrimógenos y estábamos en mi casa. Arriba del techo, por una ventana, en el patio. A una chica que iba a llevar a su papá al hospital, en un jeep, la sacaron por el parabrisas”. Pese a todo, Arcelia siguió arriesgándose: “Yo salía a atender gente, después de que ellos pasaron, porque estaban golpeados, estaban dañados”.

Su explicación de por qué la gendarmería había actuado con tanta ferocidad remitía explícitamente al enfrentamiento anterior, en junio de 1996: “Pero ellos querían hacer eso. No podía ser que se hubieran ido la primera vez con el rabo entre las patas, entonces era cuestión de eso”. Así, la crueldad utilizada sólo podía explicarse, para ella, como venganza de la gendarmería por haberse visto obligada a retirarse en la pueblada de 1996.

De igual manera actuaron los gendarmes en una de las barriadas más populares de Cutral Co, el barrio de las “500 viviendas”. Sólo que allí corrieron peor suerte. Susana es una

mujer de 60 años, hija de un obrero metalúrgico militante del Partido Comunista y una mujer entrerriana “con mucha memoria” que durante años militó en la Unión de Mujeres Argentinas (UMA). Susana es enfermera universitaria y perito mercantil. Cuenta en su historia con una larga experiencia de participación política y gremial que alguna vez, en 1974, la llevó a ser delegada de la lista marrón de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe⁷¹. A Susana le encanta hablar y explicar detalladamente cómo fue toda su vida. Ella participó activamente en la pueblada del 96 y también en el corte de rutas del 97. Pero su narración cobra un ritmo vertiginoso y entusiasta cuando evoca de qué manera ella, sus vecinas y vecinos del barrio de las “500 Viviendas”, expulsaron a la Gendarmería de allí. “Cuando empezaron a reprimir, yo estaba en Plaza Huincul, en la biblioteca Carmen Funes. Y me apersono porque estaban reprimiendo en el puente de Plaza [Huincul] muy, muy, pero muy fuerte, y entonces queríamos parar todo esto de alguna forma. [...] Y un compañero mío, teníamos una chatita [camioneta], y Viviana, esta chica que está en canal 2, andaba con las cámaras y nos dice: “por favor ¿me llevan urgente? porque no tengo con qué ir. Y vinimos para acá, a mi barrio. Cuando llegamos era un desastre, algunos maestros se estaban replegando, viniéndose para la ruta 22 y ya los gendarmes habían entrado por todo el carril. [...] Yo me vine después de lo de Teresa [Rodríguez]. Eso fue como a las diez. Y avanzaban los gendarmes, [entonces] Flavia, Susana, el marido de Flavia, y el de Susana y yo nos fuimos a piedrar y a resistir en el barrio a los gendarmes. Y nos tiraban gases para este lado, entonces salimos para el otro lado y una vecina le tiró un piedrazo tan bien dado que al tipo le bajó los pantalones. [...] Nos tiraban en los balcones, pero no se la llevaron de arriba. ¡¡¡Nos tienen terror!!!! Se les dio con todo, se replegaron ellos porque el pueblo salió todo a la calle. Y ellos pararon la represión de cagones. Ellos con pañuelos blancos la pararon, porque no los dejamos hasta que se fueron. Una vecina de por allí [estaba] calentando aceite. Entonces yo salí por acá y le dije “¡¡¡calienten aceite!!! Si quieren entrar tirémosle por los balcones el aceite hirviendo”. Ellos nunca creían que nos íbamos a defender.”

En ese sentido, si la represión se había desatado sobre las rutas y ganado terreno luego dentro de las propias localidades, la reacción de las y los pobladores cambió cualitativamente el desarrollo de la misma, tornando al cazador en presa. Pero lo significativo no reside solamente allí sino en el protagonismo que las mujeres nuevamente pusieron al descubierto, colapsando una vez más lo que se supone hace a las características de su género.

Generalmente se espera que las mujeres rehuyan el uso de la violencia, los enfrentamientos físicos, o las situaciones donde éstos puedan producirse, todo esto debido a sus (in)capacidades biológicas y/o culturales. De otro lado, en ocasiones y por las mismas razones, la presencia de las mujeres en esta clase de escenarios es vista como una posibilidad de atemperar o frenar la acción represiva. Sometidas a la pesquisa histórica, estas concepciones resultan difícilmente sustentables o exigen, al menos, ser colocadas en contexto.

⁷¹ La lista marrón era una lista antiburocrática y combativa que ganó la dirección del gremio metalúrgico de Villa Constitución a fines de 1974 y que sufrió una dura represión por parte del gobierno de María Estela Martínez de Perón, con la complicidad de la conducción de la dirigencia nacional de la UOM, el 20 de marzo de 1975.

En primer lugar, las mujeres no constituyen un universo homogéneo. Sus capacidades para enfrentar las situaciones antedichas dependen de sus experiencias sociales, es decir, de los saberes previamente adquiridos a partir de una pertenencia en la que se involucran la clase, el género y la raza⁷². Valga señalar aquí que la reacción de las mujeres maestras agremiadas en ATEN y las mujeres que participaron de la pueblada del 96, cuyas características sociales ya han sido analizadas, fue sustantivamente distinta ante un escenario similar. Asimismo, el acceso al uso de la violencia física por parte de las mujeres guarda también profundas relaciones con sus adscripciones políticas⁷³.

En otros momentos, el imaginario socialmente construido en torno a su “debilidad”, ha sido utilizado concientemente por ellas como herramienta para transformar esa debilidad en fortaleza y dar continuidad así a sus acciones⁷⁴. Y algunas veces, pero solamente algunas, su presencia masiva ha sido efectiva para evitar la represión⁷⁵.

Por último, las acciones reactivas de las mujeres ante la violencia también se imbrican con los intereses que ellas sienten que están en juego. Cuando lo que se pone en peligro es la vida de vecinos/as, padres, madres, hijos/as, su rol como garantes de la reproducción comunitaria actúa como resorte para el enfrentamiento contra quienes provocan ese peligro. Y esto fue lo que sucedió en Cutral Co y Plaza Huincul.

Ante todo ello, el juez Temis se vio obligado a ordenar el repliegue de la gendarmería para favorecer la tregua que de hecho se impuso, mientras declaraba a los medios de comunicación locales que ninguno de los gendarmes y policías que actuaron en la represión había utilizado balas de plomo. Sin embargo, una foto publicada por el diario *Río Negro*⁷⁶, mostraba a un policía disparando con una pistola calibre 9 milímetros.

Pocas horas después, los habitantes de ambas localidades levantaron nuevas barricadas sobre la ruta 22 y organizaron una asamblea en la torre de YPF, en el ingreso de Plaza Huincul. Allí se formó una comisión compuesta por once personas –tres mujeres y ocho varones-, cuya misión era entregar un petitorio elaborado colectivamente “al juez cuando venga a desalojarnos”⁷⁷. Este petitorio contenía 6 puntos entre los cuales estaban: la

⁷² Estos saberes, como se puede observar, tienen también su anclaje en los conocimientos adquiridos en la cocina.

⁷³ Diversas investigaciones históricas realizadas sobre el desarrollo y composición de las organizaciones guerrilleras en la Argentina durante el período 1966-1976, dan cuenta de la elevada presencia de las mujeres en las mismas. Por otra parte, en un excelente trabajo, Débora D’Antonio ha demostrado de qué manera, contrariamente a lo que se creía, las mujeres también han participado como torturadoras, por ejemplo, en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar en la Argentina. D’Antonio, Débora: “Mujeres, complicidad y Estado terrorista. Estudios críticos sobre la historia reciente. Los ’60 y los ’70 en Argentina”. En: Cuaderno de Trabajo Nro. 33. Centro Cultural de la Cooperación. Buenos Aires, diciembre de 2003.

⁷⁴ Ver para ello Kaplan, Temma: *Gender Identities and Popular Protest*. Mimeo.

⁷⁵ En ocasión del corte de rutas de mayo de 1997 en General Mosconi, un gendarme sostuvo que la causa por la cual no reprimieron fue que: “en el corte había solo mujeres y niños”. Ver diario *El Tribuno*, 10 de mayo de 1997.

⁷⁶ Diario *Río Negro*, 13 de abril de 1997.

⁷⁷ idem ant.

libertad de todos los detenidos sin que medie causa judicial; garantías de no represión en el futuro; la investigación de la muerte de Teresa Rodríguez; el cumplimiento de los puntos del acuerdo de 1996; la creación de puestos de trabajo; la derogación de la Ley Federal de Educación. Es interesante señalar, respecto de este último punto, que pese a la retirada del gremio de la confrontación, los y las pobladores/as sí mantuvieron la reivindicación docente como parte de las cuestiones a ser exigidas en la negociación.

Mientras en una movilización organizada en Cutral Co ese día, 15.000 personas salieron a la calle “pidiendo la cabeza del gobernador”⁷⁸, en Neuquén capital una nueva marcha de las antorchas recorría las calles repudiando la represión y la muerte de Teresa Rodríguez. Simultáneamente, la dirigencia de ATEN era convocada por el gobernador Sapag para llegar a un acuerdo, cosa que ocurrió el mismo sábado 12 de abril por la noche.

Crónica de un final no anunciado: el epílogo del paro docente y el levantamiento del corte de rutas:

El acta firmada por el gobernador y las/los dirigentes sindicales *ad referendum* de las asambleas docentes que se realizarían al día siguiente, estipulaba el levantamiento del paro a cambio del compromiso por parte del gobierno de no descontar de los sueldos la mitad de los días de paro -que para esas alturas ya alcanzaba a 33 días-, mantener las jefaturas de departamentos y el funcionamiento de los talleres en las escuelas así como las horas programáticas de los docentes de educación física, lo cual equivalía a recuperar el puesto de trabajo de 1000 docentes⁷⁹.

Aunque el levantamiento del paro se realizó recién el 16 de abril, que el gremio docente comenzara las tratativas con el gobierno el mismo día de la muerte de Teresa Rodríguez provocó duras críticas y acusaciones de traición por parte de los y las pobladoras de Cutral Co y de activistas de organizaciones políticas y otras corrientes sindicales, tales como la Corriente Clasista y Combativa. Así, mientras el sindicato docente encaraba estas negociaciones con el gobierno provincial, los cortes de rutas en Cutral Co y Plaza Huincul continuaron.

Sapag intentaba negociar ambas situaciones por separado. Si las cosas estaban encarriladas en lo referido a la huelga de ATEN, era necesario entonces, abrir una vía de acuerdo con los habitantes de las comarcas petroleras. Ese acuerdo llegó días después, el 18 de abril, cuando una comisión de representantes de la Asamblea de Cutral Co y Plaza Huincul, conformada días atrás, firmó nuevamente un pacto con el gobernador Sapag, en el cual se aprobaron 9 de los 16 puntos contenidos allí. Entre ellos se contaban el compromiso de investigar la muerte de Teresa Rodríguez (hecho por el cual 30 policías fueron sumariados meses después) y la entrega de pensiones para sus hijos; 500 puestos de trabajo en YPF; traspaso del yacimiento gasífero *el Mangrullo* a las municipalidades para su administración; 1200 subsidios del Plan Trabajar; la no toma de represalias y cierre de las

⁷⁸ Idem ant.

⁷⁹ Idem ant.

causas iniciadas a las personas detenidas; jubilación anticipada para los ex ypefeanos. A partir de ese momento, los cortes fueron levantados⁸⁰.

Ahora: si bien el gremio docente sufrió un grave desprestigio ante los ojos de los habitantes de las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul, internamente la conducción de ATEN y en particular la figura de Obregón, salió del conflicto ampliamente fortalecida. Liliana Obregón se presentó como candidata a la conducción provincial y ganó las elecciones del año siguiente con un nivel de votación muy elevado respecto de elecciones anteriores.

En cuanto a la situación organizativa en las comarcas petroleras, el resultado fue muy distinto. Aunque se conformaron comisiones de seguimiento para controlar el cumplimiento de los puntos pactados, las mismas se diluyeron en poco tiempo y no emergió ninguna organización que continuara o plasmara el nivel de participación social alcanzado durante los días del conflicto. Esto ha sido sustantivamente diferente de otras experiencias que, con características de movilización similares, emergieron posteriormente. Tal fue el caso, por ejemplo, de General Mosconi y Tartagal, en la provincia de Salta, donde las movilizaciones sociales que dinamizaron los cortes de la ruta nacional Nro. 34 en mayo de 1997, dieron lugar al fortalecimiento y visibilización de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), organización nacida en 1996 y que actualmente sigue vigente.

Sin embargo, los acontecimientos de Cutral Co y Plaza Huincul durante 1996 y 1997 marcaron un punto de inflexión en la resistencia al modelo neoliberal. Los cortes de ruta, las prácticas asamblearias con participación directa que se desarrollaron en ellos, la capacidad de enfrentamiento ante la llegada de las fuerzas represivas, fueron el producto de una acción colectiva que obligó a los sectores dominantes a sentarse en la mesa de la negociación con aquellos y aquellas a quienes creían absolutamente vencidos por la expropiación de su política. Fue en esas confrontaciones, además, donde comenzó a construirse una identidad que torcía el “*ser* desocupado/a” a “*estar* desocupado/a” y “*ser* piquetero/a”. En esa dirección, volverse piquetero/a trocó la resignación en capacidad de dar batalla, en subjetividades colectivas beligerantes. Fue allí donde las mujeres se apropiaron en buena medida de la protesta social y la modelaron con su propia mano. Salieron a las rutas enarbolando el discurso de la defensa de sus maridos o de sus hijos/as, como en muchas otras ocasiones en la historia de nuestro país. Y sus voces se oyeron no solamente en los pasillos donde se deciden decretos, “ajustes” sociales, o “globalizaciones”. También las oyeron mujeres de otras latitudes que como Bety, Arcelia, Sara, Magdalena, Cecilia, Stella Maris, Laura y tantas otras, se aventuraron a intentar cambiar su propio destino y el de su comunidad.

⁸⁰ Un grupo de fogoneros volvió a cortar la ruta el 28 de abril. Sin embargo, la protesta fue rápidamente levantada a partir de la promesa del intendente de Cutral Co Daniel Martinasso de entregar más planes sociales. Por otra parte, Martinasso duró poco tiempo más al frente del ejecutivo local. El 30 de mayo de ese año, se le inició un juicio político, se lo destituyó del cargo y se convocó a elecciones que se realizarían dentro de un plazo de 90 días. En esas elecciones, la Alianza, constituida recientemente a partir de un acuerdo entre la UCR y el FREPASO, y justamente en Cutral Co, obtuvo el 55% de los votos, resultando victoriosa cómodamente ante el Movimiento Popular Neuquino, que sólo consiguió el 35.85% de los votos. Así, Carlos Benítez, un hombre de la UCR, pasó a ser el nuevo intendente de Cutral Co.

Sección 3:

Las mujeres en los cortes de ruta de Salta (1997-2001)

Introducción:

Cuando las llamas de las barricadas de Cutral Co y Plaza Huincul aún no habían terminado de apagarse, un nuevo frente de conflicto se abrió para el gobierno nacional, esta vez en el norte del país. En esta ocasión fueron los y las pobladoras de las ciudades de Tartagal y General Mosconi, en la provincia de Salta, quienes protagonizaron nuevas contiendas intentando poner coto a la embestida neoliberal. Para ello, retomaron la senda abierta por las comunidades neuquinas. De tal modo, entre el año 1997 y 2001 la ruta nacional Nro. 34, que atraviesa ambas ciudades y conduce a la frontera con Bolivia, fue cortada –al menos– en cinco oportunidades.

La primera de ellas, en mayo de 1997, estuvo primordialmente impulsada por propietarios de comercios y pequeñas empresas madereras de Tartagal. En pocas horas, esta medida concitó la adhesión tanto de los y las desocupadas de General Mosconi, localizada 8 km al sur de la anterior, como de otras localidades pertenecientes al Departamento de General San Martín, del que ambas ciudades forman parte.

El segundo corte, ocurrido en diciembre de 1999, tuvo como antecedente inmediato el despido de empleados/as municipales en Tartagal, cuestión que provocó nuevamente la intervención de los habitantes de General Mosconi que, por solidaridad en principio y con reivindicaciones propias además, volvieron a ocupar la ruta.

Los siguientes, en mayo y noviembre del año 2000 y junio de 2001, conllevaron tanto el desplazamiento geográfico como social en la iniciativa de los cortes. La ciudad de General Mosconi se tornó, pues, la punta de lanza de estos enfrentamientos, mientras que el rol protagónico pasó a las desocupadas y desocupados de esa localidad, organizadas/os en la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), creada en el año 1996.

Los orígenes de estas protestas se nutrieron de múltiples afluentes, aunque en términos estructurales la razón de mayor peso se enmarcó en las consecuencias provocadas por la privatización de YPF que, al igual que en el caso patagónico, constituyó el motor impulsor del desarrollo social y económico regional. El traspaso de la explotación del gas y el petróleo de la Cuenca Noroeste, tercera en importancia del país, a manos de las empresas privadas *Refinor S.A.*, *Pluspetrol S. A.* y *Tecpetrol S. A.* en 1992, cuyo impacto inmediato redundó en el despido de más de 3.500 trabajadores en la zona, desmoronó la vida de los habitantes del departamento sanmartiniano. Así, por ejemplo, la desocupación en Tartagal y General Mosconi ascendió hasta afectar al 65% de sus pobladores.

A su vez, de la mano de la privatización también sucumbieron los beneficios sociales que la población poseía: hospitales, centros deportivos, cines, escuelas, que florecieron al amparo de la petrolera estatal, se deterioraron o incluso, desaparecieron. De tal suerte, por ejemplo, General Vespucio, conglomerado urbano de 10.000 personas que pertenece al municipio mosconense y que otrora fuera el asentamiento del personal jerárquico de YPF, vio cerrar las puertas del hospital montado por la empresa estatal y al cual acudía todo el personal de YPF y sus familias. Nada lo reemplazó.

Por otra parte, a la pérdida del trabajo y de beneficios sociales, se sumaron otras carencias. La carestía de las garrafas de gas –puesto que la mayoría de la población de General Mosconi no posee gas natural-, de la prestación del servicio eléctrico o la falta de agua potable, minaron todavía más las condiciones de vida. Por lo tanto, las reivindicaciones presentes en el estallido de los conflictos fueron variadas, al igual que los sectores sociales involucrados y el blanco de las luchas. En los diferentes cortes, empresas privadas, gobiernos municipales, gobierno provincial y nacional fueron, juntos o por separado, objeto de las demandas de los y las manifestantes.

Ante ello, los sectores política y económicamente dominantes articularon respuestas en las que la criminalización de la protesta se convirtió en el común denominador. Y si bien en muchas circunstancias se vieron obligados a emprender el camino de la negociación, casi siempre lo hicieron luego de apelar al uso del aparato represivo. De tal modo, en Salta el Estado argentino ha sido responsable de los asesinatos de cinco manifestantes, ocurridos durante los cortes de los años 2000 y 2001 en General Mosconi; de la creación de decenas de causas penales contra activistas de General Mosconi y Tartagal; de persecuciones y detenciones ilegales; del ejercicio de la tortura contra detenidos/as en las contiendas, y de la virtual ocupación de General Mosconi por fuerzas represivas en varias oportunidades.

Ahora bien: en todos estos conflictos las mujeres estuvieron masivamente presentes. Más aún: en algunos casos, los iniciaron. Ex trabajadoras de YPF, empleadas domésticas, esposas de ypefeanos, trabajadoras por cuenta propia, maestras, desocupadas, se volcaron a la ruta para torcer la miseria que la política menemista les deparaba. Poco les importó el escaso apoyo que a veces esta actitud suscitaba en sus maridos, las amenazas del Estado, o las inclemencias del clima. Salieron de sus casas decididas a dar batalla. Lo hicieron como hijas y como madres y en algún momento, ocupando la plaza de General Mosconi para exigir la finalización de las persecuciones y la liberación de los detenidos/as, conocieron a otras madres que desde hacía años se habían adueñado de otra plaza reclamando la aparición con vida de sus hijos e hijas. Y allí, aguantando en la “Plaza del Aguante”, los pasados de unas y otras se fundieron en un único presente⁸¹. Las páginas que siguen intentarán dar cuenta, entonces, de cómo esas experiencias femeninas fueron demarcando el derrotero de la resistencia social en el norte de la Argentina.

⁸¹ En junio de 2001 los y las piqueteras de General Mosconi se instalaron con carpas en la plaza local, en protesta por la represión y las persecuciones desatadas sobre ellos/as el 17 de ese mes. Allí permanecieron durante cinco meses sosteniendo lo que denominaron la “Plaza del Aguante”. En los primeros días de su establecimiento Hebe de Bonafini y varias madres de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se presentaron allí solidarizándose con ellas/os. Esta presencia ha dejado una huella imborrable en la memoria de quienes vivieron este acontecimiento.

El corte de mayo de 1997:

En la madrugada del 8 de mayo de 1997, los y las pobladoras de Tartagal y General Mosconi comenzaron a levantar barricadas sobre la ruta nacional Nro. 34, a la altura de esta última localidad. Reclamaban la presencia en la zona del gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, la creación de fuentes de trabajo, el pago de salarios adeudados al personal municipal tartagalense, y la sanción de una ley de fronteras que creara una zona franca para el intercambio comercial con Bolivia.⁸²

Rápidamente, el corte se extendió a otras localidades departamentales, atravesadas también por la ruta 34. De tal manera, las comunidades de Aguaray y Salvador Mazza, al norte de Tartagal, y Coronel Cornejo, al sur de General Mosconi, adhirieron a la protesta.

Durante 7 días miles de manifestantes permanecieron ocupando la ruta hasta que finalmente, un acuerdo firmado con el gobierno provincial el 15 de mayo en las oficinas de la empresa petrolera privada *Tecpetrol S. A.*, permitió el levantamiento del corte. Entre los puntos que constituyeron el acta, constaban los siguientes. Por un lado, el gobierno se comprometía a entregar 5.000 subsidios de desempleo distribuidos de esta forma: 1.000 subsidios de 220 pesos mensuales por un año; 3.000 subsidios del plan Trabajar por un año y 1.000 por seis meses por 220 pesos mensuales. A ello se sumaba el compromiso de las empresas petroleras privadas para la apertura de 1.400 puestos de trabajo, si bien 900 de ellos serían en calidad de temporarios. También se efectuaría el pago de un sueldo de los tres atrasados a los empleados municipales de Tartagal en los siguientes 10 días y no se descontarían del salario los días a aquellos maestros que hubieran adherido a la protesta. Por otro lado, se llevaría a cabo la duplicación del presupuesto para los comedores escolares y la instalación de los mismos en aquellas escuelas que no los tuvieran, a la par que se invertirían 4 millones de pesos en la construcción de viviendas. En cuarto lugar, se acordaba un plazo de plazo de 10 años a los deudores del Banco Nación y la ampliación del plazo a los deudores hipotecarios del Banco Hipotecario. Asimismo, se crearía un fondo provincial de inversiones de 5 millones de dólares con las regalías de los hidrocarburos. Por último, se realizaría la entrega de tierras fiscales a comunidades aborígenes⁸³.

Las cuestiones concertadas en este pacto pusieron de manifiesto los múltiples reclamos que sustentaban la protesta a medida que ésta fue cobrando forma. También dieron cuenta del heterogéneo abanico de sectores sociales que convergieron en ella. En tal sentido, durante la confrontación emergieron una serie de tensiones devenidas de las diferencias de clase y de género existentes entre sus protagonistas. Las mismas se revelaron tanto en la distribución espacial de las y los piqueteros a lo largo de las barricadas que conformaban el corte, como en las negociaciones con el gobierno, y no quedaron ocluidas en la conclusión del mismo. Así, no todas las personas que se hallaban ese 15 de mayo en la ruta 34 esperando los resultados de las transacciones con los representantes del gobernador salteño estuvieron de acuerdo con lo obtenido. Entre las voces disidentes se encontraban las de un grupo de mujeres desocupadas que, enteradas de que debían volver a sus casas, sostuvieron: “Hemos estado acá desde el primer día [en alusión al corte en General Mosconi]. Éramos

⁸² Diario *Río Negro*, 9 de mayo de 1997.

⁸³ Diarios *La Nación* y *Página 12*, 16 de mayo de 1997.

quince mujeres y diez hombres los que levantamos la barricada. Y si ahora los hombres han negociado, será porque no las tienen puestas como debieran”⁸⁴.

Las mujeres no habían formado parte de la comisión de delegados de los y las manifestantes que ese día se reunieron con los funcionarios oficiales y el obispo de Orán, Mario Cargniello, actuante de mediador entre las partes. Tampoco temían las amenazas vertidas por el juez federal interviniente, Abel Cornejo, acerca del uso inminente de la represión para lograr el desalojo de la ruta. Y, de igual manera que las mujeres de Cutral Co y Plaza Huincul, sostenían no solamente haber estado entre las primeras personas que comenzaron el corte, sino también haber superado en número a los varones. De todo esto derivaba, entonces, la acusación de cobardía lanzada por algunas de ellas a quienes suscribieron el acuerdo con los funcionarios del gobierno provincial.

Para comprender esas diferencias y las contradicciones sociales que ancladas en ellas se corporizaron en el devenir de la contienda, es preciso detenerse, por tanto, en el escenario en que la misma se produjo.

Creciendo con el oro negro:

*“Nosotros vinimos a Mosconi con mi marido y mis hijos porque acá había mucho trabajo. Vinimos desde Formosa, pero eso fue hace muchos años.”
Marina, General Mosconi.*

Tartagal y General Mosconi constituyen el conglomerado urbano más importante de la provincia de Salta, luego de la ciudad capital, de la cual distan 360 km aproximadamente. Ambas ciudades son parte del Departamento de General San Martín, localizado al norte de Salta capital y cuyo límite septentrional demarca la frontera entre Bolivia y la Argentina⁸⁵. Sus historias se encuentran enlazadas no sólo por la escasa distancia geográfica que las separa o por que la misma ruta las franquea, sino porque las dos debieron su crecimiento y prosperidad a la explotación del oro negro.

Los orígenes de Tartagal, que cuenta actualmente con 60.000 habitantes, se remontan a comienzos de la década de 1920, con la llegada del tramo del ferrocarril Belgrano. Su nacimiento fue fijado para 1924 y, creado el departamento de General San Martín en 1948, se declaró a Tartagal como su capital el año siguiente⁸⁶.

La producción maderera y petrolera constituyó el motor del incipiente desarrollo local. Particularmente, las exploraciones en busca de riquezas hidrocarburíferas, primeramente a cargo de la compañía norteamericana Standard Oil, impulsaron en buena medida el desarrollo del trazado urbano de la ciudad. Entre otras cosas, esa empresa abrió allí centros deportivos, de salud e incluso una escuela para enfermeras. Hacia 1950, la firma

⁸⁴ Diario *Página 12*, 15 de mayo de 1997.

⁸⁵ El Departamento de General San Martín tiene como ciudad cabecera Tartagal y su territorio abarca, además del municipio de General Mosconi, las ciudades de Embarcación, Aguaray, Salvador Mazza y General Ballivian.

⁸⁶ Este departamento se creó en base al desmembramiento del más antiguo departamento de Orán.

norteamericana abandonó la zona dejando las instalaciones que había erigido en manos del Estado Nacional. Parte de ellas fueron cedidas entonces al ejército y parte a YPF.

General Mosconi, cuyo municipio alberga a 20.000 pobladores aproximadamente, es también una de las más recientes poblaciones de la provincia de Salta. Nacida al calor de la producción forestal, recibió originariamente el nombre de “El Noventa” porque el asentamiento coincidía con el kilómetro 1.690 de la línea del ferrocarril Belgrano, habilitada en 1926. Sin embargo, su crecimiento se aceleró a partir de la explotación del petróleo, descubierto en la zona hacia 1911. Si bien Standard Oil ganó la delantera en la obtención de concesiones de tierras que contaban con oro negro a través de la influencia de los empresarios de la compañía sobre sucesivos gobernadores provinciales⁸⁷, YPF, de la mano del general Enrique Mosconi, obtuvo el acceso en 1927 a los recursos petroleros del lugar mediante la transferencia a sus manos del pozo petrolífero “República Argentina” – propiedad de Francisco Tobar-, conocido luego como Campamento Vespucio⁸⁸.

El inicio de las construcciones de las dependencias de YPF y el incremento de sus actividades productivas conllevaron la migración de varios hombres y mujeres que llegaban a Campamento Vespucio en busca de trabajo. Los primeros trabajadores del petróleo emplazaron sus viviendas en forma precaria, hasta que YPF comenzó a construir pabellones en los que se alojaban separadamente varones y mujeres, así como también espacios para la residencia de enfermeras y maestras solteras que acudían contratadas por la petrolera estatal. Posteriormente, YPF edificó complejos de viviendas más confortables donde las familias que las habitaban contaban, asimismo, con la exención del pago de impuestos municipales y servicios públicos. Poco a poco, entonces, Campamento Vespucio llegó a conformar una pequeña ciudad con vastas comodidades para los empleados, tales como instalaciones deportivas y sociales, el mercado, la proveeduría, una escuela técnica y de manualidades, y un hospital de alta complejidad que concentraba la atención de todas las especialidades médicas. Finalmente, la localidad se convirtió en la residencia del personal jerárquico de la empresa, generalmente técnicos e ingenieros, en tanto los y las trabajadores/as se asentaron en las afueras, en el lugar donde actualmente se encuentra emplazada la localidad de General Mosconi. Esta última fue convertida en municipio en 1946, quedando comprendidas dentro de su territorio Campamento Vespucio y Coronel Cornejo.

Pese a las diferencias que existían entre el modo de vida y los salarios obtenidos por el personal jerárquico residente en Vespucio y los obreros o empleados/as de YPF, el ingreso de estos últimos permitía sostener cómodamente a la familia.

⁸⁷ Por ejemplo, el gobernador conservador salteño Joaquín Corbalán, triunfante en las elecciones de 1925, concedió a la firma norteamericana 55.000 hectáreas circundantes a Tartagal, con lo cual Standard Oil dio comienzo a la explotación de su primer pozo productor en la zona en 1926. Véase Carl Solberg: *Petróleo y nacionalismo en la Argentina*. Buenos Aires, Hyspamérica: 1986.

⁸⁸ A ello se sumaron, asimismo, 29 concesiones de tierras que este ciudadano español retenía desde 1907. Por otro lado, la lucha entre Standard Oil y la petrolera estatal por el control de la Cuenca del Noroeste tuvo una ardua trayectoria. Un detallado análisis sobre la misma puede verse en el clásico libro de Carl Solberg: *Op. Cit.*

Yolanda nació en Tartagal hace 56 años. Desde muy pequeña trabajó limpiando casas y las dificultades de su vida familiar la obligaron a cambiar de domicilio varias veces. Sus deseos de estudiar la llevaron a terminar la escuela primaria y secundaria. Entre 1970 y 1993, año en que la despidieron, trabajó para YPF. Al principio era trabajadora contratada y según relató: “Primero ingresé como cuidadora en la pileta de natación, y después pasé a un sector que llamaban “refrigerio” y yo estaba como moza. Y justo había un concurso de categorías y yo me presenté. Así que en el año 71 pasé al área administrativa, como secretaria. Y estuve ahí en esa área, en la administrativa.”. Luego de 5 años, se transformó en empleada efectiva. Su elevado salario, al cual Yolanda le agregaba lo que obtenía trabajando horas extras, le permitió sostener confortablemente a sus dos hijos y a su hija. De hecho “me pude comprar un auto cero kilómetro y cuando llegaban las vacaciones yo me iba con mis hijos y disfrutaba de toda la plata. [...] Me fui a distintos lugares del país: a Bariloche, a Mar del Plata, a Mendoza. Y paraba en los hoteles de YPF y los pasajes me los daba YPF [...]” Pero lo más importante que YPF le había proporcionado, según ella, fue la posibilidad de salvar la vida de su hija menor que, cuando tenía seis años, enfermó de leucemia. YPF no sólo pagó el traslado de la niña y de Yolanda en avión a Buenos Aires. También se hizo cargo de los costos del tratamiento y continuó abonando el salario íntegro de Yolanda durante los 4 años que permaneció en la Capital Federal.

En ese sentido, la existencia de YPF, de manera similar a lo ocurrido en Cutral Co y Plaza Huincul, no sólo generaba puestos de trabajo bien pagos, sino que facilitaba ampliamente las tareas de crianza y cuidado familiar para las mujeres, a través de los beneficios sociales que la empresa proveía.

Por otro lado, la presencia de la empresa estatal impactaba en la supervivencia de otros sectores de la población cuyo trabajo no estaba directamente vinculado con la explotación petrolera. María es una mujer boliviana que llegó a la Argentina cuando tenía 22 años. Hoy, a los 60, sigue viviendo en General Mosconi y constituye uno de los pilares de la UTD. Si algo puede definirla, es la contagiosa risa que se entremezcla en la narración de su vida, plena de anécdotas y contradicciones políticas que la tía Mari, como muchos la llaman cariñosamente en Mosconi, no se molesta en ocultar. Estudiante universitaria en su país natal, donde llegó a cursar tres años de abogacía, María proviene de una familia de propietarios finqueros vinculados también con la explotación petrolera en Santa Cruz de la Sierra. Con importantes contactos con la clase política boliviana, ella tuvo en el pasado una activa militancia universitaria que, me contaba entre carcajadas, realizaba en la “falange socialista de derecha” de Sucre. Según ella relatará: “Yo vine de paseo a Mosconi y me quedé. Hice muy buenas amistades aquí. [...] Trabajaba en una peluquería en Vespucio, atendiendo a las damas de los ypefeanos [a partir de] una licitación que ganamos yo y una señora. Así que estuve trabajando tres años, después terminé y tuve mi peluquería de barrio más sencillita y con eso viví [...]”. María, como muchas otras mujeres y varones, había podido instalarse en General Mosconi y vivir cómodamente a partir de la bonanza económica que YPF promovía en la zona. Ello no implicaba, sin embargo, el desconocimiento de las jerarquías que el modelo ypefeano profesaba.

Para María, las “distancias” que separaban a las mujeres de los ypefeanos que vivían en Vespucio, “gente que se creían de alta alcurnia” o “las damas” –acorde a sus propias palabras-, y el resto eran evidentes. Esas diferencias, manifiestas claramente en el paisaje

urbano y el tipo de construcción residencial de una y otra localidad, forjaban un cierto recelo entre ambos tipos de mujeres que incluso se corporizaba en la forma en que las no ypefeanas llamaban a las que sí lo eran. Según contara Nené, una mujer que reside en Vespuccio, hija de madre y padre ypefeano y esposa de un ex ypefeano, “[...] para ellas, nosotras éramos las cremitas de chantilly⁸⁹. Siempre decían que nunca íbamos a estar en una lucha por nada, que éramos las narices paradas porque teníamos las cosas resueltas. Pero el tiempo demostró que esto no era así, aunque nuestra vida sí era más fácil en tiempos de YPF que la de ellas [...]”

Pero estas desigualdades comenzaron a derrumbarse al paso de la privatización de la empresa petrolera, a la par que se hundía el bienestar de todos los que vivían en el “mundo ypefeano”.

Cuando ésta se produjo, el 90% de los y las trabajadores de YPF fueron despedidos⁹⁰. De ese total, muchos fueron ubicados por YPF en cooperativas de trabajo que funcionaron durante un año. Pero las nuevas empresas privadas que llegaron a la zona para explotar los pozos que dejara la compañía estatal, no les renovaron los contratos⁹¹. Los pocos que quedaron trabajando en ellas, vieron extender su jornada laboral sin ningún tipo de aumento salarial. Algunos pasaron a trabajar en empresas subcontratistas de las compañías hidrocarburíferas internacionales, pero con un salario muy inferior al alcanzado anteriormente. En ciertos casos, intentaron sobrevivir armando cooperativas de talleres mecánicos o de producción madera⁹². Otros probaron suerte abriendo pequeños locales comerciales con lo obtenido de sus indemnizaciones. Prácticamente todos ellos quebraron: poco y nada se podía vender a una comunidad desgarrada por la desocupación.

Sin embargo y análogamente a lo ocurrido en Cutral Co y Plaza Huincul, la desestructuración del mundo ypefeano en el norte salteño entrañó un impacto genéricamente disímil. Mujeres y varones no vivieron de igual manera este proceso y tampoco fueron iguales las respuestas que unas y otros articularon frente a él. Esto estuvo vinculado, en parte, con las formas de socialización construidas bajo la impronta del modelo ypefeano, donde las relaciones patriarcales que las atravesaron asumieron una textura particular a partir del proceso de trabajo enmarcado en la explotación petrolera⁹³.

⁸⁹ Con ello se aludía al color de la piel que supuestamente que tendía a ser más claro en muchos casos, y que contrastaba con el color más oscuro de las mujeres de General Mosconi.

⁹⁰ Es necesario aclarar que el proceso de privatización de YPF-Yacimiento Norte no contó con la aceptación pasiva por parte de los y las trabajadoras. Por el contrario, entre septiembre y octubre de 1991 realizaron huelgas y movilizaciones que incluyeron cortes de ruta en General Mosconi y el pedido de renuncia del secretario de la seccional de SUPE correspondiente. Empero, no se logró revertir la determinación del gobierno nacional que contaba con el aval, además, de la plana dirigente del SUPE nacional.

⁹¹ Diario *Río Negro*, 9 de mayo de 1997

⁹² Heike Schaumberg sostiene que de las más de 140 cooperativas y Pymes que se crearon en los años posteriores a la privatización, en la actualidad sobreviven apenas 5 y con numerosas dificultades. Heike Schaumberg: *Imaginaciones generacionales de lucha y trabajo en Gral. E. Mosconi, Salta*. Segundas Jornadas de Investigación en Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires 5 y 6 de agosto de 2004. Mimeo.

⁹³ En ese sentido, lo que sostengo es que las relaciones de opresión construidas a partir de la diferencia sexual no sólo son moldeadas dentro de un particular sistema socioeconómico y político, sino que adquieren especificidades acordes con la dinámica laboral impuesta, en el caso que me ocupa, en ciertas ramas de la

De casa al trabajo y del trabajo a casa:

Según lo dicho hasta ahora, la existencia de la empresa YPF determinó tanto el desarrollo económico local como las relaciones e identidades sociales que emergieron bajo su égida. Dentro de estas últimas, los vínculos intrafamiliares, sobre todo los construidos en el seno de la clase trabajadora ypefeana, también tuvieron una talladura específica signada, por un lado, por las condiciones objetivas de la organización de la producción hidrocarburífera. Por el otro, la conciencia fundada en las experiencias, representaciones y percepciones que los obreros ypefeanos en tanto tales y varones, tenían de sí mismos, sus intereses, su ubicación en la estructura social pública y doméstica, y sobre los otros y otras no involucrados/as directamente en el mundo laboral petrolero, fueron determinantes en la construcción de tales lazos. Otro tanto puede decirse, asimismo, de las subjetividades de las mujeres que componían este universo social y del significado que para ellas y para los varones poseía el espacio y el tiempo en el cual entrelazaban sus vidas.

El obrero ypefeano se sabía parte de una empresa estratégica para el desarrollo de la economía argentina, a la par que baluarte del discurso de la soberanía nacional y fundante del “estado de bienestar” local. Asimismo, los elevados salarios y beneficios sociales obtenidos daban pie a un sentimiento de orgullo y superioridad frente a trabajadores de otras ramas productivas y/o de servicios, paralelamente a que amortiguaban la percepción de las contradicciones de clase presentes al interior del proceso productivo petrolero, diluidas también por el hecho de que la empresa fuera propiedad del Estado. Así, si trabajar en YPF “era lo mejor que te podía suceder”, como comentaban algunos de los exypefeanos entrevistados, era la identidad conformada en torno a ser un obrero ypefeano –engranaje de una “comunidad” en la que supuestamente no existían divisiones entre explotadores y explotados-, la que se imponía sobre otras posibles. Y era esa identidad la transmitida de padre a hijo, de modo tal que los esfuerzos de crianza de un trabajador adulto respecto de sus hijos se orientaban a convertirlos, también, en obreros ypefeanos. Mario Reartes, un salteño de 50 años, actualmente referente de la Coordinadora de Ex Trabajadores Ypefeanos, señalaba que había entrado en YPF en 1974, bajo insistencia y gestiones de su padre, un antiguo obrero petrolero: “[...] Anteriormente yo era dependiente de la empresa del correo, así que era parte del estado también. Y en YPF entré gracias a mi padre que me hizo todas las gestiones y siempre me decía que tenía que entrar porque allí se ganaba mucho mejor. Y así, el resto: mi hermano mayor y mi otro hermano también ingresó, aunque el más chico se dedicó a la educación. Prácticamente todo el resto de la familia era ypefeano.”

Distinto era el vínculo de los trabajadores con sus hijas, puesto que los designios en cuanto a su futuro tendían a quedar más bien bajo la tutela materna, y circunscriptos al matrimonio, el empleo doméstico o la formación profesional para tipos de trabajos

producción. Así, por ejemplo, si bien un obrero metalúrgico y un ypefeano comparten atributos de género comunes, el hecho de que la organización de la producción provoque que el ypefeano permanezca fuera de su casa de 15 a 20 días, genera un tipo de vínculo particular con su ámbito doméstico y las personas que lo constituyen.

feminizados (enfermeras, docentes, administrativas), en el caso de aquellas familias cuyos ingresos pudieran sostener los estudios de sus integrantes.

Sin embargo, la relación entre padre e hijos/as distaba de ser fluida puesto que la cotidianeidad de la convivencia estaba enteramente subsumida a los tiempos del proceso laboral, sobre todo para aquellos obreros que trabajaban en los campamentos de exploración y perforación lejanos de la residencia familiar. Estela era aún una niña cuando su familia decidió dejar la Capital Federal e instalarse en General Mosconi, a comienzos de la década de 1960. Su padre había conseguido un puesto en YPF como obrero en el “campamento”. Era escaso, entonces, el tiempo que compartía con ella, su otro hijo pequeño y su esposa, ya que sus tareas lo obligaban a permanecer varios días fuera de su casa. En los recuerdos de Estela sobre su niñez y adolescencia, entonces, era su madre quien ocupaba el centro de la escena, administrando la economía hogareña, suministrando cuidados y atenciones, y supervisando todo aquello que tuviera que ver con las actividades y la educación de Estela y de su hermano. Incluso para ella, la presencia del esposo durante los dos o tres días de descanso que le correspondían, era vivida como una interferencia disruptiva del devenir cotidiano. Según Estela recordara: “Mi papá se iba 15 días y volvía 3, se iba más días y así. Y a veces ya es molesto. Como él tenía el ruido del pozo en los tímpanos, cuando volvía quería silencio y dormía y dormía, y no quería que nadie de la familia esté ahí y nos cambiaba el ritmo de vida. Y los primeros días cuando llegaba era insoportable. Mi mamá terminaba quejándose y nosotros no veíamos la hora de que se vaya.”

Para la madre de Estela, así como para muchas de las mujeres que convivían con los trabajadores, estas prolongadas ausencias masculinas permitían el desarrollo de un importante grado de autonomía en el manejo de sus propias vidas y las de sus hijos e hijas.⁹⁴ Por lo tanto, el retorno del trabajador al hogar, aunque deseado, mudaba esta situación a tal punto que su presencia se convertía en un estorbo. Así reflexionaba María Victoria, una tucumana radicada en Mosconi y casada tempranamente con un obrero petrolero, al recordar que cuando él estaba “te altera el sistema porque vos te ponés los horarios, sabés que estás sola, organizás tu vida, y cuando ellos llegan se interponen con los tiempos. Yo sentía que me ataba”.

Espacio y tiempo constituyen dos variables centrales para desentrañar las claves en las que mujeres y varones de la clase trabajadora connotan sus relaciones conyugales (exista o no contrato formal) y las ligaduras con su descendencia. Y el ámbito en el que discurren y se conectan ambas variables no es, siguiendo a Heidi Hartmann, un agente activo con intereses unificados invariablemente. Por el contrario, aunque aparente unidad creada por el afecto y el parentesco, la familia es también un terreno de lucha configurado por los diferentes intereses de sus miembros a partir de la construcción social de la diferencia

⁹⁴ Es dable aclarar que cuando refiero a la autonomía de las mujeres en su vida y en el cuidado de sus hijos/as lo hago dentro de ciertos límites. La autonomía, en este caso, remite más que nada a cierta independencia del control directo de sus maridos y no, como podría suponerse, a que ellas estuvieran en condiciones, al menos en ese momento, de desarrollar su existencia acorde a sus intereses de género. Ver para la formulación de este concepto y su uso: Molyneux, Maxine: “Mobilization Without Emancipation? Women’s Interests, The State, and Revolution in Nicaragua”, en: *Feminist Studies* 11, N° 2 (verano 1985), págs. 227-254.

sexual-biológica (Hartmann: 2000). Estas divergencias remiten, asimismo, a cuestiones estructurales que exceden los límites de la familia, para engarzarse con el sistema social del cual la unidad doméstica es partícipe.

El capitalismo, como toda organización social e histórica, hunde los cimientos de su existencia en la producción y reproducción de la vida inmediata y su objetivo, a diferencia de lo que ocurre con otros modos de producción, es la expansión del capital. De tal suerte, el capital crece y se reproduce en base a la extracción de plusvalía de los y las trabajadoras asalariadas, quienes, al carecer de la propiedad de los medios de producción, se ven obligados/as a vender su fuerza de trabajo al capitalista a cambio de un salario. La explotación de clase que tal sistema conlleva se articula con una específica opresión de género por lo cual capitalismo y patriarcado se refuerzan y articulan mutuamente. En tal sentido, mientras la esfera de producción de bienes materiales, que son ante todo mercancía, se hace fuera de las paredes en las que habita la familia -el ámbito público-, la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, que también es una mercancía, queda sometida al ámbito doméstico.⁹⁵ Empero, el trabajo contenido en las tareas comprendidas en la producción y reproducción de la fuerza de trabajo y que superan el aspecto biológico de la misma, queda invisibilizado como tal porque, en primer lugar, no es considerado trabajo; además, es “fetichizado” como productor de valores de uso⁹⁶; por tanto no es remunerado y, finalmente, se realiza en un ámbito no concebido como productivo y por una fuerza de trabajo que tampoco es vista como tal: la del “ama de casa”.

En síntesis, los significados atribuidos al espacio ocupado y al tiempo, así como a qué se hace y el valor de lo que se hace, no escapan a las relaciones y tensiones encajadas en la división sexual del trabajo y en la posición desventajosa a la que en la sociedad capitalista son inducidas las mujeres.

Por todo ello me gustaría detenerme aún más en el concepto de espacio. Lo que define un lugar no remite exclusivamente a la localización física basada en un conjunto de coordenadas situadas en un mapa que fijan un territorio preciso y limitado. Como sostiene Linda McDowell “[...] los lugares se definen por las relaciones socio-espaciales que se entrecruzan en ellos y les proporcionan su carácter distintivo [...]” (McDowell, 2000: 16). Lo que distingue una casa de una fábrica no son sus dimensiones, su arquitectura o su emplazamiento, sino lo que existe dentro. Y esto está estipulado por las prácticas sociales que allí se llevan a cabo, las relaciones de poder que son artífices y productos a la vez de esas prácticas, y las marcas de inclusión/exclusión que determinan quién pertenece a un lugar y quién queda fuera, quién tiene legitimidad para actuar en él y quién no. De tal suerte los espacios no son fijos, aunque definen límites y delimitan identidades. Son fluidos y conflictivos justamente porque pese a que en su apariencia son estancos, poseen diversos significados –que incluso pueden ser contradictorios a un mismo tiempo– según las personas involucradas en ellos. Además, representan divergentes jerarquías, sujetas a

⁹⁵ La existencia y oposición entre ambos ámbitos está enlazada con el proceso de acumulación capitalista y la forma en que patriarcado y relaciones de producción capitalistas se moldearon mutuamente.

⁹⁶ Coincido con Cecilia Lipszyc cuando señala que la reproducción es un valor de cambio diferido y no un valor de uso. Ver: Lipszyc, Cecilia (1996): “Sobre las relaciones entre el trabajo doméstico y la acumulación capitalista”, en: Lipszyc, Cecilia et al.: *Desprivatizando lo privado. Mujeres y trabajos*. Buenos Aires, Editorial Catálogos.

conflictos y cambios. Por ejemplo la casa, para una mujer con hijos/as pequeños/as, esposa de un trabajador asalariado, puede adquirir connotaciones de refugio y seguridad, lugar de placer y acopio de recuerdos, pero también es el espacio al que sólo ella está convocada a limpiar y embellecer en una afanosa rutina diaria sostenida por un trabajo invisibilizado, que la aísla y que, incluso, estigmatiza su circulación en otros lugares (la calle, la ruta), plenos de otros significados también patentados patriarcalmente.

Para un varón, en cambio, la casa no es un espacio de trabajo sino de descanso. En él, se apropia y beneficia del trabajo ajeno -el de la mujer-, si bien también puede ser un espacio de tensiones en el cual deba renegociar constantemente este “pacto” de apropiación unívoca.

Así, para los trabajadores ypefeanos el regreso al hogar luego de las jornadas de permanencia en el campamento, simbolizaba la vuelta a un ámbito de reposo, más que la reintegración activa a la vida familiar. Aunque según comentaron muchos de los entrevistados sentían tristeza porque no veían crecer a sus hijos e hijas, el sentimiento de orgullo originado en ser los proveedores de los recursos para el sustento hogareño compensaba esa carencia, a la vez que les garantizaba el reclamo del acceso casi irrestricto a los servicios proporcionados por sus esposas. Raúl González, un salteño que trabajó en YPF entre 1975 y 1992, momento en que fue despedido, sostenía: “No es lo mismo que estar todos los días en la casa, porque por ahí estaba doce días afuera y cuando viene a la casa ni los hijos lo conocen a uno, después era 9 a tres, un poco mejor. [...] Mi señora, ella es perito mercantil [pero] no se daba que trabaje, alcanzaba para vivir, no había necesidad que trabaje. Aquí uno se conforma con vivir dignamente como se vive aquí [...]”.

Pero el tiempo que esta estancia implicaba entrañaba contradicciones con el tiempo de la mujer “ama de casa”, puesto que al utilizado para todas las tareas que hacían al mantenimiento de su casa y al cuidado de sus hijos/as, se agregaban el tiempo y las tareas contenidas en la satisfacción de las necesidades de su esposo⁹⁷. De allí que el incremento de la jornada laboral de la mujer encerrara no sólo un aumento de las cosas de las que debía ocuparse, sino una concreta disputa por la disponibilidad y el uso de su propio tiempo.

Para los varones, asimismo, cuando perdieron el rol de proveedores, por un lado, y se vieron obligados a permanecer casi de forma permanente en la residencia familiar, ámbito además cargado de una impronta devaluada por femenina, el sentimiento que los embargó fue de inutilidad y vergüenza. Aunque algunos como Raúl tentaron suerte buscando trabajo en Buenos Aires, las y los entrevistados sostienen que lo que primó fue la disolución de las relaciones matrimoniales en medio de un proceso de enorme violencia familiar, signado por el abandono de los varones de sus familias, la depresión, el alcoholismo o incluso, el suicidio.

Para las mujeres, en cambio, si bien traumática, esta situación no generaba las mismas opciones. El condicionamiento generado por el significado del ejercicio de la maternidad

⁹⁷ Esta situación persistía, si bien con ciertas diferencias, incluso en los casos en los que las esposas de los ypefeanos contaban con la “ayuda” en las tareas hogareñas de empleadas domésticas, contratadas asiduamente entre la población wichi, según comentaron muchas de las mujeres entrevistadas.

les impidió generalmente abandonar a sus hijos e hijas, ante quienes, a su vez y por el proceso laboral petrolero, tenían una fuerte presencia como cuidadoras y protectoras exclusivas. El compromiso con la supervivencia de estos últimos, sumada a la autonomía de la “voluntad” masculina en el espacio doméstico, actuó como disparador de acciones individuales y colectivas orientadas a modificar las condiciones de marginación y miseria impuestas con la privatización de YPF.

De tal suerte, las mujeres llevaron a cabo, en varias oportunidades, acciones que se plasmaron en prácticas colectivas y de enfrentamiento con las autoridades locales, obteniendo una experiencia que se volcaría en el estallido del corte de 1997. Dos casos permiten ilustrar esta situación. El primero de ellos fue protagonizado por Nené y consistió justamente en un corte del puente de la ruta de acceso a Campamento Vespucio. Según ella recordara: “En el ‘96 nosotros hicimos acá un corte en el puente [...] porque, como yo te contaba, estas casas [en las que vivíamos] eran del yacimiento, y el que quería la compraba la casa. Entonces te daban en cuotas el pago de la vivienda. Y bueno, mucha gente no la pagó. [...] Pagó hasta donde pudo. Y quedó en deuda. De ahí a principios del ‘96 comenzaron a llegarles cartas documento a la gente de que en 48 horas te quitaban la vivienda. Entonces funcionaba el centro vecinal. [...] Entonces la gente comenzó a reunirse y a hacer notas, el presidente del centro vecinal mandaba para acá y para allá exponiendo todo y de ahí “qué vamos a hacer, nadie nos escucha, cortemos el puente”. Y nos fuimos y cortamos el puente de entrada [...] ahí cortamos y de ahí vinieron, filmaron un poco...”. El apoyo de la comunidad a tal acción y el resultado obtenido, dieron validez a la medida de lucha adoptada. Así no sólo fueron frenados los desalojos y “nunca más llegaron cartas documentos” -sostuvo Nené-, sino que muchas de las mujeres que allí participaron se animaron luego a bloquear la ruta 34 en mayo del año siguiente.

El segundo de estos casos fue vivido por Inés, una mujer desempleada que participa en la UTD casi desde los orígenes de esta organización. Según ella comentaba: “En el ‘96 tomamos el Consejo Deliberante de Mosconi durante 23 días. La mayoría éramos mujeres y hemos decidido todos los compañeros tomar el Consejo Deliberante porque del gobierno nadie nos quería escuchar. De esa forma empezamos, teníamos el Consejo Deliberante tomado y ahí cocinábamos, hacíamos pan casero porque teníamos cerca el cuartel de bomberos y ellos nos traían el horno así que hacíamos pan. Gente de Buenos Aires, mandaban leche, mandaban comida. Lo más importante que necesitábamos por las criaturas. No había nada, había muchos chicos desnutridos. [...] Aquí, en Mosconi, hay muchas mamás que son de muchos hijos. Hay mamás que tienen siete, ocho. Al menos yo soy una que tengo, la mía son siete, he perdido un varoncito. Pero son mamá de muchos hijos. Y nosotras más que nada pedíamos, mayormente, trabajo genuino. Y ahí se comía, se dormía. Estábamos con los chicos ahí. ¿Para qué los íbamos a llevar a casa si no teníamos nada que darles?”.

De estos testimonios pueden desprenderse varias cuestiones. La primera de ellas es que el ejercicio de la maternidad no sólo ha amparado las acciones público/políticas de estas mujeres sino que impregnó con su significado los espacios en los que ellas las llevaron adelante. Así, el puente o el consejo deliberante, ámbitos tradicionalmente asignados para otro tipo de actividades -como la circulación de personas y vehículos o la administración de los asuntos comunitarios-, se tornaron en amplificadores de las demandas femeninas.

Entonces, el ejercicio de la maternidad legitimó la ocupación de esos espacios a la par que permitió activar lazos comunitarios de solidaridad hacia los reclamos hechos en lugares que generalmente han estado vedados para las mujeres, atendiendo a su condición de género y clase.

En segundo lugar, que la intervención pública de ellas estuviera mediatizada por la maternidad también generó un impacto dentro del discurso de los propios varones (específicamente sus hijos y sus maridos) ya que, como luego se verá, ellos utilizaron en varias ocasiones durante los distintos cortes de ruta el sufrimiento materno ocasionado por el hambre de los/as hijos/as como razón legítima para enfrentarse con el Estado o las empresas.

Por último, aunque lo desarrollaré más adelante, una cuestión a desentrañar en el discurso femenino y masculino refiere al significado del trabajo “genuino” y a quién es pensado como beneficiario de este reclamo. Si bien en apariencia ésta es una reivindicación tras la que se encolumna un colectivo social con clara distinción de clase, considero que en realidad para todos los ypefeanos y para muchas de sus esposas la exigencia del trabajo “genuino” estaría orientada a satisfacer el desempeño de los varones exclusivamente, sobre todo teniendo en cuenta la “nostalgia” por el mundo ypefeano y el lugar que los trabajadores ocupaban en él.

Ahora bien: pese a que estos antecedentes de confrontación se produjeron en General Mosconi, el corte de mayo de 1997 no comenzó allí sino en Tartagal. Por otra parte, quienes lo impulsaron fueron los comerciantes de esta localidad, secundados también por los propietarios de las compañías madereras. Asimismo, la decisión de cortar la ruta no surgió espontáneamente. Por el contrario, fue el resultado de varios acontecimientos que jalonaron el ascenso del malestar y la movilización social.

Cortando los caminos del petróleo:

Conforme avanzaba la desocupación en la zona, la prosperidad de los propietarios de los comercios de Tartagal se encontraba seriamente afectada. Para paliar la situación, este sector exigía que el gobierno provincial declarara la región como zona franca para el comercio con Bolivia⁹⁸. A esta merma en las ganancias se sumaba el mal funcionamiento de la empresa privatizada que prestaba el servicio eléctrico, *EDESA S.A.*, cuyos reiterados cortes de suministro habían provocado importantes pérdidas en los comercios y en los hogares particulares. Asimismo, la presencia de numerosos inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) y las clausuras de varios locales comerciales, irritaron aún más los ánimos de este sector social.

Por otra parte, durante los meses anteriores al corte muchos ahorristas, entre los cuales se contaban varios dueños de pequeños negocios, habían perdido sus depósitos como consecuencia del cierre del Banco del Noroeste, previamente absorbido por el Banco Caseros⁹⁹.

⁹⁸ A pesar de promesas gubernamentales hechas con anterioridad, esto no se había realizado

⁹⁹ Ver diarios *Río Negro* y *Clarín*, 9 de mayo de 1997.

En los días previos y justamente en demanda de mejoras en la prestación de la empresa eléctrica, Marcelino Jerez, periodista de una FM de Tartagal, y Graciela Zriki, concejala local del FREPASO, iniciaron una huelga de hambre¹⁰⁰. Pero ante la falta de respuesta gubernamental, el 1ero. de mayo, aprovechando la conmemoración del día de los trabajadores, una comisión de vecinos y vecinas entre los que se contaba Jerez, convocó a una asamblea, convocatoria a la que se sumaron organizaciones de izquierda como el Partido Obrero y una organización de desocupados y desocupadas –la UTD-, liderada en ese entonces por Juan Nievas¹⁰¹.

El 7 de mayo la asamblea popular reunida en la plaza local y que contaba con la presencia de comerciantes, desocupados y desocupadas, empresarios madereros, trabajadores y trabajadoras –entre los que se hallaban los y las empleadas municipales que no cobraban su sueldo desde hacía tres meses-, decidió cortar la ruta en la madrugada del día siguiente, medida a la que plegaron horas después los habitantes de General Mosconi.

Para Rodolfo Peralta, un ex trabajador de YPF que reside en Mosconi y que con una puntillosa dedicación dirige administrativamente todos los proyectos de trabajo que elaboró la UTD a partir de subsidios de desempleo, existía un elemento importante que había determinado la elección concreta del corte de rutas como medida de protesta. El, que participó de la asamblea, narra lo siguiente: “Todos íbamos pensando que la dirigencia política no daba las respuestas. En medio de todo eso sin saber qué hacer, los obreros, los comerciantes, salió el tema de Cutral Co. [...] Cutral Co fue el maestro para tomar una iniciativa de ese tipo. [...] Y así de golpe y porrazo vamos a cortar la ruta, y tal descontento que todo el mundo se fue. Y ante el desamparo dirigenal tanto político como sindical ...nos dimos cuenta de que quienes podían luchar por nosotros éramos nosotros mismos y que el corte servía. Creo que damos por descontado que es el único método que nos puede dar resultado. En el corte uno decía, escuchaba a los compañeros, tiene que venir los medios para que nos escuchen. Eso es lo que se buscaba que vengan los medios nacionales y llevar a las autoridades qué estaba pasando. Exponer ante alguien, Mosconi siempre miró a la nación porque de sobra sabemos que la provincia nos ignora.”

Según su relato, entonces, el inicio del corte fue una medida provocada por el descontento general de la población donde, en primer lugar, las diferentes identidades de clase y de género quedaban subsumidas ante los padecimientos que localmente el modelo neoliberal generaba. En segundo lugar, el corte de ruta, como medida de acción comunitaria, había adquirido un nuevo significado a partir de los sucesos de Cutral Co y Plaza Huincul. En efecto, la visibilización que esta forma de confrontación había generado sobre la problemática de las comarcas petroleras neuquinas, por un lado, y el hecho de que el corte de rutas permitiera que las personas desligadas del aparato productivo pudieran ejercer una presión directa y concreta sobre el Estado y las empresas petroleras de la zona, por el otro, la tornaron un exitoso ejemplo a seguir.

¹⁰⁰ Ya durante el año 1996 y comienzos de 1997, la población de Tartagal había realizado varios apagones como medida de protesta contra EDESA.

¹⁰¹ Juan Nievas era activista de una comisión de trabajadores formada para luchar contra la privatización de YPF, años atrás, y posteriormente militante de la Corriente Clasista y Combativa.

Pero en poco tiempo la aparente mancomunidad de los y las manifestantes comenzaría a resquebrajarse.

“Nosotros nos quedamos”: los cortes del corte de rutas

Cuando las personas entrevistadas en General Mosconi recordaban el corte de 1997, la mayoría se refería a él como el corte de los comerciantes o de los madereros. María, por ejemplo, al explicar cómo se había originado, decía: “[...] La primera lucha la hicieron los de Tartagal que al frente iba Marcelino Jerez y Juan Nievas ... Y lo iniciaron los madereros en Tartagal. Resulta que parece que ellos tenían muchas cuentas que pagar en el Banco. La gente estaba apretada y no había plata [...]”.

Por otro lado, cuando algunas de las mujeres exponían las causas de la adhesión de la comunidad de General Mosconi, aducían lo siguiente: “Fuimos a Tartagal, hicimos una asamblea grande. De ahí se decide hacer el corte definitivo. Nos veníamos de Tartagal a Mosconi, a pie, caminando. La mayoría de la participación eran mujeres. O sea, de aquí [en referencia a Mosconi]. Más que nada nosotros, cómo lo puedo decir, hicimos hincapié para poderlos llevar a los varones. Mi marido es muy tímido, por ejemplo, entonces ‘Si van las mujeres, tenemos que estar nosotros’. Porque yo estaba desocupada. Entonces nosotros tenemos que salir a luchar para conseguir algo ¿Qué les damos a los chicos? ¿Qué les damos mañana?”. Inés, una mosconense mamá de siete hijos y propietaria de estas reflexiones, salía a la ruta, como tantas otras mujeres, impulsada por la necesidad de garantizar el alimento de sus hijos e hijas. Pero, a su vez, conciente de la creencia social respecto de la “debilidad” femenina, la tornaba en táctica para incentivar la participación de su propio marido. En otros momentos, como luego se verá, esta maniobra fue puesta al servicio de evitar la represión.

De tal manera, en el corte convergieron distintos sectores con disímiles intereses y demandas, lo cual, en un comienzo, quedó reflejado en la distribución de las barricadas. Así, se armaron dos piquetes. El primero de ellos, el “piquete Norte”, estaba emplazado en la entrada de General Mosconi -viniendo desde Tartagal-. Allí se ubicaron básicamente comerciantes, madereros y docentes que fueron adhiriendo a la protesta. El segundo, el “piquete Sur”, estaba localizado a la altura del cementerio local, aproximadamente 600 metros al sur del anterior, y quienes estaban allí eran mayoritariamente personas desocupadas¹⁰².

¹⁰² Esta localización emerge de las entrevistas y coincide con la descripción realizada por Pablo Barbeta y Pablo Lapegna: **Cuando la protesta toma forma. Los cortes de ruta en el norte salteño**. En: Norma Giarraca y colaboradores: *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires, Alianza Editorial: 2001. Pág. 245. Svampa y Pereyra asumen la existencia de la misma división aunque argumentando que ésta manifestaba la presencia de sectores dirigentes, localizados en el piquete norte, y dirigidos, que eran los desocupados y se hallaban en el piquete sur. Sin embargo, esa división entre dirigentes y dirigidos no fue encontrada por mí en ninguna de las fuentes orales ni periodísticas consultadas. De hecho, el transcurrir del corte en asambleas casi permanentes, impidió la emergencia de cualquier sector que pudiera agenciarse la dirigencia del mismo, aunque sí surgieron voceros o cabezas visibles. Ver Svampa y Pereyra: op. cit., pág. 125

Asimismo, desde un principio las versiones acerca de que 200 efectivos de la gendarmería nacional con asiento en Santiago del Estero se movilizarían cuanto antes para despejar la ruta, circularon rápidamente. La suposición sobre la inmediatez de la represión se basaba en que durante la mañana del 8 de mayo, el juez federal Abel Cornejo había exhortado a los y las manifestantes a abandonar la ruta¹⁰³. Sin embargo y llamativamente, el jefe de gendarmería de la Agrupación Séptima con sede en ciudad de Salta y cuya identidad los diarios mantuvieron en reserva declaró que, a diferencia de lo ocurrido recientemente en Cutral Co y Plaza Huinul, “aquí no se utilizarán gases ni balas porque no hay piqueteros con la cara pintada levantando barricadas, sino mujeres y niños en una actitud pacífica”¹⁰⁴.

Mientras tanto, las posiciones de los funcionarios de las distintas administraciones gubernamentales ante la protesta eran variadas, si bien todos se empeñaban en deslindar cualquier responsabilidad respecto de las causas que la habían originado.

El gobernador provincial Juan Carlos Romero, perteneciente al Partido Justicialista y aliado del presidente Menem, se negó a viajar a la zona del conflicto. Para ello alegaba, entre otras cosas, que el mismo era producto o bien de la instigación del Partido Renovador Salteño (PRS) o de una lucha interna del propio Partido Justicialista (PJ) en la que el intendente interino de Tartagal, Daniel Benítez, intentaba cubrir, a su vez, la mala administración que venía ejerciendo. En cuanto a la primera razón, su argumento se basaba en que un diputado del PRS, de apellido Sotos, se había presentado en el corte¹⁰⁵. La suposición respecto a la “deslealtad” de Benítez se había originado en que el intendente se había acercado al corte para expresar su solidaridad con los y las manifestantes. Por otra parte, argüía Romero, la deuda salarial de la intendencia tartagalense con los empleados municipales era inexcusable puesto que, según afirmara en una carta que le enviara a Menem, él “enviaba los fondos que correspondían a la coparticipación nacional y provincial puntualmente”¹⁰⁶.

El gobernador salteño pretendía, así, ponerse a resguardo de las declaraciones públicas realizadas por el presidente de la Nación en las que éste sostenía que “el tema de Tartagal es producto de la falta de respuesta de las autoridades provinciales”¹⁰⁷. En ese sentido, Menem eximía al gobierno nacional, a su vez, de toda incumbencia en las razones desencadenantes de este suceso, aunque para el primer mandatario no faltaban los “elementos infiltrados” en la movilización popular, si bien ya no eran los “subversivos” que “anidaban” en las protestas de Cutral Co y Plaza Huinul. Posiblemente este descenso en el tenor del calificativo no solamente se debiera a que Romero, a diferencia de Sapag, era un socio político importante en el norte del país y por tanto, sostener que en Salta había subversivos podía generar cierta enemistad por parte del candidato menemista para las futuras internas del PJ de cara a las elecciones presidenciales de 1999. A su vez, la presencia aún cercana en la memoria de la población del asesinato de Teresa Rodríguez en el conflicto de Neuquén, invalidaban la reiteración del uso de este calificativo para el preanuncio de una respuesta violenta por parte del Estado. De hecho, hasta un conspicuo

¹⁰³ Diario *Página 12*, 9 de mayo de 1997.

¹⁰⁴ Diario *Río Negro*, 10 de mayo de 1997

¹⁰⁵ Diario *Página 12*, 9 de mayo de 1997.

¹⁰⁶ Diario *La Nación*, 11 de mayo de 1997.

¹⁰⁷ Estas declaraciones fueron vertidas en una emisora radial de Rosario y citadas por el diario *Página 12*. Ver *Página 12*, 10 de mayo de 1997.

medio periodístico defensor de la política neoliberal caracterizaba a los protagonistas del corte en tanto “comerciantes, madereros, docentes y familias realmente pobres”¹⁰⁸.

Lo que desde el gobierno nacional se esperaba, entonces, era que el conflicto se solucionara rápidamente y no cobrara las dimensiones a las que había arribado el segundo corte neuquino. Sin embargo, el acierto para una solución en el corto plazo no parecía sencillo. La principal causa de ello radicaba en la dificultad de hallar con quién negociar en el corte de rutas. Si bien Marcelino Jerez se perfilaba como la “cara visible” o el líder de la protesta, el funcionamiento a través de las asambleas directas para tomar todo tipo de decisión impedía la emergencia de cualquier dirigente individual, o la realización de algún acuerdo que se construyera a espaldas del conocimiento y la voluntad mayoritaria.

En efecto, los distintos sectores sociales presentes en el corte se reunían permanentemente en asambleas, en las cuales ante todo se debatían los puntos o reclamos que se incorporarían a un petitorio general. Además, una comisión general que contaba con todos los representantes de las asambleas particulares, determinaba los lineamientos del rumbo a seguir, aunque lo que fuera a hacerse debía ser refrendado por una asamblea general en la que estaban presentes todos los y las manifestantes. Así, era esa comisión, conformada por 16 piqueteros que representaban a las 16 comisiones de estudio de los reclamos constituidas el 10 de mayo, la que se encargaría de llevar adelante las negociaciones con los representantes del gobierno provincial¹⁰⁹.

Pero así como el gobierno provincial no encontraba fácilmente con quién negociar, los y las piqueteras se enfrentaban permanentemente con la negativa del gobernador salteño a trasladarse a la zona del corte. Este, en su lugar, envió al principio a Sergio Nazario, un oscuro funcionario que había sido represor durante la última dictadura militar y que desde 1995 ocupaba el cargo de secretario de Seguridad de la gobernación¹¹⁰. Pero el “diálogo” entre los piqueteros designados a tal fin y él no llegó absolutamente a nada. Igual suerte corrieron, en un primer momento, las gestiones del ministro de Gobierno, Miguel Torino, y el de la Producción y Empleo, Gilberto Oviedo¹¹¹.

De tal manera, la tensión entre los y las manifestantes y el gobierno provincial, que amenazaba con iniciar la represión, fue en aumento. En ese marco, el obispo de Orán, Mario Cargniello, se presentó en el corte, ofreciéndose a actuar como mediador, razón por la cual se reunió con los representantes de las comisiones en las oficinas de *Tecpetrol S. A.*

¹⁰⁸ Diario *La Nación*, 10 de mayo de 1997.

¹⁰⁹ *La Nación*, 11 de mayo de 1997.

¹¹⁰ En efecto, Nazario fue integrante del grupo de tareas del centro clandestino de detención “El Olimpo”, participando entre otros crímenes, del fusilamiento de Carlos Fassano y el secuestro de su compañera Lucila Révora, embarazada de ocho meses, y del hijo de ella de un año y ocho meses, Eduardo de Pedro, luego devuelto a sus familiares. Esto sucedió en octubre de 1978 en el barrio de Floresta de la Capital Federal. Ante las apariciones en las cámaras de TV con motivo de este corte, Nazario fue reconocido por Julio Aguirre, ex sindicalista y ex senador del PJ, y denunciado públicamente como una de las personas que había ordenado las torturas contra Aguirre. Por el estado público que esto tomó, Romero se vio obligado a separarlo de su cargo en junio de 1997, si bien algunas personas han afirmado que continuó en funciones secretamente como asesor del gobernador. Ver <http://www.lafogata.org>.

¹¹¹ Clarín, 12 de mayo de 1997.

el 12 de mayo, luego de 48 hs. en las que todo diálogo con el gobierno había quedado suspendido. Así, ese mismo día volvieron a la zona los ministros de la Producción y de Gobierno, a quienes se sumó el juez federal Abel Cornejo, con intenciones de discutir los puntos del petitorio elaborados por la asamblea¹¹².

Por otro lado, las empresas petroleras privadas intentaban sufrir el menor perjuicio posible ante el desarrollo de los acontecimientos. Para ello se enfrentaban con serios inconvenientes. La primera razón y la más obvia era que el corte de rutas impedía la salida de la producción de las compañías, generando importantes pérdidas. Otro factor de peso era el discurso de reparación histórica lanzado por buena parte de los y las piqueteras contra estas empresas, cuestión a la que podía sumarse el reclamo de la deuda accionaria que éstas tenían pendiente con los trabajadores y trabajadoras ypefeanos/as, y que no estaban dispuestas a afrontar. En tercer lugar, la cercanía física de los piquetes respecto de las puertas de entrada de *Refinor S. A.*, por ejemplo, ponía en peligro sus instalaciones en caso de que se escogiera el camino de la represión o que los y las pobladoras tomaran alguna iniciativa directamente en contra de la empresa. Por eso, la noche del 12 de mayo varios empresarios petroleros se apresuraron a reunirse con los ministros de Economía y de Interior de la Nación, Roque Fernández y Carlos Corach respectivamente, en la Capital Federal. Allí expresaron que estaban dispuestos a ofrecer 1.400 puestos de trabajo “si se mantenían las reglas de juego con el sector privado”¹¹³.

Mientras tanto, el corte se había extendido a las localidades de Pocitos, Embarcación, Campo Durán y Coronel Cornejo. En esta última, una mujer había decidido dar rienda suelta a sus propias fuerzas y levantar también barricadas.

Las aguas bajan turbias: el corte de rutas en Coronel Cornejo:

“Nunca tuve miedo de lo que pueda pasar porque soy una mujer muy convencida de lo que hago. Y si algo me llegara a pasar en la lucha, si se tiene que padecer en la lucha, es mejor. Porque yo creo que lo último que tiene que hacer el ser humano es vender su dignidad”.
Ica, dirigente de la UTD de Coronel Cornejo.

Ica nació hace 46 años en Coronel Cornejo, una localidad ubicada a 17 km al sur de General Mosconi y que, según su relato, “hace mucho tiempo era una importante zona de producción maderera y hoy produce soja pero da poco trabajo la finca San José”, la firma propietaria de la mayor parte de las tierras locales.

Ella siempre vivió ahí, donde la mayoría de las viviendas son de madera, las calles no están asfaltadas y el agua potable era provista por camiones cisternas que llegaban desde General Mosconi, sin alcanzar a cubrir las necesidades de la población.

¹¹² Entre ellos se contaban: la creación de fuentes de trabajo “genuinas” y reinversión en la región de las regalías obtenidas de la explotación gasífera y petrolera; tasación a valor real de las casas compradas a través de créditos del Banco Hipotecario –ya que varias familias estaban en condiciones de ser desalojadas por la imposibilidad del pago de las cuotas crediticias-, y el establecimiento de tarifas preferenciales eléctricas.

¹¹³ Diario *La Nación*, 13 de mayo de 1997. Sin embargo es preciso aclarar que el diario *Página 12* del 14 de mayo de 1997 sostenía que las empresas sólo se habían comprometido con 600 puestos de trabajo.

Mientras recorríamos el pueblo, Ica entrelazaba su biografía con la historia del lugar y sus propias ilusiones. Así me mostraba la estación del ferrocarril Belgrano, cerrada cuando se realizaron las privatizaciones de los ferrocarriles en 1991, y a la cual ella sueña con “restaurar y poder poner un enorme centro cultural. Porque si la mirás bien es hermosa”.

Sin embargo, no era ésa su única ilusión. De niña quería ser periodista “porque lo que único que teníamos era una radio. Pero yo a lo único que pude llegar es a primero o segundo grado de antes y de ahí empecé a trabajar ... de mucama tanto a Vespucio como a Mosconi”. Criada junto con sus dos hermanos por su mamá, Ica se casó a los 19 años y cuando tuvo hijos, una de sus aspiraciones mayores era que ellos sí pudieran estudiar y “llevar una vida en la que no sufran como hemos sufrido nosotros y no tengan que pasar tantas necesidades sin que nadie los escuche o los gobiernos de turno los convenzan dándoles un bolsón”. E Ica no estaba dispuesta a abandonar sus sueños. No, al menos, sin presentar pelea.

Su pequeña contextura física y su bajo tono de voz, sin embargo, no permiten imaginarla haciendo frente a un soldado de gendarmería que, golpeándola con una moto, intentó sacarla del corte que ella misma había iniciado sobre la ruta 34, cerca de su casa, en mayo de 1997. Ica no sólo permaneció en la ruta, sino que obligó al gendarme a retirarse avergonzado diciéndole: “Ustedes están para cuidar el orden y nuestros niñitos están muriéndose de sed”. El orden que Ica quería poco tenía que ver con aquel desde el cual se la acusaba de cometer un delito federal. El orden para Ica era, por ejemplo, obtener el agua potable de la que carecían los 2.700 habitantes de su pueblo y las fuentes de trabajo que hacía rato escaseaban por allí. Cuando le pregunté a esa mujer, desocupada, esposa de un ex trabajador maderero y abuela de cinco niños, si no había sentido temor, me contestó frontalmente: “Como mujer, cuando nos sentimos impotentes, no incapaces sino impotentes, nos llenamos de coraje”. En ese sentido, el “nosotros” de Ica era una referencia identitaria donde ella diluía su individualidad para fundirse en un sujeto colectivo estrictamente femenino que, anclado en el ejercicio de la maternidad y el cuidado de los otros, era capaz de irrumpir en la escena pública interpelando el sentido de un orden que, como mujeres y desocupadas, las jaqueaba en su vida doméstica a la par que pretendía dejarlas inermes fuera del hogar.

Por ello, la distinción establecida entre impotencia e incapacidad aunada al deseo de llevar una vida digna, indujeron a Ica a salir a la ruta por su cuenta, pese a la renuencia de su marido y sus hijos. Pero no era la primera vez que lo hacía. Tiempo atrás, en 1991, también se había atrevido, acompañada por otras dos mujeres, a interrumpir el tránsito en la ruta 34 exigiendo una de las cosas que reclamaba ahora, el tendido de la red de agua potable. Esa vez había retornado a su casa con las manos vacías. Ahora, 6 años más tarde, volvía a intentarlo a sabiendas de que el sentimiento de impotencia y la convicción de merecer una vida digna no la embargaban solamente a ella. Según narra: “[...] Ya llevaba varios días el corte en Mosconi y nosotros no podíamos ir y venir a Cornejo todos los días. Entonces hemos decidido entre 2 mujeres apoyar la protesta que se estaba haciendo en Mosconi. Tomé la decisión de ir y contra viento marea fuimos y cortamos. En eso vienen 10, 15 chicos que andaban por ahí por el barrio, niños menores de 10 años y me preguntan qué vamos a hacer. Y les dije que si sus madres querían que vengan a apoyar [...]”. La convocatoria para la acción fue dirigida, básicamente, a las propias mujeres e Ica tuvo

oportunidad de demostrar lo que para ella significaba la dignidad cuando, horas después de iniciado el corte en Coronel Cornejo, “[...] mandaron gente de Romero para amedrentar a la gente. Incluso les preguntaban quién es el cabecilla que cortó la ruta, todos me apuntaban a mí. Entonces un muchacho que todavía pertenece al gobierno de Romero, José Andrade, él fue con una propuesta del gobierno que si yo levantaba el corte me hacían una casa de material y me daban un buen sueldo y me querían poner una [camioneta] traffic para en esos momentos llevarme a Salta y firmar el convenio.[...]”. La reacción de Ica no se hizo esperar: “vine a contarle a la gente a qué ha venido esa gente del gobierno y entonces la gente fue a correrlos. De ahí no nos molestaron más, ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad.”. Y allí ellas se quedaron, resistiendo hasta que el gobierno se decidiera a cumplir con lo que estaban exigiendo y solidarizándose con quienes, algunos kilómetros más al norte, continuaban con la ruta tomada.

El final del corte de rutas.

El 13 de mayo, 5 días después de comenzado el corte y cuando la escasez de combustible afectaba ya al norte salteño, el gobierno provincial propuso un acuerdo basado en la entrega de 1.000 fondos de desempleo de \$200 por un año; 2.000 planes Trabajar de \$200 por un año; 1.400 empleos de las petroleras privadas, la refacción de escuelas, hospitales, puentes y caminos; la elastización de los créditos hipotecarios; beneficios impositivos en aquellos gravámenes que dependían de la provincia y la no toma de represalias¹¹⁴.

Fue en ese momento donde los participantes del corte en General Mosconi se dividieron claramente en dos grupos: el primero constituido por los comerciantes y madereros, que querían levantarlo al menos por 48 hs. para estudiar/aceptar la propuesta –posición apoyada por Marcelino Jerez-; el segundo, conformado por los y las desocupadas, se negaba a suspender la medida de protesta. Finalmente, como sostuvo Inés, quien integraba este último grupo: “El maderero y una gente que viste que también tenían quilombo con los bancos hicieron su pacto y después nos dejaron solos [...]”. Efectivamente el primer grupo levantó la medida, quedando en la ruta solamente los y las desocupadas que luego de varias negociaciones y bajo la amenaza de la represión inminente con 700 gendarmes agrupados en las cercanías de General Mosconi, levantaron el corte el 15 de mayo firmando el acuerdo ya detallado en páginas anteriores.

Ese mismo día, por la mañana, el gabinete provincial en pleno, con la presencia del gobernador Juan Carlos Romero, se reunió en Tartagal a fin de refrendar el acuerdo, a la par que se tomaba la decisión de intervenir las intendencias de Tartagal y General Mosconi. A su vez, el gobernador se comprometió a tender las redes para el agua potable en Coronel Cornejo, obra que comenzó a realizarse 45 días después de finalizado el corte de rutas.

Cuando terminó la reunión en la que se llegó al pacto, un periodista entrevistó a Samuel Sánchez, uno de los delegados piqueteros que, exhausto, salía de las oficinas de la empresa *Tecpetrol S.A.* Este joven de 22 años, desocupado, sostuvo que el gobierno había cedido porque los funcionarios “[...] tuvieron en cuenta la barriga de la gente y el dolor que siente

¹¹⁴ Diario *Página 12*, 14 de mayo de 1997.

una madre cuando se le muere un hijo [...]”¹¹⁵. Sin embargo, y como se vio anteriormente, en apariencia no todas esas “madres” consideraban correcto levantar la protesta, acusando incluso de cobardía a quienes habían arribado al acuerdo. Para ellas lo acordado distaba de significar una victoria y menos aún, una demostración de la existencia de algún tipo de sensibilidad gubernamental ante la situación de sus hijos/as. Había una diferencia, entonces, entre las pretensiones de ciertas madres de carne y hueso y aquellas aludidas en las palabras del joven Sánchez. Es preciso detenerse en esto porque la apelación a la maternidad aparece reiteradamente en los análisis y discursos que realizan quienes están involucrados en estas confrontaciones, incluso en lados antagónicos¹¹⁶.

Partiendo de la base de que los ámbitos públicos conllevan una mayor valoración social que los privados, la pregunta es porqué estos varones destacan en la defensa de sus acciones en el espacio público un argumento basado en una tarea asignada exclusivamente a las mujeres en el ámbito privado y que constituye, asimismo, parte de las razones con las que socialmente se justifica la ineptitud femenina para la vida pública.

La primera cuestión que evidencia esta referencia es la fuerza explicativa/justificadora que el discurso armado en torno a la maternidad posee en este tipo de conflictos. Como ya se dijo, la maternidad es un constructo que legitima reclamos sociales colectivos (tanto de varones como de mujeres) y acciones colectivas en pos de la consecución de los objetivos de las demandas. De tal suerte en esas demandas, la dupla mujeres y niños siempre aparece unida, sumándose además la acción de dar de comer. Este acto y la responsabilidad de hacerlo se colocan en primera plana, implicando una adherencia entre la presencia de las mujeres con la de la mujer adulta madre. Ni en los discursos dados por quienes lideran estas confrontaciones ni en lo relatado en la prensa escrita, radial o televisiva las mujeres poseen una identidad diferenciada de su rol maternal, excepto cuando se hace mención de aquellas mujeres ligadas a las profesiones feminizadas. Así, en el plano discursivo no hay niñas, ni jóvenes ni piqueteras, ni desocupadas. Sólo madres, maestras o, tan solo a veces, estudiantes escolares.

La segunda cuestión a considerar es que si bien las responsabilidades maternas se vuelven un resorte legítimo para la acción, este resorte no siempre adquiere las mismas connotaciones en su uso para los varones y para las mujeres y, por otro lado, tampoco encierra prácticas sociales y consecuencias idénticas para unos y otras. Para ambos, la alusión a la maternidad permite sacar ventajas, por ejemplo, a la hora de intentar evitar la represión estatal de los conflictos. También es posible que la fuerte presencia materna en la crianza de los hijos/as acorde al modelo de socialización ypefeano explicado antes, cristalice en el discurso masculino anteponiendo el sufrimiento por el hambre de los hijos/as a otros motivos para la acción. Pero también se debe tener en cuenta que la defensa de la mujer como madre y responsable de la crianza de los hijos/as ha servido en

¹¹⁵ Diario *La Nación*, 15 de mayo de 1997.

¹¹⁶ Si bien esto está presente en varios pasajes de las conflictividad social argentina de la historia del siglo XX, centrándonos exclusivamente en el objeto de este estudio, pueden hallarse ejemplos del frecuente uso de este dispositivo discursivo en las palabras con las que Sapag fue interpelado por las personas que lideraban el primer corte de rutas en Cutral Co y Plaza Huinul. Otro tanto puede observarse en las palabras citadas del gendarme que entendía innecesaria la represión de este corte en General Mosconi justamente por la presencia de madres e hijos.

varias ocasiones para reforzar los lazos de opresión y encierro en lo doméstico. Dicho de otro modo, la ponderación pública de las responsabilidades y preocupaciones asignadas a las mujeres no evidencia por sí misma ninguna práctica que pretenda alterar la división sexual del trabajo ni trastocar necesariamente las relaciones de poder e incumbencia social asignados a varones y mujeres, aún cuando la preocupación manifiesta en el discurso masculino por el alimento de los/as hijos/as sea realmente importante entre los motivos que originaron la presencia de ellos en la ruta.

Distinta es esta cuestión para las mujeres. En su discurso, si bien la maternidad tampoco ha sido negada o resistida como justificadora de estas contiendas, fue utilizada políticamente para romper los lazos de la domesticidad y apropiarse de los espacios públicos. Sostener entonces que impulsaban conflictos por “sus hijos” les permitió salvar los obstáculos que los varones, en muchos casos sus esposos, ponían para evitar que fueran de la casa a la ruta. De tal manera, lo que surge de las entrevistas con las mujeres que participaron de esta protesta es que si bien ellas construyeron su inserción en la vida pública/política a partir de los lazos sanguíneos, no retornaron al “hogar” en las mismas condiciones en que estaban antes de su salida. Así, en su acción ellas desplazaron los lazos afectivos hacia la política, y en la ruta –espacio que dio nuevos bríos y visibilidades a su involucramiento en la lucha política-, discutieron desde cómo hacer el corte y resistir las amenazas gubernamentales hasta qué preparar para alimentar a quienes allí estaban. Defendiendo intereses que tenían exclusivamente que ver con su tradicional rol femenino, se hicieron visibles no sólo para otros sino y principalmente, para ellas. Los días y las noches pasados en el bloqueo les permitieron intercambiar vivencias y análisis, rompiendo el aislamiento hogareño sólo quebrado mayoritariamente con anterioridad a partir de las idas a la escuela para llevar a sus hijos/as, el mercado o el hospital. El espacio de la ruta, entonces, se transformó en el escenario en que experimentaron nuevas prácticas colectivas, revalorizaron su presencia en la confrontación y dieron pie a novedosas preguntas sobre sus propios roles de género. Pudieron, de tal manera, comenzar a desnudar lo político existente también en los lazos afectivos. Por eso no volvieron a sus casas en las mismas condiciones en las que salieron.

Para los varones, ver allí a las mujeres, peleando codo a codo en la ruta, también impactó en la valoración sobre la importancia y las potencialidades de la participación femenina. Sin embargo, estas últimas no dejaron de ser puestas en entredicho cuando la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), cristalizó su organización luego del corte de diciembre de 1999, tornándose a su vez interlocutor insoslayable para el gobierno local y provincial.

Preparando los fuegos de año nuevo: el corte de rutas de diciembre de 1999.

El 13 de diciembre de 1999, tres días después de que Fernando de la Rúa asumiera la presidencia de la Argentina como resultado de la victoria que, en las elecciones de octubre de 1999, había obtenido la *Alianza* frente la fórmula peronista Eduardo Duhalde-Ramón Ortega¹¹⁷, la población de Tartagal y General Mosconi volvió a protagonizar un corte de rutas que se extendió hasta el 23 de ese mes.

El conflicto que llevó al bloqueo de la ruta nacional nro. 34 había comenzado a gestarse a mediados de noviembre, cuando el despido de 162 trabajadores municipales contratados de la ciudad de Tartagal, condujo a una huelga con movilización convocada por la seccional local del ATE.

Al descontento provocado por esta situación se sumaba, por otro lado, el malestar causado tanto en General Mosconi como en las restantes localidades departamentales, por la baja de planes Trabajar dispuesta para la zona por la flamante conducción del gobierno nacional (Oviedo: 2004).

Nuevamente en una asamblea, se determinó cortar la ruta, pese a la renuencia del sindicato de los estatales a participar de una medida de esa envergadura. La razón de esa resistencia radicaba, en parte, en el compás de espera abierto por la conducción de ATE nacional ante la asunción del nuevo presidente¹¹⁸.

Enterada la policía local de la decisión de realizar el corte, intentó evitarlo ejerciendo una represión “preventiva” sobre los y las manifestantes en General Mosconi en la cual fue detenido Fermín Hoyos, secretario general de ATE-Tartagal, junto con otras personas. Ante esto, la reacción de los y las piqueteras no se hizo esperar. Al calor de una de las tantas batallas sostenidas con la policía, tomaron de rehenes a un policía y al comisario de General Mosconi.

Rosa vive en General Mosconi con algunos de sus hijos. Nacida en Ledesma, provincia de Jujuy, la lucha por la supervivencia la hizo migrar a los 13 años a Salta capital, luego a Chaco, retornar nuevamente a Salta y establecerse finalmente en General Mosconi. Mientras charlábamos en su casa, Rosa me mostraba con orgullo las fotos que retrataban su imagen en el corte de 1997 y el número de la revista “La Maza”, en la cual ella aparecía

¹¹⁷ La *Alianza por el trabajo, la justicia y la educación*, fue una agrupación política nacida en 1997 fruto del acuerdo entre la Unión Cívica Radical, el Frente Grande –que aglutinaba a los sectores peronistas distanciados del menemismo-, la Democracia Progresista, el Partido Intransigente, el Partido Socialista Democrático, el Partido Socialista Popular, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Autonomista (Corrientes) y el Partido Liberal (Corrientes). El objetivo de esta agrupación era disputar la conducción del país al Partido Justicialista si bien su programa económico no ponía en cuestión nada de lo realizado bajo el menemismo. En las elecciones del 24 de octubre de 1999 obtuvo el 48.3% de los votos, frente al 33.9% logrado por el peronismo, aunque éste último retuvo la conducción de 11 provincias.

¹¹⁸ Víctor de Genaro, máximo dirigente de ATE Nacional, poseía coincidencias políticas con el actual gobierno a partir de su pertenencia al sector del peronismo que comandaba las filas del FREPASO.

sonriente y piquetera en la tapa. Ella recordaba detalladamente el episodio con la policía local. “Estábamos en la ruta y no había forma como sacarlos” contaba Rosa en alusión a las personas que habían sido detenidas por el policía. “Entonces decidimos hacer un cambio, lo pillamos al comisario y al cabo. Lo desvestimos, lo dejamos en calzoncillo y lo subimos al tanque de combustible. Y hacía una calor que quemaba el aire y le pedimos que si los mandaban a Salta nosotros lo íbamos a quemar. Pero no era tanta la intención, sino para darle miedo. Entonces le pedimos que largue a todos los compañeros y nosotros queríamos ver en la ruta el momento que lo traigan. Así tuvieron todos su libertad [...] Y esa manera hicieron el cambio, a las 6 de la tarde los trajeron.”

Mientras tanto, las barricadas en la ruta continuaban. Ante esto, ATE logró imponer la conformación de una comisión de delegados de los y las piqueteras que fueran a Buenos Aires para entrevistarse con funcionarios del poder ejecutivo nacional. Pero ante la falta de resultados alentadores y la consecuente decisión de continuar con la protesta, la organización sindical decidió escindirse de la misma, permaneciendo en el corte solamente los y las desocupadas de General Mosconi. Finalmente, el 23 de diciembre se arribó a una solución cuando el gobierno provincial aceptó la reincorporación de todas los y las trabajadoras municipales despedidos/as, el mantenimiento de los 1.963 planes Trabajar vigentes, el otorgamiento de 3.000 mil planes más y la prórroga, aunque por un mes, de 2.653 planes provinciales.

A partir de este corte, la UTD comenzó a afianzar su protagonismo en el escenario político local. De los planes Trabajar otorgados, por primera vez a esta organización se le concedían aproximadamente 200. Además, que la UTD hubiera seguido con el corte imponiéndose a ATE, participado en la liberación de las personas detenidas y logrado, entonces, la recuperación de los puestos laborales de los y las trabajadoras municipales despedidos, prestigiaron sus acciones y su forma de funcionamiento. Paralelamente, José “Pepino” Fernández comenzó a ganar renombre entre los y pobladoras de la zona.

Así, el desarrollo de este corte convirtió a General Mosconi en el epicentro de futuras confrontaciones y a la UTD en la organización más carismática para encarar esas luchas. Es importante entonces analizar ahora de qué manera se fue estructurando la UTD y qué roles jugaron varones y mujeres dentro de ella.

Atravesando límites: las mujeres en la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD).

Para varias de las mujeres entrevistadas, lo que ha definido su ámbito de participación política y enmarcado sus luchas ha sido, por un lado, su pertenencia a la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) y, por el otro, el reconocimiento del liderazgo que sobre tal organización ejerce José “Pepino” Fernández, un ex obrero ypefeano salteño que durante muchos años trabajó en el sur de la Argentina, en distintos yacimientos de YPF.

Es necesario detenerse en el análisis de las características de esta organización a fin de comprender por qué las mujeres se han integrado a ella, qué roles desempeñan, qué vínculos existen entre ellas y los varones de la UTD, y qué factores sustentan la construcción de los liderazgos allí presentes.

La UTD surgió en 1996 producto de la determinación de un grupo de ex trabajadores ypefeanos que, entre otras acciones en el pasado, había dinamizado las luchas adversas a la privatización de YPF. Esta decisión de organizarse provino, conforme comentaran muchos de ellos, tanto de la imposibilidad de hallar una salida individual a la persistente falta de trabajo, como del descrédito ante las reiteradas e incumplidas promesas sobre la apertura de fuentes laborales por parte de los diferentes funcionarios gubernamentales de turno.

Si bien desde el momento de su creación participó en distintas confrontaciones contra el gobierno local y provincial¹¹⁹, la presencia pública de la UTD creció a partir del corte de 1999 por las razones expuestas anteriormente. Sin embargo, políticas de cooptación clientelística por parte del gobierno provincial lograron provocar una escisión interna ya que algunos de sus miembros más representativos habrían aceptado prebendas político-económicas¹²⁰. Esta situación produjo un recambio de sus referentes¹²¹ y abonó al surgimiento de un “tipo de liderazgo carismático cuya autoridad se basaba en ‘poner el ejemplo’ y ‘no venderse’” (Schaumberg: 2004, pág. 8). Esos conceptos se condensaron en la figura de José “Pepino” Fernández quien a partir de que “tomó la iniciativa de decir vamos a luchar de una vez por todas para que los gobiernos de turno no nos vean como un habitante más” –de acuerdo a Ica-, fue ganando el apoyo de los y las integrantes de la UTD hasta aparecer como su principal dirigente, a partir del año 2000.

Fue entonces la congruencia entre el discurso confrontativo, la disposición a luchar y la negativa a “dejarse tentar por los políticos”, lo que fortaleció y ratificó el liderazgo de

¹¹⁹ Me refiero, por ejemplo, a la toma del consejo deliberante en 1996 que narrara Inés y a la participación en el corte de mayo de 1997.

¹²⁰ Esto emerge tanto de los testimonios recogidos por mí como por Heike Schaumberg. Ver Schaumberg, *op. cit.*

¹²¹ En sus orígenes, uno de los referentes fundamentales fue Juan Nievas, que antaño había integrado la *Comisión de Trabajadores Contra la Privatización* (Schaumberg: 2004) y luego se incorporaría a la Corriente Clasista y Combativa (CCC). La CCC es una organización político-sindical que surgió en 1994 respondiendo a la conducción de Carlos “Perro” Santillán, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), alineado dentro del Partido Comunista Revolucionario. En poco tiempo, la CCC se convirtió en una poderosa organización que nucleaba organizaciones de primer grado – sindicatos y comisiones internas- y desocupados/as, desarrollando una fuerte inserción social tanto en Jujuy como en el Gran Buenos Aires, fundamentalmente en La Matanza.

Fernández. Esto ha impulsado una aceitada dinámica de lucha que permitió a la UTD, entre otras cosas, aumentar en años posteriores el número de planes obtenidos hasta casi 2000¹²², acrecentar su prestigio en tanto organización piquetera e incrementar su atractivo como espacio de resistencia. Pero también ha dado lugar a un fuerte personalismo en el manejo de los destinos de la organización puesto que, aún cuando la dirección de la misma recae en más personas y las prácticas asamblearias que la caracterizaban desde sus inicios continúan –si bien de manera errática-, la palabra de “Pepino” es determinante a la hora de decidir una movilización u otras formas de confrontación, realizar ciertas demandas ante las empresas privadas o los gobiernos locales, o tomar contacto con organizaciones de similares características a la propia, por ejemplo.

En cuanto a la composición social de la UTD, como Schaumberg sostiene, su dirigencia suele estar conformada por ex trabajadores ypefeanos con trayectoria de participación sindical en el SUPE en algunos casos, aunque también hay mujeres desocupadas en espacios de conducción, tal como Ica en Coronel Cornejo. Sin embargo, la mayoría de las mujeres adultas y desocupadas constituyen, junto con jóvenes varones y mujeres sin trabajo estable ni previa experiencia laboral permanente, la base de la organización y la fuerza principal de las protestas. Asimismo, este colectivo social también es quien integra los proyectos comunitarios articulados a partir de los planes Trabajar.

Esos proyectos de trabajo fueron formulados con el objetivo de sobrepasar los límites asistencialistas de los planes, intentar morigerar los condicionamientos que el Estado ha impuesto a quienes los reciben (sean individuos u organizaciones) y generar mayores recursos para sus integrantes que los estipulados en los mismos planes¹²³. Las tareas contempladas en ellos, asimismo, han sido variadas. Por un lado, se encuentran aquellos destinados a la realización de obras públicas, tales como la construcción o refacción de plazas, escuelas, calles o salones de usos múltiples en diversos barrios del General Mosconi. Otros han consistido en la instalación de fábricas de ladrillos con el objetivo de erradicar ranchos o mejorar las viviendas de personas de escasos recursos. También se ha llevado adelante el establecimiento de huertas comunitarias, costureros y centros de producción de artesanías con las comunidades aborígenes. En cuarto lugar, la UTD obtuvo, luego de varias negociaciones, que el municipio le cediera algunos de los galpones que pertenecieron a YPF. En ellos se establecieron un taller de gomería y arreglo de automóviles (donde se han reparado los tractores obtenidos para el trabajo en las huertas, por ejemplo); un taller de siderurgia y un taller de reciclaje de botellas plásticas. Incluso se puso en marcha la construcción de una universidad, a partir de la recuperación de un edificio de YPF abandonado y en el que anteriormente funcionaba la “Proveeduría” de la petrolera estatal¹²⁴.

¹²² Esta cifra surge de los registros de la UTD correspondientes al año 2003. Cabe aclarar que el Municipio de General Mosconi manejaba para esa misma época aproximadamente 6000 planes.

¹²³ En sus orígenes –durante 1996-, los planes Trabajar consistían en un subsidio por desempleo de \$220, que contemplaba una contraprestación laboral de 4 horas. Luego se comenzó a disminuir el monto del subsidio hasta alcanzar los \$150 a nivel nacional.

¹²⁴ Dificultades económicas para costear el trabajo de los docentes, entre otras cosas, y la falta de apoyo político por parte de los poderes locales impidieron que la universidad pudiera abrir sus puertas, pese a que el edificio fue inaugurado en el año 2002. Sin embargo, las personas que integran la UTD continúan realizando gestiones para hacerla funcionar. Testimonios de la autora y Schaumberg, op. cit.

De tal manera, el desarrollo de estos proyectos posibilitó a la UTD no sólo un crecimiento interno puesto que nuevos integrantes se iban sumando a medida que los planes se mantenían, sino también su visibilización como exitosa organización inserta dentro de la comunidad, demostrando vastas capacidades de acción. En efecto, para que estos proyectos se pusieran en práctica no bastaba con diseñarlos (para lo cual se recurrió a la colaboración de estudiantes terciarios y universitarios avanzados y profesionales) y asignar la mano de obra –por cierto desvalorizada- de los planes. También era preciso obtener la materia prima y las herramientas necesarias para el desarrollo de las propuestas, así como un lugar estable que funcionara como centro de reunión, administración y articulación de actividades. Esto no fue fácil ya que la UTD se negó a convertirse en una organización no gubernamental o adquirir algún tipo de personería jurídica que podría haber facilitado la obtención de planes asistenciales y/o subsidios, por ejemplo, para comprar o alquilar un local o contar con financiación alternativa para los proyectos. Cuando se pregunta a sus integrantes las causas de esta decisión, la respuesta suele ser rotunda: “Somos una organización horizontal. Y los que vinieron con las tres o cuatro ongs. que llegaron para organizarnos, eran todos tipos que querían salir en política. Y el que te da la plata te dice lo que tenés que hacer. Y nosotros tanta ley no [queremos]”, decía con orgullo Rodolfo “Chiqui” Peralta.

Otro tanto sucedió con las invitaciones a alinearse detrás de partidos políticos. Si bien algunos integrantes de la UTD ocuparon en algún momento cargos en el municipio local¹²⁵, la organización se mantuvo renuente a presentarse en elecciones municipales o adherir a cualquier fuerza política, privilegiando la independencia política en la construcción y en las prácticas de la organización. De tal manera, lo que pudiera obtenerse sobrevendría de presiones ejercidas sobre las empresas privatizadas o las instituciones gubernamentales, acuerdos con organizaciones sociales no contrincantes, o movilizaciones de protesta, más que de pactos que pudieran poner en riesgo la autonomía pretendida. Fue así como el local en el que comenzó a funcionar la UTD provino de una cesión hecha por el sindicato de transportistas de General Mosconi. Entre tanto, muchas de las herramientas y materiales necesarios para algunas de las tareas decididas fueron resultado de “donativos” y “colaboraciones” realizadas, por ejemplo, por directivos de empresas transnacionales tales como *Tecpetrol S. A.* o *Refinor S. A.*, o los propias administraciones municipales cuando, a través de una política que entremezclaba el diálogo con bloqueos en los ingresos de las empresas o al edificio municipal, la UTD los “convencía” de los beneficios de una “generosa actitud”, como comentaban entre risas irónicas algunas de las personas entrevistadas.

Por otro lado, y en vistas de que la obtención de fuentes de trabajo “genuino” -y no planes Trabajar- era el objetivo central de la organización, la UTD no dejó de lado aquellas acciones vinculadas a conseguir puestos laborales más estables y/o defender derechos de aquellos/as trabajadores/as que sí los tenían. Así, por ejemplo, actuó varias veces como

¹²⁵ Tal fue el caso de Juan Carlos “Hippie” Fernández, hermano de “Pepino” y también ex ypefeano, que en el año 2002 aceptó la oferta del en ese entonces intendente justicialista Karanicolas para crear y ocuparse de la Secretaría de Producción y Empleo de la municipalidad de General Mosconi. Si bien esta propuesta dio lugar a fuertes debates dentro de la UTD, una asamblea decidió que Hippie aceptara y ocupara el puesto hasta que diferencias insalvables con el intendente lo llevaron a renunciar al cargo.

sindicato con el cual las gerencias de las petroleras o empresas de la construcción debían negociar. Incluso llegó a liderar conflictos laborales, reemplazando a sindicatos tales como la UOCRA local, y utilizando como forma de acción el corte al ingreso de las obras y/o de las empresas. Así obtuvo incrementos salariales y mejores condiciones de trabajo para los obreros de la construcción y para los propios trabajadores petroleros de las empresas transnacionales. Estas últimas, asimismo, se vieron obligadas, en ocasiones, a contratar trabajadores provenientes de las filas de la UTD, si bien de forma temporaria.¹²⁶

Tanto en la formación y desarrollo de la UTD como en sus prácticas beligerantes y organizativas, el papel de las mujeres ha sido sumamente activo. En la sección siguiente me detendré, consecuentemente, en el análisis del mismo y el impacto que tienen las acciones de las mujeres para sí mismas y en relación con el colectivo político del que forman parte.

De la costura al ladrillo, de la protesta a la organización: mujeres que se ocupan.

Como sostuve anteriormente, la UTD había nacido de la mano de un grupo de ex trabajadores ypefeanos entre cuyas experiencias de lucha se contaba la resistencia a la privatización de YPF. Sin embargo, rápidamente se nutrió de un vasto conjunto de mujeres quienes, a medida que se armaban los proyectos, veían en la organización la posibilidad de enfrentar la situación de miseria y marginación imperante. Así, algunas como Nancy, una joven de 29 años, desempleada y estudiante de una carrera terciaria del profesorado de Tartagal, obtuvieron un subsidio y comenzaron a desempeñarse como trabajadoras administrativas de la UTD. Otras se han integrado a las huertas comunitarias, al trabajo en los costureros o en obras públicas, el desmalezamiento, la reforestación y la refacción de plazas y/o escuelas.

En la realización de estas tareas las mujeres fueron mucho más allá de las actividades específicamente comprendidas en ellas, y desplegaron saberes que sirvieron para crear lazos solidarios y afectivos dentro de la organización, coadyuvando a fortalecer el compromiso de sus integrantes y su crecimiento. Un ejemplo claro de esto fue lo sucedido con los “boca-seca”, un grupo de jóvenes desocupados del barrio mosconense “Libertad” con los que era difícil relacionarse. De acuerdo a Rodolfo Peralta “los boca seca que le dicen eran famosos [...]. Eran changos de 18 a 20 años que estaban en la esquina que al que pasaba lo insultaba, le pegaban y salían a robarlo para tener qué tomar, se peleaban con patotas de otros dos barrios. Uh!!! Eran terribles. Y los trajimos obligados acá porque

¹²⁶ Coincido con la caracterización de Svampa y Pereyra respecto de la originalidad y potencialidad que estas formas de acción y prácticas organizativas de la UTD poseen, así como su relevancia política en cuanto actor comunitario. Sin embargo, estas capacidades de presión, enfrentamiento y desarrollo de proyectos que involucran todo lo analizado y descripto hasta aquí, distan de convertirla en un “gobierno paralelo” o en una suerte de “poder ejecutivo paralelo”, tal como estos autores señalan. En efecto, las prácticas sociales y políticas de la UTD dejan a las claras la “ausencia” de las instituciones estatales en lo que hace a las funciones sociales que otrora tuviera el Estado, revelan una gran capacidad de maniobra y permiten imaginar cuán distinta sería la vida local, al menos, si sus integrantes condujeran los destinos de General Mosconi. Pero la UTD no accede de manera alguna a ninguno de los recursos económicos, ideológicos y políticos que poseen las instituciones estatales y con los cuales articulan y reproducen la dominación y hegemonía burguesas. Por tanto, si bien la UTD obviamente introduce permanentemente obstáculos a tal reproducción, no cuenta con el poder como para establecer un “gobierno paralelo”. Ver: Svampa y Pereyra, op. cit.

tenían que trabajar [...]. Poco a poco se fueron educando, sin que le digamos mucho. Por eso creemos que el trabajo dignifica [...].”

Más que el trabajo en sí mismo, quien tuvo que ver mucho con el cambio de estos jóvenes fue Doña María –la mujer boliviana a quien ya hiciera referencia en este trabajo-, puesta a cargo del grupo por “Pepino” Fernández. “En ese momento yo tenía 40 chicos, de 18 a 25 años. ¡Eran de rebeldes! Y cuando los ví el primer día, casi me han hecho llorar. Porque eran de atrevido, pasaba una chica y le decían ‘¡qué culo!’, ‘¡qué tetas!’, así le decían. Se tiraban piedras entre ellos.”, afirmaba ella sonriente. Como doña María debía trabajar con ellos en tareas de desmalezamiento, los veía cotidianamente durante la semana y, en sus propias palabras, lo que más le preocupaba era “cómo le voy a ganar a estos chicos”. Fue así como un día, hacia el final de la jornada, a María se le ocurrió convidarlos a que “después del fin de semana cada uno traiga un pedacito de algo y vamos a cocinar [...]”. Estábamos limpiando la ruta. Cuando nos sentamos a comer a las doce, les empiezo a hablar. Me dice uno, ¿por qué nos discriminan a nosotros? Porque ustedes son muy atrevidos [...] Porque ustedes no tienen cordura, no tienen respeto. Ustedes van a la UTD, y Chiqui me salió a decir ‘téngalos cien metros fuera de acá’, porque hacen lío. Ustedes deben aprender a tener respeto a Pepino, por empezar, Pepino es nuestro dirigente, si él no hubiera salido a la ruta, nosotros no tendríamos estos ciento cincuenta [pesos]. Si él no hubiera salido a luchar, si bien nosotros lo seguimos, él pone el pecho y a él lo llevan preso y a él lo detienen. Ustedes tienen que aprender por ese motivo a respetarlo a Pepe [en alusión a Fernández]. Y a Chiqui lo tienen que respetar porque es el señor que mueve todos los papeles, que si él no lo hace, nadie lo va a hacer, porque no lo saben manejar, como lo maneja él, se merece respeto. [...]”.

Fue así como durante los momentos de descanso y a través de las comidas que María preparaba para todo el grupo, ella fue ganando su confianza. Sus charlas y sus atenciones la convirtieron tanto en la consejera y referente de los “boca-seca” como en el nexo entre ellos y la UTD. Y si bien los argumentos de María revelaban su sentido de jerarquía y autoridad, demostrando que las bases del liderazgo se centraban, para ella, en “poner el pecho” en la lucha y en el conocimiento (características reconocidas en Fernández y Peralta), sus “conferencias” –como a ella le gusta decir- no sólo se referían a la forma en que los jóvenes debían comportarse dentro de la UTD o en el desempeño de las labores asignadas. Por el contrario, abarcaban muchísimos más aspectos de sus vidas cotidianas. El trato hacia las mujeres, aprender a compartir lo que se tenía y respetarse mutuamente, aportar dinero a la manutención familiar, eran temas que ocupaban varias veces la escena. Como ella me contaba: “Y un día estábamos charlando, y les digo ustedes le tienen que dar cincuenta pesos a la mamá que les da el té y la comida todos los días. Así que las madres todas contentas”. En otras ocasiones, ante chistes sexistas y denigratorios, María intervenía bastante molesta: “Un día a uno le dijeron ‘¿por qué llegas tarde?’. ‘Porque vos te has venido y me he quedado en la cama con tu mujer. Me he tomado la leche y el vino, todo’, le contestó. Entonces yo pensaba cómo los iba a agarrar. Entonces dije “Bueno, el viernes vamos a hacer un picadito.” Y [cuando nos sentamos a comer] empecé: ‘No quiero oírlos hablar más así, porque si tienen sus esposas, sus mujeres, sus amantes, sus novias, entonces las tienen que respetar porque son las madres de sus hijos y ustedes las han elegido, y han tenido hijos, porque las tienen que hacer respetar. El hijo es de los dos, no quiero más una broma de esa calidad, nunca más.’. María, concedora a su vez de los niveles de violencia

doméstica existente en General Mosconi, apuntaba a modificar los vínculos que ellos establecían con sus propias parejas.

Por otro lado, la forma en la que ella coordinaba y llevaba adelante las tareas colectivas, si bien descansaba en cierto modelo jerárquico al que intentaba sustentar por fuera de las relaciones “jefa-subordinados” mediante actitudes ejemplificadoras, también incorporaba elementos de participación activa e igualitaria. Según ella: “Yo les decía que porque los maneje no es que soy su jefe. Los controlo porque soy una persona mayor. Pero tenemos los mismos sueldos, somos compañeros de trabajo, y nos debemos respeto el uno al otro. [...] Y no es que los obligo a trabajar, yo llego con ellos [...] charlamos un rato y sin decirles nada agarro mis cosas y me voy y cada uno se va a hacer su oficio. [...] Y les pregunto con las tareas: ¿están de acuerdo ustedes? Porque también tienen derecho a opinar, no puedo ir y decir... Así no. No es que vaya y le imponga.”

Finalmente, todo esto logró modificar las pautas y formas de sociabilidad de los “bocaseca”, al igual que sus relaciones con el resto de la UTD. María, de similar manera a lo realizado por Laura Padilla durante las jornadas de enfrentamiento en Cutral C6 y Plaza Huincul en junio de 1996¹²⁷, actuó políticamente amalgamando en su práctica experiencias provenientes de sus atributos de género. En lo que ella les decía, la forma y el escenario escogido para hacerlo, se entrecruzaban visiones de la realidad, demostraciones de afecto y contención, enseñanzas a través del ejemplo, que daban cuenta de su pericia para, desde una subjetividad estrictamente femenina y que no necesariamente cuestionaba de raíz la relación entre los géneros, moverse fluidamente entre lo considerado propio de la vida privada y aquello concebido como parte de la vida pública. Ello le permitió, por un lado, impulsar una reflexión política colectiva respecto a lo que estos jóvenes hacían en uno y otro ámbito. Y, por el otro, ganar para sí misma visibilidad en cuanto referente de la organización y nexos entre ellos y la UTD a la par que fortalecer/cohesionar a esta última.

Otro caso de importante participación femenina puede hallarse en la “Botellera”, nombre que recibe el proyecto de reciclaje de botellas plásticas y el espacio en el que se implementa.¹²⁸ El desarrollo y funcionamiento de la misma han sido detalladamente tratados por Schaumberg, razón por la cual me limitaré a sintetizar algunas de sus características (Schaumberg, Heike, op.cit.).

La “Botellera” surgió como uno de los proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente, en el que se insertaban también propuestas orientadas a reforestaciones posteriores a los desmontes de ciertas zonas, o el desmalezamiento de otras. Siendo uno de los primeros proyectos que la UTD puso en práctica, la “Botellera” nació durante el año 2000 encabezada por una mujer que en poco tiempo se convirtió en figura destacada de esta organización. El trabajo consistía en la realización de varias tareas, distribuidas en un principio en tres turnos de 4 horas cada uno –mañana, tarde y noche- y que contaba con la

¹²⁷ Me refiero a la forma en que Laura logró articular los subpíquetes con los jóvenes y los borrachos y la manera en que ella, mediante abrazos, atenciones y cuidados –según comentara-, hizo que todos se mantuvieran en las barricadas y sin enfrentamientos entre sí durante la pueblada de 1996.

¹²⁸ La Botellera funciona en uno de los galpones que la municipalidad heredó e YPF, ya mencionados anteriormente en este trabajo.

participación de 6 a 8 personas por turno. En primer lugar, quienes trabajaban en el turno (mayoritariamente mujeres) recolectaban botellas plásticas en el pueblo para luego descargarlas en la botellera. Allí, literalmente las aplastaban con los pies, las compactaban en una máquina compactadora donada por una de las empresas petroleras –*Refinor S.A.*–, para terminar armando los fardos con alambre que luego eran guardados en un galpón hasta su venta. Originariamente, la empresa petrolera se había comprometido a comprar estos fardos e incluso se llevó algunos, sin haber pagado hasta ahora por ellos. También iba a donar la ropa de trabajo e instrumentos que garantizaran la seguridad e higiene durante el proceso laboral. Sin embargo, nada de ello fue cumplido.

Por otra parte, se esperaba que con el beneficio de las ventas pudiera mejorarse las asignaciones monetarias individuales de los planes asistenciales y obtener cierto capital para ser invertido en otros proyectos. Pero esto tampoco ha sucedido hasta ahora. Por el contrario, el incumplimiento de las empresas respecto de la compra de los fardos y la falta de alternativas para su comercialización, ha provocado que disminuyeran los turnos de trabajo de tres a dos, así como la producción en cada turno. Esto generó, a su vez, ciertas fricciones con otros referentes de la UTD, puesto que las mujeres que trabajan en la botellera perciben que es escaso el interés y compromiso del resto de la organización con lo que ellas hacen y con las condiciones francamente insalubres en las que trabajan.

Justamente quienes se desempeñan en esta tarea son en su mayoría mujeres jóvenes, en muchos casos con hijos pequeños y enteramente bajo su tutela, lo cual ha conducido a que asiduamente ellas tuvieran que llevar a los y las niñas a la botellera, con la peligrosidad y perjuicio para la salud que ello implica. Sin embargo, esto pareciera estar naturalizado dentro de la UTD en general puesto que aún cuando la mayoría de las mujeres que están insertas dentro de los proyectos tienen hijos e hijas de poca edad, la organización carece de un espacio donde estos niños/as puedan permanecer bajo el cuidado de adultos/as específicamente designados a tal empeño.

Pese a todas las condiciones desfavorables mencionadas, es interesante resaltar que las relaciones laborales que las mujeres han construido dentro de la botellera distan profundamente de las que se viven tanto en los lugares de trabajo fabril o de servicios, como en los proyectos y planes manejados por otras organizaciones de desocupados o por las instituciones gubernamentales. En primer lugar, si bien existe una persona responsable de controlar la asistencia al trabajo (la “tarjadora”)¹²⁹, no ejerce sobre el resto un poder de jefatura, y trabaja a la par de las demás integrantes del turno. En segundo lugar, tampoco se practica la suerte de vigilancia “policíaca” sobre la forma en que cada trabajadora realiza sus tareas, tal como sucede dentro de las empresas. A su vez, si surge algún problema relativo a la tarea, el desempeño o de cualquier otra índole, el mismo y su solución son sometidas a debate dentro del grupo. De esa forma, es el compañerismo y el compromiso colectivo, más que la disciplina emanada de la jerarquía y el cumplimiento de pautas ajenas

¹²⁹ “Tarjadora” o “tarjador” es la denominación que recibe quien se encarga de controlar el marcado de las “tarjetas” de horario de entrada y salida de los y las trabajadoras. Esta figura, que viene de los tiempos de YPF y que existe en otras industrias, persiste aquí debido a que este tipo de controles constituyen una de las condiciones determinantes estipuladas por el Estado para la permanencia dentro de un plan.

o no decididas por todas las personas que allí trabajan, las que determinan la manera en que se efectúa el trabajo.

Ahora bien: en términos generales, acorde los registros de la UTD y los dichos de Rodolfo Peralta, paulatinamente la cantidad de planes asistenciales entregados a mujeres ha superado a aquellos asignados a varones¹³⁰. Esta tendencia a la feminización en la entrega de los subsidios a nivel local ha guardado correspondencia con lo que sucedido a nivel nacional.

Si se toman en cuenta los totales de los programas de empleo de 1999 dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y que incluían los planes “Trabajar”, “Servicios Comunitarios”, “Forestar”, “Especiales de Empleo” y “Proempleo”, el 61.3% de los mismos estaban distribuidos entre los varones, en tanto que el 38.7% eran adjudicados a las mujeres. Sólo en ciertos casos, como en el plan “Servicios Comunitarios”, la presencia de las mujeres era fuertemente superior (92.8%)¹³¹. Empero, años más tarde y según las estadísticas de este mismo ministerio, el plan “Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”, creado en abril de 2002 por Decreto 565/02 y que aglutinó a los anteriores, revirtió esta situación. Para abril de 2004, por ejemplo, de los 671.882 planes de la provincia de Buenos Aires, el 67% estaba distribuido entre las mujeres; en Córdoba, el porcentaje alcanzaba al 67.8% de los 104.252 planes; en Jujuy, al 69.8% del total de 60.865 planes; y en Salta, de los 67.815 planes, las mujeres accedían al 76.09%¹³².

En General Mosconi, las razones que los/as integrantes de la UTD han esgrimido para justificar estas diferencias se centraron, fundamentalmente, en la responsabilidad y en la capacidad de lucha y perseverancia de las mujeres. Nancy puntualizaba las siguientes características cuando las describía: “Las mujeres son las que ponen el hombro a todo, son las que más fuerza tienen. No sé si es porque la mayoría tiene sus hijos y por defender a un hijo uno hace cualquier cosa. [...] Son las mujeres las que ponen las ganas a todo, inclusive en los trabajos, en las huertas.” Por su parte, Rodolfo Peralta afirmaba: “Yo he tenido cierto favoritismo de que ingresen más mujeres que hombres [en los planes]. Yo nunca cobré el plan pero por ahí pasaba y miraba: las mujeres salían del banco al mercado y las veía con las bolsas con mercaderías. Y los veía a los muchachos los primeros tiempos sentados en el bar y gastaban los ciento cincuenta en la timba. A mí me reventaba de odio [...] Los tipos graciosamente van y lo tiran. En cambio cuando yo veo que una mujer va con su bolsa con leche, con el pañal, con las cosas para los hijos, pero ¡qué bueno! Y ahí me di cuenta. Antes ni lo había pensado, valoré a mi mujer incluso, por el hecho de que piensan primero en el hijo y en su casa. Y en cambio los hombres somos muy desaprensivos, muy locos en el manejo de la plata. Después, la otra: [las mujeres] son mucho más responsables, apegadas al trabajo.”

¹³⁰ Las mujeres acceden al 60% aproximadamente de los casi 2000 planes de la UTD.

¹³¹ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1999): *Estadísticas Laborales*. Revista de Trabajo, Año 5, Nro.13. Noviembre.

¹³² Datos contruidos a partir de las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sobre “El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”. Abril de 2005.

En apariencia entonces, sería la disposición puesta en cuidar a los otros el valor preponderante que convierte a las mujeres en beneficiarias predilectas de los planes asistenciales. Del ejercicio de la maternidad (real o potencial), se desprenden las restantes cualidades que reforzarían tal preferencia: la responsabilidad y el apego al trabajo, la capacidad de lucha, la persistencia en las cuestiones encaradas. Sin negar la veracidad de estas razones, me parecen insuficientes a la hora de analizar por qué las mujeres reciben más planes que los varones. De hecho, muchos de los varones que se desempeñan en los proyectos de la UTD lo hacen con igual grado de compromiso. Considero entonces, que detrás de la maternidad existen otros “imaginarios” en juego en los que la exaltación de las capacidades femeninas, incluso limitadas al tradicional rol materno, es ciertamente dudosa. Esos imaginarios se articularían detrás del binomio planes asistenciales/trabajo “genuino”¹³³, y la manera en que el género atraviesa tal enlace.

Las interpretaciones en torno al significado del trabajo “genuino” son variadas. Enfocándome exclusivamente en las realizadas por los varones y las mujeres que protagonizaron las experiencias beligerantes en Neuquén, por ejemplo, y en General Mosconi, o de quienes forman parte de la UTD salteña, pude observar que, en principio, estas variaciones dependían de experiencias laborales previas, de la edad de los y las testimoniantes, y de la influencia ejercida por los partidos políticos cuyas prácticas políticas se han orientado hacia estos actores sociales. De tal suerte podría decirse, en primer lugar, que generalmente para aquellos varones y mujeres adultos/as que durante su juventud tuvieron un trabajo estable, en blanco y con salarios que cubrían su reproducción y la de su familia, el trabajo realizado como contraprestación dentro de los planes asistenciales es absolutamente antagónico al concepto de trabajo “genuino”. Dina, una de las líderes de la CCC del barrio Centenario en la provincia de Neuquén, trabajó desde muy joven en empresas de fruticultura. A comienzos de la década de 1990, pasó a estar desocupada. Ella sostenía lo siguiente: “[...] Cuando convocamos a todos los vecinos que estaban sin trabajo, empezamos reclamando trabajo genuino, porque estábamos acostumbradas a trabajar en los galpones [de fruta]. En el gobierno no hubo posibilidades, así que tomamos lo de los planes, pero sin aceptarlo, no estamos de acuerdo con el trabajo en negro, siempre lo discutimos y seguimos peleando por trabajo genuino [...]”. Para ella, entonces, el trabajo en los planes asistenciales es un trabajo en negro, pero trabajo al fin.

Para Mónica, activista del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén (MTD), organización ligada parcialmente al trotskista Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), la oposición entre uno y otro es mucho más tajante a punto tal que ella, como desocupada, establece una clara diferencia entre su tipo de reclamo y el que, bajo su óptica, realizan las mujeres piqueteras. “[...] Las mujeres piqueteras se movilizan, nosotras

¹³³ Cabe aclarar acá por qué utilizo las comillas para referirme al trabajo “genuino”. Siguiendo la tradición marxista, ningún trabajo realizado dentro de las relaciones sociales capitalistas constituye un trabajo genuino en la medida en que en todo trabajo el/la trabajador/a se aliena de sí mismo/a, no es dueño/a de los medios de producción ni de lo producido. Por tanto, cualquier trabajo es ante todo fruto de la coacción y, consecuentemente, forzado, lo cual implica tanto el trabajo en negro como en blanco, por ejemplo. Sin embargo y si bien estoy de acuerdo con tal concepto, lo que me interesa rescatar aquí -y a sabiendas de que el grado de cuestionamiento de las relaciones capitalistas de producción por parte de la clase trabajadora de General Mosconi no alcanza al punto de proponer su destrucción- es cómo se construye la autopercepción en tanto trabajadores/as y las características que según ellos/as poseen ambas categorías de trabajo.

cortamos la ruta y ellas también cortan la ruta, nosotras con un objetivo de llegar a tener un trabajo genuino. No nos gusta que nos den planes y mercadería. Lo aceptamos en última instancia [pero] ellas van directamente, y le dan planes o bolsas y se vienen. Nosotros [...] primero queremos trabajo.” Así, si bien Mónica da cuenta de la similitud en las formas de lucha –cortes de ruta-, presenta una clara divergencia entre lo que motiva su lucha como desocupada y la de las piqueteras, a la par que siente rechazo a la política asistencialista del Estado si bien reconoce, a su vez, que momentáneamente está obligada a aceptarla. Por otro lado, la contraprestación exigida en los planes ni siquiera constituye para Mónica un trabajo en negro.

Volviendo al territorio de la UTD, para muchos jóvenes que nunca han tenido un trabajo permanente, es justamente la estabilidad lo que permite determinar la diferencia entre una y otra categoría de trabajos. Para otros, el tipo de trabajo que realizan en los proyectos de la UTD donde “no hay patrón, no te vigilantean y te vas organizando el trabajo vos y lo conseguís en base a la lucha”, acorde los dichos de uno de ellos, es también trabajo “genuino”. En cambio, para los exyefeños que integran la UTD o la *Coordinadora de Ex Trabajadores Ypefeños de General Mosconi* los planes asistenciales no constituyen trabajo “genuino”. Este último, aunque está ligado a la estabilidad en el empleo, se asienta más en “condiciones de trabajo dignas, tener derechos laborales, que la patronal cumpla con todas las normas de seguridad del trabajo y los derechos del trabajador como los aportes para la jubilación, las vacaciones, cubrir los accidentes de trabajo y no como ahora que si te lastimás te jorobás y que además te paguen un sueldo que te permita mantener a la familia y la educación de los hijos”, comentaba Mario, un ex ypefeño. Evidentemente, en este caso lo definido como trabajo “genuino” remite a lo conocido y recordado como parte del “mundo ypefeño”. Y es aquí donde se halla el vértice en el que se entrecruzan género, trabajo “genuino” y planes asistenciales.

El “mundo ypefeño” expresaba relaciones androcéntricas donde, entre otras cosas, los recursos económicos familiares eran cubiertos en mayor medida por los trabajadores. Mistificado e idealizado a partir de su derrumbe, la nostalgia y la memoria de las relaciones laborales, sociales y familiares, o el acceso al bienestar material que ese mundo contenía, no se escindió del rol que mujeres y varones de la clase trabajadora tenían en él. En tal sentido, el reclamo por trabajo “genuino” encierra también un reclamo por el retorno al lugar de proveedores de la vida doméstica que poseían los varones.

Por otra parte, en la valoración social de la mujer trabajadora asalariada y del significado de su salario, pese a los cambios que se han producido en los últimos 50 años, persiste la idea de que lo que ella realiza y obtiene es un complemento del trabajo y el salario masculino. Por lo tanto, en la escala de prioridades, el supuesto implícito respecto de quién debe acceder primeramente a la obtención de puestos de trabajo “genuino”, reposa aún en el sexo masculino.

Ambas cuestiones explican que el trabajo existente como contraprestación de los planes, que sobreexplota aún más a la fuerza de trabajo, bien pueda quedar en manos de las mujeres, cuya fuerza de trabajo se encuentra históricamente más “desvalorizada” y mucho más alienada que la de los varones.

Además, se debe tener en cuenta que efectivamente el monto pagado por la contraprestación laboral de los planes, que de hecho implica un trabajo precarizado impulsado por el propio Estado, ha presionado sobre el salario pagado por el trabajo en blanco y las condiciones laborales de los/as asalariados/as ocupados/as, tendiendo a reducir y empeorar aún más uno y otras. Asimismo, dentro del trabajo en condiciones precarias en general, las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral¹³⁴. Por ende, lo sucedido con el trabajo en negro patrocinado tanto por el Estado como por las empresas privadas, demuestra que no sólo las mujeres trabajadoras continúan siendo utilizadas como punta de lanza para reducir los “costos laborales”, sino que opresión de género y explotación de clase se combinan a tal punto que no sólo agravan las condiciones materiales femeninas de existencia, sino que obstruyen que la lucha por el trabajo “genuino” sea un horizonte legítimo –dentro del sistema capitalista- y de igual valor en su acceso, para varones y para mujeres.

En conclusión, entonces, la preferencia tanto del Estado como de organizaciones sociales y políticas como la UTD por las mujeres en la distribución de los planes asistenciales conlleva una discriminación sexista que perpetúa las desigualdades de género y acentúa las diferencias y sujeciones en el interior de la clase trabajadora en perjuicio de las mujeres, sean o no concientes de ello todos los actores sociales involucrados en este proceso.

Es pertinente analizar ahora, entonces, si estas desigualdades cobraron forma específica en la trayectoria política de las mujeres dentro de la UTD. A tal fin me propongo dar cuenta de cuáles son los criterios en los que se ha sustentado la legitimidad del ejercicio de liderazgo dentro de la organización y de qué manera la participación femenina ha incidido en la ocupación de espacios de conducción política.

Líderes, referentes o responsables: las ambigüedades de la dirigencia.

Cuando los activistas de la UTD más reconocidos públicamente describen la estructura política interna de la organización, la horizontalidad es la característica que resaltan con mayor frecuencia. Según Rodolfo Peralta: “La UTD es una organización horizontal. Hasta el ‘99 el único referente era Juan Nievas. [...] Ahora tiene un referente que es “Pepino” y más o menos yo, que alguna gente me identifica por que llevo adelante el tema administrativo [...]”.

Este testimonio permite dar cuenta de varias cuestiones. La primera de ellas es el sentido asignado al concepto de horizontalidad. Con él se alude, fundamentalmente, a dos principios rectores de la organización. Por un lado, a la inexistencia de jerarquías institucionalizadas formalmente. En efecto, la UTD carece de dirigentes, representantes o comisiones directivas cuyo ascenso provenga de prácticas electorales regularizadas mediante mecanismos formales y delegativos de participación. Sin embargo, ello no

¹³⁴ Por ejemplo, considerando exclusivamente los aglomerados urbanos y solamente el sector privado, para 1997 existía un 30% más de mujeres que varones con inserción laboral precaria. Véase: INDEC-UNICEF (2000): *Situación de las mujeres en Argentina. Serie Análisis Social Nro. 1*. Buenos Aires, Publicaciones INDEC.

significa que no existan roles políticamente diferenciados, tal como manifestara María a los jóvenes “boca-seca”. Pero estos emanan de otras premisas.

Por el otro, la horizontalidad hace referencia a que las decisiones sobre las acciones que se lleven a cabo, provienen de asambleas en las que voluntariamente intervienen todos sus integrantes¹³⁵. Sin embargo estas prácticas asamblearias, como ya se dijo, fueron más erráticas en cuanto a su funcionamiento a la par que se acrecentaba la presencia de “Pepino” Fernández como líder más importante o visible.

La segunda cuestión que se desprende de este testimonio remite a la preferencia por la nominación de “referente” en lugar de “líder”. En la mayoría de las entrevistas realizadas a las personas que en distintos niveles ejercen la dirección de la UTD, se producía cierta incomodidad cuando preguntaba específicamente cómo habían llegado a ser líderes en la organización. Generalmente, corregían el uso de la palabra “líder”, reemplazándola justamente por “referente”. Indagando en ello pude observar que, en apariencia, “líder” contiene una valoración negativa puesto que reenvía a experiencias de participación, organización política y formas de ejercicio del poder que la UTD rechaza. En efecto, esta palabra, por ejemplo, ha sido reiteradamente utilizada para designar el rol de conducción en organizaciones de corte netamente verticalistas, tales como el sindicato petrolero – el SUPE-, donde el liderazgo se combinó con un fuerte proceso de burocratización, la consecuente falta de democracia interna y la “traición a los intereses de las bases”. En ese sentido, la escasa transparencia en las decisiones tomadas por este sindicato y, particularmente, el conocimiento de que las connivencias de su secretario general con la dirigencia menemista facilitaron el proceso de la privatización de YPF, fueron mencionadas asiduamente por los exypfeanos de la UTD como ejemplo de ello.

Otro tanto ocurre con la alusión al liderazgo de los sectores políticamente dirigentes en nuestro país. Si el mismo se basa en una práctica de la política plena de corrupción, incumplimiento de las promesas públicas realizadas en las campañas electorales, represiones de las protestas resultantes de las medidas de “ajuste” implementadas, acorde a los dichos de los y las integrantes de la UTD, quien pretende oponerse a tales prácticas o construir una política de sentido opuesto, también se diferencia en la elección de ciertas palabras que expresen tal intento.

¹³⁵ En lo que atañe a la participación voluntaria, ésta se extiende a muchas instancias dentro de la UTD, e incluso ha sido en algunos casos producto de la evaluación crítica de prácticas propias y ajenas de la organización. Por ejemplo, cuando comenzaron a obtenerse los planes “Trabajar”, una asamblea determinó que quienes eran beneficiarios de los mismos debían aportar \$2 para solventar los gastos básicos de la UTD (pago de servicios, fotocopias, viáticos de algunos de sus integrantes, y mantenimiento en general). Sin embargo, como ello generó ciertos cuestionamientos posteriormente, se dejó de implementar. Así, la UTD se mantiene a base de los aportes voluntarios de sus integrantes, el capital extra proveniente de la actividad económica resultante de los proyectos o lo que se conquiste mediante la confrontación. Otro tanto sucede con la participación en los cortes de ruta o en otras acciones de protesta. La UTD no hace “listas” ni da “puntajes” de acuerdo a la presencia en manifestaciones para determinar quién accede y quién no a los planes obtenidos. Esto es claramente distinto a lo que ocurre con otras organizaciones de desocupados y piqueteras, tales como el caso de la CCC en Jujuy, donde los planes se asignan de acuerdo a un puntaje otorgado según presencia en los cortes, asambleas y/o movilizaciones.

Todo esto no quiere decir que éstas sean las únicas connotaciones plausibles de inscribirse en el concepto de “líder” o que serlo necesariamente implica un ejercicio del poder indiferente o contrario a las decisiones del colectivo social representado. Pero sí que, aunque parcializada, la elección realizada por los “referentes” de la UTD no tiene nada de azaroso y da cuenta de percepciones, valores y prácticas concretas sobre las que se desarrolla la construcción del liderazgo interno.

Entre las premisas y cualidades que sustentan la ocupación de un cargo de dirigencia dentro de la UTD -fundamentalmente a partir de las causas que suscitaron la escisión interna de 1999-, se encuentran el “no venderse” y la coherencia entre un discurso de confrontación y una práctica beligerante, lo cual exige ante todo “estar al frente de las luchas”, como me explicaba Rosa, o “poner el pecho”, según sostuvo María. Además, la destreza en el manejo de los asuntos de la organización así como en la administración de los proyectos, el “cómo correr [en el sentido de presionar] a las empresas y al gobierno”, según dijera Víctor, un joven de la UTD, son condiciones fuertemente valoradas entre los y las activistas. A su vez, tanto el haber sido trabajador de la petrolera estatal como la participación en las luchas encaradas contra la privatización de YPF también pesan a la hora ocupar espacios de conducción.

Consecuentemente, si bien la dirección informal de la UTD descansa en varias personas, las mismas son mayoritariamente varones exypefeanos –tales como Rodolfo Peralta-. Entre ellos, su principal referente es “Pepino” Fernández, quien reúne muchas de las características señaladas. Según sus propias palabras: “Tengo muchos conocimientos por [haber trabajado en] YPF, en el sur, y eso me da lugar a mí a pelear puestos de trabajo. Por ejemplo hacer un gasoducto: dicen que no hace falta tanta gente y yo sé que sí, cuarenta o cincuenta, y yo sé que es mucho más [...] Entonces yo he conseguido estos puestos que se gana mucha plata. [...]. Yo soy referente porque he estado en todos los momentos difíciles, en todos los movimientos y porque en todo momento fui adelante. Hemos enfrentado sin piedra y sin nada a la infantería y desde ese momento ellos piensan que soy la salvación. Soy el último en irse y por eso me han agarrado muchas veces. No me escondo detrás de los otros [...]”. Estas definiciones de Fernández sobre sí mismo coinciden con las descripciones que otras personas entrevistadas, tanto mujeres como varones, han hecho de él. Y aunque su tipo de liderazgo también contempla un fuerte personalismo que incluso ha dado lugar a la emergencia de ciertas tensiones o, como contrapartida, a la idea de que “cuando ‘Pepe’ no está no se hace mucho”, los cuestionamientos no apuntan a su honestidad o a sus convicciones y sus acciones de oposición a la política neoliberal.

Por otro parte, algunas mujeres ocupan espacios de dirección intermedia o aún mayor. Sin embargo, y pese a tener un fuerte ascendiente en sus respectivos lugares, no son visibilizadas en el mismo nivel de “Pepino” ni ocupan el mismo rol.

Cuando los varones intentan explicar porqué dentro del movimiento piquetero o de la UTD –en este caso-, el liderazgo recae mayormente en ellos, las reflexiones se centran tanto en la composición de clase, como en la fuerte persistencia de una cultura “machista” vinculada a lo anterior, y en la aceptación de las propias mujeres. Por ejemplo, Peralta relataba lo siguiente: “Esto tiene que ver con de qué está nutrido el movimiento piquetero. Clase media no, sino de la clase más deprimida. Y ahí reina el machismo y la preeminencia que tiene el

hombre sobre la mujer. La mujer en sí –no es tanto porque el hombre lo quiera- la mujer misma en las capas más bajas de la sociedad acepta un segundo plano, acostumbrada. No es porque no tenga capacidad, solas ocupan el segundo lugar. El acompañamiento. Se trata de eso.”. Luego agregaba: “O tal vez este movimiento tiene de todo. Acá hay mucha gente pesada y para una mujer es difícil manejar ese grupo: hay que imponerse y hay momentos que hay que pelear. Nosotros somos unos de los que menos peleamos pero en Tartagal y Pocitos están a las trompadas. En cambio acá no. Pero aún así hay gente que levanta la voz y que si está una mujer al frente no la van a respetar. Entonces por eso mismo la mujer se retrae. No quiere llegar a ese punto. [...] Sería mas factible en Buenos Aires que hay mas consenso ideológico que una mujer pueda ocupar ese lugar. Para que haya más respeto. [...] Unos cuantos darían lugar a que una mujer llegue. Otros no. Y hay hombres que directamente sin pensar mucho dirían que no me va a manejar una mujer.” Más que en las características propias de las mujeres, aquí se hace hincapié en la perseverancia de una cultura machista relacionada con cierta clase social, con el supuesto de que en “Buenos Aires” las relaciones entre mujeres y varones son distintas debido también a la creencia en torno a que en esa ciudad existen otras experiencias alternativas ligadas a la circulación de mayor información, de debates que cuestionan los roles de mujeres y varones, de organizaciones feministas decididas a revertir la opresión de estas últimas, etc. En ese sentido, lo interesante de este testimonio es el énfasis puesto en lo relacional y contextual para explicar el lugar que ocupan las mujeres. Más allá de que, tal como la experiencia de María con los “boca-seca” demuestra, las mujeres de los sectores sociales más explotados no necesariamente carecen de herramientas que les permitan controlar situaciones de violencia o adversas para ellas, o que los varones de “clase media” sean menos “machistas” que los de otras clases, el intento de Peralta por desnaturalizar las relaciones de género lo lleva a postular que las mismas se tallan dentro un contexto histórico y social, y no en una esencialidad puntuada en lo sexual-biológico.

En otros casos, la reflexión se orienta más hacia la “voluntad” de las mujeres. De acuerdo a “Pepino” Fernández: “Las mujeres no tienen el mismo papel que los varones. Pero para mí tanto las mujeres como los varones están esperando que uno haga alguna cosa. Y está mal porque la participación es de todos. Y las mujeres no hacen las reuniones para manejar ellas. No quieren agarrar el compromiso, hablar.” De esta forma, lo que iguala a mujeres y varones dentro de la UTD es, según él, la falta de una participación activa. Con ello Fernández también pretendería dar una respuesta, aparentemente, a las críticas sobre su manejo personalista en la organización. Sin embargo, él considera que para que las mujeres puedan “dirigir” necesitan primero organizarse entre sí. A lo largo de su relato Fernández dio ejemplos de situaciones en las que esta auto-organización era exitosa, tomando en cuenta su propia experiencia familiar u otras que, bajo su punto de vista, demostraban una marcada capacidad decisoria de las mujeres: “Mi hermana por ejemplo sí. Enseguida te hace quilombo en un ratito y te puede cambiar la situación. Muchas mujeres tienen que ser como ella y tener personalidad. Y acá no da. Son muy pocas las mujeres que lo hacen. Tienen que participar más, tienen que decidir por sí solas. Vos tenés que agarrar diferentes grupos de mujeres que se han destacado en distintos lados. Si vos decís lo de Brukman, son poquitas, pero flor de quilombo hicieron”.

Sin perjuicio de que efectivamente una estrategia probable para que las mujeres reviertan la situación de “silencio”, subordinación o falta de decisión autónoma, consista en la

creación de una instancia de participación propia, se torna evidente también que para él tal subordinación no es producto de una relación desigual que implica tanto a las mujeres como a los varones y por ende, a sí mismo. Tampoco es casual que el modelo de mujer “independiente” remita a las obreras que hacen “quilombo” o a las que se destacan en la acción pública/política, tal como el caso de su hermana¹³⁶. Por cierto que la experiencia de las mujeres de la fábrica textil *Brukman Confecciones* es sumamente importante;¹³⁷ pero también lo es que muchas de las mujeres de la UTD han protagonizado los cortes de ruta, enfrentado las represiones, planificado y organizado los proyectos, fortalecido la organización y realizado un sinnúmero de acciones que en mucho se parecen a las encaradas por Celia Martínez y el resto de las mujeres de la empresa textil. Sin embargo, las acciones de las mujeres de la UTD no adquieren el mismo valor para Fernández. Ello se debe, a mi juicio, tanto a la experiencia de participación previa del propio Fernández como al horizonte en el cual se inscriben sus ideas sobre el modelo organizativo.

En ese sentido, los antecedentes de participación y lucha sindical de los varones deben ser puestos también en escena a la hora de analizar por qué, en el proceso de cristalización de la UTD como organización, las mujeres quedan relegadas a un segundo plano jerárquico o invisibilizadas para un líder como Fernández. Justamente, el peso de una historia marcada por la pertenencia a una empresa cuya mano de obra era mayoritariamente masculina, así como la experiencia ganada en el terreno de la lucha sindical en el pasado incidieron en que la conformación de la dirigencia de la UTD se basara fundamentalmente en los exyepfeanos y, dentro de ellos, en los que ya habían tenido diversas acciones relacionadas con una práctica sindical. La pertenencia al SUPE, como en el caso de Rodolfo Peralta que fue delegado de la “sección patrimonial” de YPF, o como en el caso de “Pepino” que si bien nunca tuvo un cargo formal dentro del sindicato, organizó varios conflictos en el sur - incluyendo cortes de ruta en Comodoro Rivadavia-, coadyuvó a que el modelo de referencia organizativa básico haya sido el sindical, que, al menos en la sociedad argentina posterior a los gobiernos peronistas de 1946-1955, ha estado predominantemente conformado y liderado por varones. Por lo tanto, la experiencia obtenida en este plano habría permitido por un lado, la rápida cristalización de una organización definida dentro de la UTD. Pero por el otro, también posibilitó que este modelo de participación y dirección reprodujera en el interior de la UTD ciertos parámetros provenientes de la experiencia organizativa sindical, de la cual la mayoría de las mujeres de General Mosconi carecen. Esto permitiría,

¹³⁶ Según me comentara “Pepino”, su hermana Noemí, a quien alude en la entrevista parcialmente transcrita, ha sido una importante militante peronista. Profesora de matemáticas, Noemí ha participado en varios cortes de ruta, motivo por el cual posee -al igual que él- varias causas penales en su contra. También ha encarado varios conflictos contra el gobierno local exigiendo la reapertura de aulas para clases de apoyo en la materia que dicta.

¹³⁷ Esta fábrica textil, que ocupa predominantemente mano de obra femenina, se encuentra en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Para diciembre de 2001, la patronal debía a las y los trabajadoras/es 5 meses de vacaciones, aguinaldos, aportes patronales, salarios familiares, los últimos tres meses de salario, entre otras cosas. A esta situación se había sumado el despido de dos empleados por reclamo de sus haberes. En la mañana del 18 de diciembre de 2001, las/os trabajadoras/es fueron sorprendidas/os con la ausencia de los dueños de la fábrica y el personal jerárquico. A partir de allí comenzó un proceso de ocupación y puesta en funcionamiento de la fábrica por las y los trabajadores que se negaron a aceptar el pedido de quiebra por parte de la patronal, enfrentándose al propio sindicato (el Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines -SOIVA-), alineado con los dueños de *Brukman*. Celia Martínez, delegada de las trabajadoras, ha sido una de las personas más representativas de esta experiencia.

parcialmente, explicar porqué para las mujeres es mucho más complicado no sólo asumir posiciones de liderazgo sino también tornar reconocibles sus condiciones para hacerlo legítimamente.

Sin embargo, ellas se incomodan también ante la posibilidad de ser referenciadas como dirigentes. Es interesante, en ese sentido, detenerse en la descripción y el análisis de la experiencia de Ica, en Coronel Cornejo.

Allí, esta mujer no sólo es la responsable de la confección y puesta en práctica de los proyectos sino que se ha convertido en la referente máxima de la UTD. Para desarrollar los proyectos, Ica cuenta con la colaboración de mujeres jóvenes a las que ella misma instruyó y formó para que se encargan de labores administrativas referidas a la asignación/distribución de los 150 planes asistenciales que tienen y la ejecución de las propuestas de trabajo colectivo planteadas. Entre estas últimas se hallan en funcionamiento un costurero comunitario, una peluquería para niños/as en edad escolar fundamentalmente, una huerta comunitaria, un proyecto de apoyo escolar para estudiantes de primaria y secundaria, uno de cuidado familiar para personas enfermas o ancianas y solas. En todos ellos trabajan mayoritariamente mujeres. Asimismo, se ha montado una ladrillera e implementado un proyecto de construcción del cementerio –paralizado actualmente por falta de materiales-, tareas en las que se desempeñan varones. Por otro lado, desde hace tres años Ica y otras mujeres de Coronel Cornejo lograron abrir un jardín de infantes para niños/as de 4 y 5 años que funciona por la mañana.

Recorriendo las calles de localidad junto con ella en octubre de 2004, fui testigo del reconocimiento que posee dentro de su comunidad y el ascendiente que sus palabras tienen entre los que forman parte de los proyectos, incluidos los varones. En esa ocasión presencié un diálogo entre ella y Julio, uno de los trabajadores de la ladrillera. En él se tocaron temas que hacían al funcionamiento de esta última, de la cual además Julio es responsable. Pues bien: Ica no sólo proponía cuáles eran las prioridades de trabajo, sino cómo debían llevarse a cabo, cuáles eran los tiempos en las que tenían que estar listas ciertas partidas de ladrillos acorde a los compromisos contraídos, quiénes y en qué turno tenían la responsabilidad de cumplir con ello. La firmeza del tono de su voz no alteraba la postura relajada que ambos tenían mientras debatían el tema. Tampoco parecía incomodarle a Julio el hecho de que fuera una mujer quien le dijera cómo y qué debía hacer. Por el contrario, se pusieron de acuerdo en que ella, hacia el final de la tarde, pasaría por la ladrillera para ver cómo iban las cosas.

Por otro lado, ante la emergencia de cualquier problema, para plantear medidas de protesta o reclamos ante el poder público local, Ica es la persona a la que constantemente se consulta, y su rol en Coronel Cornejo también es sumamente reconocido por los referentes de la UTD de General Mosconi, que aluden a ella como “la dirigente” de Cornejo. Es evidente que Ica se ha ganado este lugar por su trayectoria como luchadora y por la disponibilidad y la voluntad con la que se hace cargo de la organización, a pesar de que su casa está poblada de hijos/as y nietos/as que demandan también sus atenciones. Esta opción de compromiso público/político le implicó dejar de lado esas demandas. Según narrara: “Yo como mujer creo que he descuidado un poco mi familia, pero creo que también es importante que yo haga algo por mis hijos. Entonces lo poco que yo pueda hacer por el bien

de la comunidad lo voy a hacer y también lo estoy haciendo por ellos. [...] Por ejemplo, hoy a la tarde mi hija que tiene 6 años me pidió que la llevara a ver a la abuela. Y surgió esto de la UTD [en referencia a una reunión en General Mosconi] y le tuve que pedir disculpas que otro día vamos. Es muy importante mi hija. [...]

Sin embargo, Ica, pese al reconocimiento social del cual es objeto, rehuye a identificarse a sí misma como una líder o al menos, a utilizar esto como definatorio de su rol en la UTD. El siguiente diálogo que mantuvimos es sumamente ilustrativo en ese sentido: “[...] Yo creo que nunca me puse el rótulo de líder y si hay alguien que me quiere ver así, le pido que trabajemos juntos, que cada uno trate de organizarse, ver que a través de la lucha algo hemos conseguido. [...]

Entrevistadora: ¿Por qué cree que usted no es una líder y “Pepino” sí?

Ica: Porque fue el que tomó la iniciativa de decir vamos a luchar de una vez por todas que los gobiernos de turno no nos vean como un habitante más y empezar a luchar en sí para no caer, para que la comunidad vaya aprendiendo a conseguir lo que quiere.

Entrevistadora: ¿Y no es lo que usted hace en Cornejo?

Ica: Yo creo que sí, pero... no sé, tal vez sea por mi perfil bajo. Tengo un perfil bajo, tal vez nunca salí con ese objetivo, yo creo que con la actividad que uno haga para la comunidad le está demostrando el amor que uno le tiene a la gente. Cuando yo pasaba un mal momento de salud y veía el amor de la gente hacia mí eso me ha fortalecido muchísimo.”

Podría pensarse que la oposición de Ica a concebirse como una “líder” responde a la misma connotación negativa que esta palabra adquiere también para otros dirigentes de la UTD. Sin embargo, ella no sólo rechaza la palabra, cuyo uso por otra parte no objeta en la referencia a “Pepino” Fernández. Sino que rehúsa aceptar el rol de dirigente o a ser percibida como tal. Y como sus actitudes y cualidades son las mismas que la llevan a reconocer a “Pepino” como conductor de la organización –de allí el titubeo ante la pregunta-, arguye que es su “perfil bajo” o su falta de interés en ello lo que establece la diferencia. Pero allí ella contrapone dos “ideas”: la del liderazgo y la del amor de su comunidad. Sostiene entonces que se conforma con lograr lo segundo, al margen de que tenga otras miras puestas en la construcción de la organización y en la lucha para mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad.

Muchas de las mujeres entrevistadas, y no sólo en General Mosconi, argumentan exactamente lo mismo: que sus acciones están motivadas por el amor, que es la recepción del afecto de las demás personas lo que las fortalece, o que sus pretensiones políticas están lejos de acceder a algún tipo de dirigencia. De hecho, muchos de los análisis de sus propias acciones están permanentemente atravesados por los lazos afectivos. No así cuando hablan de los varones. Ninguna de ellas sostuvo que lo que incentivaba a “Pepino” o a “Chiqui” Peralta a la acción se relacionaba con algo de esto. Al contrario, se habla de convicciones, coraje para el enfrentamiento, consistencia entre actos y palabras, decisión de modificar el “status quo”, conocimiento, experiencia política, animarse a hablar o arengar en las asambleas, etc. Por ejemplo, una de las mujeres que trabaja en el costurero en Coronel Cornejo, me decía: “Yo no podría ser dirigente porque no sé leer”. Otra reflexionaba: “Ica hizo las cosas bien. Hizo mucho. Pero por ahí tendría que estar un hombre porque un hombre a veces siempre quiere estar más al frente”.

En ese sentido entonces, el ejercicio del liderazgo remite a un espacio exclusivamente “masculino”, puesto que todas las condiciones que lo hacen posible refieren a atributos asignados a los varones. Y más aún: cuando las mujeres portan visiblemente también coraje, convicción, experiencia política, arrojo, etc., la preeminencia que adquieren no necesariamente alcanza, por un lado, para sentirse en un pie de igualdad respecto de líderes varones (o que el reconocimiento de las mujeres restantes apunte en esa dirección y no en preferir la presencia de un varón); por el otro, para reclamar el liderazgo en la organización si se compite por él, o sentirse legitimada a pensarse como tal.

Por otra parte, la dicotomía entre estar en la casa, cuidando a los hijos, y estar en la UTD, recorriendo los barrios, edificando la organización, relacionándose con otras organizaciones, planificando acciones, no constituyen opciones que a los varones se les planteen. De tal manera, las responsabilidades y tareas que la dirección de una organización demanda, requieren tanto de una dedicación como de un uso del tiempo incompatible con las tareas y el uso del tiempo puesto en “cuidar de los otros”¹³⁸.

Finalmente, los límites entre la discriminación hacia las mujeres en el seno de una organización y la autodiscriminación de las propias mujeres, surgida –y no está demás decirlo– en una sujeción cultural aprehendida desde el nacimiento, se tornan difusos a la hora de explicar por qué las mujeres reniegan, en ocasiones, de la ocupación de puestos de conducción política dentro de una organización.

Sin embargo, la aparición de otro grupo de mujeres en uno de los cortes subsiguientes, abriría el camino para nuevas reflexiones y experiencias colectivas enfocadas en el terreno de la auto-organización de las mujeres y su espacio dentro de la UTD.

¹³⁸ Y cuando una mujer logra inclinar la balanza en pos de desligarse de las tareas afectadas al mundo doméstico, lo que suele activarse, como en el caso de Ica, es el sentimiento de culpa.

Madres, cortes y resistencias: las huellas del pasado.

Entre mayo de 2000 y junio de 2001, tres cortes de ruta tuvieron lugar en General Mosconi. Las respuestas gubernamentales ante los reclamos expresados en las barricadas recrudecieron a tal punto que esta localidad y Tartagal fueron ocupadas en distintas ocasiones por la policía local y las fuerzas de la gendarmería nacional, en tanto que la represión desatada contra los y las piqueteras provocó, además de una gran cantidad de heridos/as, la muerte de cinco personas.

El primero de estos cortes comenzó el 2 de mayo de 2000 y abarcó las localidades de General Mosconi, Pocitos, Tartagal y Aguaray. Su origen radicó en una convocatoria para bloquear las rutas realizada por los intendentes de Tartagal y Mosconi con el objetivo de “presionar en el contexto de la reestructuración económica que había desencadenado el cambio de gobierno y la vertiginosa interna del peronismo” (Svampa y Pereyra, 2003: 128).

Entre las exigencias de los y las piqueteras se contaban la libertad de todas las personas detenidas por la criminalización de la protesta social y levantamiento de cualquier causa contra los/as trabajadores/as; la creación de 15.000 puestos de trabajo “genuino” en el departamento de General San Martín; la elevación del monto de los subsidios de los planes Trabajar; la reducción de la jornada laboral en las empresas petroleras de 12 a 8 horas para abrir fuentes de trabajo e incorporar a trabajadores desocupados; la triplicación de las regalías pagadas por las empresas petroleras; el aumento del salario para los docentes; subsidios para las Pymes locales; la intervención a los municipios; entrega de tierras a las comunidades indígenas.

Luego de una semana de corte, el juez federal Miguel Medina determinó la intervención de las fuerzas de gendarmería. En la madrugada del 12 de mayo, 1.100 efectivos comenzaron a reprimir a las 300 personas que en ese momento se encontraban distribuidas en dos piquetes¹³⁹.

Sin embargo, el violento despeje de la ruta no fue suficiente para poner término a la represión del gobierno provincial. Así se dio permiso a la policía para que ocupara el pueblo de General Mosconi, mientras oficiales de Gendarmería ponían bajos sus órdenes las sedes de la iglesia, el hospital y el cuartel de bomberos de la ciudad. Se pretendía evitar con ello, por un lado, que las ambulancias pudieran socorrer a las personas heridas en la ruta y, por el otro, que se hiciera sonar la sirena de los bomberos en señal de alarma por la llegada de las fuerzas represivas, tal como había ocurrido en oportunidades anteriores. Cuando el resto de la comunidad se despertó literalmente y vio lo que estaba sucediendo, abandonó sus casas para enfrentar a gendarmes y policías que en el ínterin, habían asesinado a dos jóvenes: Matías Gómez y Orlando Justiano.

¹³⁹ Uno estaba localizado a la altura del cementerio de General Mosconi y era liderado por “Pepino” Fernández. El otro, frente a las instalaciones de la empresa *Refinor S.A.*, estaba liderado por Juan Domingo Javier, militante político que respondía el intendente de Tartagal.

María recuerda con sumo detalle el violento enfrentamiento que se produjo durante ese día. Según sus palabras: “Vamos a la plaza [de General Mosconi] y estaban los policías de Mosconi. Yo había venido del piquete a mi casa a las dos de la mañana porque lloviznaba. Resulta que yo me acuesto en ese momento, habré dormido una hora hasta las cinco menos veinte. Y en eso me despiertan porque pasaban los autos tocando bocina y gritando represión, represión y salgo yo. Salgo con dos o tres chicos a la plaza, iba a ir para la ruta pero ... no se podía ir. Y viene un médico y nos dice: ‘no nos dejan salir’. Porque habían enviado un militar para el hospital, y hacen una nota de que no podía salir. Entonces yo con un grupo de mujeres lo shoteo al jefe del hospital, y le saco las ambulancias, y salen las ambulancias. Porque yo le digo si no salen ya le metemos fuego. De ese modo salen a ver la gente herida en la ruta. Tomo el hospital y luego tomo los bomberos voluntarios, yo salgo iba a tomar el municipio y en ese momento estaba el municipio incendiado. Nos han ganado de mano. Éramos un grupo de 15 mujeres, todas de la UTD. Y resulta que a nosotros nos empieza a reprimir, primero estamos con la policía nuestra, hasta cierto punto que creo que la policía nuestra nos corría, nada mas, nos conocemos todos. [...] Pero después ya entra la policía montada de Salta y nos empieza a combatir, y a nosotros nos reprimen frente a la iglesia, acá es la Iglesia y enfrente nos empiezan a reprimir. [...] Nos tiraban gases y nos encierran en la iglesia, nos meten en la Iglesia que casi nos ahogamos, y yo le juro que salto por ahí por la gente y me salgo por el otro lado. Sigo luchando con la gente, y en eso entra la gendarmería y sale el pueblo íntegro, a luchar. Yo voy a los bomberos voluntarios y piso la sirena y no la podía destrabar y la he dejado gritando hasta una hora y media, y de ahí lo llevaron preso al Señor Mercado que era el comandante de los bomberos voluntarios. Acá la represión fue muy fuerte. Después cuando entró la gendarmería, el pueblo se alzó. Combatimos con la gendarmería desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hemos sacado a la gendarmería corriendo y a la policía también.”

Retomado el hospital, entonces, otro grupo de mujeres ocupó la comisaría local, obligando a los policías a llevarlas a inspeccionar las celdas para ver si había personas detenidas. Asimismo, la sede del gobierno municipal fue incendiada y finalmente, luego de varias horas de enfrentamientos, tal como relata María, los policías y los gendarmes fueron obligados a retirarse a la ruta. Una vez allí y rodeados por los manifestantes, a quienes se sumaba una columna de 10.000 personas que llegaban desde Tartagal, “salvaron el pellejo” –según comentara uno de ellos- “por la bandera blanca” enarbolada por el cura local.

El 13 de mayo, luego de 12 horas de negociación en las oficinas de *Tecpetrol S. A.* entre los funcionarios gubernamentales y delegados elegidos en las asambleas, se llegó a un acuerdo que determinó el levantamiento del corte. En él, gobierno se comprometió a mantener los planes anteriores pero con un monto de \$160, a elevar de 1.600 a 3.000 los subsidios por desempleo, subsidios para las pequeñas y medianas empresas y la intervención de ambos municipios. Asimismo, se logró la liberación de los 43 detenidos y la no apertura de nuevas causas.

Sin embargo, el incumpliendo de buena parte de lo pactado en mayo y nuevos despidos de trabajadores de empresas de la zona, entre los que se contaban 7 choferes de la empresa de

ómnibus *Atahualpa* y 8 trabajadores de una empresa contratista de electricidad¹⁴⁰, causaron un nuevo corte de rutas en noviembre de ese año.

Esta medida había comenzado el 30 de octubre en Cuña Muerta, una localidad ubicada a escasos kilómetros al norte de Tartagal, impulsada por desocupados/as de la zona e integrantes de las comunidades indígenas que exigían la propiedad de la tierra.

Días después, el 9 de noviembre, la protesta ganó la solidaridad de la comunidad de General Mosconi. Desocupados/as, médicos/as, estudiantes universitarios y docentes y familias de 18 comunidades aborígenes, volvieron a cortar la ruta a la altura de esta localidad, razón por la cual los y las manifestantes de Cuña Muerta se trasladaron allí.

Entre los 21 puntos del petitorio presentado a las autoridades locales se contaban la renuncia del gobernador Juan Carlos Romero, de la secretaria de la Gobernación, Sonia Escudero, del secretario de Seguridad, Daniel Nallar y de los interventores de Tartagal y General Mosconi. A ello se sumaba la exigencia de 10.000 planes trabajar con aumento a \$280, el aumento de la hora de trabajo a \$2.50, la reducción de la jornada laboral 12 a 8 horas; la financiación de un fondo especial de hidrocarburos vía las regalías petroleras y la reforestación de las áreas explotadas también por medio del pago de las regalías. A su vez se convocaba a la constitución de una Coordinadora Nacional de Piqueteros (Oviedo: 2003).

Al día siguiente el juez federal Abel Cornejo, coordinando sus decisiones con un nuevo comité de crisis constituido en Salta, dio la orden de represión a la policía local para desalojar la ruta. Al atacar a escasos 150 manifestantes que permanecían en las barricadas, los policías dispararon con balas de plomo asesinando a Aníbal Verón, un chofer de 37 años de la empresa de colectivos *Atahualpa*, que había sido despedido un año atrás y a quien la compañía adeudaba aún 8 meses de sueldo. La muerte de este trabajador provocó una masiva reacción popular en Tartagal y en General Mosconi.

Nuevamente se incendiaron las sedes de la administración pública y de las comisarías, a lo cual se sumó la quema de los garages de la empresa *Atahualpa*, en tanto se tomaba como rehenes al personal policial de la comisaría de General Mosconi. La repuesta gubernamental no se hizo esperar: el juez ordenó la intervención de la Gendarmería que se desplegó por toda la zona y comenzó a realizar allanamientos y detenciones arbitrarias en General Mosconi, particularmente. Finalmente, el 13 de noviembre, los dirigentes piqueteros fuertemente custodiados, fueron trasladados a la sede del regimiento de gendarmería de Tartagal –Regimiento de Infantería 28 del Monte-, y obligados a firmar un acuerdo con el gobierno provincial que consistió tan sólo en el aumento de 400 planes Trabajar.

Sin embargo, la “calma” que retornó en ese momento precedería a una tormenta mucho mayor. Pocos meses más tarde, un nuevo corte de rutas sacudiría la zona y convertiría a la plaza de General Mosconi en un espacio de resistencia donde pasado y presente se

¹⁴⁰ Diario *La Nación*, 1ero. de noviembre de 2000.

anudaron para ligar historias de mujeres que, hasta ese entonces, nunca se habían visto frente a frente.

Las Madres de la Plaza:

El 29 de mayo de 2001 se realizó una asamblea comunitaria en la plaza San Martín de Tartagal, para protestar ante la política de licitaciones para obras públicas realizada por el gobierno nacional y provincial. En realidad, lo que se rechazaba era el monto salarial ofrecido por las empresas constructoras, exigiendo que el mismo se elevara de menos de \$1 a \$2.50 por hora para ayudante de albañil.

Adhiriendo a este reclamo, los trabajadores nucleados en la UOCRA local decidieron paralizar la obra del hospital de General Mosconi e iniciar un corte en la ruta 34, medida que se llevó a cabo a partir del 30 de mayo. Solidariamente la UTD se plegó a la protesta, fortaleciendo con su presencia este corte, al que también se le sumaron nuevos bloqueos en Cuña Muerta y en Salvador Mazza. Por tanto, a las mejoras salariales exigidas por los trabajadores de la construcción, se añadieron reivindicaciones vinculadas con el aumento de la cantidad de planes Trabajar, incrementos de un ciento por ciento de las regalías petroleras y de la construcción de obras públicas. En ese contexto, el 5 de junio fue detenido José Barraza, dirigente de los desocupados de Tartagal y activista del Polo Obrero.

Luego de 14 días de iniciado el corte, el juez Abel Cornejo dio instrucciones a Gendarmería Nacional de “no hacer uso de la fuerza en ninguno de los dispositivos apostados en el departamento de General San Martín de la provincia, ni de fuerzas especiales de apoyo o disuasión, sin previa autorización del juzgado” (CELS, 2003: 228). Sin embargo el 17 de junio, domingo que coincidía con el festejo del “día del padre” y sin que nada hubiera alterado la situación, comenzó la represión contra los y las piqueteras, bajo el argumento de que el magistrado había ordenado el despeje de la ruta al Escuadrón Tartagal Nro. 52 de la Gendarmería. Ante este hecho, la reacción contra la represión por parte de la comunidad fue masiva. “Yo estaba haciendo el asado y cuando escuché los disparos y que gritaban que la gendarmería invadía el pueblo, dejé todo y me fui”, comentaba un hombre que vive en General Mosconi. Se desató, entonces, una batalla campal entre los y las pobladoras de General Mosconi y las fuerzas represivas, que se vieron obligadas a replegarse hacia la ruta, a la altura del cementerio, donde horas atrás se había instalado uno de los piquetes. Como consecuencia de esta represión hubo varios heridos por balas de goma y de plomo y fueron asesinados Carlos Santillán, de 27 años, que se dirigía al cementerio de General Mosconi a visitar la tumba de su hija, y José Oscar Barrios de 17 años, quien murió en el hospital de Tartagal a donde había sido trasladado por un disparo de bala de plomo.

Con la excusa de que había francotiradores dentro del grupo piquetero, “infiltrados que nada tenían que ver con el reclamo legítimo de la gente”, “agitadores” que disparaban contra la gendarmería utilizando armas FAL y carabinas calibre nro. 22 supuestamente robadas cuando se tomó la comisaría en el último corte, que el objetivo de los piqueteros

era instalarse en los depósitos de *Refinor S.A.*¹⁴¹ y un sinnúmero de acusaciones nunca comprobadas, la gendarmería y la policía local intentaron ocupar la ciudad. Pretendían, según declaraciones de sus respectivos responsables, dar comienzo a un rastillaje para capturar a “32 piqueteros” acusados del ataque a los distintos edificios y locales de la ciudad de Tartagal ocurrido en el conflicto anterior, luego del asesinato de Aníbal Verón¹⁴².

Sin embargo, este clima de violencia y persecución política contra los y las pobladoras de General Mosconi comenzó a menguar con la llegada a esta localidad de un grupo de Madres de Plaza de Mayo liderado por Hebe de Bonafini. Según narrara Víctor, un joven de la UTD que entrena niños en un club de fútbol local, el 20 de junio “nosotros estábamos en la casa de mi primo. Estábamos escondidos, no salíamos a la calle porque permanentemente los periodistas decían que no se podía caminar. Y entonces, para una traffic y se baja esta señora [en alusión a Hebe de Bonafini]. Había grupitos formados en cada esquina que no se animaban a hacer nada ni salir porque estaba la gendarmería. Pero con esta señora, se le agrupan y a la noche recién salimos todos [...]”.

Para las personas entrevistadas, la presencia de las Madres de Plaza de Mayo fue la que determinó el retiro de la gendarmería y de la policía local, luego de tres días de enfrentamientos entre estas fuerzas y la población, y de las persecuciones que se cernieron sobre esta última. Asimismo, el recuerdo sobre la forma en que este retiro se produjo tiñó a las Madres de una suerte de halo todopoderoso, que imponía respeto y temor a gendarmes y policías. Según Rosa: “Yo las conocí cuando nos sacaron a los milicos del pueblo. Ellas fueron las tutoras de nosotros y cuando las vieron a ellas, iban retrocediendo.” El relato de Rosa coincide con otro proveniente de uno de los jóvenes que protagonizó esta experiencia: “La gendarmería estaba de un lado de las vías y nosotros del otro. Ellas estaban adelante, delante de las vías del tren, agarrándose entre ellas y con nosotros del brazo [...]. Y cuando las vieron, no se les animaron y ahí salimos de abajo de la cama [...] y nos fuimos otra vez a la ruta” [...].

Pero a su vez, la presencia de las Madres de Plaza de Mayo en ese acontecimiento presente las instituyó en la memoria de la población de General Mosconi no sólo hacia el futuro sino también hacia el pasado. Muchas mujeres no sabían de ellas con anterioridad a junio de 2001. Otras, sólo tenían vagas referencias en cuanto al porqué de su existencia o al cómo y en qué contexto histórico habían surgido. Por tanto, fue desde ese presente donde se “recuperó” un conocimiento sobre la última dictadura militar argentina y sobre el rol que las Madres jugaron durante esa etapa. Esto permitió hilvanar las tramas de realidades pretéritas y actuales al enlazar con la contemporaneidad una historia que, en apariencias, estaba olvidada o permanecía en la ignorancia.

Para Liliana, una mujer activista de la UTD, desocupada y madre sola de varios hijos/as, la imagen de las Madres y de su capacidad para desafiar las injusticias del orden imperante

¹⁴¹ Todas estas acusaciones provenían del juez Abel Cornejo, el ministro del Interior de la Nación Ramón Mestre, la ministra de Trabajo Patricia Bullrich, y el comandante general de gendarmería Hugo Miranda, entre otros. Diarios *Clarín* y *La Nación* 19, 20 y 21 de junio de 2001.

¹⁴² Estos pedidos de captura fueron realizados por el juez Cornejo y en estos términos se expresaba el comandante Hugo Miranda. Diario *La Nación*, 21 de junio de 2001.

coabraba una dimensión supina: “Nosotras pensamos que nos pueden dar una mano las mujeres de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo, [para] enfrentar a los grandes para que cumplan con los de la clase baja. [...] por el dolor que ellas llevan por la pérdida de una hijo. Y creo que también sienten el dolor de otras personas [...]”. La maternidad, el dolor, la pérdida, fueron los resortes que habían instalado en la escena pública a ambos “grupos” de madres. Eso, sumado a la desconfianza que ambas poseían hacia el sistema político y sus “representantes”, las hermanaba en la confrontación. Pero el hecho de que las “mujeres de Plaza de Mayo” no hubieran podido ser silenciadas ni con las acciones que el estado terrorista directamente implementó en su contra, ni con las leyes que preconizaban el olvido y la “reconciliación” entre civiles y militares bajo los sucesivos gobiernos democráticos, eran pruebas suficientes de la resistencia ineludible que estas mujeres simbolizaban. Si, además, como sostiene Débora D’Antonio respecto de las Madres de Plaza de Mayo “[...] la condición de madres de desaparecidos transformó su identidad y configuró su pensamiento y su práctica política; pero sólo el ejercicio penetrante de una maternidad desobediente de la cultura patriarcal y represiva del estado, las convirtió en mujeres ciudadanas indóciles[...].” (D’Antonio: 2004), era casi lógico que la indocilidad de estas madres se transformara, junto con ellas, en el referente y la esperanza de esas otras madres indómitas ante las que los sectores dominantes volvían a responder con persecuciones, torturas y asesinatos.

Asimismo, esta confluencia entre unas y otras también se originó en las propias prácticas desplegadas por las Madres de Plaza de Mayo ya durante el período democrático, al fundir ellas mismas su lucha y exigencia de *Juicio y Castigo* para los responsables del genocidio de la última dictadura militar, con la lucha de aquellos/as que se levantaban contra el hambre, la desocupación, la privatización de las empresas públicas. Así lo afirmaba Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, al decir: “A nosotras nos llamaban y nos llaman de todos lados, somos parte de la gente. Los problemas que tiene la gente son los mismos que los nuestros, muchos de nuestros hijos no tienen trabajo, tenemos problemas de vivienda, de salud, etc. Pero lo importante es que nos llaman. Las *Madres* con su pañuelo son un símbolo. Es como si ese símbolo brindara calma”¹⁴³.

No fue casual, entonces, que producto de estas experiencias y estos objetivos, la Marcha de la Resistencia liderada por Hebe de Bonafini pasara a llamarse en diciembre de 2001 “Marcha de la Resistencia y Piquetera”¹⁴⁴.

Tampoco lo fue que esta mancomunidad creada afectara otra escena de la realidad de General Mosconi. Así como las Madres habían ocupado la Plaza de Mayo en reclamo de la aparición de sus hijos/as, las mujeres de General Mosconi ocuparon la plaza de la localidad,

¹⁴³ Estas palabras fueron recogidas por Débora D’Antonio en una entrevista que realizó en enero de 2004 con Nora Cortiñas. Ver: D’Antonio, Débora: *Las Madres de Plaza de Mayo y la maternidad como potencialidad para el ejercicio de la política*. En prensa. Tal como sostiene D’Antonio, este discurso de las Madres de Plaza de Mayo, proveniente tanto del sector conducido por Hebe de Bonafini como el de Nora Cortiñas, se hizo mucho más notable bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. Agradezco enormemente a la autora del artículo puesto que me ha facilitado tanto su lectura como el uso de sus reflexiones antes de que las mismas aparezcan publicadas.

¹⁴⁴ Esta es una marcha que las Madres realizan todos los años, desde 1981. La misma se lleva a cabo en la Plaza de Mayo durante el 7 y el 8 de diciembre.

exigiendo la libertad de todas las personas detenidas y el fin de las persecuciones y la represión. Se inauguró entonces la “Plaza del Aguante” donde durante cinco meses, con carpas instaladas, durmiendo y cocinando y compartiendo los alimentos que proveía la comunidad, mujeres y varones resistieron hasta garantizar que todos aquellos que habían decidido luchar contra el orden imperante, no perdieran su libertad y su vida¹⁴⁵.

Pero la presencia de las Madres y el papel que jugaron en ese momento, además, generaron un debate respecto de las propias prácticas políticas de las mujeres de General Mosconi, que abonó a la naciente idea de muchas mujeres de organizarse como grupo autónomo de la UTD para tratar por ejemplo, los problemas de violencia familiar. Liliana e Inés me comentaban, incluso, que querían construir una asociación llamada “Madres de la Plaza del Aguante”, que pretendía, asimismo, abrirse como una filial de las Madres de Plaza de Mayo en General Mosconi.

Sin embargo no fueron las Madres de Plaza de Mayo las únicas que se solidarizaron con los y las luchadoras de General Mosconi y Tartagal. Entre los muchos sectores sociales y grupos que reclamaban al Estado el fin de la represión y exigían medidas que revirtieran la política que causaba estas protestas, se encontraban los/as trabajadores/as y desocupados/as de la cercana provincia de Jujuy. De hecho, la solidaridad había cobrado dimensiones concretas a través de múltiples cortes de rutas jujeñas y de las adhesiones manifiestas a la población de las comunidades salteñas de uno de los principales referentes sindicales de esa provincia, Carlos “Perro” Santillán. Pero la experiencia en la realización de tales medidas no había nacido en ese entonces. Por el contrario, su trayectoria se remontaba a algunos años atrás y tuvo como uno de sus mayores hitos el *Jujeñazo* de mayo de 1997.

En las páginas que siguen, entonces, analizaré de qué manera las mujeres jujeñas se involucraron en este tipo de confrontación.

¹⁴⁵ Hebe de Bonafini y las restantes Madres que estaban con ella participaron y cocinaron también los primeros días de la “Plaza del Aguante”.

Sección 4:

Las mujeres y los cortes de ruta en Jujuy (1997-2001).

Introducción:

En junio de 2001, se produjeron varias protestas en la provincia de Jujuy con motivo de la violenta represión desatada contra la población de General Mosconi y Tartagal. Exigiendo el cese de la misma, los y las pobladores de Perico, localidad de la capitalina ciudad de San Salvador de Jujuy, protagonizaron cortes de ruta y movilizaciones durante el día 19 de ese mes, medidas que se repitieron en otros lugares de la provincia. Asimismo, los dirigentes Fernando Acosta y Carlos “Perro” Santillán, secretarios generales de la CTA y de la CCC jujeñas respectivamente, sindicaban al gobierno provincial y nacional como los principales responsables de los conflictos. En varios comunicados de prensa señalaron que, ante la profundización de la crisis social, éstos carecían de soluciones y recurrían “a la represión y encarcelación con el fin de acallar los genuinos reclamos de miles de argentinos”¹⁴⁶.

Las razones de estas demostraciones colectivas de solidaridad no eran fortuitas. Los padecimientos de la mayoría de la población salteña y jujeña generados por la política neoliberal, las similares respuestas gubernamentales ante los reclamos colectivos en las que se entremezclaban entregas de subsidios con el uso de la coerción física¹⁴⁷, abonaban el trazado de una historia común que, facilitada por la cercanía geográfica entre una y otra provincia¹⁴⁸, cobraba forma en expresiones de solidaridad, en la similitud del tipo de acción de protesta y en ciertas demandas planteadas a los sectores dominantes –tales como la apertura de fuentes de trabajo “genuino”-. Sin embargo, la conflictividad social en Jujuy, que se remontaba a un período muy anterior a junio de 2001, revestía ciertas diferencias con la ocurrida en Salta.

Entre ellas se pueden señalar, en primer lugar, la cantidad de cortes de ruta producidos durante el período abordado en este trabajo. En Jujuy estas acciones fueron mucho más habituales que en Salta¹⁴⁹. Algunos de estos cortes tuvieron carácter restringido ya que abarcaron sólo ciertas localidades. Otros, en cambio, alcanzaron a involucrar todo el territorio provincial, paralizando durante varios días la circulación en todas las rutas.

En segundo lugar, el corte no fue un método de lucha exclusivo de los y las desocupadas. Por el contrario, en varias ocasiones esta herramienta de confrontación fue utilizada por diversos actores sociales tales como los y las trabajadoras estatales agremiados en distintas corrientes sindicales, aquellos/as ligados a la producción minera y/o siderúrgica, o los y las trabajadores/as de los ingenios azucareros. En períodos anteriores a mayo de 1997, momento en que los cortes adquirieron una clara vinculación con los movimientos de desocupadas/os, puede hallarse un ejemplo de ello en una huelga realizada en 1986 en la

¹⁴⁶ Diario *La Nación*, 20 de junio de 2001.

¹⁴⁷ Esta política gubernamental nuevamente se había puesto de manifiesto en Jujuy días atrás con la detención de 22 personas desocupadas pertenecientes a la CCC, luego de la represión de un corte de rutas. Ver diario *La Nación*, 19 de junio de 2001

¹⁴⁸ Jujuy linda al sur y al este con la provincia de Salta, al norte con la República de Bolivia y al oeste con las repúblicas de Chile y Bolivia.

¹⁴⁹ Entre julio y octubre de 1988, por ejemplo, se produjeron 4 cortes de ruta. El primero de ellos, entre el 14 y el 16 de julio, abarcó las localidades de Palpalá, Fraile Pintado –San Pedro–, y Perico. El segundo, el 7 de agosto, tuvo lugar en Perico e incluyó la toma del Concejo Deliberante por algunas horas. El tercero fue entre el 10 y el 11 de septiembre, en la localidad de Perico. El 26 de octubre, la CCC organizó cortes que bloquearon el acceso a San Salvador de Jujuy.

puna jujeña, donde se encuentran los yacimientos de estaño más importantes de la Argentina y lugar en el que funcionara la empresa minera *Pirquitas, Picchetti y Cía*. En octubre de ese año, y luego de un extenso conflicto originado en la falta de pago de los salarios de los últimos 8 meses que incluyó la toma de la mina a partir del mes de julio, un grupo de mujeres residentes en Abra Pampa, ubicada a 130 km del centro minero y donde la empresa minera tenía algunas oficinas, cortaron la ruta nacional nro. 9 -que une a esa localidad con La Quiaca-, a la altura del puente que atraviesa el río Miraflores-¹⁵⁰. Situaciones similares tuvieron lugar en esta región en los años subsiguientes, siendo frecuente el bloqueo del Puente Internacional que conecta Argentina con Bolivia. Otro caso parecido se produjo en la capital provincial, cuando los trabajadores/as estatales cortaron las rutas de acceso en octubre de 1988 exigiendo el pago de los salarios atrasados. Asimismo, en noviembre de 1999 los y las trabajadoras del ingenio *La Esperanza*, ubicado en la localidad de San Pedro, cortaron las rutas como medida de protesta por deudas salariales y el inminente cierre de la empresa.

Por otra parte, en ninguna zona de la provincia de Jujuy habría tenido lugar el desarrollo de una estructura económica y social similar a la generada por YPF en General Mosconi y Tartagal¹⁵¹. De tal manera, la vida de una familia trabajadora ligada a la producción azucarera o minera –centrales en la economía provincial, si bien con distinto grado de importancia-, distó mucho de las condiciones “ventajosas” con las que contaron quienes vivieron en el “mundo ypefeano”. Más bien, los bajos salarios, las precarias condiciones de trabajo o la inestabilidad laboral ligada, entre otras cuestiones, al proceso de producción zafra, fueron las situaciones que primaron en las condiciones de vida de la clase trabajadora jujeña. Ello no significa que la crisis social generada por la política neoliberal haya sido menor en Jujuy que en General Mosconi o en Cutral Co; sino que ésta profundizó los niveles de exclusión social ya de por sí elevados para el período anterior al de la puesta en marcha del “ajuste estructural” bajo el menemismo, en comparación con otras regiones del país. Por lo tanto y en relación con ello, algunos reclamos que estuvieron presentes en los conflictos librados en Neuquén y Salta –las exigencias de reparación histórica lanzadas contra las empresas o el Estado, por ejemplo-, o la nostalgia por el retorno a un mundo

¹⁵⁰ Revista *Norte Andino*, Nro. 1, Agosto de 1988, Jujuy.

¹⁵¹ Algunas investigaciones recientes abordan el análisis de la localidad de Palpalá a partir de la instalación allí de la empresa estatal *Altos Hornos Zapla* durante la década de 1940. Si bien se ha registrado que la empresa, al igual que YPF, impulsó la apertura de escuelas, centros deportivos y de salud que, obviamente, mejoraron la calidad de vida de los habitantes de la zona, su impacto social no tuvo la misma envergadura que la de la petrolera estatal. De todos modos, el estado actual de tales estudios impide llegar a conclusiones definitivas. Ver: Boto, María Salomé et. Al: *Altos Hornos Zapla en los comienzos de la siderurgia argentina: políticas sociales, empresa y trabajo*. Ponencia presentada en las “VIII Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales”. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. Mayo de 2005. En la zona de Caimancito, asimismo, la producción petrolera a cargo de YPF comenzó a realizarse recién hacia 1968. De todas formas, su presencia para el desarrollo local no fue cualitativamente tan importante como la de esta empresa en las cuencas neuquinas y salteñas. Por otro lado, es notoria la carencia de trabajos históricos sobre el devenir de la provincia de Jujuy durante el Siglo XX. Particularmente, los y las historiadoras se han dedicado a desentrañar básicamente lo atinente al desarrollo productivo del azúcar entre fines del Siglo XIX y comienzos del siglo pasado, así como a las relaciones sociales, laborales y políticas que emergieron alrededor de la explotación azucarera. Son por demás escasos los trabajos que hacen al estudio del movimiento obrero jujeño o la realidad política provincial durante los últimos 50 años. Más que nada, han sido sociólogos/as y antropólogos/as quienes han centrado su interés en la historia jujeña reciente, aunque no de conjunto.

En cuarto lugar, otra diferencia que se debe tener en cuenta es que la inestabilidad del sistema político institucional fue mucho mayor en esta provincia que en Salta. Entre 1990 y 1998, ocho gobernadores se sucedieron en el gobierno jujeño, todos ellos pertenecientes al partido justicialista¹⁵². Si bien estas periódicas crisis de legitimidad pueden relacionarse con varias causas, tales como la carencia de representatividad y transparencia electoral contenida en el funcionamiento de la denominada “Ley de Lemas”¹⁵³, o las disputas internas del partido justicialista, la mayoría de ellas se desataron como cauce y consecuencia a la vez de los cuantiosos conflictos sociales a los que hiciera alusión¹⁵⁴.

En ese sentido, entonces, no analizaré detalladamente todos los cortes de ruta que se desencadenaron en el período 1997-2001. Por el contrario, sólo me detendré en algunos de aquellos que han abarcado a toda la provincia y en particular, en los ocurridos en Libertador General San Martín, departamento de Ledesma. Ello se debe a varias razones.

En primer lugar, porque en esa localidad está emplazado el ingenio *Ledesma*, cuyos dueños han tenido históricamente una gravitación superlativa en el manejo del destino político y económico de la provincia. Por lo tanto, la respuesta del estado provincial y nacional ante los conflictos sociales que emergieron en esta zona estuvo mediada y regulada por las particularidades contenidas en el vínculo entre la clase política jujeña y este sector de propietarios agroindustriales.

En segundo lugar, porque fue allí donde se produjo el punto de inflexión en el uso del corte de rutas como modalidad de confrontación. En efecto, una vez iniciado el bloqueo de la ruta nacional nro. 34 a la altura de Libertador General San Martín el 19 de mayo de 1997, los cortes se extendieron por el resto de la provincia enlazando variadas demandas. Asimismo, a partir de ese momento ganaron visibilidad las organizaciones que agrupaban a las y los desocupadas/os, en tanto el bloqueo de rutas se volvió una medida a la que se recurría más asiduamente.

¹⁵² La lista y período en que los gobernadores ocuparon sus cargos es la siguiente: Ricardo De Aparici (diciembre de 1987 a octubre de 1990); Eduardo Huascar Alderete (noviembre de 1990 a diciembre de 1991); Roberto Rubén Domínguez (diciembre de 1991 a junio de 1993); José Carlos Fico seco (junio de 1993 a abril de 1994); Oscar Agustín Perassi (abril de 1994 a diciembre de 1995); Guillermo Eugenio Snopek (diciembre de 1995 a febrero de 1996); Carlos Ferraro (febrero de 1996 a noviembre de 1998).

¹⁵³ La “Ley de Lemas” fue aprobada por la legislatura jujeña durante el mes de mayo de 1991. La misma partía de concebir a cada partido político o frente de partidos como un lema, en el que se podían presentar varios candidatos con listas independientes (sublemas). Este mecanismo permitía evitar, por un lado, que se realizaran elecciones internas dentro de un partido para elegir las fórmulas electorales. Y por el otro, posibilitaba que un gobernador pudiera ser electo con un escaso porcentaje de votos. Tal fue el caso, por ejemplo, del gobernador electo en 1991, Eduardo Alderete, cuyo sublema obtuvo menos del 20% de los votos. Finalmente, esta ley fue derogada el 29 de noviembre de 1999.

¹⁵⁴ Un interesante caso que apoya este argumento puede observarse en la relación entre las huelgas y movilizaciones del Frente de Gremios Estatales (FGE) y la caída del gobernador De Aparici en octubre de 1990. Véase: Gómez, Elizabeth y Kindgard, Federico: *El Frente de Gremios Estatales y el derrocamiento de De Aparici. La centralidad obrera en momentos de dispersión de la clase*. Ponencia presentada en las VIII Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy, 18 al 20 de mayo de 2005.

En tercer lugar, porque las condiciones en las que emergió este conflicto volvieron a colocar a las mujeres en un rol protagónico tanto en el momento de la movilización colectiva como en las organizaciones en las que posteriormente cristalizaron los movimientos de desocupados/as. Así, su presencia en las mismas enmarcó tanto el fortalecimiento de estos últimos como el surgimiento de ciertas tensiones internas que en ocasiones, condujeron al abandono de algunas mujeres de tales instancias organizativas.

A fin de comprender mejor el escenario en el cual tuvieron lugar estas protestas, comenzaré por realizar una breve reseña del contexto político, económico y social de la provincia de Jujuy.

El territorio de las luchas:

Jujuy forma parte de la región del noroeste argentino, junto con Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Acorde a las características climáticas y geográficas, se puede dividir a la provincia en cuatro zonas claramente diferenciadas: la puna, en el extremo norte y el oeste, altiplanicie árida localizada sobre los 3.000 metros de altura y región en la que tuvo lugar el desarrollo de los principales centros mineros provinciales; la quebrada, zona central conformada por valles serranos aptos para el cultivo; los valles centrales al sur, donde se encuentra la ciudad capital; y, por último, los valles subtropicales al este, tierras bajas en las se ubican las producciones agropecuarias fundamentales (caña de azúcar, hortalizas, tabaco, cítricos, etcétera).

Durante el pasado colonial y hasta bien entrado el período abierto en mayo de 1810, la economía jujeña estuvo ligada al área andina como proveedora de productos primarios, fundamentalmente para los centros mineros bolivianos. Empero en el último cuarto del siglo XIX, el afianzamiento del Estado nacional y la conformación de un incipiente mercado interno debilitaron esta relación, provocando paralelamente una reorientación de la producción provincial hacia el área rioplatense (Rutledge: 1987). Este cambio de dirección estuvo signado, a su vez, por el desarrollo agroindustrial basado en la producción azucarera, favorecida en un principio tanto por la apertura de la línea ferroviaria Tucumán-Córdoba en 1876 como por las protecciones aduaneras del estado central. De tal manera, a finales de esa década, las haciendas azucareras de la zona este de Jujuy vivieron un proceso de fuerte expansión y transformación caracterizado, fundamentalmente, por la introducción de maquinaria, el cambio de propietarios y el ingreso de capitales, lo cual permitió la formación de sociedades anónimas con gran capacidad de inversión.

Un caso paradigmático en ese sentido fue el del ingenio *Ledesma*, ubicado en las cercanías de la actual ciudad de Libertador General San Martín -que dista a 120 km de la ciudad capital-. Los orígenes del ingenio se remontan a 1830, cuando los hermanos salteños Querubín y Sixto Ovejero establecieron una precaria “fábrica de azúcar” (Kindgard: 2001). Modernizado medio siglo más tarde a partir de la instalación de un trapiche mecánico y la fuerza motriz generada a vapor, maquinaria introducida con la llegada del ferrocarril, el ingenio fue adquirido en 1911 por Enrique Wollmann y Carlos Delcasse mediante un crédito otorgado por el *Banco Francés del Río de La Plata*, con quienes ambos tenían importantes vínculos. El aumento de la actividad productiva fue tan considerable que con

las ganancias producidas en los 5 años subsiguientes, la deuda con el banco por parte de los propietarios de la flamante *Ledesma Sugar States and Refining Company Limited* quedó prácticamente saldada¹⁵⁵.

Durante la década de 1920, la producción azucarera a gran escala se consolidó definitivamente en todo el noroeste argentino. La integración vertical de los complejos industriales, el monopolio de la propiedad de las tierras circundantes, la súper explotación de la mano de obra, la tendencia a la autosuficiencia en el sistema productivo y la diversificación de la producción (como en el caso de la incorporación de grandes plantaciones de cítricos en el ingenio Ledesma) fueron todos factores que contribuyeron al afianzamiento del sector azucarero, particularmente en el caso jujeño. Pero no fue de menor importancia en este proceso la gravitación que los sectores azucareros tuvieron en el poder político provincial.

En efecto, desde fines del siglo XIX los lazos entre el gobierno provincial y los propietarios de los ingenios fueron profundamente estrechos. Esto se debía a varias razones. La primera de ellas era de orden financiero. Los impuestos provenientes de la agroindustria eran fundamentales para la conformación del presupuesto provincial, cuestión a la que se sumaba “la práctica recurrente de contratar empréstitos con las empresas azucareras, convirtiéndolas en acreedoras del Estado” (Kindgard, 2001, *op. cit.*: 47).

En segundo lugar, era común que los dueños de los ingenios se encargaran, por delegación de las administraciones provinciales, del pago de los salarios a la policía local de la zona en la que estaban ubicados los mismos, y proporcionaran los locales donde funcionaban las comisarías, el registro civil y los juzgados de paz.

La injerencia de los propietarios azucareros en el manejo público, práctica que se mantuvo visiblemente vigente hasta la intervención federal de la provincia durante el año 1944, alcanzó su máxima expresión durante la llamada “década infame”¹⁵⁶, cuando muchos de ellos ocuparon cargos políticos claves. Así, por ejemplo, Herminio Arrieta, jefe del partido conservador local y propietario del ingenio *Ledesma* hacia finales de la década de 1920, fue senador nacional por la provincia de Jujuy, puesto que le permitió, entre otras cosas, defender la dudosa inocencia de Pérez Alisedo en el asesinato de uno de los descubridores

¹⁵⁵ Similares fueron los casos del ingenio *La Esperanza*, localizado en el departamento de San Pedro y propiedad de la familia inglesa Leach -que en 1913 pasó a ser una sociedad anónima-, y del ingenio *La Mendieta*, también emplazado en San Pedro, que a fines de 1909 fue transformado en sociedad anónima fijándose su capital en un millón de pesos moneda nacional. Para un estudio exhaustivo de este proceso ver: Lagos, Marcelo: “Conformación del mercado laboral en la etapa de despegue de los ingenios azucareros jujeños (1880-1920), en: Campi, D. (comp.) (1992): *Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina*. San Martín de Tucumán, UNJU-UNT; y Kindgard, Adriana (2001): *Alianzas y enfrentamientos en los orígenes del peronismo jujeño*

¹⁵⁶ Se conoce con ese nombre al período abierto con el golpe de Estado realizado contra el presidente Irigoyen el 6 de septiembre de 1930. Finalizada con otro golpe en 1943, la “década infame” se caracterizó por la restauración de los sectores “oligárquicos” en el gobierno, cuya continuidad se aseguró mediante el ejercicio permanente del fraude, la represión de todo intento de rebelión por parte de la clase obrera, y que mediante una política económica tibiamente intervencionista por parte del Estado, intentaron medidas correctivas ante la crisis económica generada por la quiebra de la bolsa de Wall Street en octubre de 1929.

de yacimientos de estaño en la puna jujeña, y obstruir la formación de una comisión investigadora sobre el asunto¹⁵⁷.

Por otro lado, la mayoría de los diputados provinciales a partir de 1932 provenían de las compañías azucareras. Según demostrara Marcelo Lagos, muchos eran médicos, contratistas de peones, gerentes, proveedores del ingenio *Ledesma* (Lagos: 1992). Asimismo, los gobiernos municipales caían enteramente bajo la égida de los ingenios, siendo normal que los puestos más importantes del municipio estuvieran en manos de personal jerárquico de las empresas. En Jujuy, para esta época, el “fraude patriótico” asumió la no poco peculiar forma de obligar a los trabajadores conchabados a votar a los candidatos salidos de las filas de los propietarios agroindustriales, mecanismo por el cual estos últimos pudieron mantenerse sin mayores dificultades en los cargos de la administración pública provincial.

Este control del sistema político posibilitó a la elite azucarera consolidar la expansión de la producción, si bien la piedra angular de tal crecimiento estuvo en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo dentro de los ingenios, cuya organización sindical durante todo este período estuvo seriamente coartada.

En efecto, una de las características más sobresalientes de estas empresas se relaciona con las pautas organizativas de la mano de obra. La planta de trabajadores permanentes de los ingenios era muy inferior a la conformada por los trabajadores temporarios, esto es, los contratados estacionalmente para la zafra azucarera entre los meses de mayo y diciembre. Estos últimos provenían mayoritariamente de la Quebrada, la Puna jujeña y del sur boliviano. Si bien desde un principio la forma de obtener la mano de obra requerida se basaba en el ejercicio de la coacción extraeconómica, la misma atravesó diversas maneras hasta que se impuso el sistema del contratista¹⁵⁸. El conchabador o contratista era quien, a cambio de una suma de dinero por individuo conchabado, suministraba los trabajadores temporarios a los ingenios. El acceso a estos trabajadores estaba para él ampliamente facilitado puesto que era muy común que el contratista fuera a la vez juez de paz, comisario o caudillo político de la zona. Por otro lado, en algunos casos, los contratistas eran también propietarios de almacenes que proveían los bienes necesarios para los trabajadores y sus familias. Vendiendo a créditos con altas tasas de interés, lograban endeudarlos y comprometerlos para el trabajo en la zafra siguiente.

¹⁵⁷ Arturo Pérez Alisedo, junto con Walter y Stephen Leach, propietarios del ingenio *La Esperanza*, habían constituido la firma *Pirquitas, Picchetti y Cía.* en 1933, despojando a Rafael Tauler, minero español que durante un tiempo había trabajado en la *Mina el Aguilar*, también en la puna jujeña, de sus derechos sobre la explotación de estaño descubierto por él en el departamento de Rinconada. En febrero de 1935, en medio de los reclamos judiciales ante esta situación, Tauler fue asesinado. Las repercusiones nacionales de este hecho llevaron al presidente Justo a pedir la renuncia de Pérez Alisedo a su puesto de gobernador de la provincia, cargo que ocupaba desde abril de 1934. Sin embargo, Pérez Alisedo nunca fue sometido a juicio y la mina continuó en sus manos.

¹⁵⁸ Estas maneras incluían el armado de “expediciones” en busca de indígenas de la región chaqueña que, negándose a dejar sus tierras de origen, eran llevados a la fuerza por los “expedicionarios” de las compañías azucareras. Véase Lagos, Marcelo: *op. cit.*

Los abusos a que este sistema dio lugar y la forma brutal en que los trabajadores eran trasladados a los ingenios, fueron objeto de múltiples denuncias por parte de algunos legisladores de la época, sobre todo de aquellos provenientes de las filas del Partido Socialista. Sin embargo, lejos de mermar, esta situación se mantuvo por décadas puesto que los propietarios de los ingenios contaban con la condescendencia de los integrantes de los poderes públicos.

A su vez, garantizar la presencia de esta mano de obra barata era fundamental para el momento de la zafra. Durante ese período, el número de trabajadores estacionales duplicaba e incluso triplicaba al de los obreros permanentes. Por ejemplo en el lote “Prediliana” del ingenio Ledesma¹⁵⁹, una inspección oficial realizada en 1948 arrojó la existencia de 154 obreros de carácter permanente y 670 trabajadores transitorios. Las condiciones de vida y laborales de estos últimos eran absolutamente precarias e insalubres. El hacinamiento originado en la carencia de viviendas, la falta de condiciones de higiene adecuadas, jornadas laborales que se extendían entre la salida y la puesta del sol, el pago a destajo utilizando frecuentemente vales que sólo podían ser canjeados en las proveedurías de los ingenios por mercaderías cuyos precios eran mucho más elevados que en otras partes, eran algunos de los factores que hacían a la vida de quienes trabajaban en la época de la zafra.

Sin embargo, tanto el golpe de Estado de 1943 como la intervención federal realizada a la provincia al año siguiente y, fundamentalmente, el ascenso del peronismo al gobierno nacional a partir de la victoria de la fórmula Juan Domingo Perón-Juan Hortensio Quijano en las elecciones de febrero de 1946, repercutirían sustancialmente en la vida política y económica jujeña, al provocar modificaciones en algunas de estas cuestiones¹⁶⁰.

Durante este período, la puesta en marcha de reformas sociales y económicas atinentes a la condición de la clase obrera, los cambios introducidos al sistema político y las medidas directas relacionadas con la producción azucarera, vulneraron los intereses económicos de los sectores agroindustriales, a la par que cercenaron el dominio de estos sectores sobre los destinos políticos provinciales. Efectivamente, el candidato a gobernador por el peronismo, José Iturbe, asumió la jefatura de la provincia tras lograr una avasallante victoria –al obtener el 70% de los votos- frente a sus adversarios del Partido Demócrata Nacional de Jujuy, representante de los propietarios azucareros y cuyo candidato era Oscar Rebaudi Basavilbaso.

Bajo gobierno de Iturbe se acentuó, por un lado, la política iniciada con la intervención federal de 1944 y que contemplaba mejoras en las condiciones de los trabajadores, fundamentalmente azucareros y mineros. Así, no solamente se favoreció su sindicalización con el reconocimiento otorgado a organizaciones tales como la Unión de Obreros del Ingenio Ledesma o el Centro de Obreros Unidos del Ingenio La Esperanza, sindicatos conformados hacia 1946 bajo la égida peronista y que luego constituyeron la Federación Obrera Regional de la Industria Azucarera (FORIA). También se modificaron las

¹⁵⁹ Los lotes son las unidades productivas en las que está dividida la explotación de las plantaciones de azúcar. Al frente de los mismos se encuentra un capataz, encargado de las relaciones laborales y el control de la fuerza de trabajo. Los datos aquí citados, por otro lado, provienen de Kindgard, Adriana: *op. cit.*

¹⁶⁰ Para un análisis detallado de este proceso, véase; Kindgard, Adriana, *op.cit.*

condiciones laborales y los salarios, resultado tanto de la mejoría experimentada a nivel nacional (introducción del cobro del aguinaldo, vacaciones pagas para los obreros con trabajo estable, cobertura ante accidentes laborales, etc.), como de medidas específicas implementadas en el territorio provincial.

Entre estas últimas estaban la obligación de pagar un recargo del 100% de los jornales de los obreros que trabajaran sábados después de las trece horas, domingos y los días 1ero. y 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 12 y 17 de octubre; la exigencia de que los ingenios proveyeran a los trabajadores temporarios viviendas en condiciones dignas, cuestión que era vigilada a través de las inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión local; obligatoriedad de trasladar a los trabajadores temporarios en autos de segunda categoría hasta los ingenios; la obligatoriedad para todas las empresas que contaran con más de 200 trabajadores de proporcionar asistencia médica para ellos y sus familias; la pérdida del poder de los ingenios en la contratación de trabajadores temporarios al pasar a depender esto de las delegaciones regionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Además, si bien se establecieron fondos compensatorios para la actividad, se aumentaron los impuestos a la producción azucarera y se crearon nuevos gravámenes.

Por otro lado, el gobierno provincial realizó diversas expropiaciones de ciertas hectáreas de los ingenios bajo el concepto de “utilidad pública”, referido a la necesidad de ampliación del territorio de las localidades en las que éstos estaban ubicados (tal el caso del ingenio *Ledesma* al que le fueron expropiadas 34 has. para aumentar el radio urbano de la ciudad lindante), o como respuesta a los reclamos de devolución de dichas tierras realizadas por las comunidades indígenas.

Asimismo, se intentó llevar adelante cierta diversificación del aparato productivo provincial mediante el impulso de actividades tales como la siderurgia –a través de la empresa estatal *Altos Hornos Zapla*, abierta a comienzos de la década de 1940-, la actividad minera o la tabacalera.

Finalmente, la reforma de la Constitución jujeña a principios de 1948 que, entre otras cosas, aumentaba el número de legisladores de 22 a 32, y adoptaba el sistema de votación por circunscripciones, fortaleció aún más la presencia del peronismo en las instancias gubernamentales en detrimento de las “oligarquías” locales.

Sin embargo, este proceso encontró su límite durante la segunda mitad de los 50, fundamentalmente con el golpe de Estado que derrocó a Perón en septiembre de 1955. Los propietarios de los ingenios recuperaron en buena medida el terreno perdido frente a los trabajadores y el lugar central en la economía jujeña, lugar que por otro lado nunca fue rotundamente cuestionado por la política económica peronista y que, más tarde, tampoco se vería seriamente afectado por los embates que, contra los sectores productivos “ineficientes”, desataron las medidas económicas tomadas bajo los primeros años de la dictadura del general retirado Juan Carlos Onganía (1966).

Empero, el proceso de movilización y enfrentamiento social que encontró en el *Cordobazo*¹⁶¹ su punto de inflexión, conmovió también los cimientos del poder de la elite azucarera en Jujuy. De tal manera, fue a comienzos de la década de 1970 cuando los propietarios de los ingenios debieron hacer frente a nuevos cuestionamientos, esta de vez de la mano de un grupo de trabajadores que, activando clandestinamente dentro del ingenio *Ledesma*, logró recuperar el sindicato. Adherentes a la corriente sindical combativa¹⁶², éstos impulsaron una serie de acciones gremiales con la finalidad de obtener el pago de premios, la reducción de la jornada laboral, el pago de asistencia sanitaria, entre otros reclamos. Así Jorge Weisz primero y Melitón Vázquez, luego, serían las caras más visibles del Sindicato de Obreros del Ingenio Ledesma y de las contiendas sindicales que se produjeron en el ingenio.

Por otra parte, la reapertura democrática de 1973 llevó a ocupar la intendencia local a Luis Aredez, un médico nacido en Tucumán y que se trasladara a la zona con su esposa Olga Márquez¹⁶³. El desempeño de Aredez como médico de la obra social de los trabajadores azucareros del ingenio, le permitió conocer tanto las condiciones de vida de quienes trabajaban allí como la forma de funcionamiento del ingenio. Una vez electo intendente de Libertador General San Martín, intentó acotar el poder del grupo liderado por Blacquier - yerno de Herminio Arrieta y ya en ese momento directivo principal del ingenio-, acción que lo volvió blanco de ataque de este último. Así, la exigencia de que los Blacquier hicieran efectivo el pago de los impuestos correspondientes a la producción, por ejemplo, sumado al ascenso de la conflictividad sindical y social, hallaron en este grupo una unívoca e inexorable respuesta: el uso del aparato represivo del Estado.

Aredez fue destituido en el marco de un golpe policial semejante al provocado en la provincia de Córdoba en 1974. Durante el tiempo que estuvo encarcelado, se le advirtió que no retornara a la localidad. La amenaza no surtió el efecto deseado, puesto que una vez liberado, volvió a Libertador General San Martín. Producido el golpe de estado de 1976, tanto Aredez como Weisz y varias personas más fueron desaparecidos por los grupos de tareas de la dictadura militar, quienes contaron con el apoyo ideológico, político y material

¹⁶¹ El *Cordobazo* fue un punto de inflexión en las luchas encabezadas por la clase obrera argentina en el período abierto con el golpe militar que derrocó al gobierno de Juan D. Perón en 1955. Ocurrido en la ciudad de Córdoba a fines de mayo de 1969, este conflicto estuvo liderado por los sindicatos de Luz y Fuerza y SMATA-Córdoba. Encolumnando tras de sí a una variada gama de sectores sociales, esta confrontación marcó el comienzo del fin del gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía y del proyecto económico de la autodenominada “Revolución Argentina”; dio pie a la emergencia de un nuevo grupo de dirigentes sindicales antiburocráticos y/o clasistas -en algunos casos-, y permitió el surgimiento de nuevas formas de organización y de lucha que, posteriormente, alcanzaron profundos grados de radicalización en la oposición a la reproducción del sistema capitalista.

¹⁶² Una breve reseña de este proceso, construida a partir de entrevistas a activistas de esta época, puede hallarse en Ariel Ogando: “Los 70 en Jujuy. Conversaciones con Dora Weisz”, en: *Revista Wayruro*, Año 9, marzo-abril de 1996, Jujuy. Por otro lado, una explicación sobre las diversas corrientes sindicales nacidas al calor del *Cordobazo* puede hallarse en: Andrea Andújar: “Combates y experiencias. Las luchas obreras en Villa Constitución (1974-1975)”, en: *Taller: Revista de sociedad, cultura y política*. Vol. 3, Nor. 6, abril 1998. Buenos Aires.

¹⁶³ Aredez, aunque militante de la UCR, integraba la lista del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) que se impuso en las elecciones de 1973 llevando como candidatos a la presidencia y vicepresidencia a Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima respectivamente.

de los dueños del ingenio¹⁶⁴. En efecto y como constó en las múltiples denuncias por la violación de los derechos humanos bajo el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, el ingenio dio casa y comida a los represores, prestando sus vehículos para los secuestros de personas en la localidad, y sus instalaciones para la tortura y el asesinato de los y las activistas sindicales y políticos/as¹⁶⁵.

Desarticulado el movimiento sindical y la resistencia al poder de los empresarios mediante el ejercicio sistemático del terror, los salarios y el poder adquisitivo de los mismos cayeron abruptamente, al igual que los puestos de trabajo en el ingenio. Los trabajadores que aún lograron conservarlo, lo hicieron bajo el retorno a condiciones de explotación muy similares a las vividas varias décadas atrás.

Por otra parte, a comienzos de los años '80 los empresarios del ingenio profundizaron la diversificación de sus intereses, consolidándose como grupo económico que manejaba la industria agropecuaria en distintas zonas de Jujuy -extendiéndose incluso a Salta- y produciendo azúcar, papel, alcohol, cítricos, refinamiento de maíz, además de contar con compañías de seguros. A su vez, mediante el amparo estatal, éstos contaron con capital suficiente para modernizar la producción realizando inversiones en la mecanización de la zafra entre fines de la década de 1980 y comienzos de 1990, lo cual además condujo a una mayor reducción de la planta del personal de ingenio¹⁶⁶.

Sin embargo, la desregulación económica sancionada por decreto en octubre de 1991 produjo una importante ruptura en la historia de apoyo estatal a la producción azucarera. Según Alejandro Rofman, las principales medidas que afectaron al sector fueron la disolución de la Dirección Nacional del Azúcar, que regulaba la organización de la actividad, los cupos de producción, de entrega de azúcar al mercado, el precio de la caña, etc.; la derogación del decreto de Maquila y sus modificatorias¹⁶⁷; y la liberación del cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la caña de azúcar y del azúcar en todo el territorio nacional. La forma en que los propietarios azucareros hicieron frente a esta situación fue a través del aumento del despido de trabajadores tanto del sector industrial como agrícola en los ingenios (Rofman: 1999). De tal suerte, por ejemplo en el

¹⁶⁴ El secuestro de Aredez junto con 200 personas más se produjo en la noche del 20 de julio de 1976. En esa ocasión y para facilitar las acciones terroristas de los grupos de tareas, se cortó la luz de toda la ciudad. De las personas que fueron secuestradas esa noche, conocida como “la noche del apagón”, treinta permanecen desaparecidas. Olga Márquez de Aredez, que murió el 17 de marzo de 2005, fue una de las primeras mujeres que conformó en Jujuy la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Durante los años de la dictadura militar, Olga realizaba sola las rondas de los jueves en la plaza de Libertador. Su persistencia y su valor fueron contagiando a otras mujeres que se plegaron abiertamente a la lucha contra la dictadura exigiendo la aparición con vida de sus hijos e hijas. Desde ese momento y hasta la fecha en que murió, Olga reclamó permanentemente por su esposo y por las demás personas desaparecidas. Asimismo, estuvo al frente de un centro de atención comunitaria en Libertador y se involucró en los vastos conflictos sociales que tuvieron lugar en la provincia.

¹⁶⁵ Años más tarde Blacquier volvería a facilitar el uso de las instalaciones del ingenio para las fuerzas de gendarmería nacional que acudieron a reprimir el corte de rutas de mayo de 1997.

¹⁶⁶ Para contar con el capital necesario a tales inversiones, el grupo liderado por Blacquier obtuvo el “favor” del gobernador Ricardo De Aparici que, en 1987, redujo en un 50% las cargas impositivas del ingenio

¹⁶⁷ El decreto aludido, 1079/85, fue implementado bajo el gobierno de Raúl Alfonsín; limitaba las funciones financieras e integradoras de los ingenios, cambiando asimismo la relación cañero-ingenio al permitir a los ingenios contratar con los productores la molienda en caña a cambio de una participación en la misma.

ingenio *Ledesma*, entre 1992 y 1997, 4.200 personas aproximadamente perdieron sus puestos laborales.

Otro tanto sucedió con la implementación de las medidas neoliberales bajo el menemismo en otras ramas de la producción provincial. En el caso de *Altos Hornos Zapla* su privatización en 1992 provocó el despido de más de 4.000 trabajadores ya que el consorcio ganador, en el cual se encontraba el grupo Citicorp de New York, decidió modificar el tipo de acero producido y redujo la planta de operarios de 5.000 personas a 700. Asimismo, el proceso de vaciamiento y cierre de la compañía minera *Pirquitas, Picchetti y Cía.* junto con el de otras minas de la zona puneña y el achicamiento de la *Mina el Aguilar* dejaron sin trabajo a más de 2.000 mineros.

Ante el agravamiento de la desocupación, el estado provincial intentó regular la tensión social por medio de la absorción de la fuerza de trabajo expulsada por el sector privado. Así, si para 1980 el sector terciario, que incluye a la administración pública, tenía una participación del 27% sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) total, para 1993 la misma se elevó al 40% (IMPRODES, nro. 2, 1996). Sin embargo, en poco tiempo esta política se hizo insostenible y el estado también comenzó a expulsar trabajadores de la administración pública, a la par que recortaba salarios y beneficios sociales. Así, entre 1990 y 1993, de los 15.200 despedidos, 6300 pertenecían al sector estatal (OCLADE: 1993). En síntesis, el desempleo pasó del 7.4% en 1991, a 23.4% en 1995 y 29.5% en noviembre de 1998¹⁶⁸.

Esta situación generó una nutrida cantidad de conflictos en los cuales el Frente de Gremios Estatales (FGE), constituido hacia fines de la década de 1980, tuvo un rol preponderante¹⁶⁹. Y fue también en ese contexto de desocupación y miseria donde se desató la confrontación que se conocería como el *Jujeñazo*, en mayo de 1997.

¹⁶⁸ Estos datos provienen de los informes realizados por investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy. Véase: UNJu: Documentos de Trabajo Nro. 1. Julio de 2000.

¹⁶⁹ El FGE se constituyó en los primeros meses del año 1988. Su núcleo más importante lo conforman el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) dirigido por Carlos "Perro" Santillán, ATE, Asociación de trabajadores de Sanidad (ATSA), y los sindicatos docentes Centro de Educadores y Docentes de la Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y Asociación del Personal Universitario de la Administración Pública (APUAP). Una detallada historia de la formación del FGE puede verse en: Gómez, Elizabeth y Kindgard, Federico: *El Frente de Gremios Estatales y el derrocamiento de De Aparici. La centralidad obrera en momentos de dispersión de la clase*. Ponencia presentada en las VIII Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy, 18 al 20 de mayo de 2005.

Cortando las rutas del azúcar: Libertador General San Martín (mayo de 1997).

El 31 de mayo de 1997 el periódico *El Tribuno* de Jujuy publicaba un intercambio de palabras producido entre una mujer desocupada de Libertador General San Martín y el en ese entonces gobernador provincial Carlos Ferraro. Cuando éste, ante la comisión representativa de los y las piqueteras con la que había llegado a un acuerdo luego de doce días de conflicto, intentaba excusarse por el salvajismo con que la gendarmería había reprimido a la población de esa ciudad, la mujer lo increpó diciendo: “a mí la gendarmería me baleó la pierna. Tengo cinco hijos a cargo y yo estuve a punto de perder la pierna por culpa de una bala que usted, señor gobernador, mandó a la infantería. [...] Yo salí a la ruta solamente a pedir trabajo y usted nos respondió con aquella medida en la ruta. ¿Le parece correcto?”¹⁷⁰. Exhibiendo la herida y poco dispuesta a callarse a pesar de que algunos de sus compañeros procuraban detenerla, ella continuó hablando, poniendo en entredichos la pretensión de Ferraro de eludir su responsabilidad en lo sucedido.

Todo había comenzado el 19 de mayo en Libertador General San Martín, ciudad cabecera del departamento de Ledesma, ubicada a 120 km de la capital provincial, y cuya población alcanza los 60.000 habitantes aproximadamente. Durante la noche de ese día, una asamblea convocada por el Centro de Desempleados y Desocupados de Libertador General San Martín – conformado tiempo atrás y dirigido por Juan Giménez-, resolvió iniciar el 20 de mayo un corte en la ruta nacional nro. 34 a la altura del puente de río San Lorenzo. El detonante que condujo a tal decisión se hallaba en el reciente despido de trabajadores de la zafra del ingenio *Ledesma* en momentos en que, finalizada la cosecha tabacalera, la oportunidad de participar en la zafra azucarera era la única salida laboral posible.

Fue así como en la madrugada del 20 de mayo un grupo de personas, entre las que se contaban desocupadas/os, integrantes de varias organizaciones sindicales y de organismos de derechos humanos, comenzaron a encender fogatas y levantar barricadas en la ruta, exigiendo al gobernador la creación de 5.000 puestos de trabajo, subsidios inmediatos de \$300 para desocupados/as y la postergación del vencimiento de los impuestos¹⁷¹.

Sin embargo, y como sucedió en Neuquén y en Salta, quienes con mayor rapidez acudieron al bloqueo de la ruta fueron las mujeres. Según relató Pablo Dietrich, uno de los jóvenes que desde el comienzo estuvo en corte, básicamente estas mujeres eran “las esposas de los zafreiros o de los exzafreiros, y sobre todo de los obreros industriales del ingenio”. Las causas de ello radicaban en que, según él, “los hombres, por temor a la pérdida de su trabajo o por la presión que significaba el no volver a conseguirlo si realizaban una acción así, no querían comenzar un conflicto”. De acuerdo a los testimonios de otras mujeres que coincidían con Dietrich en que la presencia femenina había sido mayoritaria, la pertenencia social de las mismas era mucho más heterogénea. Así, se encontraban ese día en las barricadas docentes integrantes de las agrupaciones gremiales locales y lideradas por Mary Ferrín, dirigente de ADEP, trabajadoras estatales y desocupadas.

¹⁷⁰ Diario *El Tribuno* de Jujuy, 31 de mayo de 1997.

¹⁷¹ Diario *Clarín*, 21 de mayo de 1997.

En el caso de las docentes y las trabajadoras estatales, su presencia en la ruta se debía tanto a los atrasos constantes en el pago de sus remuneraciones como al pedido de aumento de salarios –esto último básicamente entre las maestras-. En lo que hacía a las mujeres desocupadas, que constituían el porcentaje mayoritario de las que estaban en el corte, las causas de esta participación remitían nuevamente al ejercicio de la maternidad. Según narró Carolina, una militante de la UCR y maestra que ejerce como preceptora en una escuela de Libertador General San Martín: “Mirá, lo que colmó el vaso fue la indiferencia de los gobernantes, la indiferencia menemista. [...]. La misma gente que lo votó a Menem era la que más bronca tenía. Y entre ellos, las mujeres. Eran más aguerridas, no les importaba nada. Era salir a pelear por la comida de sus hijos, por la salud de sus hijos, por el futuro de sus hijos en lo laboral. Dejaban la vida por asegurar el futuro de sus hijos [...]”. Entre ellas serían justamente dos mujeres desocupadas, Alicia Benítez y Nancy Barroso, quienes – como se verá luego- más tarde conformarían junto con Pablo Dietrich uno de los grupos referentes de los y las piqueteras de Libertador General San Martín.

Sin embargo, no era ésta la primera ocasión en la que ellas habían decidido desafiar el estado de cosas imperante. Por el contrario, algunas ya habían protagonizado acciones colectivas en las que arriesgaron sus vidas en pos de la defensa de su comunidad.

Mujeres con ingenio: ocupando los campos del “señor”.

Alicia Benítez nació en Libertador General San Martín en el año 1961. Desocupada, vive con sus ocho hijos en el barrio Balbín de esa localidad. Mientras conversábamos en su jardín, los más chiquitos entraban y salían de la casa curiosos, tratando de averiguar “qué hace la señora con el grabador”. Casi de manera continua, Alicia respondía al saludo de un vecino o de una vecina que pasaba por la vereda. Evidentemente, son muchas las personas que la conocen. Quizá sea porque desde hacía años Alicia venía enfrentando las reglas de juego de un orden que ha bregado por excluirla.

Ella relataba que a comienzos de 1990 vivía en una precaria casa al “costado de unas tierras del ingenio *Ledesma*” junto con su hija mayor y el primero de sus hijos varones, que “para esa época tenía un año”. Allí carecían prácticamente de todos los servicios y junto con otras familias “decidimos juntarnos y armar una comisión de vecinos. Yo fui elegida la presidenta de la comisión del barrio 17 de agosto, que así se llamaba”.

Pero como cada vez eran más las familias que llegaban al lugar esperando encontrar algún trabajo en la zafra, el espacio en que podían instalarse ya no alcanzaba razón por la cual decidieron tomar los terrenos incultos colindantes, propiedad de los Blacquier. Fue así como Alicia lideró un grupo de 12 familias que se ubicaron en el predio, apoyados informalmente por el intendente de ese momento, “el ingeniero Alvarez, que nos había prometido que si nos metíamos iban a dar el terreno”. La reacción de los propietarios azucareros fue casi instantánea: “Al poco tiempo que nos metimos, una mañana, empezó a meter fuego. Era un quilombo. Ya habíamos limpiado todo el terreno y habíamos armado unas casitas, toda la familia ayudaba. La primera casita era la mía. Y de lejos venía rajando la topadora así con todo. Y yo me he puesto ahí delante de la topadora [...] que ha parado ahí. El tierral casi me entierra. Y yo estaba con el machete así, me he tapado la cara con la gorra y el pañuelo. Cuando siento que el tipo para la máquina, yo subo y lo amenazo con el

machete. Si no se tiraba lo partía en dos al viejo. Y se amontonó todo el mundo y vino la policía. Y me escondía de la policía. Pero después me agarraron y me han llevado”, continuó narrando Alicia.

Pese a la protesta de los vecinos, Alicia fue esposada y conducida a la comisaría aunque a pie “porque yo al patrullero no me subo, le dije al policía”. Una vez en la comisaría, apareció un juez que la insultaba permanentemente: “el juez me ha tratado de todo, de puta, de prosti, de loca, de todo me ha tratado. Porque se puso furioso porque yo no quería firmar. Claro, me han hecho un papel. ‘No sé leer’ le digo. ‘¿Cómo no va a saber leer?’, me dice. El juez le dice y el oficial empieza a leer. Y entonces le pregunto: ‘¿Y qué quiere que firme eso si yo no sé leer y no sé firmar?’”. Alicia no aceptó firmar y decidieron entonces, llevarla desde la comisaría nuevamente esposada al ingenio. “Y antes de llegar al ingenio me han vendado los ojos y me han metido. Y yo pensé que estos me van a matar. Y me hablaban que quién va a reclamar, nadie va a reclamar por ella, además no tiene familia, decían. [...] Después me han dejado parada ahí. Me han venido a sacar la venda y estaba Moya [era un capataz del ingenio], estaba el viejo este Paz [el conductor de la topadora], y había dos que eran Blacquier y otro jovencito que creo que era el hijo. Entonces uno me dijo, me habló bien, me dijo que yo te puedo dar una casa, un trabajo seguro en la casa de gobierno vas a trabajar.” Pero Alicia se negó. No quería nada de eso, insistiendo en que no sabía leer y mucho menos trabajar para el gobierno. Lo único que ella pretendía era quedarse en esas tierras. “[...] ‘Pero no podés porque vamos a plantar cañas’, me dijo uno de ellos. ‘Bueno, pero ustedes tienen un montón de tierras y nosotros no tenemos dónde vivir’ [...]”, respondió ella, obstinada en mantener su posición pese a la inferioridad de condiciones en la que se hallaba. Luego de que uno de ellos le repitiera que eran tierras del ingenio y que, si querían, podían “aplastar” a quien allí se metiera, la volvieron a llevar a la comisaría.

Nunca supo por qué no la mataron en esa ocasión pero lo que jamás olvidó es que fueron sus vecinos/as quienes portando antorchas y movilizándose hacia donde la tenían detenida, lograron su libertad. De todos modos, el juez, antes de soltarla, le aseguró que “algún día nos vamos a volver a encontrar”. Alicia, desafiante, lo miró y le contestó: “seguro que sí, juez, pero a esta negra hace falta mucho para que la aplasten”.

Por lo tanto, cuando ese mediodía de mayo de 1997 en la que estaba preparando la comida para sus hijos/as Alicia escuchó el estruendo de las bombas de gases lacrimógenos y los disparos, salió corriendo hacia la ruta, pensando en que tal vez, era hora de volver a encontrarse con el juez. Pero por el momento, en medio del humo y las corridas, las primeras caras que divisó eran las de Nancy, Carolina y Olga Márquez de Aredez, amigas que intentaban defenderse como podían de la represión.

Piedras contra balas: la represión del corte de rutas.

El 20 de mayo, a las 4 de la mañana, el ministro de Gobierno de Jujuy, Eduardo Alderete, se había presentado en el corte de la ruta 34 para escuchar los reclamos de los y las manifestantes, prometiendo volver a reunirse con ellos cuatro horas más tarde. Empero, esto nunca sucedió ya que a las 6 de la mañana 300 efectivos de gendarmería de la Zona V de Santiago del Estero se presentaron en el lugar conminando a quienes estaban en los

piquetes a desalojar la ruta. Pasado el mediodía y ante la continuidad del corte, las fuerzas de gendarmería al mando de Pedro Pasteri y munidas de un camión cisterna, balas de goma y gases lacrimógenos, comenzaron una feroz represión que dejó como saldo 50 personas heridas, entre ellas a Mary Ferrín.

Entre tanto, desde la provincia de La Pampa el ministro del Interior de la Nación Carlos Corach declaraba que “no vamos a tolerar cortes de ruta porque es un medio violento, contra la ley”¹⁷², mientras insistía en que el número de heridos como resultado de la represión en Libertador General San Martín no superaba las 18 personas debido a que los que habían cortado la ruta “eran muy pocos”. Este intento de minimizar lo que ocurría en la ciudad jujeña, vinculado con la reprimenda lanzada días atrás por el presidente Menem a sus ministros por la nula previsión que el gabinete gubernamental tenía sobre los cortes de ruta¹⁷³, contrastaba con la magnitud de las imágenes mostradas por los noticieros televisivos. Y se tornaba más grotesca aún habida cuenta de que los funcionarios nacionales y provinciales recibían los partes médicos directamente del hospital *Oscar Orías*, ubicado en las cercanías del corte, partes a los cuales tenía acceso la prensa local y nacional. Pero de todas formas, el gobierno nacional dejaba pocas dudas acerca de los límites a los que estaba dispuesto a llegar cada vez que este tipo de conflictos se produjera. Así, en una solicitada aparecida el 22 de mayo en la mayoría de la prensa escrita, sostenía: “[...] Sólo bajo el irrestricto cumplimiento del orden jurídico establecido, es posible defender con eficacia los derechos fundamentales de nuestra democracia; y sólo bajo esas condiciones el Gobierno Nacional garantiza a todos su efectiva vigencia [...]”¹⁷⁴.

Por otro lado, el gobernador interino Eduardo Fellner, a cargo del ejecutivo provincial por ausencia de Ferraro –quien había viajado a la Capital Federal para entrevistarse con el presidente de la Nación–, pretendía reforzar el sustento legal para el uso de la fuerza declarando que la represión había sido ordenada por un comité provincial constituido por el ejecutivo jujeño, la policía local y la policía federal en el marco de la ley de seguridad interior¹⁷⁵. Con tales avales, la gendarmería obtuvo carta libre para desactivar el corte de rutas a cualquier precio.

Durante tres días entonces, intentó hacerlo. Así, las jornadas del 20, 21 y 22 de mayo estuvieron jalonadas por violentos choques entre los gendarmes, reforzados con el arribo de 700 efectivos más el 21 de mayo, y la población. En ocasiones, los primeros lograban sacar a la gente y apagar las fogatas, para ser apedreados luego por los y las pobladoras desde la vera la ruta y obligados a retirarse, momento en los cuales los piquetes eran reinstalados. Si la gendarmería contaba con las armas y la legitimidad para usarlas (recibiendo incluso un avión y dos carros hidrantes más), los segundos contaban con el número y la convicción de que la ruta era el lugar en el que debían permanecer. Según Carolina: “[...] La consigna era no abandonar la ruta por más gendarmes que llegaran.”

¹⁷² Diario *Clarín*, 21 de mayo de 1997

¹⁷³ Según el diario *Página 12* del 21 de mayo de 1997, el gobierno enfrentó desde abril de ese año 4 cortes: Cutral Co y Plaza Huincul, en Neuquén; Tartagal y General Mosconi, en Salta; San Lorenzo en la provincia de Santa Fe y el recientemente comenzado en Jujuy, a lo cual se sumaban las protestas de camioneros en ese mismo mes realizando cortes en las ciudades de Mendoza y Rosario.

¹⁷⁴ Diarios *El Tribuno*, *Clarín* y *La Nación*, 22 de mayo de 1997.

¹⁷⁵ Diario *El Tribuno* de Jujuy, 21 de mayo de 1997

Entre tanto, el ministro Alderete volvía a la región anunciando que “no había llegado a Libertador a dar respuestas sino a recoger el petitorio” para entregárselo al gobernador¹⁷⁶. No faltó entre los puntos del reclamo de los y las pobladoras que en horas de la noche del 20 se reunieron con él, por ejemplo, el pedido de retiro de la gendarmería. Pero esto no estaba por el momento en la agenda gubernamental.

Mientras tanto, el intendente de la ciudad Marcelo Llanos, al igual que los otrora intendentes de las comarcas petroleras neuquinas y salteñas, intentaba deslegitimar la protesta sosteniendo que la misma había sido incentivada por la FM local “Independencia” y dos concejales locales, de apellido Palavecino y Flores¹⁷⁷. Para una de las mujeres entrevistadas, nacida en Bolivia y que vivía en Ledesma con su hermana desde hacía muchos años, esto no era así. Según ella: “Estábamos ahí, tan aguerridas y dispuestas a todo por el hambre. No se puede vivir sin trabajo. [...] Es cierto que vinieron los de los gremios estatales, los docentes, hasta los jubilados. Pero político, ninguno. Al contrario, se escondieron como ratas. Queríamos que viniera el gobernador a hacer propuestas serias y lo único que nos mandaba era la gendarmería que cuando invadió el barrio San Lorenzo... . Ahí se le acabó”.

En efecto el 21 de mayo, en uno de los tantos intentos por despejar la ruta, los gendarmes comenzaron a perseguir a la gente dentro de la ciudad, violando las disposiciones legales que le impedían actuar fuera de los límites de la ruta. Un periódico local consignaba que “las granadas de gas comenzaron a caer en las viviendas del barrio San Lorenzo, que obligó a los vecinos a salir de las mismas alarmados y con niños en los brazos, que presentaban principios de asfixia”¹⁷⁸. Ante esto “[...] el pueblo reaccionó con más terror porque esta gente cometió el error de inteligencia de tirar con gases lacrimógenos a un barrio que estaba al costado del puente. Y ahí salió la gente del barrio porque había chiquitos jugando y tiraron ahí también [...]”, acordó recordó Carolina. Durante dos horas se mantuvieron los enfrentamientos entre los gendarmes y la población, dejando un saldo de más de 40 personas heridas, entre los que había niños y niñas incluso de un mes de edad. Obligados a retirarse, la mayoría del cuerpo gendarmería se replegó a una de las plantaciones del ingenio *Ledesma*, el lote “La Paulina”, cuyos dueños, como en otras épocas, les dieron cobijo y alimento. Por ello quizá para Dora como para la mayoría de las personas entrevistadas, los recuerdos de la dictadura militar pasada emergían con facilidad en el presente para colocar en primera fila el vínculo que sin mediaciones existía entre las fuerzas represivas y los Blacquier. “Acá siempre fue así: los milicos dormían en el ingenio y salían después a secuestrar. Ahora, comen allí y después vienen a tirar gases acá. Pero esta vez [en referencia al corte] no se la llevaron así nomás”.

De cortes y solidaridades: bloqueando todas las rutas provinciales.

“Y bueno. Tuvimos que reprimir a los gendarmes”, declaraba un joven a un reportero del diario *El Tribuno* y ante las cámaras de varios noticieros que se encontraban en Libertador

¹⁷⁶ Diario *El Tribuno* de Jujuy, 21 de mayo de 1997.

¹⁷⁷ Diario *El Tribuno* de Jujuy, 21 de mayo de 1997.

¹⁷⁸ Diario *El Tribuno* de Jujuy, 21 de mayo de 1997.

General San Martín cubriendo lo que allí sucedía. Y el panorama parecía aún peor que el del día anterior puesto que pasadas las 15 horas del jueves 22 de mayo, la gendarmería volvió a reprimir adentrándose nuevamente en las calles de los barrios San Lorenzo y San Francisco. Esto provocó que la mayoría de la población de Libertador se involucrara en el enfrentamiento, obligando a la gendarmería a retroceder nuevamente. En la tarde de ese día, Ferraro ordenó el retiro de esa fuerza nuevamente hacia el lote “La Paulina”. Pasteri no sólo tardó en acatar la orden (lo hizo recién por la noche) sino que debió pedir ayuda a la policía provincial para lograr el repliegue de los gendarmes “sin ser agredidos por la gente”.

Por otro lado, además de la resistencia demostrada por los habitantes de Libertador General San Martín, la situación para el gobernador Ferraro se complicaba por varias cuestiones más. En diversas declaraciones éste había reiterado que la orden de represión había sido impartida por él con la anuencia del ministro Corach asegurando, simultáneamente, que “si la violencia fuera una forma [de solucionar algo], el gobierno sería violento”¹⁷⁹. Aparentemente los/as ledesmaes no lograron “comprender” entre gases lacrimógenos, balas de goma y de plomo, camiones hidrantes, detenciones arbitrarias y 200 personas heridas¹⁸⁰, el pacifismo del que hacía gala el gobernador. Pero tampoco lo hizo buena parte de la población jujeña. La confrontación comenzó a sobrepasar, entonces, los límites territoriales del Libertador General San Martín ya que grupos de desocupados/as de otras localidades jujeñas tanto como sindicatos e integrantes de las multisectoriales fueron plegándose a la protesta.

Así, al corte en Ledesma se sumó un paro de 24 hs. con movilización en la propia capital convocado por el FGE y la Multisectorial de Jujuy –conformada por representantes de los gremios estatales, partidos políticos, centros vecinales, cámaras empresarias y colegios profesionales-, para las 10:00 de la mañana del 22 de mayo¹⁸¹.

Por otro parte, en Abra Pampa los y las desocupadas cortaron la ruta durante algunas horas el 22 de mayo, recibiendo amenazas de represión por parte de la gendarmería aunque las mismas no se convirtieron en realidad por mediación del párroco de La Quiaca, Jesús Olmedo. Esa misma noche, además, un grupo de desocupados/as liderados por el ex trabajador ferroviario Eduardo Quiroz y la ex trabajadora Rosa Vacaflor cortó la ruta 34 en San Pedro, a 60 km de la capital jujeña, incorporándose a la medida durante la mañana siguiente organizaciones gremiales tales como el SEOM, CEDEMS, ADEP, el Centro de Empleados del Ingenio La Esperanza, el centro de desocupados de este ingenio y el colegio de abogados.

¹⁷⁹ Diario *El Pregón*, 22 de mayo de 1997.

¹⁸⁰ Las detenciones fueron arbitrarias porque hasta ese momento ningún juzgado había tenido intervención en la orden de represión dada a la gendarmería. Por lo tanto, los detenidos estaban a disposición de gendarmería y por decisión de esta fuerza. Además, según declaraciones de Carlos Olivera Pastor, secretario penal del juzgado federal nro.2, que tenía la jurisdicción sobre la zona, la fiscalía provincial debía investigar lo realizado por el gobernador en esa materia puesto que sólo tenía facultades para ordenar la actuación de gendarmería en un caso de conmoción interior, caso que, según el propio Olivera Pastor, no se habría dado al inicio del conflicto. Ver diario *El Pregón*, 24 de mayo de 1997.

¹⁸¹ El paro se dispuso para el 22 de mayo y comenzó a las 9 de la mañana. Diarios *El Pregón* y *El Tribuno*, 22 de mayo de 1997.

El 24 de mayo, se sumó el corte en la ruta provincial nro. 66 en Palpalá, iniciado fundamentalmente por ex trabajadores de *Altos Hornos Zapla* y desocupados/as de distintos sectores de la ciudad, y apoyado por el intendente local Rubén Daza¹⁸². El 26 de mayo, ante el arribo adelantado de los funcionarios del gobierno nacional, se ampliaron los cortes de ruta a Perico, principal ciudad del área tabacalera, el barrio Alto Comedero en la capital y se retomó el corte en Abra Pampa.

Al día siguiente también se realizaron cortes en La Mendieta –donde se encuentra localizado el ingenio *Río Grande*– organizados por los trabajadores azucareros, en Tilcara y en La Quiaca, coordinado por la multisectorial y la pastoral social locales. Para el día 28 de mayo, los cortes se generalizaron involucrando prácticamente todas las rutas de la provincia.

Además de la solidaridad expresada con los habitantes de Libertador General San Martín, cada uno de los protagonistas de estos cortes poseía sus propias reivindicaciones. Por ejemplo, en el caso de San Pedro, se exigía la creación de 4.000 fuentes de trabajo, subsidios de \$300 para cada uno de los 7.000 desocupados de la localidad, retiro de las tropas de gendarmería, implementación de planes de obras públicas, participación activa de la iglesia, desocupados, entidades intermedias y partidos políticos en la resolución de los conflictos, entre otras cuestiones. En Palpalá, entre los puntos que figuraban en el petitorio entregado a los funcionarios políticos, se encontraban el reclamo del fondo compensador adeudado por el Estado a los ex trabajadores de *Altos Hornos Zapla*, declarar insalubres las instalaciones de la acería, asistencia médica para personas desocupadas e indigentes, excepción a los desocupados del pago de impuestos y servicios, entrega de viviendas para ocupados y desocupados que carecieran de ellas, etc. En los casos de la Quebrada de Humahuaca y la Puna se exigía el cumplimiento del compromiso firmado en oportunidad de la realización de la “Marcha de la Dignidad”¹⁸³; puestos de trabajo para las personas

¹⁸² Es interesante consignar aquí el particular tenor que tuvieron los festejos del 25 de mayo en conmemoración de la revolución independentista de 1810. En San Pedro, por ejemplo, los actos se hicieron en medio de la ruta y quienes tomaban la palabra eran desocupados o integrantes de los gremios estatales. En Libertador General San Martín, se realizó una concentración en el camping municipal, localizado a pocas cuadras de la ruta que seguía cortada, para luego asistir a un desfile de miles de personas divididas en “secciones”. La primera que marchó fue la “Sección Baldes” cuyas filas estaban compuestas por mujeres y varones que transportaban los recipientes con agua utilizados para combatir las granadas de gases lacrimógenos lanzadas por la gendarmería en los días previos; la segunda fue la “Sección Gomerás” y la tercera la “Sección Piedras”, ambas conformadas por mujeres y varones jóvenes que exhibían los instrumentos de lucha contra la gendarmería mientras eran aplaudidos por los y las observadoras del inusual desfile del 25 de mayo. Ver diario *El Pregón*, 26 de mayo de 1997.

¹⁸³ La “Marcha de la Dignidad” se produjo el 26 de junio de 1996. Fue una marcha de protesta contra las medidas económicas del gobierno menemista. Decidida en una asamblea multisectorial realizada en La Quiaca, contó con la participación de organizaciones gremiales, desocupados/as, comerciantes, la iglesia –en particular la prelatura de Humahuaca a cargo de Jesús Olmedo-, y con la presencia del dirigente Carlos “Perro” Santillán y algunos representantes del FGE. La marcha consistía en una movilización a pie desde la Quiaca a San Salvador de Jujuy, recorrido de 300 km aproximadamente. Los reclamos de los manifestantes eran: creación de un fondo de desempleo; no más despidos en la administración pública y privada; canje de bonos provinciales por ventanilla bancaria; pago de sueldos en tiempo y forma sin rebajas salariales; no a las políticas centralistas, en contra de las provincias, intendencias y comisiones municipales; compromiso por una salud y educación digna; no a la impunidad del Banco Provincia. Para una descripción detallada de este

desocupadas; puesta en funcionamiento de la Zona Franca Minorista (para el comercio con Bolivia), programas sociales de emergencia, no arancelamiento del hospital público, no toma de represalias contra los manifestantes.

Entre tanto, los propietarios azucareros aprovechaban la situación de conflicto para exigir al gobierno nacional medidas que protegieran la producción azucarera frente la competencia desatada por la producción brasileña en el marco del MERCOSUR¹⁸⁴.

Por otra parte, tanto el bloque legislativo de la UCR como el dirigente Carlos Santillán, que desde hacía varios días protagonizaba una serie de paros y movilizaciones con reivindicaciones sectoriales¹⁸⁵, comenzaron a exigir la renuncia del gobernador del gobernador Ferraro, reclamo que el FGE mantendría en posteriores actos de protesta que durante esas jornadas tuvieron lugar en la provincia.

En síntesis, el conflicto de Libertador General San Martín no sólo se había extendido al territorio provincial restante a tal punto que, luego de una semana de iniciado, abarcaba más de 20 cortes de ruta aproximadamente. También había logrado encolumnar detrás de sí un conjunto de sectores sociales sumamente heterogéneos ya que los cuestionamientos al desempeño del ejecutivo provincial provenían de cámaras empresariales, legisladores provinciales integrantes del bloque de la UCR, miembros de la iglesia como el obispo de Jujuy Marcelo Palentini -quien había intentado mediar en la confrontación¹⁸⁶-, entre otros. Todo ello obligó al gobierno provincial a buscar iniciativas distintas a las del uso de la fuerza para resolver el conflicto.

“Admito que hubo excesos”: el viraje la política gubernamental.

Fue con estas palabras la manera en que el gobernador Ferraro abrió un nuevo capítulo en las estrategias gubernamentales hacia la protesta. Ante la evidencia de que la política represiva había generado un efecto absolutamente antagónico al deseado, el ejecutivo provincial comenzó una serie de gestiones intentando crear el marco para llegar a un acuerdo y evitar una crisis institucional. Entre ellas estaban, por un lado, las destinadas a obtener el apoyo explícito del gobierno nacional, apoyo que significaba no sólo lograr la presencia de funcionarios del gabinete menemista en la provincia sino también un aumento de la cantidad de planes “Trabajar” destinados a Jujuy. Por el otro, era preciso mejorar el “diálogo” con la iglesia, e iniciar un acercamiento con los grupos de desocupados/as que

suceso véase: Olmedo Rivero, Jesús (2003): *Los desocupados de la Quiaca. 12 años de lucha junto a otros sectores sociales, 1992-2003*. Jujuy: Fundación El Monte.

¹⁸⁴ Según una noticia aparecida en el diario *El Pregón* del 24 de mayo de 1997, las entidades empresarias provinciales habían remitido el 21 de mayo una nota al presidente Carlos Menem solicitando la regulación de la apertura del mercado azucarero argentino en función de la disminución de los subsidios que Brasil aplicaba al Plan Proalco.

¹⁸⁵ Uno de ellos tuvo lugar el 20 de mayo, cuando el FGE realizó un paro con movilización en San Salvador de Jujuy, oponiéndose a la privatización del “Instituto de Seguros”, obra social con 120.000 beneficiarios entre los/as trabajadores/as estatales.

¹⁸⁶ El 21 de mayo Palentini se acercó a Libertador General San Martín en representación del gobierno y expresando que éste prometía la entrega de 500 puestos de trabajo y subsidios para desempleados, y asegurando el retiro de la gendarmería. El primer punto fue rechazado por la asamblea piquetera local. Y el segundo no se cumplió.

lideraban el conflicto, a la par que acallar los pedidos de renuncia provenientes de distintos sectores sociales y políticos.

Así, el gobierno fue tomando varias medidas. En principio, gestionó el adelantamiento de la fecha de arribo de funcionarios del gabinete nacional, previsto originariamente para el 29 de mayo. Entre ellos, uno de los primeros en llegar fue el secretario de seguridad del ministerio del Interior de la Nación, el brigadier (re.) Andrés Antonietti que, ante todo, hizo público su aval a lo actuado por el gobierno hasta ese entonces. Así, acercándose al corte en San Pedro el 24 de mayo, reiteró que quienes estaban en los piquetes incurrían en la comisión de un delito. Paralelamente, aseguró que la gendarmería no había reprimido en Libertador General San Martín sino llevado adelante “una acción para preservar el orden y garantizar la transitabilidad”¹⁸⁷. Sin embargo, no amenazó con recurrir a esta fuerza para despejar el corte en la localidad sampedrino.

En segundo lugar, el 26 de mayo el gobernador anunció luego de un cónclave en el que participaron los funcionarios nacionales recientemente llegados a Jujuy y un veedor de la iglesia, la cantidad de proyectos de “trabajo” que estaba dispuesto a implementar a fin de comenzar a resolver la crisis de empleo en la provincia. Así, prometía abrir 2.396 “puestos de trabajo” (correspondientes en su mayoría al “Programa Trabajar II”), distribuidos entre Libertador General San Martín, San Pedro, Palpalá y La Quiaca; el lanzamiento de 29 proyectos comunitarios en las localidades de Santa Clara y El Talar –en el extremo oriental de la provincia-; la instalación de dos puestos de salud totalmente equipados en Libertador y en San Pedro, refuerzo de dinero para la provisión de medicamentos e insumos hospitalarios, etc. Sin embargo, estas propuestas no fueron aceptadas por los y las piqueteras, razón por la cual los bloqueos continuaron¹⁸⁸.

Por otro lado, para atenuar la tensión existente y debilitar los pedidos de renuncia y juicio político, y las versiones sobre una inminente intervención federal, Ferraro ordenó el retiro definitivo de las tropas de gendarmería de Libertador General San Martín el 27 de mayo. Por su parte, la llegada del secretario nacional de la Presidencia Alberto Kohan el día siguiente a la provincia y el respaldo público dado por éste al gobernador, disiparon definitivamente los rumores sobre las posibilidades de intervención federal. Entre tanto, el FGE comenzaba a sostener que la dimisión del gobernador no era la medida que necesariamente llevaría a solucionar la crisis¹⁸⁹, acercándole una propuesta en la que se contemplaban medidas tales como el no cobro de impuestos a las personas desocupadas, la colonización de tierras incultas para las personas desocupadas, pago de haberes en tiempo y forma, disminución de la jornada laboral sin merma del salario para ampliar el ofrecimiento de puestos laborales, etc.¹⁹⁰

¹⁸⁷ Diario *El Pregón*, 25 de mayo de 1997.

¹⁸⁸ Tampoco las leyes aprobadas rápidamente por la legislatura jujeña fueron suficientes para motivar el levantamiento de las medidas de protesta. Algunas de ellas eran la ley de beneficio a grupos familiares con necesidades básicas insatisfechas, la ley de promoción y defensa del empleo y la creación de la “Comisión Provincial de Emergencia Social”.

¹⁸⁹ Diario *El Tribuno*, 29 de mayo de 1997, y *El Pregón*, 28-29 de mayo de 1997. Por otro lado, durante esos días la UCR emitió un comunicado en el cual solicitaba el adelantamiento de las elecciones gubernamentales a octubre de ese año.

¹⁹⁰ Diario *El Pregón*, 28 de mayo de 1997.

Por lo tanto, asegurado el respaldo del gobierno nacional y ante la aparente suspensión de las exigencias de renuncia por parte de los gremios con mayor capacidad de movilización, el poder ejecutivo provincial debía lograr entonces el acercamiento con dos actores sociales fundamentales. El primero eran las autoridades eclesiásticas y el segundo, los y las piqueteras de Libertador General San Martín, iniciadores/as del conflicto.

En cuanto a la iglesia, si bien sus principales referentes se habían mostrado dispuestos a colaborar en el arribo a una solución –tal el caso del obispo de San Salvador de Jujuy Marcelo Palentini-, el gobierno no podía soslayar, por un lado, que algunos de los prelados habían codirigido los propios cortes de ruta, como en la zona de La Quiaca y la Quebrada de Humahuaca. Por el otro, era un elemento de peso también la fuerte condena que de forma unánime los integrantes de la iglesia habían realizado por la respuesta represiva del gobierno ante “legítimos” reclamos sociales¹⁹¹. Por lo tanto, era necesario desandar la tensa relación generada a partir de las órdenes de represión, revertir -aunque fuera en forma mínima- la desconfianza de los curas más renombrados hacia las figuras del gobierno; y volver a la iglesia una pieza clave para dar credibilidad y refrendar los intentos de acuerdo por parte del gobierno.

A ello se abocó el brigadier (re) Antonietti en una reunión con monseñor Marcelo Palentini y religiosos de la prelatura de Humahuaca en la sede del obispado de la capital jujeña el 26 de mayo. Si bien en un principio no se revelaron los contenidos de tal encuentro, pocos días después el cura Ricardo Aparicio informaba a los medios de comunicación que “los representantes de la Nación buscaban contar con la iglesia para apaciguar a la gente. En una palabra, querían que le saquemos las castañas del fuego con unos puntitos que traían como oferta y estaban convencidos de que la gente se iba a calmar”¹⁹². Asimismo, sostuvo que en la reunión la iglesia exigió el retiro de la gendarmería de la provincia de forma inmediata y que reprochó a los funcionarios oficiales el engaño del que había sido objeto Palentini cuando fuera enviado en los inicios del conflicto a Libertador General San Martín con una propuesta de 500 “puestos de trabajo” y la promesa del retiro de gendarmería, cuestión que fue incumplida. Pese a estas críticas, la reunión fue exitosa para la política gubernamental ya que el vicario de la prelatura dejó en claro que, pese a todo, estaban dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones. Fue así como el obispo jujeño Marcelo Palentini ganó un protagonismo especial como mediador entre el gobierno y los representantes de los y las piqueteras.

Pero para llegar a un acuerdo, era imprescindible también construir un espacio de conciliación con el segundo de los actores en cuestión, los y las desocupadas de Libertador General San Martín. Para ello, la política gubernamental, luego de mostrarse dispuesta al diálogo al ordenar el retiro de las tropas de gendarmería, apuntó en primer lugar a tornar al Centro de Desempleados y Desocupados de Libertador General San Martín como exclusivo

¹⁹¹ En todas las conferencias de prensa, comunicados y entrevistas, tanto Palentini como Olmedo y el resto de los párrocos subrayaron la situación acuciante en la que se encontraban quienes protagonizaban los cortes de ruta, señalando que los mismos eran producto de la situación de crisis generada por las políticas económicas implementadas.

¹⁹² Diario *El Pregón*, 28 de mayo de 1997

interlocutor de los y las piqueteras de la zona. Y a su vez, impulsar que toda negociación posible se realizara en el territorio de San Salvador de Jujuy, lejos del epicentro del conflicto.

Esto no era tarea sencilla puesto que este centro no era el único que representaba a los y las piqueteras de la localidad. Por el contrario, aunque la organización liderada por Juan Giménez fuera la más visible y ocupara el foco de la escena para los medios de comunicación, durante el devenir de la confrontación había emergido otro grupo cuyos referentes eran un joven y dos mujeres: Pablo Dietrich, Nancy Barroso y Alicia Benítez¹⁹³.

Según relatara Alicia, en una de las múltiples asambleas que se realizaron durante los días de la represión escuchó a un chico joven que, subido a una de las improvisadas gradas, hablaba por el “micrófono diciendo que nos teníamos que organizar para conseguir lo que queríamos. Y nos miraba a las mujeres y preguntaba ¿qué piensan las mujeres del valle? ¿Qué van a hacer para que les den subsidios, para que les den trabajo? Y después lo ví luchar contra la gendarmería. Y entonces le digo a mi compañera Nancy Barroso [...] que el pendejito hablaba bien, que debe tener estudio. Entonces les empiezo a decir que hay que apoyar al pendejito. Y así hicimos la Comisión de Desocupados 22 de Mayo. Pablo [el joven a quien se refiere aquí Alicia], fue nombrado presidente y detrás de él estaba la Nancy y después estaba yo”.

La Comisión de Desocupados 22 de Mayo, cuyo nombre hacía alusión a la fecha en la que la represión había sido más feroz, estaba constituida por mujeres desocupadas y varones jóvenes –entre los que se contaban desocupados y ocupados, algunos de los cuales tenían militancia política en partidos de izquierda-. Básicamente, lo que los/as llevó a organizarse fue la desconfianza que Juan Giménez despertaba en ellos/as ya que era catalogado como “un tipo que siempre buscaba apoyarse en el político fulano o en otro, el intendente, y así las cosas ya no eran lo mismo”, continuaba rememorando Alicia. Para ella, como para otras mujeres entrevistadas, la adscripción a un partido político no era necesariamente un motivo de desunión o de exclusión de la organización. De hecho, que Pablo fuera un militante reconocido del trotskista Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) no constituía un problema, como tampoco lo era que Carolina, amiga y compañera de Alicia en la organización del corte, participara de la UCR. El punto del cuestionamiento se hallaba nuevamente en la posibilidad de buscar apoyo en “el político fulano o en otro” puesto que esa referencia al “político” remitía al funcionario público y a un sistema de negociación/cooptación que abría las puertas a la traición de la protesta.

Tampoco era casual que fuera en las organizaciones más recientemente constituidas y menos estructuradas, por tanto, donde las mujeres hallaran un mayor atractivo para su involucramiento público/político. La horizontalidad en la participación dentro de este tipo de organizaciones y consecuentemente las reuniones asamblearias casi permanentes, eran

¹⁹³ De estas personas, ha sido imposible entrevistar a Nancy Barroso puesto que actualmente no reside en Libertador General San Martín y las versiones acerca de dónde está son múltiples. De igual manera sucedió con las explicaciones en torno a las causas que llevaron a Nancy a abandonar posteriormente la organización de desocupados/as como su lugar de residencia.

elementos que generaban un marco de confianza y una cotidianeidad en el trato, posibilitando a las mujeres el animarse a hablar, proponer y debatir las medidas a asumir.

Justamente, en dos de estas medidas se hicieron notorias las diferencias entre ambas organizaciones. Por un lado, una de las cuestiones del debate refería a cuáles serían los puntos de la negociación y hasta dónde se cedería a fin de llegar a un acuerdo con el gobierno. Por el otro, el problema era determinar en qué lugar se llevaría a cabo tal negociación. En esa dirección, las preferencias del poder político provincial se volcaban a intentar un “diálogo” con los representantes del Centro de Desempleados de Libertador General San Martín y en un terreno menos conflictivo. Fue así como estos últimos fueron invitados a asistir a una reunión a San Salvador de Jujuy, luego de un breve encuentro mantenido entre representantes del gobierno nacional y los representantes del Centro de Desempleados en Calilegua, a 6 km de Libertador General San Martín¹⁹⁴. La Comisión de Desocupados 22 de Mayo se opuso a la realización del viaje a Jujuy argumentando que “nos sacarían del centro del conflicto”. Sin embargo, el Centro de Desempleados fue imponiendo su posición¹⁹⁵, conforme avanzaba el desgaste luego de tantos días de bloqueo de las rutas y el peso del llamado de los integrantes de la iglesia a intentar llegar a un acuerdo entre las partes¹⁹⁶.

En efecto, esta mediación eclesial fue sumamente fructífera para concretar el encuentro entre el gobierno y quienes estaban en los cortes de ruta. El 30 de mayo, luego de once días de conflicto, se produjo una reunión clave en el salón parroquial de la catedral de San Salvador de Jujuy entre el gobernador Ferraro y los representantes piqueteros. Para facilitar la instancia de negociación, estos últimos habían constituido la Comisión Coordinadora de Desocupados y Piqueteros integrada por tres delegados de cada corte de ruta, que de allí en más representaría a “todo desocupado existente [quedando facultada para] reclamar y peticionar en todas las negociaciones que se realicen a futuro”, manejar subsidios, puestos de trabajo, etc., conjuntamente con la Iglesia representada por “el padre Jesús Olmedo, monseñor Palentini, el padre Germán Maccagno, la pastoral de la Prelatura de Humahuaca y la Diócesis de Jujuy[...]”¹⁹⁷. Según narraron algunos protagonistas del corte en Libertador General San Martín, el cura local terció fuertemente para que entre los tres representantes que de Libertador partirían a San Salvador de Jujuy, no hubiera ninguno perteneciente a la Comisión de Desocupados 22 de Mayo. Sin embargo Pablo logró integrarse en el grupo de Libertador combinando con Alicia y Nancy que ellas quedaran en la localidad al frente del corte y a la espera de lo que sucediera durante el encuentro.

¹⁹⁴ Diario *El Tribuno*, 27 de mayo de 1997.

¹⁹⁵ Incluso el 28 de mayo el diario *El Pregón* publicó el levantamiento del corte a la altura del Río San Lorenzo mientras se producían las negociaciones a puertas cerradas entre funcionarios y dirigentes del Centro de Desempleados, pese a la resistencia de un grupo de jóvenes que “estaban siendo disuadidos”. Ver diario *El Pregón*, 28 de mayo de 1997.

¹⁹⁶ Por otra parte, los diarios publicaron varias noticias y declaraciones oficiales en las que se sostenía que por causa de los cortes, las ambulancias no podían llegar a los hospitales -que a su vez comenzaban a carecer de insumos y medicamentos-, o que los empleados públicos no podían cobrar sus haberes por que los camiones con caudales estaban varados por los piquetes. Si bien los manifestantes sostenían que tales versiones no eran ciertas y que el gobierno las propagaba a fin de restar apoyo social a los bloqueos, la presión ejercida en ese sentido era cada vez mayor. Ver ediciones del *El Pregón* del 28, 29 y 30 de mayo.

¹⁹⁷ Diario *El Pregón*, 30 de mayo de 1997.

En la reunión, la presencia del obispo Marcelo Palentini y otros sacerdotes fue esencial para darle credibilidad a las promesas del gobierno y poner término al conflicto aunque los propios miembros de la iglesia declararan que estaban allí en calidad de testigos y no como garantía o aval de las propuestas gubernamentales¹⁹⁸. Así, el 31 de mayo se firmó el acta-acuerdo estipulándose el levantamiento de los cortes una vez que la misma fuera refrendada en cada piquete. Entre los 19 puntos que constituyeron dicho pacto, estaban: la creación de 12.560 puestos de trabajo comenzando a efectuarse los primeros 2.000 en los 15 días subsiguientes y los restantes en los próximos meses; libertad inmediata a los detenidos en la represión de Libertador General San Martín conjuntamente con la garantía de no persecución de ninguna persona que hubiera participado en los piquetes e indemnización para las víctimas de la represión; ejecutar el plan quinquenal de obras y servicios públicos; construcción de escuelas en zonas más necesitadas; inmediata convertibilidad de los bonos; sanción urgente de una ley de emergencia impositiva¹⁹⁹. Por su parte, la Comisión Coordinadora de Desocupados y Piqueteros y la iglesia se encargarían del seguimiento y control de la ejecución de los puntos acordados en el acta.

Aunque estos resultaron insuficientes, sobre todo en lo referido a la cantidad de subsidios prometida por el gobierno, los y las pobladoras de Libertador General San Martín, como de los restantes piquetes, aceptaron levantar el corte de rutas.

Sin embargo, muchos/as de ellos/as no estaban dispuestos/as a conferir a la recientemente formada Comisión Coordinadora de Desocupados y Piqueteros la función de fiscalizar el cumplimiento de lo pactado. Por el contrario, la capacidad de autodeterminación puesta en práctica durante el inicio y desarrollo del conflicto no cedería fácilmente ante la emergencia de una forma de organización, la comisión coordinadora, cuyas decisiones se basaran exclusivamente en mecanismos de delegación representativa sobre el conjunto de los y las piqueteras. Tampoco se dejaría necesariamente esta función en manos de la iglesia, pese al peso que la misma tenía en la mesa de concertación. Fue así como Alicia, Nancy, Pablo y varias personas más decidieron mantenerse a la vera de la ruta en los meses subsiguientes sosteniendo que “si no cumplen, volvemos a cortar”, según relatara Cristina, una mujer desocupada que vive en el barrio San Lorenzo.

Algunos meses más tarde, nuevamente un elevado número de desocupados/as daría cuenta en los actos del alcance de las palabras de Cristina.

“Marche presa”: el corte de agosto de 1997.

En la mañana del 5 de agosto de 1997, Jujuy volvía a convertirse en el foco de atención nacional. Ese día los diarios publicaban que “nuevamente el caos” se había apoderado de la provincia²⁰⁰. El motivo de tan exagerado título se encontraba en los quince cortes que habían comenzado el día anterior sobre las rutas nacionales nro 9, 34 y 66 y las provinciales nro. 1, 42 y 66. Pese a que el ministro de Gobierno provincial Alberto Matuk declaraba aparentemente sorprendido que “los cortes no tienen explicación”, su intento de

¹⁹⁸ Diario *El Pregón*, 30 de mayo de 1997.

¹⁹⁹ Diarios *El Pregón* y *El Tribuno*, 31 de mayo de 1997.

²⁰⁰ Diario *El Tribuno*, 5 de agosto de 1997.

minimizarlos argumentando que “hoy la comunidad no comparte”, se contradecía con la envergadura cuantitativa de los bloqueos²⁰¹.

Por su lado, el obispo Marcelo Palentini no ocultaba tampoco su sorpresa puesto que según él, en ese momento, “se encontraban preparando la mesa de concertación” entre el gobierno y la organización de desocupados. Empero el propio obispo reconocía que “hacía algún tiempo que no dialogaba con la Comisión Coordinadora de Desocupados y Piqueteros”²⁰². De todas formas, Palentini se encargó de aclarar que la medida “no le parecía oportuna”.

Ahora bien: la causa principal que había provocado esta protesta radicaba en el incumplimiento por parte del gobierno de los puntos acordados durante el pasado mes de mayo. Los y las piqueteras exigían además la reparación de las viviendas destruidas por la represión de la gendarmería, la gratuidad para la atención en los hospitales, el aumento del monto del subsidio por desempleo a \$400 y la incorporación de las mujeres al “Plan Trabajar”. Por otro lado, quienes tomaron la iniciativa de llevar el conflicto adelante fueron en buena medida los y las pobladoras que habían protagonizado la anterior confrontación. Así, Libertador General San Martín, Palpalá, Perico, San Pedro, Abra Pampa, Humahuaca y El Carmen, nuevamente ocupaban el centro de la escena. A su vez, la decisión de comenzar con el corte no provino de la “Comisión Coordinadora de Desocupados y Piqueteros”. En el caso de Libertador, por ejemplo, las personas que estaban al frente del mismo eran las que habían constituido la Comisión de Desocupados 22 de Mayo, razón por la cual el gobierno, negando el incumplimiento del cual se lo acusaba, sostenía que los cortes se debían en sí a una “interna de los desocupados” y que sus dirigentes sólo “buscaban protagonismo”²⁰³.

Sin embargo, en un principio la respuesta gubernamental fue más cautelosa que en el corte anterior. Ante las órdenes de desalojo emitidas esta vez por un juzgado penal, los funcionarios gubernamentales declaraban que preferían lograr el levantamiento de las medidas de fuerza mediante el diálogo y no la represión, cuestión que finalmente no fue así aunque ciertamente la coacción física se usó de forma más selectiva y estuvo a cargo de la policía provincial.

En efecto, dos días después de iniciado el conflicto, quienes persistían bloqueando las rutas eran las y los desocupados de Libertador General San Martín, Alto Comedero y El Carmen. En esta última localidad, la policía logró desalojar la ruta utilizando la fuerza contra las mujeres, los niños y los varones que allí se encontraban, hiriendo a dos de ellos. Además varias personas fueron detenidas, entre ellas mujeres a las que, una vez en la comisaría, se las sometió a “manoseos” y golpizas según denuncias de los y las manifestantes que aguardaban su salida²⁰⁴. De similar manera actuó la policía en Libertador General San Martín y en Alto Comedero, donde fueron detenidos/as 50 personas, entre ellos/as Nancy Barroso, Pablo Dietrich y Alicia Benítez. Finalmente, los cortes se levantaron el 8 de agosto y el ministro Matuk se ocupó cuidadosamente de dejar asentado que la política

²⁰¹ Idem ant.

²⁰² Idem ant.

²⁰³ Idem ant.

²⁰⁴ Diario *El Tribuno*, 7 de agosto de 1997.

represiva no iba dirigida hacia todo el movimiento piquetero de Jujuy. Por el contrario, mientras aseveraba que los responsables del corte eran “sectores radicalizados” que pretendían “provocar el caos y la anarquía en Jujuy” y que por tanto contra ellos había actuado la policía provincial²⁰⁵, nada tenía para reprochar a la “Comisión Coordinadora de Piqueteros y Desocupados [que] cumplió con su palabra [...] e hizo esfuerzos para que los cortes sean levantados”²⁰⁶. Con estos últimos, consecuentemente, el gobierno expresaba que mantendría siempre las puertas abiertas para el diálogo²⁰⁷.

Una vez levantado el corte, el período en que las personas detenidas durante el conflicto fueron mantenidas en distintas cárceles de la provincia se extendió aproximadamente durante dos semanas. Algunas fueron conducidas a diversas dependencias penitenciarias locales. Otras, a dependencias de la gendarmería y un grupo a un reformatorio para menores de edad localizado en San Salvador de Jujuy. Rápidamente, fueron las mujeres quienes comenzaron a poner en práctica medidas tendientes a conocer la situación de las personas detenidas, ayudarlas dentro de la cárcel y lograr su libertad, sirviendo asimismo de enlace entre éstas y el resto de la comunidad.

Alicia se mostró renuente a contarme cuáles habían sido sus vivencias durante su estancia en la cárcel. Sin embargo Carolina, que se había salvado de ser apresada, recordaba detalladamente lo sucedido. “Los detienen esa mañana y yo estaba trabajando, pero tenía ganas de ir al corte temprano [...] Cuando voy, ya se las habían llevado presas a las chicas y entonces nos fuimos todos a la policía.” Allí se encontró con Olga Márquez de Aredez “y nos cruzamos información sobre los detenidos [...]. A los que para la inteligencia de la policía y de gendarmería y de los servicios seguramente eran los más importantes, se los llevaron a gendarmería. Algunos los soltaron acá pero la mayoría fue a gendarmería. [...]”. Cuando Carolina se acercó a una de las dependencias de detención, se encontró con Olga quien en ese momento le sugirió que si quería ver a las mujeres detenidas, se hiciera pasar por comadre de cualquiera de ellas. Carolina siguió el consejo y así logró ver no solamente a las personas que estaban encarceladas en Libertador sino a las que se encontraban en Caimancito. Como sostuvo ella: “lo que pasa es que en eso las madres [en referencia a las Madres de Plaza de Mayo] son bastante duchas, en cómo vencer barreras [...]”.

Este testimonio permite reflexionar nuevamente en torno a los usos de la memoria y a cómo se crean los puentes que posibilitan la transmisión de las experiencias vitales y los saberes aprehendidos entre una generación y otra. Se puede proponer, en principio, que efectivamente existe un registro de la memoria cuyo anclaje y construcción está fuertemente vinculado a la intención de quienes construyen esa memoria de garantizar la perdurabilidad futura del recuerdo. En esas circunstancias, la reaparición del pasado condensada en el acto de recordar es consecuencia de una operación volitiva conciente del grupo portador de esa memoria –en este caso, por ejemplo las Madres de Plaza de Mayo-.

²⁰⁵ Diario *El Tribuno*, 8 de agosto de 1997.

²⁰⁶ *Idem ant.*

²⁰⁷ Tiempo después, muchos integrantes de este último sector romperían su “amistad” con el gobierno denunciando que Ferraro sólo entregaba planes a sus amigos “usando los planes trabajar como más le conviene y para su propio bolsillo”. Tales expresiones fueron utilizadas por los dirigentes de la “Coordinadora de Piqueteros y Desocupados” que dirigieron el corte de rutas iniciado el 15 de julio de 1998. Ver *El Pregón*, 16 de julio de 1998.

Sin embargo, la forma en que esa memoria adquiere sentido en el presente o la manera en que el pasado es reapropiado y utilizado por una comunidad, no tiene siempre los mismos condimentos puesto que la transferencia de estas experiencias y, por tanto, la persistencia de una memoria histórica de los hechos pretéritos, puede exceder los límites del empeño conciente de los sujetos. Cuando no media tal acto de voluntad, ese pasado sólo surge ocasionalmente y en entera dependencia de situaciones conflictivas presentes, de su utilidad en la cotidianeidad. Así, sólo en determinados momentos –generalmente críticos para un sujeto– la memoria excede el “deber ser”; esto es la “obligación moral y política” que un sujeto específico siente por recordar el pasado o mantener vivos los “lugares de la memoria” (Pierre Norá, *op.cit.*). En este caso concreto, es evidente que la situación de “encierro”²⁰⁸ que enfrentaron las Madres bajo la última dictadura militar no era exactamente la misma que la planteada en la provincia de Jujuy durante el devenir de este conflicto. También lo es que Carolina, como militante de la UCR comprometida con la defensa de los derechos humanos y la denuncia contra el terrorismo de Estado, era una observadora distinta a otras personas carentes de ese marco respecto de Olga, de su figura como Madre, de su lucha pasada y sus acciones presentes. Pero fue recién cuando ella tuvo que enfrentar ese momento crítico de la represión y el no saber qué hacer para ver a las personas detenidas, cuando estuvo frente a frente con las “barreras a vencer”, el momento en que Carolina hizo de la memoria debida la memoria de vida. Fue justamente allí donde el conocimiento de Olga cobró nueva trascendencia porque era necesario ya no para el pasado sino para sortear los obstáculos del presente. Y el aprendizaje, entonces, tuvo un sentido sustentado en la aplicabilidad práctica de un saber conocido pero ignorado al mismo tiempo en la medida en que el escenario y las acciones que Carolina llevaba adelante eran nuevas para sí misma.

Asimismo, el hecho de que Olga le dijera a Carolina que se hiciera pasar por “comadre” de alguien remite nuevamente a las experiencias que a partir de condicionantes genéricos atraviesan a las mujeres en su agenciamiento público. En efecto, el término comadre reenvía a los lazos de parentesco, lazos en los que las mujeres se mueven “cómodamente” y que resultan dinamizadores, en algunas situaciones históricas, de sus acciones público/políticas. En este caso, además, tales lazos sirvieron para enmascarar de forma verosímil una identidad ya que Carolina logró hacer lo que ella quería –ver a las detenidas– utilizando como recurso un lazo inexistente pero creíble. Gracias a ello, entonces, pudo seguir con su objetivo. “Me iba a ir a San Salvador” –siguió contando Carolina– “porque iba a aprovechar el plenario que tenía del partido y empezar a buscar [a las detenidas]. La veo a Olga y me dice que no tienen ropa, no tienen esto. Empezamos a juntar cosas, compramos comida para las chicas, sabíamos que latas no podíamos hacer entrar [...] Olga sabe qué tipo de cosas se pueden entrar en una cárcel, esa fue mi primera experiencia. Algo había leído en un libro de Sergio Shocklender, pero no sabía mucho. Juntamos ropa, después voy a ver a la hija de Alicia y le digo, mirá, yo me voy a Jujuy, voy a tener la oportunidad de ir a la granja²⁰⁹ donde están las chicas detenidas [...] La hija de Alicia me

²⁰⁸ Cuando hablo de “encierro” hago alusión a la forma en que muchos/as militantes de derechos humanos se referían al estado dictatorial en términos de que la sociedad argentina estaba encerrada en un gran campo de concentración.

²⁰⁹ Nombre que identifica al reformatorio para menores de edad en la ciudad capital.

trae ropa, frazadas, hacía mucho frío en esa época, aparte esa zona de San Salvador es muy fría de noche.”

Ya en la “granja”, se encontró con un abogado amigo, Mario Purpuy, que había participado en la defensa de familiares de detenidos y desaparecidos y que pretendía también averiguar la situación de las detenidas. En esa ocasión Carolina cambió su personaje. Ya no se hizo pasar por comadre puesto que Mario le sugirió, aprovechando su presencia, identificarse como abogada acompañante, con lo que evitó la requisita y logró entrar a ver a las detenidas sin problemas. “Las encontramos a las mujeres, estaban realmente mal, porque creo que nunca en la vida de ellas habían pasado por una situación así, los tenían separados varones de mujeres. Había algunas que estaban mal, mal, mal, que lloraban por los hijos, que pensaban... Alicia, con toda la fuerza que tenía, me dijo “no te descuidés de mis hijos por favor”, me pidió que los viera, que si necesitaban algo yo... Yo le dije que no se preocupara, que la hija mayor que ya estaba casaba [...] se estaba haciendo cargo de los hijos. Que no descuidaba a sus hermanos. [...] Y bueno, las chicas se alegraron un montón, era como si hubiera entrado un poco dios, un poco la vida; pero era encontrar un rostro familiar que podía salir afuera y que podía darles noticias de ellos, de sus seres queridos.”

Las tácticas propuestas por Mario y Olga fueron ambas exitosas pero evidenciaron asimismo las huellas que el género traza en la articulación de las relaciones sociales y en la forma en que las personas actúan. Para Mario, a diferencia de Olga, el disfraz plausible de Carolina remitía a la vida profesional/pública y no a lo considerado propio del mundo doméstico.

Por último, Carolina y las demás personas que habían ido a visitar a las detenidas, se convirtieron en el vínculo entre el “afuera” y el “adentro”, entre las encarceladas y el resto de sus familias, asumiendo incluso el cuidado de los hijos e hijas de aquellas mujeres a las que conocían porque pertenecían a su comunidad. Finalmente, luego de varias marchas, concentraciones y actos de protesta, todas las personas fueron puestas en libertad.

Sin embargo, algunas de las organizaciones que habían comenzado a surgir durante el conflicto de 1997, sufrieron un duro golpe en esta ocasión. Tal fue el caso de la Comisión de Desocupados 22 de Mayo en Libertador General San Martín que comenzó a desmembrarse a partir de ese momento. De todas maneras, muchas de las personas que allí habían estado, continuaron con los intentos de generar otros espacios de organización o incorporarse a distintas agrupaciones. Una de las más atractivas fue la CCC que hacia 1999 comenzó a tener una importante incidencia entre los y las desocupadas de Libertador General San Martín y otras localidades jujeñas.

En las páginas que siguen, por lo tanto, abordaré el análisis de esta última, deteniéndome tanto en su funcionamiento como en la forma en que las mujeres en particular han participado en ella.

De mujeres y organizaciones: la Corriente Clasista y Combativa.

Graciela López es una mujer de 38 años cuya historia de vida revela las dificultades que debió enfrentar desde muy pequeña. Nacida en Capital Federal, vivió poco tiempo allí. El abandono de la familia por parte de su padre y la falta de trabajo de su madre, cuya existencia se tornaba aún más difícil debiendo criar a solas a Graciela y a sus dos hermanos mayores discapacitados, los obligaron a mudarse a la provincia de Jujuy, lugar en el que había nacido su madre y donde aún vivían sus abuelos. Así Graciela creció “en el campo, con mis abuelos en Perico. Mi mamá tuvo que dejarme con ellos y crecí sin mucho amor porque mis abuelos eran gente de campo, del norte. Pero me llevaron a tener mis primeros estudios”. Luego de algunos años en los que pudo cursar la primaria, volvió a vivir con su mamá en San Salvador de Jujuy. Sin embargo, la situación económica familiar no había mejorado “porque mi mamá contaba sólo con el salario de limpiar una casa”. Ante las carencias que la rodeaban, Graciela, que ya era una adolescente de 15 años, decidió dedicarse a la prostitución. Segura en su manera de hablar y sin tapujos, ella compartió su historia contándome que alguna vez se enamoró de un “tipo casado, que tenía tres hijas y se me complicó la cosa. Ya no tenía que prostituirme para mí misma, para comer cosas que nunca había comido, sino que tenía que hacerlo para nosotros dos y las tres hijas”. A veces, cansada de tener que trabajar varias horas para él, intentaba dejarlo. “Pero él me fajaba. Un día pensé en suicidarme pero me venía a la cabeza el sufrimiento de mi mamá.” Finalmente, Graciela logró terminar con esa relación de pareja, y retornó a la casa de su madre. Sin embargo, hallar un trabajo diferente no le resultó sencillo. “Mirá, era el '96 o el '97. Trabajaba de muchacha y no me pagaban. Te ponían 15 días a prueba y no te tomaban. Entonces me cansé.”

Por distintos motivos, la policía la obligó a deambular por diversas cárceles. Pero un día se cruzó con Lucas Arias, un reconocido dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que vivía cerca de su casa, y rememorando que ella había participado una vez en política, -“le ayudé a hacer la campaña a mi pareja para ser concejal local en las elecciones de marzo de 1994, pero perdió por 8 votos”, contaba ella-, decidió comenzar a militar en la CCC. Tal elección devino de que “me parecían valientes con eso de enfrentarse en los cortes y quería hacer algo”. Así, recordaba claramente que el 14 de febrero de 2001 ingresó a la “corriente”, como se la llama habitualmente en Jujuy. Como estaba por mudarse a Palpalá, le propuso a Arias organizar la CCC en esa localidad, tarea a la que se abocó armando pequeñas reuniones con su sobrina, que vivía allá, y con amigas de esta última. Poco a poco Graciela fue obteniendo reconocimiento público dentro de su comunidad puesto que permanentemente realizaba encuentros con otras organizaciones de desocupados/as, de trabajadores/as y cooperativas de producción, formadas a partir de proyectos articulados en base a los planes “Trabajar”. Absolutamente orgullosa de su militancia, ella considera que su condición de mujer le ha resultado ventajosa. Según sus reflexiones: “[...] en la política hay que saber medir las palabras, hay que pensar con la mente en frío y muchas de esas virtudes las tenemos las mujeres. Porque vi a muchos hombres que en un momento de ira tiran todo al carajo y se van. Pero nosotras, las mujeres, pensamos las cosas dos veces [...]”. Actualmente, Graciela es la referente máxima de la

“corriente” en Palpalá e integra, además, los organismos de dirección de dicha organización²¹⁰.

La CCC posee una fuerte presencia en Jujuy. Liderada por Carlos “Perro” Santillán, entre sus filas se encuentran tanto organizaciones gremiales, fundamentalmente las que agrupan a trabajadoras/es estatales, como de desocupados/as. En apariencia, las mujeres ocupan un importante rol en la organización, sobre todo en las instancias que agrupan a los y las desocupadas. De hecho, la ascendencia de Graciela en Palpalá puede observarse en otros casos como el de Elsa, una jujeña de 43 años nacida en Río Blanco –pequeño pueblo cercano a San Salvador de Jujuy-. Esta última vive en San Pedro desde 1998 y allí es una de las principales referentes de la CCC, donde además de encargarse de la coordinación y puesta en práctica de los proyectos en los que están distribuidos los subsidios de desempleo, ha dinamizado la participación de las mujeres de su organización en los Encuentros Nacionales de Mujeres.

En las entrevistas que mantuvimos, tanto Elsa como Graciela insistieron en la importante presencia femenina dentro de la CCC. Similar imagen transmitió Quique Mosquera, dirigente de la CCC en Libertador General San Martín. Allí la “corriente” comenzó a constituirse en 1999, justamente cuando Mosquera se instaló en la localidad de Ledesma por sugerencia de Santillán, luego de vivir un año en San Salvador de Jujuy, lugar al que había llegado desde Ensenada, provincia de Buenos Aires, un año antes.

Según él relatara, el nacimiento de la CCC en Libertador General San Martín había sido el resultado, en parte, del vacío político y organizativo producido por el descrédito en que cayera la Comisión de Desocupados liderada por Giménez, acusado de traicionar los objetivos del *Jujeñazo* de mayo de 1997, por un lado, y de la desarticulación de la organización gestada por Pablo Dietrich, Nancy Barroso y Alicia Benítez, por el otro. Historizando sus orígenes, Quique Mosquera sostenía que la formación de la CCC local había comenzado con una reunión de desocupados/as convocada por él y tres jóvenes más: “Cuando nos reunimos éramos 12 y habría ocho mujeres en ese momento”. Uno de los objetivos de esa reunión había sido definir de qué manera se podían obtener planes “Trabajar” independientemente del control de la municipalidad local ya que los subsidios que se designaban para Libertador General San Martín eran manejados exclusivamente por esta última. Luego de varias marchas, movilizaciones y pequeños cortes en los que se exigían garrafas de gas para los y las desocupados/as o que la compañía eléctrica privada *EJESA S.A.* no cortara la luz a quienes no podían pagarla, la incipiente organización fue cristalizándose y accediendo al manejo de una importante cantidad de planes.

Acorde las palabras de Mosquera, la estructura interna de la CCC local consiste en una mesa ejecutiva, que se encarga de llevar adelante las decisiones tomadas en las asambleas generales; un equipo técnico, encargado del armado de los proyectos en los que están distribuidos los subsidios por desempleo; tesorería y finanzas, que recauda los aportes hechos por los y las integrantes de la CCC, organiza rifas y eventos para recolectar dinero;

²¹⁰ Graciela es miembro de la mesa provincial, en la que es tesorera, de la mesa regional y la nacional.

y, por último, el grupo encargado de la seguridad durante las movilizaciones y cortes de ruta.

Asimismo, las personas que ocupan esos puestos se eligen por asamblea general. Esta se reúne en lo posible una vez por semana y sus decisiones son soberanas. Por otro lado, cada barrio también posee su propia asamblea, donde entre otras cosas se determina la distribución de los planes obtenidos. En todas estas instancias “la mayoría son mujeres. En todas las comisiones de barrio la mayoría son mujeres. Los delegados hombres son contaditos. Tenemos 31 barrios y hay 4 o 5 hombres. En los equipos generales todas son mujeres. En seguridad las mujeres han combatido y se han ganado el respeto”, explicaba Quique haciendo hincapié en que la existencia de tantas instancias asamblearias era “para que no se traicione, que no pase lo mismo que después de la pueblada [en referencia a mayo de 1997]”. Por otro lado, justificaba la elevada participación de las mujeres a partir de que “[en esta agrupación] ellas mismas encontraron una herramienta. [...] Ahora tienen un sueldo, que no es la liberación, pero tienen para darles a sus hijos. Las mujeres son las más trabajadoras [...]”.

Ahora bien: aunque los relatos registrados parecieran indicar que la participación colectiva es fundamental en la constitución de esta organización y que la misma es muy permeable a la intervención femenina y la presencia de las mujeres en lugares de liderazgo, existen algunas tensiones que en cierta medida contradicen estas apariencias o, al menos, instan a profundizar el análisis. Una de las cuestiones que más me llamaron la atención surgió en un video producido por Ariel Ogando²¹¹ en el que se daba cuenta de la historia de la CCC y de los cortes de ruta en la provincia de Jujuy. El video, titulado *Desocupados y cortes de ruta en el Noroeste Argentino*, entremezclaba testimonios de referentes centrales de la CCC, tales como el “Perro” Santillán o Juan Carlos Alderete, con imágenes de distintos cortes de ruta, fundamentalmente el de mayo de 1997. Cuando las entrevistas se dirigían hacia la forma en que la CCC estaba organizada, se remarcó como signo distintivo la importante incidencia de las mujeres. De tal suerte entonces, las imágenes las mostraban reunidas en el local de la CCC de San Salvador de Jujuy, en una actitud de deliberación y debate. Sin embargo, lo llamativo era que todo el relato de lo que ellas hacían, cómo se organizaban, etc., era realizado por Alderete. De tal suerte, la presencia de las mujeres quedaba asentada en la imagen pero era excluida de la reflexión que sustentaba la narración de la historia. Hasta qué punto estas “diferencias” entre hablar, mostrar y actuar podían ser evidencia de ciertas contradicciones o tensiones en la relación entre mujeres y varones dentro de la organización, exige indagar detalladamente en los motivos que tenían las mujeres para integrarse a la CCC y las pautas que han determinado su participación.

Tal como expresara Graciela, una de las razones que hacían de la CCC un espacio atractivo era su capacidad de lucha y, en consecuencia, su habilidad para obtener subsidios o bolsones de comida que permitían –aunque en un escaso porcentaje– paliar la situación de miseria. Para muchas de las mujeres entrevistadas, desocupadas y en la mayoría de los casos las únicas responsables de la manutención de sus hijos e hijas, estas eran razones centrales en el momento de decidir el ingreso a la organización. Dora vive en una pequeña

²¹¹ Ariel Ogando, un estudioso de la realidad jujeña y activista político, lidera el grupo Wayruru que se ocupa de la producción de revistas políticas y videos.

casa construida de chapa, adobe y madera en un humilde barrio de Libertador General San Martín. Nació en Calilegua el 9 de septiembre de 1955, pero se crió en Libertador trabajando en la zafra azucarera con su padre desde que tenía 8 años, momento en el cual “él me ha sacado de la escuela porque si quería tener algo tenía que trabajar”. No era fácil para su padre, un trabajador migrante cuya esposa había fallecido justamente en ese momento, mantener a Dora y a sus nueve hermanos mayores. Pero tampoco era fácil para ella convivir con él. Así que cuando cumplió 18 años se fue de su casa y comenzó a trabajar como empleada doméstica. Cuando ingresó en la “corriente”, hacia fines de la década de 1990, Dora no tenía trabajo “desde hacía mucho tiempo. Había semanas que no comía. Mate y mate nomás. Yo tengo una hija y era chiquita y el padre a mí no me ayudaba en nada [...] Y he empezado a ir y he visto que ahí se hacen los puntajes para poder entrar [...]”.

Para poder acceder a los planes y a los bolsones de comida, la CCC posee un sistema de puntajes que se asignan de acuerdo a los niveles de participación y compromiso político con la organización. Según explicaba Dora, por la concurrencia a “[...] la reunión barrial es 5 el puntaje [...] Y en la asamblea general dan 10. Y en las marchas dan 50, y en los cortes de ruta dan 80. Quedándose de noche dan 100 y siendo seguridad dan 100. Yo he empezado a hacer todo eso para tener más puntaje. Para entrar al plan se necesita más de 1000. O si no, mientras que uno participe, el puesto le dan al que tenga más puntaje. La mercadería también le dan al que tenga más puntaje. Al que realmente participe. Entonces yo he empezado a participar, y a participar con mi hijita [...]”. El hecho de que entre las acciones que proveen mayor cantidad de puntaje se encuentran las de estar en los cortes de ruta y formar parte de los grupos de seguridad de la organización en esos acontecimientos, permitiría comprender parcialmente por qué las mujeres desocupadas, solas a cargo de sus hijos/as –en una elevada proporción-, han hecho lo posible por incorporarse a esta última instancia. Esto no obsta, por otra parte, que componer los grupos de seguridad no tenga otra ventaja: el respeto de las demás personas a partir de la valoración positiva contenida en la capacidad de enfrentarse con las fuerzas represivas, sobreponiéndose al temor que ello implica. Realizar este tipo de acciones para las mujeres tiene un plus ya que no se condice con los roles genéricos que tradicionalmente se espera que cumplan, facilitándoles entonces obtener un mayor prestigio dentro de la organización.

De todas maneras, en ocasiones la obligación de sumar puntajes para acceder a los planes, si bien motiva la participación colectiva, entraña una presión que es difícil sobrellevar para algunas de ellas. Según narró Dora: “[...] Yo a veces lo que le tenía miedo era a la ruta. Yo a veces lloraba porque me daba miedo por mi hija que tendría como 8 años. Y yo la llevaba igual al corte porque no tenía con quién dejarla [...]”.

Al indagar sobre las causas de tal sistema de calificación, la justificación se basó en la escasez de recursos. Teniendo en cuenta que los planes y bolsones de comida a los que accede la organización nunca alcanzan para cubrir a todas las personas que precisan de ellos, se privilegia “[...] a los que luchan por conseguirlos [...]”, acorde explicaba el “Perro” Santillán. Aunque esta práctica implicaría entonces un intento de distribuirlos acorde un sentido de justicia amparado en beneficiar a quienes luchan, los límites entre la participación voluntaria y compulsiva, empero, se tornan difusos. Más aún cuando a ello se suma el aporte económico que quienes reciben planes deben hacer a la organización y que

oscila entre los \$2 y \$3 por mes. Por todo esto han surgido ciertas contradicciones de las cuales son concientes algunos/as activistas. Particularmente Graciela hacía hincapié en que “[...] yo soy la que más lucho y la que más peleo en el movimiento por trabajar de una manera más marcada en el movimiento donde no se tenga que presionar al compañero por una bolsa de mercadería, y donde el compañero haga su aporte convencido y no presionado, como que si no paga el aporte no se lleva la mercadería [...] Nosotros vemos que el movimiento es muy grande, y tenemos que reconocer que crecimos de golpe en cantidad y no en calidad. Nos hemos preocupado en un tiempo a ver cómo juntábamos más compañeros, cómo convocábamos, nos hemos ocupado más en el amontonamiento que en trabajar por despertar las mentes acerca de que este movimiento tiene fijadas metas pero que todos tenemos que trabajar para eso. [...]” Así, según continuó explicando ella, “[...] a muchos delegados del movimiento lo único que les interesa es el bolsón de mercadería. Los cuadros de este movimiento somos pocos y no damos a vasto para resolver los problemas [...] Ahora nos estamos organizando [...]”.

En ese sentido, tanto el sistema de puntajes como el de los aportes han potenciado fricciones internas ya que algunas de las mujeres entrevistadas no estaban de acuerdo con ello si bien lo aceptaban por temor a perder el acceso a los planes. Paralelamente, como sostuvo Graciela, el crecimiento cuantitativo de la organización y de la disposición de muchas personas a involucrarse en conflictos y cortes de ruta, no implicó necesariamente un crecimiento colectivo en una conciencia política tendiente a cuestionar las bases del sistema capitalista o a debatir, simplemente, su funcionamiento.

Sin embargo, algunas mujeres sí se atrevieron a poner de manifiesto sus disidencias en las asambleas. Tal fue el caso De Alicia Benítez en lo referido a la distribución y asignación de los proyectos. Cuando Mosquera estaba armando la CCC en Libertador General San Martín, Alicia fue una de las personas con quien se contactó primeramente. Ella, luego de la desarticulación de la “Comisión de Desocupados 22 de Mayo” y su encarcelamiento en agosto de 1997, no había logrado reorganizar o reinsertarse en otra instancia de participación colectiva. Estando desempleada, se había acercado a la CCC entre otras cosas porque “estaban anotando para los planes trabajar. Bueno, me decían que me anotara [...] Después me voy y hablo con Quique. Cuando empezó Quique acá yo fui a verlo. El estaba con [una persona de apellido] Condorí. Pero Condorí me dice “mirá el Quique quiere levantar [en referencia a comenzar a movilizar a la comunidad]”. Entonces yo le dije a Quique “el día que vos necesités apoyo en el corte de ruta, que vos necesités un apoyo para ir a la casa de gobierno, buscáme”[...]. Finalmente, Alicia se integró en la “corriente” y comenzó a recibir un plan “Trabajar”, debiendo cumplir una contraprestación dentro de uno de los proyectos durante cuatro horas diarias.

Esos proyectos comprendían actividades tales como la puesta en funcionamiento de huertas comunitarias, tareas de mantenimiento y limpieza barrial, costureros o roperos comunitarios, capacitación para la implementación de planes materno-infantiles, entre otras cuestiones. Alicia fue incorporada a uno de ellos: el de los costureros barriales. Pero ella no se sentía muy cómoda desempeñando ese tipo de tareas. Según narró: “[...] Yo no tenía problemas en cumplir el horario de trabajo. [Pero] no me gustaba ir a sentarme. Y entonces empezamos a hacer la charla política, y ya todos querían ir a mi grupo. De los otros grupos se querían venir a mi grupo. Yo les decía que podíamos hacer tallarines para salir a vender.

Para hacer provecho para nosotros también. Había 3 que decían que sí, hagamos bollos, comida y vendamos. [...]. Pero no me gusta ganar la plata así, sentada [...]. En efecto, la labor que se le había asignado tenía más bien que ver con presupuestos en cuanto a los intereses y conocimientos que podía tener una mujer, que con lo que a Alicia realmente le gustaba hacer. “[...] Mi trabajo era tejido y manualidad. Yo sabía un poco de tejido. Había hecho 2 vestidos o 3. Pero me aburre a mí estar 4 horas sentada haciendo eso. Yo prefiero otras cosas, pelear, cortar la ruta, hacer otra cosa.”.

Dispuesta a no aceptar esa situación, Alicia comenzó a plantear su desacuerdo en las reuniones barriales y en aquellas en las que estaban los delegados de cada uno de los proyectos. En una ocasión, a sabiendas de que de los informes de estos últimos dependía la continuidad de una persona dentro de un plan, mantuvo una acalorada discusión pública con su delegado del proyecto en una asamblea del barrio. “Vos le quitás a este, al otro, das de baja, hacés entrar a cualquiera y no es así. Hay que respetar para ser respetado. Si a vos te faltan el respeto es porque vos le has faltado primero” –le dijo bastante molesta-. Ante el silencio general, Alicia continuó hablando: “¿Quién te presiona a vos?, a ver, decíme. ¿Quién te presiona para sacar o dejar a alguien?”. Como el delegado le contestó que era Quique Mosquera, Alicia exigió que Quique, “que vivía a media cuadra de donde estábamos”, apareciera en la reunión que sostenían en ese momento. Cuando se presentó, ella le preguntó sin ambages: “¿Por qué la presión? ¿Por qué vos querés que lo dejen sin trabajo? ¡¡¡Esa señora tiene cuántos chicos que darles de comer!!!! Encima tiene que venir a perder 4 horas por 150 pesos. Es una mierda. Vos ¿qué te crees vos?... ¿que se puede dar de comer con esa plata a todos esos chicos? Al compañero ¿por qué lo tenés que aplastar? Tenés que querer que seamos más. Así vamos a ser menos y mañana van a estar ustedes solos.”. Ya muy ofuscada, lo amenazó diciendo: “Porque aquí vamos a formar otra comisión, vamos a buscar otro delegado y a vos te vamos a dar la baja” “Nadie puede hacer eso” dice “¿Qué no? Yo sí puedo, yo soy Alicia Benítez,” le contestó ella. No era difícil para Alicia, que en el pasado había hecho frente a personas y situaciones mucho más complicadas que las que allí estaba viviendo, oponerse abiertamente a la forma en que estaban llevándose a cabo las cosas dentro de la organización. Ante la explicación dada por Mosquera de que las bajas en los planes se debían a que las personas habían faltado al “trabajo”, Alicia lo interpeló nuevamente: “[...] ¿Que han faltado? Yo quiero saber dónde es la exigencia. En Jujuy, ¿Ellos te controlan a vos? ¿Te piden todas las carpetas a vos? Vos para hacer esto tendrías que haber hecho primero el proyecto y después poner a la gente. Pero no. Por ejemplo yo. Donde voy a tejido ya me salen pelos por todos lados, ya me embola ahí estar tejiendo. Yo quiero estar en un lugar activo. Yo por ejemplo para tejer puedo mandar a las señoras si a ellas les gusta. Entonces yo les pongo a ellas. Pero vos me ponés a mí en el proyecto de tejido y es lo mismo que me mandés a matar hormigas. No. Yo no quiero eso. [...]”. Ella reflexionaba que a partir de ese momento “[...] empezó la bronca conmigo [...]”.

Alicia logró que la cambiaran de proyecto, aunque sus críticas y los enfrentamientos derivados de allí no mermaron. Sus objeciones no se limitaban a su problema puntual originado en la realización de una tarea en la que no encontraba ninguna satisfacción. Por el contrario, apuntaban a los criterios de construcción y funcionamiento de la organización, la defensa de lo que ella consideraba derechos de sus vecinos/as y, finalmente, la democratización real en la asignación y distribución de los recursos disponibles. Para ella,

no eran los puntajes lo que debía primar, sino las necesidades específicas de cada persona. Y en ese sentido se hacía vocera particularmente de las otras mujeres que, al igual que ella, carecían de trabajo, precisaban del plan y debían cuidar de sus hijos/as.

En varias ocasiones más planteó sus disidencias. Tiempo después, aprovechando un viaje que debió hacer a San Salvador de Jujuy, se presentó en el local de la CCC y al ver que allí había varias cajas que contenían alimentos, increpó a quienes estaban en una reunión –entre ellos Quique Mosquera–, exigiendo ver las listas para el reparto de las mismas y que aquello correspondía a Libertador General San Martín fuera llevado cuanto antes allí. Si bien Alicia aún pertenece a la CCC, desde febrero de 2004 no tiene ningún plan o subsidio por desempleo. De todas maneras, obstinada y tesonera, según me explicaba, “[...] Yo sigo yendo [a la CCC], aunque más no sea para hacer quilombo [...]”.

Pese a estas diferencias, hay ciertas cuestiones en las que las discrepancias se diluyen. Una de ellas es la percepción sobre el significado de los planes, donde la tendencia a considerarlos como un trabajo se encuentra mucho más acentuada y generalizada que en el caso salteño. Concretamente, tanto Mosquera como Graciela López, Alicia Benítez y las mujeres que entrevisté en Libertador General San Martín, pese a los disímiles niveles de formación política y experiencia militante, se refirieron por ejemplo al pago de los subsidios recibido mensualmente como un “sueldo”. A su vez el uso de la palabra “trabajo” o de la frase “obtener un trabajo” era mucho más reiterada. De hecho, la obtención de un plan es concebida como “conseguir trabajo”. De tal manera, el horizonte de un trabajo “genuino” está mucho más desdibujado, al igual que, paradójicamente, la concepción de los planes como trabajo en negro. Los planes son, sin más ni menos, trabajo a secas. A tal imaginario colectivo contribuye en buena medida, el tipo de exigencia que el Estado posee para que una persona permanezca dentro de un plan. Así, el cumplimiento de horarios, la imposibilidad de faltas o ausencias, son factores que favorecen esta percepción, aún cuando los planes carezcan de todos los beneficios acordados bajo el régimen del trabajo “genuino”.

Otro elemento en el que existe un consenso mayor radica en la valoración de la identidad piquetera. Dora, que manifestaba confusiones y titubeos cuando intentaba explicar cuáles eran los objetivos políticos de la CCC, cómo funcionaban las asambleas, de qué manera evaluaba o caracterizaba su propia participación dentro de la organización, cambiaba rotundamente de actitud cuando el adjetivo “piquetera” entraba en escena, enlazando en su relato su participación en el corte de rutas de mayo de 1997. Acorde sus palabras: “[...] A mí no me molesta que me digan piquetera. El nombre piquetera. Más bien lo defiendo. Y cuando hablan mal, yo siempre los defiendo. Porque piquetera es el que sale a luchar. Y yo estaba en ese tiempo del 22 de mayo. Como mi hija estaba en Orán, yo me había ido al corte de rutas. Tres días y tres noches. Y había que estar hasta que dure [...] Y me daba miedo porque la policía entraba y no sabe... Pero no me tenía que ir [...]”.

Lo mismo sucedía con Elsa y las mujeres con las que hablé en San Pedro, sin bien con un aditamento. En esta localidad, las mujeres como actoras sociales dentro de la CCC, poseen una mayor cohesión como grupo con intereses diferenciados, que la registrada en Libertador General San Martín, por ejemplo. Así, además de integrarse en los proyectos y coordinar en buena medida las actividades que desarrolla la “corriente”, las mujeres en San

Pedro llevan adelante talleres específicos que abarcan problemas tales como la violencia familiar o la salud reproductiva, o realizan movilizaciones u otro tipo de acciones de denuncia, tales como “escraches” a violadores que no han sido imputados judicialmente o que quedaron en libertad luego de un juicio²¹².

Son varias las causas que han provocado que estas mujeres construyeran un vínculo político entre sí singular. Sin embargo, me interesa puntualizar dos de ellas. Una tiene como contexto la huelga y el corte de rutas producido entre octubre y noviembre de 1999 y que tuvo como protagonistas a los/as trabajadores/as del ingenio *La Esperanza*. La segunda se relaciona con el impulso dado por varias mujeres, entre ellas Elsa, a la participación en los Encuentros Nacionales de Mujeres.

En cuanto a lo ocurrido en el ingenio, todo había comenzado por la deuda salarial que la compañía arrendataria del ingenio *La Esperanza*, la empresa *Compañía Argentina de Alcoholes S. A.*, tenía con los obreros y trabajadores/as desde hacía varios meses. En síntesis, para fines de septiembre y comienzos de octubre de 1999, el monto adeudado ascendía al millón de pesos²¹³. Esta situación motivó una huelga por parte del personal fabril que comenzó el 30 de octubre y a la que se sumaron los y las trabajadoras de la zafra el 1ero. de noviembre. Durante varios días la huelga se sostuvo con la toma del acceso de la planta y la paralización total de la zafra, a lo cual se sumaron “escraches”, cortes de calle y quema de neumáticos en las residencias de los directivos de la empresa. Sin embargo, estas medidas de fuerza no contaban con el apoyo del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar cuyos dirigentes, enrolados en la CTA local, fueron varias veces repudiados y acusados de traición por parte de los trabajadores en las diversas asambleas que se llevaron a cabo durante la jornada de conflicto. En cambio, la CCC, fundamentalmente a través de la presencia de Carlos Santillán y de los principales dirigentes sampedrinos, proporcionaba su apoyo al conflicto llevando adelante gestiones con las autoridades locales y provinciales, o participando en las asambleas, entre otras iniciativas.

Ante la falta de respuesta por parte de los directivos de la empresa, los y las trabajadoras azucareras endurecieron las medidas de fuerza comenzando un corte sobre la ruta nacional Nro. 34 el 9 de octubre²¹⁴. Ante ello, la comisión de desocupados local liderada por Eduardo Quiroz se plegó al bloqueo, al igual que las asociaciones sindicales de los/as trabajadores/as municipales y docentes. En pocas horas, se habían instalado varios piquetes en la localidad y en otras ciudades, tales como en Libertador General San Martín, donde

²¹² Uno de los hechos que ha provocado una gran movilización de estas mujeres ha sido la defensa de Romina Tejerina. Esta joven quedó embarazada producto de una violación realizada por un vecino en agosto de 2003. Si bien hizo varios intentos de aborto, Romina no pudo interrumpir el embarazo. Así en febrero de 2004 dio a luz prematuramente. En estado de shock, hirió a la bebé que murió en el hospital. En un juicio plagado por un sinnúmero de irregularidades en los que los jueces intervinientes no tuvieron en cuenta la violación, ni las pericias psicológicas de parte que demostraban que ella había actuado bajo stress post traumático y en estado puerperal, por ejemplo, Romina fue condenada a 14 años de prisión mediante la utilización de una figura jurídica aberrante: homicidio agravado por el vínculo. Este caso volvió a poner sobre el tapete el debate sobre la despenalización del aborto en la Argentina, motivando la movilización de los organismos de derechos humanos, organizaciones feministas y de mujeres denunciando el “pacto patriarcal” que torna a los violadores en inimputables y se ensaña con las víctimas.

²¹³ Diario *El Pregón*, 2 de octubre de 1999.

²¹⁴ Diario *El Pregón*, 10 de octubre de 1999.

desocupados/as y trabajadores de la administración pública realizaron piquetes y movilizaciones a la vera de la ruta nacional nro. 34.

El corte se extendió durante 11 días, hasta el 20 de noviembre, fecha en la cual el ingenio fue intervenido judicialmente por orden del juez Norberto Costamagna, que hizo lugar al pedido de los/as trabajadores/as. Las mujeres de los trabajadores del ingenio tuvieron una activa participación durante el bloqueo de la ruta. Según narrara Elsa, ellas sostuvieron el corte cocinando para todos/as, impidiendo mediante el diálogo que la policía y la gendarmería intervinieran represivamente, actuando como enlace con el resto de la comunidad de San Pedro. Pero a partir de allí también comenzó a surgir en ellas la idea de formar un grupo de mujeres. Fue así como “[...] en el 2000, después de la lucha con los trabajadores del ingenio, formamos una comisión de lucha de mujeres que se llamaba *Comisión de Mujeres en lucha por la fuente laboral [...]*”, explicaba Elsa. Ellas comenzaron a participar de los Encuentros Nacionales de Mujeres y a constituir un espacio específico dentro del movimiento de desocupados/as desde el cual han desarrollado las actividades antes reseñadas.

No sin contradicciones y tensiones, como puede observarse, las mujeres han sido actoras centrales en las confrontaciones que tuvieron lugar en la provincia de Jujuy y en las organizaciones que surgieron de esas experiencias de lucha. Motivadas por la defensa de su comunidad, a lo largo de su práctica en el involucramiento público/político desarrollaron formas de participación novedosas que a su vez les permitieron construir o formular diversos intereses. Fue así como en algunos momentos ellas pudieron poner en jaque sus roles de género tanto en el ámbito considerado público como en el doméstico. Esos intereses, desarrollados en torno a particulares reivindicaciones en tanto mujeres y que las volvían al centro de la escena política en la comandancia de sus propios destinos, no fueron parte de una esencia oculta portada por su sexo. Más bien fueron el producto de acciones y experiencias que despertaron nuevas preguntas sobre sí mismas y sobre el colectivo de mujeres del ellas que forman parte. Emergieron entonces, de prácticas y reflexiones que las enfrentaron con el Estado o con los sectores social y políticamente dominantes, pero también con los varones de su propia clase o sector de clase si las acciones de estos últimos vulneraban aquellas cuestiones que ellas consideraban justas o parte de derechos ganados en el terreno del conflicto.

Reflexiones finales:

Cuando las mujeres abandonaron sus casas en dirección a la ruta lo hicieron desafiando la continuidad del modelo neoliberal. Pero no tan sólo esto. También crearon fisuras imborrables en las ya de por sí delgadas paredes que separan lo público de lo privado, lo político de lo personal. Defendiendo los intereses de su género y de su clase, resignificaron con su propia acción el espacio en el que irrumpieron transgrediendo, por un lado, los límites impuestos a su participación política; por el otro, la legitimidad de una democracia que hizo de la exclusión social su piedra angular y de la penalización de la protesta su soporte.

Pero si lo que hace que cualquier poder se sostenga no es únicamente la prohibición sino la capacidad de crear discursos, saberes y formas de pensar que atraviesan a la sociedad y generan consenso, las prácticas de las mujeres piqueteras configuraron otros discursos, formas alternativas de concebirse a sí mismas de manera individual y como colectivo social, que les permitieron poner en juego reglas distintas a las estipuladas tanto para actuar como para dar otro contenido a la política y al poder que podían construir en su agenciamiento público.

Para ellas, en consecuencia, ocupar la ruta fue mucho más que el acceso a una herramienta de lucha plausible para quienes habían sido expulsados/as del mercado laboral violentamente. Levantar barricadas excedió el “desacato” social contenido en la obstrucción de la circulación de mercancías y personas para transformarse en la “cocina” donde ellas forjaron conceptos más inusuales, en tiempos de globalización, sobre la democracia. Fue allí donde amasaron nuevas identidades y prácticas beligerantes en las que combinaron sus experiencias pretéritas con las ideas aprehendidas/comprendidas con y de otras mujeres. En ese sentido, no todas las mujeres que hicieron de la ruta su lugar de confrontación carecían de participación colectiva previa. Por el contrario, y como creo haber demostrado en este trabajo, muchas trazaron sus huellas en sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones barriales. Otras en la lucha por la defensa de los derechos avasallados ferozmente durante la última dictadura militar, o por la defensa de aquellos que eran avasallados día a día, como trabajadoras o desocupadas, como solteras o casadas, como madres o hijas. Algunas se inclinaron por dar cauce a sus deseos de cambio integrándose/fortaleciéndose en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Otras, por mantenerse firmes en las organizaciones que ellas mismas habían contribuido a crear. Todas, trocando la aceptación en rechazo, la abnegación en rebeldía.

En sus vivencias pasadas, formar parte del “mundo ypefeano”, dejó un sello distintivo. Como sostuve en varias ocasiones en las páginas precedentes, la vida cobijada por el desarrollo de YPF poco tenía en común con aquella deparada por la zafra azucarera, si bien al interior de cada uno de estos “universos” se registraban también divergencias entre las propias mujeres. Sin embargo, los resortes que impulsaron su movilización trasvasaron estas distancias para asentarse en la defensa de la supervivencia de las/os hijas/os y con ellas/os, de la comunidad. Este anclaje en la “maternidad” no fue una característica singular de las mujeres que conforman el centro de este trabajo. Tampoco ha sido la razón unívoca – aunque determinante- que las ha motivado a emprender acciones colectivas amenazantes de

los dispositivos funcionales del orden social imperante. Pero sí ha dado un resultado singular: la emergencia de los movimientos piqueteros.

El abordaje de los cimientos de la historia de los movimientos piqueteros desde una perspectiva de género constituye un atractivo desafío para un análisis crítico de la historia argentina reciente por varios motivos.

En primer lugar, porque permite tornar visible el poderoso impulso que las mujeres involucradas en tales movimientos proporcionaron a la construcción de su identidad y sus prácticas de lucha.

En segundo lugar, porque permite develar, por un lado, la centralidad del sesgo genérico en la construcción de las relaciones políticas que atraviesan el ejercicio del poder y las formas de resistencia en la sociedad argentina contemporánea. Asimismo, posibilita comprender de qué manera la impronta genérica conforma, por una parte, los universos simbólicos de distintos e incluso antagónicos sectores sociales; gesta, por otra, una “solidaridad” patriarcal que trasvasa las diferencias sociales y realimenta, consecuentemente, la subordinación cuando no el ocultamiento, de las prácticas sociales femeninas. De ello han dado cuenta, por ejemplo, las contradicciones y tensiones existentes dentro de la UTD o de la CCC, en Salta y Jujuy respectivamente.

Por último, porque la perspectiva de género posibilita poner en escena los diferentes significados que conceptos tales como organización, democracia, política, adquieren para los actores sociales involucrados en los procesos de resistencia al orden imperante. Así, para las mujeres la horizontalidad, la participación no delegativa, la extensión de los lazos afectivos a la construcción de una acción política desligada de jerarquías impuestas, de las tantas veces rechazadas manipulaciones, corrupciones y traiciones, constituyeron pilares fundantes de su práctica beligerante.

Sin embargo, uno de los temas nodales en el que me he detenido en este trabajo refiere a la construcción del liderazgo dentro de las organizaciones piqueteras. En general, las mujeres no han logrado darle continuidad a su agencia pública en estos términos, al menos hasta la actualidad. Es decir: la presencia y auge de los mismos en todo el país, no ha redundado aún en un mayor afianzamiento de las mujeres en posiciones de dirección. De hecho, si bien ellas constituyen entre el 60% y el 70% de tales movimientos a nivel nacional, los cargos de jefatura recaen casi exclusivamente en los varones. Ante esta evidencia, podría decirse que la institucionalización de los movimientos piqueteros como actor social e interlocutor reconocido para el estado, los partidos políticos e incluso algunas organizaciones o centrales sindicales, trajo aparejada la marginación de las mujeres de los espacios de toma de decisión en su interior.

La explicación de este hecho requiere profundizar la investigación histórica sobre este tipo de movimientos. Pero y a modo de hipótesis, considero que las razones que dan cuenta de esta marginación no pueden ser circunscriptas al ámbito de la voluntad individual de las mujeres que forman parte de los movimientos piqueteros. La posibilidad de ocupar roles de liderazgo no se desprende necesariamente del deseo de hacerlo sino más bien, de las condiciones sociales que permiten a las personas desplegar niveles de activismo y

participación social sostenidos en el tiempo y que requieren tanto de la visibilidad propia, como del reconocimiento de las/os otras/os. Dentro de esas condiciones sociales, las tareas asumidas por las mujeres acorde a la asignación genérica de roles si bien pueden potenciar en ciertas ocasiones, tal como lo demuestro en este trabajo, su participación pública, asimismo obstruyen la continuidad de esta participación.

Pero a su vez me pregunto hasta qué punto la marginación de los espacios de jefatura no es el resultado, también, de la confrontación de dos lógicas y formas de hacer política diferentes portadas por varones y mujeres, y que traspasan su pertenencia de clase. En ese sentido, el tipo de racionalidad política y verticalismo que acompañan el proceso de institucionalización de los movimientos piqueteros bien puede resultar expulsivo para las mujeres o escasamente atractivo para ellas. Dina, dirigente territorial del barrio Centenario en Neuquén, reivindica, al igual que lo hacen la mayoría de las mujeres en Neuquén, Salta y Jujuy, su condición de piquetera pero pone de manifiesto claramente cuáles son las exigencias para ocupar un cargo de dirección. Acorde a sus palabras: “[...] Tuvimos que empezar a hablar. Se me trabó la lengua, me corrió frío por la espalda y aunque llevaba muchas cosas no pude hablar. [...] Yo era muy callada, no me van a creer, muy sensible, y no podía hablar por el llanto, que hoy lo controlo, aunque creo que no hay que perder la emoción. Pero aprender a lo que uno quiere decir o pensar significa controlar algunas emociones, porque si no, no podés hacerte escuchar. Es lindo compartir una lágrima con una compañera pero no ir al frente de un concejal o intendente y no poderte expresar, porque te emocionás, y lo aprendí y ese coraje me lo dieron los vecinos [...]”. Como puede observarse, pese a los esfuerzos por cambiar el delineamiento de los principios que rigen la acción política, estos intentos aún no logran revertir el hecho de que los elementos que conforman tales principios nieguen toda forma de expresión que contemple emociones, referencias afectivas o demostraciones de sensibilidad ya que, según estos mismos, todas ellas manifestaciones constituyen parte de una “debilidad” que no condice con el ejercicio del liderazgo. Este, por oposición y a pesar de presentarse con connotaciones neutras, resume características que genéricamente, se inscriben en las normas pautadas para el comportamiento masculino: dureza de carácter, firmeza en el uso de la palabra, seguridad amparada en la razón para la expresión de las ideas, coraje, etc. De tal modo, acceder a ello significaría, para las mujeres, “masculinizarse” u obturar aquellos componentes de su subjetividad que se encuentran socialmente devaluados. Por tanto, es factible que en estos términos, el ejercicio del liderazgo no responda ni a los intereses ni a las necesidades de la mayoría de las mujeres de las que trata este trabajo. Incluso es posible que cuando hablamos de piqueteros y piqueteras no aludamos siquiera al mismo tipo de actor social, ya que las experiencias de movilización, participación y organización de unos y otras no son idénticas entre sí, de la misma manera que puede afirmarse que la experiencia de clase no es igual para varones y mujeres.

Bibliografía:

1. Libros y artículos:

- AAVV (1990): *También somos ciudadanas*. Madrid. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid.
- AAVV (1995): *Peronismo y Menemismo. Avatares del Populismo en la Argentina*. Buenos Aires, Ediciones El Cielo Por Asalto
- Amir, Samín: “Capitalismo, imperialismo y mundialización”. En: Seoane José; Tadei, Emilio (comps.) (2001): *Resistencias Mundiales. De Seattle a Porto Alegre*. Buenos Aires. CLACSO.
- Andújar, Andrea: *Ciudadanía y liderazgo femenino en los sectores populares*. Ponencia presentada en las “VII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y II Congreso de Estudios de Género”. Salta, Argentina. 24-26 de julio de 2003. En prensa.
- Andújar, Andrea: “Combates y experiencias. Las luchas obreras en Villa Constitución (1974-1975)”, en: *Taller: Revista de sociedad, cultura y política*. Vol. 3, Nor. 6, abril 1998. Buenos Aires.
- Andújar, Andrea; D’Antonio, Débora: “El dilema de la exclusión y los anclajes de la memoria”, en. *Revista Periferias* Buenos Aires, año 9, Nro. 12, primer semestre 2005.
- Auyero, Javier (2004): *Vidas beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento*. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.
- Auyero, Javier: “Fuego y barricadas. Retrato de la beligerancia popular en la Argentina democrática”. Mimeo.
- Bandieri, S.; Favaro, O.; Morinelli, M. (comps.) (1993): *Historia de Neuquén*. Buenos Aires, Plus Ultra.
- Barbetta, P. y Lapegna, P. (2001): “Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en el norte salteño”, en: Giarraca, Norma et al.: *La protesta social en la Argentina*. Alianza, Buenos Aires.
- Berger Gluck, Sherna; Patai, Daphne (ed.) (1991): *Women’s Words: The feminist Practice of Oral History*. New York. Routledge.
- Bertaux, Daniel (1993): “De la perspectiva de la historia de vida a la práctica de la transformación sociológica.” En: José Miguel, Santamarina Cristina (comp.): *La Historia Oral: métodos y experiencias*. Madrid, Editorial Debate.
- Bertaux, Daniel (1991): “Los relatos de vida en el análisis social”. En: Moss, D. y Portelli, A.: *La historia oral*. Buenos Aires, CEAL.

- Birulés, Fina comp. (1995): *El género de la memoria*. Pamplona, Editorial Pamiela.
- Borón, Atilio; De Vita, Alvaro, comps. (2002): *Teoría y Filosofía política. La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano*. Buenos Aires. CLACSO.
- Boto, María Salomé et. Al: *Altos Hornos Zapla en los comienzos de la siderurgia argentina: políticas sociales, empresa y trabajo*". Ponencia presentada en las "VIII Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales". Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. Mayo de 2005
- Bravo, María Celia (2000): "Liberales, socialistas, Iglesia y patronos frente a la situación de los trabajadores En Tucumán", en: Suriano, Juan (comp.): *La cuestión social en Argentina, 1870-1943*. Buenos Aires, Editorial La Colmena.
- Carpintero, Enrique; Hernández, Mario, comp. (2002): *Produciendo realidad. Las empresas comunitarias*. Buenos Aires. Topía editorial. Colección Fichas.
- Castells, Carme (comp.) (1996): *Perspectivas feministas en teoría política*. Buenos Aires. Paidós.
- Ceceña, Ana Esther (ed) (2004): *Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI*. Buenos Aires, CLACSO.
- Centro de Estudios Legales y Sociales (2003): *El Estado Frente a la protesta social. 1996-2002*. Buenos Aires, Ediciones CELS-Siglo XXI.
- Ciriza, Alejandra (2002): "Pasado y presente. El dilema Wollstonecraft como herencia teórica y política". En: Borón, Atilio; De Vita, Alvaro (comps.): *Teoría y Filosofía política. La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano*. Buenos Aires. CLACSO.
- Cuesta Bustillo, Josefina: "Memoria e Historia. Un estado de la cuestión". En: Cuesta Bustillo, Josefina editora (1998): *Memoria e Historia*. Madrid, Revista Ayer, Editorial Marcial Pons.
- D'Antonio, Débora: *Las Madres de Plaza de Mayo y la maternidad como potencialidad para el ejercicio de la política*. En prensa
- D'Antonio, Débora: "Mujeres, complicidad y Estado terrorista. Estudios críticos sobre la historia reciente. Los '60 y los '70 en Argentina". En: Cuaderno de Trabajo Nro. 33. Centro Cultural de la Cooperación. Buenos Aires, diciembre de 2003.
- Demitrópulos, Olga: *10 décadas de Libertador General San Martín. Jujuy (1899-1999)*. s/f
- Dussel, I, Finocchio, S., Gojman, S. (1997): *Haciendo memoria en el país de nunca más*. Buenos Aires, EUDEBA

- Enriquez, Micheline: “La envoltura de memoria y su huecos”. En: Anzier Didier comp (1990). *Las envolturas psíquicas*. Buenos Aires, Amorrortu.
- Favaro, Orietta: “Efectos de la privatización de YPF: ¿la desagregación del espacio territorial neuquino?”. En: *Realidad Económica*, no. 127, IADE, Buenos Aires. Octubre-noviembre de 1994.
- Favaro, Orietta; Arias Bucciarelli, Mario: “El nuevos escenario político. Elecciones y crisis en un espacio provincial. El Movimiento Popular Neuquino: ¿ruptura o continuidad de una forma de hacer política?”. En: *Realidad Económica* Nro. 135, IADE, Buenos Aires, octubre/noviembre de 1995.
- Favaro, Orietta; Arias Bucciarelli, Mario y Iuorno, Graciela: “La conflictividad social en Neuquén. El movimiento cutralquense y los nuevos sujetos sociales”. En: *Realidad Económica* Nro. 148, IADE, Buenos Aires, mayo/junio de 1997.
- Feher, Michel, editor (1990): *Fragments para una historia del cuerpo humano*. Madrid, Taurus. Tomos I y III.
- Femenías, María Luisa, comp. (2002): *Perfiles del feminismo iberoamericano*. Buenos Aires. Catálogos.
- Fraser, Nancy (1997): *Justicia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición postsocialista*. Madrid. Siglo del Hombre Editores.
- Fraser, Ronald (1979): *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española*. Barcelona. Grijalbo.
- Gambina, Julio y Campione, Daniel (2003): *Los años de Menem. Cirugía Mayor*. Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación
- Gómez, Elizabeth y Kindgard, Federico: “Los cortes de ruta en la provincia de Jujuy. Mayo/junio de 1997”. En: PIMSA: *Documentos y comunicaciones*. Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA). Buenos Aires, PIMSA.
- Gómez, Elizabeth y Kindgard, Federico: *El Frente de Gremios Estatales y el derrocamiento de De Aparici. La centralidad obrera en momentos de dispersión de la clase*. Ponencia presentada en las VIII Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy, 18 al 20 de mayo de 2005.
- Grüner, Eduardo: “La tragedia, o el fundamento perdido de lo político”. En: Borón, Atilio; de Vita, Alvaro, comps. (2002): *Teoría y Filosofía política. La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano*. Buenos Aires. CLACSO.

- Hartmann, Heidi: “El infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo”. En Revista: *Cuadernos del Sur*. Buenos Aires, Ediciones Tierra del Fuego. Número. 5, marzo –mayo 1987.
- Halbwachs, Maurice (1994): *Les cadres sociaux de la mémoire*, París, Albin Michel.
- Iñigo Carrera, Nicolás; Cotarelo, María Celia (1998): “Los llamados corte de ruta. Argentina, 1993-97”. En: PIMSA: *Documentos y comunicaciones*. Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA). Buenos Aires, PIMSA.
- Jelin, Elizabeth (comp.) (1985): *Los nuevos movimientos sociales*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Tomos 1y 2
- Jelin, Elizabeth (2001): *Los trabajos de la memoria*. España, Siglo XXI.
- Jelin, Elizabeth (ed.) (2003): *Más allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales*. Buenos Aires, Libros del Zorzal
- Joutard, Philippe (1986): *Esas voces que nos llegan del pasado*. Méjico. Fondo de Cultura Económica.
- Kaplan, Temma (1990): “Conciencia femenina y acción colectiva: El caso de Barcelona, 1910-1918”. En: Amelong, J. y Nash, Mary, compiladoras (1990): *Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea*. Valencia, Alfonso el Magnánimo.
- Kaplan, Temma (2003): *Ciudad Roja, Período Azul. Los movimientos sociales en la Barcelona de Picasso (1888-1939)*. Barcelona, Península.
- Kaplan, Temma (1997): *Crazy For Democracy. Women in Grassroots Movements*. New York, Routledge.
- Kaplan, Temma: *Gender Identities and Popular Protest*. Mimeo.
- Kindgard, Adriana (2001): *Alianzas y enfrentamientos en los orígenes del peronismo jujeño*. UNIHR/FHyCS. Universidad Nacional de Jujuy.
- Klachko, Paula. (1999): “Cutral-Có y Plaza Huincul. El primer corte de ruta”. En: PIMSA: *Documentos y comunicaciones*. Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA). Buenos Aires, PIMSA.
- Lagos, Marcelo: “Conformación del mercado laboral en la etapa de despegue de los ingenios azucareros jujeños (1880-1920), en: Campi, D. (comp.) (1992): *Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina*. San Martín de Tucumán, UNJU-UNT

- Lipzsig, Cecilia (1996): “Desprivatizando lo privado. Sobre las relaciones entre el trabajo doméstico y la acumulación capitalista”. En: Lipszyc, Cecilia et al.: *Desprivatizando lo privado. Mujeres y trabajos*. Buenos Aires, Catálogos.
- López Echagüe, Hernán (2002): *La política está en otra parte. Viaje al interior de los nuevos movimientos sociales*. Buenos Aires. Grupo Editorial Norma.
- Lummis, Trevor: “La memoria”. En: Moss, D. y Portelli, A. (1991): *La historia oral*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Luna, Lola G. (2003): *Los movimientos de Mujeres en América Latina y la renovación de la historia política*. Editorial La Manzana de la Discordia, Universidad del Valle.
- Maffia, Diana: *Ciudadanía y nuevos sujetos*. Ponencia presentada en la Jornada “20 años de democracia”. Buenos Aires, 19 de junio de 2003
- Marcoleri, María Elena (comp.) (2001): *Transformaciones sociolaborales en tiempos de convertibilidad. Empleo, desempleo, pobreza y migraciones en Jujuy*. Jujuy, EDIUNJU.
- Marinas, José Miguel, Santamarina Cristina, compiladores (1993): *La Historia Oral: métodos y experiencias*. Madrid, Editorial Debate.
- Masés, Enrique; Frapiccini, Alina; Rafart, Gabriel; Lvovich, Daniel (1994): *El mundo del trabajo: Neuquén 1884-1930*. Neuquén, GEHISO.
- McDowell, Linda (2000): *Género, Identidad y Lugar*. Valencia, Ediciones Cátedra.
- Mills, Wright Charles (1970): *La imaginación sociológica*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Molyneux, Maxine: “Mobilization Without Emancipation? Women’s Interests, The State, and Revolution in Nicaragua”, en: *Feminist Studies* 11, N° 2 (verano 1985), págs. 227-254.
- Molyneux, Maxine (2003): *Movimientos de mujeres en América Latina*. Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia
- Morgade, Graciela (comp.) (1997): *Mujeres en la educación. Género y docencia en la Argentina. 1870-1930*. Buenos Aires. Miño y Dávila Editores.
- Moss, D. y Portelli, A. (1991): *La historia oral*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Mouffe, Chantal (1992): “Feminism, Citizenship and Radical Democratic Politics”. En: Butler, J.; Scott, Joan: *Feminists theorize the political*. New York. Routledge.
- Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano y Colectivo Situaciones (2000): *Hipótesis 891. Más allá de los piquetes*. Buenos Aires. Ediciones de Mano en Mano.

- Namer, Gerard: “Antifacismo político y la memoria de los músicos”. En: Cuesta Bustillo, Josefina editora (1998): *Memoria e Historia*. Revista Ayer, Madrid, Editorial Marcial Pons.
- Nash, Mary: “Identidades, representación cultural y discurso de género en la España Contemporánea”. En: Chalmeta, Pedro; Cecha Cremades, Fernando, et al. (1994): *Cultura y culturas en la Historia*. España. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Nora, Pierre: “La aventura de Les Lieux de memoire”. En: Cuesta Bustillo, Josefina editora (1998): *Memoria e Historia*. Revista Ayer, Madrid, Editorial Marcial Pons.
- Nora, Pierre, (dir.) (1984-1992): *Les lieux de memoire*. París. Gallimard. Tomo 1
- Novaro, Marcos (1994): *Piloto de Tormentas. Crisis de Representación y Personalización de la Política en Argentina*. Buenos Aires, Letra Buena.
- Olmedo Rivero, Jesús (2003): *Los desocupados de la Quiaca. 12 años de lucha junto a otros sectores sociales, 1992-2003*. Jujuy, Fundación El Monte
- Oviedo, Luis (2004): *Una historia del movimiento piquetero. De las primeras coordinadoras al Argentinazo*. Buenos Aires, Ediciones Rumbos.
- Palacios, María Susana y Paris, Norma (1993): “Municipio y sectores dirigentes: el caso Cutral Co (1933-1955)”; en: Bandieri, S.; Favaro, O.; Morinelli, M.: *Historia de Neuquén*. Buenos Aires, Plus Ultra.
- Palermo, Silvana: *El sufragio femenino en el Congreso Nacional: ideologías de género y ciudadanía en la Argentina*. s/f
- Passerini, Luisa (1991): “Ideología del Trabajo y actitudes de la clase trabajadora hacia el fascismo”. En: Moss, D. y Portelli, A.: *La historia oral*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Passerini, Luisa, (ed.) (1979): *Sobre la utilidad y el daño de la fuente oral para la historia*. Méjico, Fondo de Cultura Económica.
- Passerini, Luisa; Thompson, Paul; Leydesdorff, Selma (1996): *Gender and memory*. New York, Oxford University Press. Vol. 4
- Pateman, Carol (1996): “Críticas feministas a la dicotomía público/privado”. En: Castells, Carme (comp.): *Perspectivas feministas en teoría política*. Buenos Aires, Editorial Paidós.
- Pita, Valeria: *Voces en conflicto, espacios en disputa. Experiencias feministas en la Argentina de los '90*. Ponencia presentada en la “Twelfth Berkshire Conference on the History of Women”. Universidad de Connecticut, USA, junio 2002. En prensa.

- Pozzi, Pablo: *Oposición obrera a la dictadura (1976-1982)*. Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1988.
- Pozzi, Pablo; Schneider, Alejandro (1994): *Combatiendo el capital. Crisis y recomposición de la clase obrera argentina (1985-1993)*. Buenos Aires, El Bloque Editorial.
- Pozzi, Pablo y Salas, Ernesto, “*Taller de historia Oral: ¿Historia para qué?*”. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1989. Mimeo.
- Rapoport, Mario (2003): *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*. Buenos Aires, Ediciones Machi.
- Ricoeur, Paul (2003): *La memoria, la historia, el olvido*. Madrid, Trotta.
- Rofman, Alejandro (1999): *Las economías regionales a fines del Siglo XX. Los circuitos del petróleo, del carbón y del azúcar*. Buenos Aires, Ariel.
- Rutledge, Ian (1987): *Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy: 1550-1960*. Proyecto ECIRA. Facultad de Filosofía y letras. UBA/MLAL.
- Schaumberg, Heike: *Imaginaciones generacionales de lucha y trabajo en Gral. E. Mosconi, Salta*. Segundas Jornadas de Investigación en Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires 5 y 6 de agosto de 2004. Mimeo.
- Schwarzstein, Dora (1995): “La Historia Oral en América Latina”, en: *Historia y Fuente Oral*. Por una historia sin adjetivos. Barcelona, Nro. 14.
- Scott, Joan: “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En: Amelong, J. y Nash, Mary, compiladoras (1990): *Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea*. Valencia, Alfonso el Magnánimo.
- Scott, Joan W. (1990): *French Feminists claim the Rights of “Man”. Olympe de Gouges in the French Revolution*. Mimeo.
- Seoane, José (ed.) (2003): *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO.
- Seoane José; Tadei, Emilio (comps.) (2001): *Resistencias Mundiales. De Seattle a Porto Alegre*. Buenos Aires. CLACSO.
- Solberg, Carl (1986): *Petróleo y nacionalismo en la Argentina*. Buenos Aires, Hyspamérica.
- Svampa, Maristella; Pereyra, Sebastián. (2003): *Entre la ruta y el barrio*. Buenos Aires. Biblos.

- Thompson, E. P. (1977): *La Formación de la Clase Obrera en Inglaterra*. Londres. Verso.
- Thompson, P. (1978): *The voice of the past*. New York, Oxford University Press.
- Vassallo, Alejandra (2000): “Entre el conflicto y la negociación. Los feminismos argentinos en los inicios del Consejo Nacional de Mujeres. 1900-1910”. En: Gil Lozano, Fernanda; Pita, Valeria e Ini, María Gabriela (comps.) (2000): *Historia de las Mujeres en Argentina*. Buenos Aires, Editorial Taurus, Tomo II.
- Volnovich, Juan Carlos (2002): “Las empresas comunitarias. Las mujeres en la Comunidad”. En: Revista Topía y La Maza: *Produciendo realidad. Las empresas comunitarias*. Colección Fichas, Topía editorial
- Wieviorka, Annette (1998). *L'ère du témoin*. París, Plon.
- Zibechi, Raúl (2003): *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento*. Buenos Aires. Editorial: Letra Libre y Nordan Comunidad.

2. Fuentes:

a. Diarios:

- Diario *Clarín* (1996-2001)
- Diario *El Pregón* (1996-2001)
- Diario *El Tribuno de Jujuy* (1996-2001)
- Diario *El Tribuno de Salta* (1996-2001)
- Diario *La Mañana del Sur* (1996-1997)
- Diario *La Nación* (1996-2001)
- Diario *Página 12* (1996-2001)
- Diario *Río Negro* (1996-2001)

b. Informes y estadísticas:

- IMPRODES: Publicación nro. 2, 1996.
- INDEC-UNICEF (2000): *Situación de las mujeres en Argentina. Serie Análisis Social Nro. 1*. Buenos Aires, Publicaciones INDEC.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (1999): *Estadísticas Laborales*. Revista de Trabajo, Año 5, Nro.13. Noviembre.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sobre “El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”. Abril de 2005.
- OCLADE: Informe de 1993.

-Universidad Nacional de Jujuy-Facultad de Ciencias Económicas. Documentos de Trabajo Nro. 1 . Universidad Nacional de Jujuy. Julio de 2000

-Universidad Nacional de Jujuy-Facultad de Ciencias Económicas. Documentos de Trabajo Nro. 2: Demografía y Empleo Femenino. Universidad Nacional de Jujuy. 2000

c. Otros:

-Video documental: *Desocupados y cortes de ruta en el Noroeste Argentino*. Grupo Wayruro. 2002.

- Revista *Lucha de clases*. Varias ediciones

-Revista *Norte Andino*. Varias ediciones.

-Revista *Wayruro*. Varias ediciones.